



Identidades

Número 14 / Año 8 / Junio 2018

Revista electrónica semestral del
Instituto de Estudios Sociales y
Políticos de la Patagonia
Facultad de Humanidades y
Ciencias Sociales
Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco

ISSN 2250-5369

Artículos

La explotación de Vaca Muerta en el contexto de la restricción externa
de Argentina. Impactos territoriales
Adriana Giuliani 01

Transformaciones socioeconómicas en torno a la extracción de
hidrocarburos no convencionales. El caso de YPF S.A. en Vaca Muerta
Ignacio Oscar Cretini 22

Transformaciones tarifarias y efectos en la Región Patagónica.
Camuzzi Gas del Sur y la distribución de gas natural, 1999-2017
Esteban Serrani 45

Producción y sostenimiento de la vida en Comodoro Rivadavia.
Notas sobre la participación femenina en la economía
extractiva hidrocarburífera
R. Hiller, B. Aguinaga, N. Barrionuevo y P. Paris 71

Comercio sexual en contextos extractivos: La “casita de chapa” de
YPF y la prostitución reglamentada
Melisa Cabrapan Duarte 97

Petróleo, planificación urbana y exclusión residencial en
Comodoro Rivadavia
Santiago Bachiller 119

Hidrocarburos y ambiente en la Argentina: Misceláneas de una
relación problemática, de los pingüinos empetrolados al fracking
Hernán Scandizzo 138

La minería a gran escala en la Patagonia Sur: El caso de Cerro
Vanguardia y la localidad de Puerto San Julián, Santa Cruz
Alexandra Bechtum 154

Política y usos de la memoria en los Andes durante los años del
boom minero (1998-2012). Los casos de Abra Pampa (Argentina)
y Espinar (Perú)
Jorge Luis Duárez Mendoza 175

Inicios de investigación

La representación social de los residuos sólidos domiciliarios en
Comodoro Rivadavia
Natalia Valeria Narváez 195

Estudio del paisaje visual que perciben los espectadores locales. Un aporte para incorporar el paisaje cultural a la gestión ambiental de la industria hidrocarburífera <u>Ileana Grimbeek</u>	<u>207</u>
Energía eólica en Comodoro Rivadavia. Determinantes políticos e institucionales para su desarrollo (2003-2014) <u>Emiliano Ballestra</u>	<u>222</u>
<i>Charlas versadas</i>	
Sobre el Taller internacional “Recursos naturales y desarrollo local: sostenibilidad, cohesión social y resiliencia” <u>N. Barrionuevo, S. Barros, H. Burchardt, R. Hiller y S. Peters</u>	<u>237</u>
<i>Reseñas</i>	
Reseña de Los encantos del poder. Desafíos de la antropología política, de Marc Abélès y Máximo Badaró <u>Susana Vidoz</u>	<u>240</u>
<i>Ilustración</i>	
<u>Pablo Villagra</u>	<u>244</u>



Identidades

Revista electrónica semestral
Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco

El Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia publica semestralmente la revista *Identidades*. Ella está dirigida a la publicación de investigaciones originales sobre identidades, discurso y poder. El Comité Editorial de Identidades verifica que los trabajos presentados se adecuen a los lineamientos editoriales de la revista, tomando en cuenta las normas descritas en su página web. De acuerdo con ello, se envían los artículos a dos evaluaciones externas calificadas (o tres en casos necesarios) que dictaminan acerca de aspectos tanto formales como sustanciales, recomendando la publicación sin modificaciones, la publicación con modificaciones o el rechazo del artículo.

The Institute of Social and Political Studies of Patagonia publishes the academic journal *Identidades* twice a year. It encourages the publication of original research about identities, discourse and power. The Editorial Board verifies that the papers adjust themselves to the main purposes of the journal, taking into account the instructions for authors included in its web page. Once a decision is taken, the papers are sent to two qualified external referees (or three in case of opposite opinions) who evaluate formal and substantial aspects, recommending its publication without changes, its publication with minor changes, or its rejection.

Director

Sebastián Barros (UNP, IESyPPat, CIT Golfo San Jorge, CONICET)

Comité Editorial

Brígida Baeza (UNPSJB - IESyPPat - CONICET)

Sebastián Sayago (UNPSJB-ILLPAT-CONCET)

Gabriel Carrizo (UNPSJB, IESyPPat, CONICET)

Renata Hiller (UNPSJB, IESyPPat, CONICET)

Consejo Académico

Gerardo Aboy Carlés (UNSAM-CONICET)

Julio Aibar Gaete (FLACSO-México)

Susana Bandieri (UNCo-CONICET)

Ernesto Bohoslavsky (UNGS-CONICET)

Aixa Bona (UNPA)

Claudia Briones (UNRN-CONICET)

Rosa Nidia Buenfil Burgos (DIE-CINVESTAV-CONACYT)

Walter Delrío (UNRN-CONICET)

Alejandro Grimson (UNSAM-CONICET)

Enrique Masés (UNCo)

Andrés Núñez González (PUC de Chile)

Francisco Panizza (London School of Economics)

Stefan Peters (Justus-Liebig Universität Gießen)

Gabriel Rafart (UNCo)

Alejandro Guillermo Raiter (UBA)

Ana Ramos (UNRN-CONICET)

Martha Ruffini (UNQ-CONICET)

Rolando Silla (UNSAM-CONICET)

Tony Spanakos (Montclair State University)

Verónica Trpin (UNCo-CONICET)

Juan Vilaboa (UNPA)



La explotación de Vaca Muerta en el contexto de la restricción externa de Argentina Impactos territoriales¹

Adriana Giuliani²

Resumen

El artículo aborda la explotación de los hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, la formación geológica localizada en la Cuenca Neuquina, en el marco de la estructural escasez de divisas o restricción externa de Argentina. Entre las causas de la reaparición del fenómeno durante la “postconvertibilidad”, período que sucede a la devaluación de la moneda en 2002, se encuentra la necesidad de recurrir a importaciones de energía, ante la declinación de la oferta interna. La determinación del Estado por sustituir las compras al exterior alentó el avance sobre el petróleo y el gas de Vaca Muerta, mediante la instrumentación de estímulos tendientes a maximizar los beneficios de los operadores del mercado. La actividad se lleva a cabo con altos impactos en el territorio, los que son analizados en función de presentar distintos escenarios que se proyectan en el futuro de la región.

Palabras clave

restricción externa - Vaca Muerta - impactos territoriales - escenarios

Vaca Muerta and payment constraints in Argentina. Territorial impact.

Abstract

This article analyzes unconventional hydrocarbons exploitation in Vaca Muerta, the geological formation located in the Neuquén Basin, in the context of the structural Balance of Payments constraint of Argentina. Among the causes of this phenomenon recurrence during the “post-convertibility”, period that follows currency devaluation in 2002, energy imports are found, driven from domestic extraction decline. The article explores political strategies aimed to secure internal supply, by favoring market operators benefit maximization. The activity is carried out with high impacts in the territory, which are analyzed in order to characterize different scenarios that the future of the region projects.

Keywords

external restriction - Vaca Muerta - territorial impact - scenarios

¹ El presente trabajo ha sido elaborado a partir de la exposición realizada en el Taller Internacional Recursos naturales y desarrollo local: sostenibilidad, cohesión social y resiliencia, Comodoro Rivadavia, 3 - 5 de octubre de 2017.

² Profesora e Investigadora de la Universidad Nacional del Comahue. Email: adrianagiulian@gmail.com

Introducción

Uno de los fenómenos que afecta a Argentina es la escasez de divisas, también denominada “restricción externa”. La inserción del país en la División Internacional del Trabajo con el rol de exportador de materias primas en el Siglo XIX y la tardía puesta en marcha de la industrialización a partir de 1930, fueron configurando una “estructura productiva desequilibrada”, de acuerdo con la expresión utilizada en los clásicos trabajos de Diamand (1973). En esta estructura, el sector agropecuario se rige por precios internacionales y usufructúa de las ventajas comparativas que le otorgan las extraordinarias condiciones naturales, en especial de la pampa húmeda. La industria, al funcionar con un esquema de costos más elevado que otros países industrializados, enfrenta dificultades para exportar sus productos. Las divisas necesarias para importar bienes de capital e insumos son provistas por el sector agropecuario, sujeto a las oscilaciones de los mercados mundiales, la demanda de otros países, circunstancias climáticas, entre otros factores. Cuando se activa un proceso de sustitución de importaciones, se verifica crecimiento en el Producto, pero esa misma expansión incrementa las importaciones y la demanda de moneda extranjera para financiarlas. Cuando el sector agropecuario no logra abastecer la cantidad necesaria de divisas, se recurre a las reservas hasta que el estrangulamiento de la Balanza de Pagos, o restricción externa, se convierte en la limitación del crecimiento. En general sobreviene la devaluación y luego inflación, políticas restrictivas, ajuste y estancamiento, hasta que por la vía recesiva o con endeudamiento retorna el equilibrio y comienza nuevamente el ciclo. Este es el mecanismo descrito por Braun y Joy (1981) con el modelo del “*stop and go*”, que caracteriza al desenvolvimiento de la economía argentina y en general de los países de industrialización tardía como los latinoamericanos. De esta manera, desde mediados del Siglo XX, la Balanza de Pagos del país enfrenta recurrentemente cuellos de botella, derivados de situaciones de déficit del comercio exterior, el peso de la deuda externa, remisión de utilidades de empresas transnacionales y/o salida de capitales.

Adicionalmente, a partir de la declinación de la oferta interna de petróleo y gas, proveniente de la desregulación de la política energética durante el gobierno de Carlos Menem (1999-2001), la importación de energía tendiente a satisfacer los requerimientos residenciales y del sector productivo agravó la crítica problemática de las cuentas externas. Precisamente, el continuo incremento de las compras de combustible en el exterior constituyó un argumento central en la decisión de expropiar el 51% del capital accionario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) al grupo español Repsol en mayo de 2012, mediante la sanción de la Ley 26.741. La norma declaró además la búsqueda del autoabastecimiento energético y expresó la reafirmación de la soberanía hidrocarburífera.

La sobre explotación de los yacimientos tradicionales y la escasa o nula exploración que caracterizaron el accionar de Repsol y demás operadoras, orientaron las expectativas hacia Vaca Muerta, la formación geológica localizada en la Cuenca Neuquina, señalada en 2011 por la Agencia de Información Energética de Estados Unidos como uno de los reservorios de hidrocarburos no convencionales más

importantes del planeta. A partir de entonces, la magnitud del despliegue afectó al territorio desde el punto de vista socioeconómico y ambiental.

El propósito del presente trabajo es enmarcar la explotación de Vaca Muerta en “la postconvertibilidad”. El período incluye los mandatos de Néstor Kirchner (2003-2007), de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011 y 2011-2015) y se inicia con la devaluación del año 2002, practicada durante el gobierno provisional de Eduardo Duhalde. La corrección del tipo de cambio puso fin a más de diez años de vigencia del ancla cambiaria (1 peso = 1 dólar), instrumentada en 1991 durante la gestión de Carlos Menem como presidente del país y Domingo Cavallo al frente del Ministerio de Economía. Se hace una breve mención a la situación actual, con la continuidad de la restricción externa y del ciclo recesivo, luego de dos años de mandato de Mauricio Macri, iniciado en diciembre de 2015.

En el presente trabajo, luego de reflexionar sobre la reaparición de la restricción externa durante la postconvertibilidad, se analiza la política tendiente a estimular la provisión interna de hidrocarburos, particularmente en Vaca Muerta, los impactos en el territorio y los escenarios futuros a los que la región norpatagónica³ está expuesta, contruidos en base a los instrumentos sobre estudios del futuro que provee la Prospectiva. La conceptualización de esta herramienta se toma principalmente de Medina Vázquez, Becerra y Castaño (2014). Por otra parte, se utilizan procedimientos cuantitativos, tales como la revisión de indicadores, para evaluar la evolución de las principales variables macroeconómicas consideradas. Paralelamente, se recurre a la metodología cualitativa a fin de interpretar las consecuencias territoriales y para analizar en profundidad la normativa.

Además de remitir los clásicos autores que sentaron las bases para el tratamiento de la restricción externa, se han consultado publicaciones más recientes, tales como, Aspiazu, Manzanelli y Schorr (2011), Amico (2013), Wainer y Schorr (2014), Damill y Frenkel (2015) Cantamutto, Schorr y Wainer (2016), Gaggero y Schorr (2016), Manzanelli y Basualdo (2016), entre otros. Para la política de hidrocarburos y los efectos de la explotación se parte del material producido en el marco de proyectos desarrollados en la Universidad Nacional del Comahue (Giuliani, 2013), (Riavitz, Zambon & Giuliani, 2015), entre otros. Se toman como referencia las investigaciones realizadas en el Doctorado en Administración y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Córdoba.

La reaparición de la restricción externa durante la postconvertibilidad

La devaluación del año 2002 constituyó un verdadero punto de inflexión en la trayectoria económica del país. En pocos meses detuvo la prolongada recesión que se había iniciado en 1998, provocada principalmente por el atraso cambiario y en la que habían confluído una serie de desequilibrios macroeconómicos: caída del Producto Bruto Interno (PBI), déficit crónico de cuenta corriente, alto endeudamiento, déficit fiscal y una gravísima situación en materia social, con una tasa de desempleo en torno al 22 %. Luego de la depreciación monetaria se verificó no solamente una

³ La Norpatagonia se considera compuesta por las provincias de Neuquén y Río Negro.

mejora en la competitividad de la producción local, sino también un aumento en la rentabilidad empresarial, ante la declinación del salario medio de la industria, medido en dólares. Estos factores y el encarecimiento de los bienes importados fueron los desencadenantes de un nuevo ciclo de sustitución de importaciones que reactivó la actividad económica y pronto impactó en la ocupación y en la distribución del ingreso. No solamente por el aumento de los puestos de trabajo, en especial en las firmas manufactureras, sino también porque con el tiempo el salario real se fue recuperando, producto de las subas nominales y de la desaceleración de la inflación (Manzanelli & Basualdo, 2016).

El aumento de los precios internacionales de las materias primas consolidó la corrección del desequilibrio externo que la devaluación propició. La situación de las cuentas fiscales también mejoró, con el significativo aporte de las retenciones a las exportaciones instrumentadas durante la salida de la convertibilidad (se logró la coexistencia de “superávits gemelos”, que incluye a la Balanza de Pagos y al Presupuesto Nacional). Relativizando la tesis del “viento de cola”, es innegable que los favorables términos de intercambio tuvieron un rol destacado para superar la crisis y explicar el posterior desenvolvimiento económico; de todas maneras, sin dejar de considerar el esfuerzo oficial por alentar la demanda agregada (Amico, 2013), el gran pilar fue el mantenimiento de un tipo de cambio real elevado (Damill & Frenkel, 2015). Más aún, la preservación de un dólar competitivo y estable en términos reales orientó en gran medida la política económica durante los primeros años del kirchnerismo.⁴

En general, para facilitar su estudio se subdivide el período en etapas. En este caso, la delimitación que se utiliza está relacionada con el cambio de tendencia en las cuentas externas y comienza en 2003:

1) 2003-2010: es una fase expansiva, con un crecimiento promedio anual en el lustro 2003-2007 del 8,7% (CENDA, 2010: 23) y una política en materia cambiaria opuesta a la llevada a cabo en la década anterior. Mientras que para fijar el dólar en 1 peso en los '90 se recurrió a un excesivo endeudamiento externo, la gran afluencia de divisas por exportaciones en la nueva coyuntura obligó al gobierno a intervenir permanentemente como demandante para evitar recaer en la apreciación y sus inconvenientes efectos en términos de competitividad. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) a menudo recurrió a esterilizar parte del dinero que se inyectaba en el mercado mediante la colocación de letras de corto plazo, tal es el caso de las Lebacs o las Nobacs.

La provisión de divisas quedó entonces a cargo del sector exportador, básicamente de los rubros primarios: agropecuario y minero. La industria, a excepción de un núcleo asentado sobre el procesamiento de materias primas, no logró convertirse en oferente neto de divisas, sino que por el contrario continuó con

⁴ Inclusive la disputa por la instrumentación de las retenciones móviles a través de la Resolución 125 en 2008 suele ser señalada como una medida a la que el Poder Ejecutivo apeló para evitar el atraso cambiario derivado de la inflación. La elevación del porcentaje del impuesto contribuiría a disociar los precios internos de los bienes transables respecto de las elevaciones del precio internacional de las *commodities* (CENDA, 2010: 61).

su característico perfil importador. Inclusive el sector automotriz, que tuvo actividad de exportación principalmente hacia Brasil, intensificó a la vez las importaciones de insumos intermedios y tecnología. Quiere decir que los oligopolios en gran medida extranjerizados que controlan las ramas primarias del país captaron una potenciada renta extraordinaria y además se convirtieron en actores con centralidad estructural, al ser los proveedores de las divisas necesarias para sostener el modelo (Cantamutto, Schorr & Wainer, 2016).

El abultado superávit comercial logró compensar otras salidas de cuenta corriente (crecientes compras de energía, intereses y remisión de utilidades) y además engrosar las reservas internacionales, circunstancia que permitió sortear turbulencias y corridas, principalmente la que sobrevino luego de la crisis de las economías centrales en 2007-2008. De todos modos, la acumulación de reservas también se debió a ingresos de capital, que expresaron las altas posibilidades de valorización en el país. Pero a pesar de estos ingresos, la cuenta capital y financiera fue deficitaria, teniendo en cuenta los pagos realizados a los organismos multilaterales de crédito (incluida la cancelación al Fondo Monetario Internacional) y a la persistente salida de capitales o formación de activos externos por parte del sector privado no financiero. En definitiva, las ganancias obtenidas por los capitales gracias a las beneficiosas condiciones para su valorización fueron giradas al exterior vía remisión de utilidades, pagos de intereses y amortización de deudas, así como simplemente por fuga (Wainer & Schorr, 2014).

2) 2011-2015: se trata de un período en el cual la situación se invierte ya que las reservas internacionales comienzan a decrecer y reaparece la restricción externa, como resultado de la erosión de los ejes del crecimiento económico de los años previos. Por un lado, producto de la crisis internacional, desde fines de 2008 los precios de las *commodities* comenzaron a perder dinamismo y por el otro, el proceso inflacionario que se fue paulatinamente desencadenando impidió mantener el tipo de cambio real a niveles competitivos. Ambas situaciones minaron la rentabilidad empresarial, deterioraron los ingresos del sector público -en especial al afectar las retenciones- y revirtieron la bonanza de las cuentas externas. Se intentó frenar el drenaje de divisas a través de regulaciones a la remisión de utilidades, controles a las importaciones y a la compra de moneda extranjera para diversos fines como turismo o atesoramiento, disposiciones que generaron mayores tensiones y un mercado paralelo del “dólar *blue*”. Por otra parte, se recurrió a la suba de la tasa de interés para alentar el ahorro en pesos, tanto interno como externo, medida que, al encarecer el crédito, resintió la inversión, el consumo y la actividad económica en general. Las sucesivas devaluaciones practicadas retroalimentaron la inflación al trasladarse a los precios, deteriorando el poder adquisitivo y generando una marcada traslación de ingresos desde los sectores asalariados hacia los exportadores. Finalmente, con más énfasis desde 2014, el gobierno apeló a reinsertarse en el mercado internacional de crédito, por lo que el capital financiero fue el que pasó a abastecer las divisas, reemplazando al complejo exportador en la centralidad estructural que otorga esa función. Nuevamente el sector financiero actuaría como oferente y demandante, o

como se suele decir, operando “de los dos lados del mostrador” (Cantamutto, Schorr & Wainer, 2016: 54).

Las decisiones adoptadas para paliar los efectos y no las causas de la restricción externa terminaron por desmembrar el modelo y reflotar el *stop & go*. Con la abundancia de recursos de los primeros años de la postconvertibilidad no se logró modificar el rol de Argentina a nivel internacional, ni corregir procesos heredados. Entre ellos, sobresalen los siguientes:

- la marcada concentración empresarial que habilita la formación oligopólica de precios, tan sensible en el rubro de alimentos (Gaggero & Schorr, 2016);
- la extranjerización, reforzada con la firma durante la década de 1990 de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), instrumentos que otorgan ventajas al accionar de los capitales externos e inclusive fijan jurisdicción en tribunales internacionales (Aspiazu, Manzanelli, & Schorr, 2011);
- la persistente declinación en la extracción de hidrocarburos, que requirió una creciente salida de dólares para abastecer el requerimiento interno de energía (Riavitz, Zambon, & Giuliani, 2015). Un párrafo especial merece este punto, que se desarrolla en el siguiente apartado.

3) Finalizado el 2017, luego de dos años de políticas de ajuste instrumentadas por la administración de Mauricio Macri, el horizonte es complejo y no se avizoran señales de superación de la restricción externa. Según un informe de coyuntura, la actividad económica en el país registró un leve progreso en el tercer trimestre de 2017. El estimador mensual de actividad económica (EMAE) del INDEC arrojó una suba del 1,3% respecto del segundo trimestre y un acumulado del 2,5% en enero-septiembre con relación a igual período de 2016 (año con un retroceso promedio del 2,2%). Este discreto repunte se da en un contexto de estancamiento que se prolonga desde hace cinco años y que viene alternado caídas en los años pares con tenues subas en los impares (Informe de Coyuntura Económica Grupo GERES, 2017).

En este marco, si bien las compras de energía al exterior son menos significativas ante la merma del requerimiento energético derivada de la recesión, la situación de las cuentas externas es muy complicada para Argentina. El déficit de la Cuenta Corriente del Balance de Pagos se profundiza cada año, impactado por el continuo deterioro de la Balanza Comercial. Las condiciones macroeconómicas actuales, definidas por altas tasas de interés y el atraso del tipo de cambio real provocado por una inflación que no se logra detener, han priorizado las importaciones de bienes sobre la producción local, mientras que las exportaciones no evolucionan al mismo ritmo: entre 2016 y 2017, la suba en las importaciones fue del 19,65% frente a un 0,95% para las exportaciones (INDEC, 2018). Los rubros Servicios y Renta de la Inversión son estructuralmente deficitarios, teniendo en cuenta el egreso de divisas ocasionado por el Turismo, los intereses del endeudamiento externo y las utilidades remitidas por las multinacionales a sus países de origen. Hasta el momento, la deuda y el ingreso de fondos especulativos han constituido la apuesta para contrarrestar el desequilibrio corriente y la persistente fuga de capitales o formación de activos en el exterior.

El déficit energético y la explotación no convencional en Vaca Muerta

La disminución de la oferta de petróleo y gas, en nuestro país encuentra su origen en la desregulación del sector energético instrumentada durante el gobierno de Menem. La normativa sancionada en esa época explícitamente reflejaba la decisión de alejar al Estado de las decisiones inherentes a la actividad, a la vez que consideraba a los hidrocarburos como simples *commodities*, en lugar de asignarles el rol de recursos estratégicos para el desarrollo nacional. Se concedió la libre disponibilidad de los volúmenes extraídos a las empresas concesionarias, admitiendo su comercialización tanto en el mercado interno como en el externo sin restricciones, con la posibilidad de disponer hasta el 70% de las divisas obtenidas en el comercio internacional. Paralelamente, se desreguló la instalación de refinerías y bocas de expendio, se liberaron los precios de todos los productos y se redujo el rol del Estado a tareas de fiscalización y control. La privatización de YPF y Gas del Estado fue acompañada por la celebración de contratos de concesión de los yacimientos por 25 años en el caso de las áreas centrales y por 20 años para las marginales, con la opción a prorrogar por 10 años. El resultado fue sobre-explotación y aumento de las ventas de hidrocarburos al exterior, así como la merma de las inversiones en exploración y la consecuente pérdida de reservas, todo complementado por récord de utilidades de las concesionarias. En 1998 comenzó la tendencia negativa en la extracción, que no ha logrado ser revertida (Giuliani, 2013).

A partir de 2003, se pusieron en práctica mecanismos que incidieron en el funcionamiento del sector, pero no generaron modificaciones de fondo. La creación de Enarsa en 2004 no logró la mayor incidencia del Estado que se anunció inicialmente y tampoco los organismos provinciales significaron un mejor posicionamiento estatal. Por otra parte, el ingreso a YPF del Grupo Petersen a partir de 2007 no cumplió con las expectativas del Poder Ejecutivo Nacional, que propició las negociaciones apostando al accionar de un exponente de la “burguesía nacional”. En 2006, se aprobó la denominada “Ley Corta”, con el propósito de reglamentar la provincialización de los recursos del subsuelo dispuesta por la reforma constitucional de 1994. De esta manera, se otorgó a las provincias la potestad para actuar independientemente del poder central y de otros estados provinciales, restringiendo de este modo la posibilidad de diseñar una estrategia integral para el sector.

Frente a la falta de respuesta de las operadoras, que a pesar de haber logrado las prórrogas anticipadas de los contratos de concesión no aumentaron la provisión, hubo un intento de retomar el control del manejo de los hidrocarburos a nivel nacional. La iniciativa se expresó inicialmente en la reversión de áreas por incumplimiento de compromisos y derivó en la recuperación del control estatal de YPF en 2012. Esta demorada medida constituyó un verdadero quiebre en materia energética; el artículo 1° de la ley 26.741, que establece la expropiación del 51% del paquete accionario en manos de Repsol, enuncia la defensa de la soberanía hidrocarburífera y la búsqueda del autoabastecimiento como objetivos prioritarios. Sin embargo, la situación se fue tornando cada vez más delicada. La combinación de una oferta declinante y la demanda de una economía en crecimiento convergió en

crecientes importaciones de combustibles, que en 2011 alcanzaron un valor superior a los 9.000 millones de dólares y superaron los 12.000 en 2013 (INDEC, 2018). Ante la persistencia del déficit energético, las expectativas se dirigieron hacia la explotación no convencional en Vaca Muerta, formación geológica localizada a más de 2.500 metros de profundidad, en la Cuenca Neuquina. En la figura 1, que se expone a continuación, se puede observar su ubicación geográfica.

Figura 1
Área hidrocarburífera Vaca Muerta



Fuente: Elaboración Propia, Proyecto de Investigación “El Desarrollo de la Norpatagonia y sus escenarios futuros” (Facultad de Economía y Administración-Univ. Nac. del Comahue).

Vaca Muerta ha sido asimilada a los cuatro yacimientos estadounidenses más relevantes: Barnett, Haynesville, Marcellus e Eagle Ford y es ponderada por el porcentaje de carbono orgánico total de sus rocas, su alta presión, espesor, permeabilidad y densidad, entre otras variables de análisis. La expresión “no convencional” corresponde a los reservorios y no refiere al petróleo y al gas que en ellos se encuentran, que son los mismos tanto en los reservorios convencionales como en los no-convencionales. Los hidrocarburos se forman en lo que se conoce como roca madre, compuesta por material orgánico y rocas durante largos períodos de tiempo; esta acumulación, bajo ciertas condiciones de presión y temperatura, transforma y descompone la materia orgánica, obteniendo así hidrocarburos. Estos hidrocarburos migran a través de diferentes formaciones geológicas hasta encontrar lo que se conoce como sello y, ante ciertas situaciones que impiden su escape, se forma una trampa geológica donde se aloja el petróleo, el gas y el agua: es la roca reservorio que generalmente presenta buenas condiciones de permeabilidad y porosidad que permiten la explotación convencional de los hidrocarburos. En aquellos casos en los que no se concreta la migración y la roca madre es la misma que la roca reservorio, se está ante un yacimiento no convencional en el que hay que generar artificialmente las condiciones para hacer fluir los hidrocarburos allí

alojados; el método generalmente utilizado a estos fines es el *fracking* (fractura hidráulica en castellano).⁵

Si bien el conocimiento acerca del potencial de Vaca Muerta data de décadas anteriores, la dinámica cambió cuando el avance tecnológico permitió proyectar la extracción en el área en términos económicamente viables. A inicios del 2010 el gobierno de la Provincia del Neuquén anunció la existencia de gas no convencional en su territorio, indicando en ese momento que era equivalente a dos veces el gigante yacimiento convencional Loma La Lata (descubierto en 1977). Previamente, en el año 2009 YPF, aún controlada por Repsol, comunicó inversiones de exploración en Vaca Muerta en su Programa de Desarrollo Exploratorio y Productivo 2010-2014. A fines del 2010, YPF y la empresa minera brasileña Vale comprometieron desembolsos por 5.000 millones de dólares para el desarrollo de gas no convencional en Neuquén, que abastecería de energía al Proyecto Potasio Río Colorado en Malargüe, Mendoza (posteriormente abandonado). Además de YPF, otras empresas como Chevron, ExxonMobil, Pan American Energy (PAE, Argentina), Petrobras, Shell, Total comenzaron a desplegar actividades en Vaca Muerta en esos años. American Petrogas se asoció en agosto del 2011 con ExxonMobil y con Gas y Petróleo de Neuquén (GyP) con la finalidad de perforar en profundidad dentro de su concesión en Los Toldos, buscando información directa del yacimiento y sus características. En 2011 Vaca Muerta adquirió repercusión internacional, al ser catalogada por la Agencia de Información Energética de Estados Unidos como una zona de gran potencial en recursos no convencionales técnicamente recuperables. La actualización de ese reporte en 2013 la ubicó segunda en el mundo en cuanto a gas y cuarta en petróleo. En la formación Los Molles, ubicada también en la Cuenca Neuquina, hay probabilidades para proyectos *shale*, aunque la mayor profundidad podría ser un

⁵ Los hidrocarburos no convencionales más comunes son: (Caligari & Hirschfeldt, 2015, págs. 223-228)

- *shale gas y shale oil*: también llamados “de esquisto”, son acumulaciones de gas y petróleo que permanecen en la roca generadora, o roca madre, como restos del proceso de migración, junto con abundante proporción de materia orgánica en distintos grados de transformación. Las propiedades de la roca generadora son en este caso muy diferentes a las que se encuentran en las rocas reservorios convencionales, de allí que los mecanismos para su extracción deben ser más complejos. En los recursos *shale*, la roca madre está formada por sedimentos muy finos y con alto contenido de materia orgánica microscópica. Los valores de porosidad, o capacidad de almacenaje, son bajos, aunque en el orden de la magnitud de los sistemas convencionales. La diferencia está en la permeabilidad y, aunque son variables, en general están en rangos menores que en los sistemas convencionales.
- *Tight gas*: se denomina de esta manera a las acumulaciones de gas de gran extensión, alojadas en rocas de muy baja permeabilidad, normalmente con presiones superiores a las normales y sin contactos de fluidos evidentes. Algunas de sus características son la indefinición de los límites de la trampa, que se perforan pocos pozos improductivos, que se encuentren en posiciones cercanas a la roca madre de la cuenca y acumulaciones de agua por encima del gas. Los reservorios *tight* presentan porosidad baja, al igual que los convencionales, pero con permeabilidad extremadamente baja.
- *Coal bed methane* (gas de lecho de carbón), es gas natural formado por degradación bacteriana o reacción química del carbón de acumulaciones del subsuelo y puede extraerse como parte del proceso minero o para recuperar el gas sin extraer el carbón. Su resultado es gas de alta pureza, compatible con las exigencias de inyección a gasoductos comerciales

límite en cuanto a la viabilidad económica. También en las restantes cuencas de Argentina hay perspectivas tanto en la modalidad *shale* como *tight*, pero su desarrollo aún se encuentra en etapas preliminares. La importancia asignada al caso de Vaca Muerta radica en que, una vez superada la fase de aprendizaje, podría replicarse en las restantes experiencias.

Los 30.000 km² de Vaca Muerta se subdividen en áreas concesionadas a distintas compañías para su puesta en producción; entre ellas, YPF es la más significativa, ya que actuando por sí misma, por su intermediaria Y Sur o a través de uniones con otras empresas dispone del 32,6% de la superficie. La francesa Total cuenta con un 13,1%, mientras que Pampa Energía, petrolera del Grupo Mindlin, tras adquirir los activos de Petrobras, accedió a un 12,2% del territorio. Pluspetrol se posiciona en cuarto lugar con un 8,22%, y Oilstone, quinta, con un 5,1%. El 28,8% restante se distribuye entre otras 12 compañías, tales como Exxon, Shell, Chevron, Pan American o Tecpetrol, del Grupo Techint (Subsecretaría de Energía, Minería e Hidrocarburos de la Provincia del Neuquén, 2017). La empresa noruega Statoil también ha comenzado a participar de las operaciones en Vaca Muerta y hay tratativas para que ingrese la rusa Gazprom. Entre las prestadoras de servicios que intervienen se encuentran gigantes de la talla de Schlumberger, Halliburton o Skanska.

Tanto el Estado Nacional como los provinciales, en especial el de Neuquén, se mostraron desde un primer momento proclives a incentivar la actividad, impulsando la celebración de contratos de asociación con multinacionales o la adecuación de la normativa que regula el funcionamiento del sector.⁶ Precisamente, los decretos presidenciales 927 y 929 fueron emitidos en 2013 como marco de la alianza entre YPF y Chevron para activar el proyecto piloto en Loma Campana y luego adquirieron rango legal al ser incorporados en la nueva Ley Nacional de Hidrocarburos, aprobada en 2014 para reformar la Ley 17.319/67. Los estímulos incluidos en la normativa consisten en la posibilidad de comercializar en el exterior parte del volumen extraído sin retenciones, la libre disponibilidad de las divisas obtenidas en la exportación o la reducción de aranceles a la importación de tecnología e insumos, directa o indirectamente vinculados a yacimientos no convencionales. Las modificaciones incluyeron la ampliación de los plazos de concesión para los proyectos relativos a la explotación no convencional, la posibilidad de prorrogar indefinidamente los contratos, el compromiso por parte de las jurisdicciones provinciales y municipales para no introducir nuevos tributos ni aumentar los existentes, establecer un tope a los porcentajes de regalías, entre otros beneficios. Un tema muy discutido durante las negociaciones entre representantes de Nación y Provincias durante el proceso de consensuar el texto de la nueva ley fue la modalidad de *carry* (o acarreo en nuestro idioma) practicado por las empresas provinciales. A través de este sistema, participan de las concesiones en alianza con las compañías privadas manteniendo un porcentaje de las áreas sin aportar capital para la inversión. Tal es el caso de Gas y Petróleo en Neuquén (GyP), creada en 2008

⁶ El rol del Estado en la explotación de hidrocarburos en Argentina puede ser estudiado en el marco de la *governance* internacional (Giuliani, 2017), aunque excede el objeto del presente trabajo.

y transformada en sociedad anónima en 2012, con el Estado Provincial como principal accionista. A partir del Decreto Provincial 436 de 2009, el Poder Ejecutivo de Neuquén reservó a favor de GyP las áreas hidrocarburíferas que no tuvieran contratos a la fecha de emisión de la norma legal, aquellas cuyas concesiones fueran revertidas por incumplimiento o caducidad y las que pudieran crearse en el futuro. Asimismo, encomendó y facultó a GyP para que proceda a la exploración, desarrollo y explotación, por sí y/o con la asistencia o asociación de terceros, de las áreas reservadas a su favor. Bajo la modalidad del *carry*, la empresa cede las áreas a una operadora encargada del desembolso inicial, destinado al gasto necesario para la exploración, reservando una participación que depende de las condiciones pactadas en los respectivos contratos. Cuando se efectivizan los resultados, con la comercialización, recibe en hidrocarburos el equivalente al porcentaje de su participación. La mitad es destinada a devolver a la operadora su parte en la erogación inicial, por lo que una vez que cancela, vuelve a quedarse con el total de su cuota.⁷

La modalidad del acarreo fue uno de los principales puntos de conflicto en el marco de las tratativas para reformular el cuerpo normativo que regula el sector, por considerar que el sistema representa un oneroso obstáculo para iniciativas del capital privado. El texto consensuado prohíbe reservar en el futuro áreas a firmas estatales y si bien los contratos de acarreo vigentes fueron respetados, en adelante fueron limitados a la etapa de exploración y de proyectos piloto (Giuliani, Fernández, Hollmann & Ricotta, 2016).

El desplome de los valores del petróleo en 2014 intentó ser compensado con el mantenimiento de un precio interno, también denominado “barril criollo”. Su origen se sitúa en 2002 cuando el entonces presidente interino Eduardo Duhalde autorizó el desacople de los valores internacionales del petróleo respecto de los internos, aplicando una retención del 20% a las exportaciones de crudo. En 2004, el porcentaje aumentó al 25% y en 2007, dejó de ser fijo para dar paso al esquema de retenciones móviles. El precio que recibían las operadoras era de 42 dólares y el resto iba al Tesoro Nacional. En un contexto de altas cotizaciones internacionales, constituía una de las principales fuentes de divisas del Estado. A partir de fines de 2014, el proceso se revirtió, dado que se pretendió estimular la explotación de hidrocarburos con un precio mayor al internacional.

Desde su asunción, el Gobierno de Mauricio Macri expresó intenciones de acelerar las inversiones en Vaca Muerta. En enero de 2017, a partir de un acuerdo entre el Poder Ejecutivo Nacional, el de la Provincia del Neuquén, dirigentes sindicales y empresarios, se incorporó una adenda al convenio colectivo de trabajo de los trabajadores petroleros, con el argumento de aportar competitividad a la explotación no convencional. Entre las modificaciones más relevantes, se incluye como modalidad general los contratos a término, se redimensionan las plantillas de

⁷ La presencia de GyP, además de permitir que la provincia participe directamente en el negocio, constituye la herramienta a través de la cual se sortea un impedimento constitucional, ya que la Carta Magna de Neuquén establece en sus artículos 95º, 96º y 100º la propiedad pública de los recursos energéticos en el territorio provincial y la prohibición de otorgar concesiones de explotación a particulares.

personal, se cambian los esquemas de trabajo, se amplían las condiciones de operación nocturna y con viento, entre otras. Una de las correcciones más sensibles es la eliminación de las denominadas “horas taxi”, que refiere a la consideración como tiempo trabajado al lapso en que los trabajadores se trasladan a los pozos. A la vez, se acordó la eximición del 10% del salario bruto del impuesto a las Ganancias y un ordenamiento general que tiende a evitar que cada empresa imponga sus propias condiciones. Si bien los referentes de los Sindicatos negaron una eventual flexibilización de las condiciones laborales, el pacto se percibe como un instrumento diseñado para reducir costos, ejecutado en el eslabón más delgado de la cadena (Giuliani, 2017).

Un plan reciente prevé precios diferenciales para las operadoras que incrementen la producción no convencional de gas, tanto para proyectos piloto como para aquellos que ya se encuentren en marcha. Los bloques que producen más de 500 mil metros cúbicos diarios, que son la mayoría, sólo pueden acceder al valor subsidiado para los volúmenes que excedan el promedio de extracción del último año. Se contempla un precio de 7,50 dólares por millón de BTU en 2018, que irá decreciendo y perderá 50 centavos de dólar por año, hasta llegar a 6 dólares en 2021 (Resoluciones 46 y 419 E, 2017). Desde las compañías han advertido que será muy difícil cumplir con esta cláusula y que, en caso de tener que operar con el precio de mercado, situado en torno a los 5 dólares por millón de BTU, la actividad se deprimiría. De todas maneras, el Gobierno neuquino anunció en enero de 2018 que se recibieron 13 propuestas que buscan acogerse al beneficio y representan desembolsos de más de 6.700 millones de dólares (Diario *Río Negro*, 2018).

Con el abandono del “barril criollo” determinado por Nación y el mantenimiento de los precios subsidiados para el gas, paulatinamente se fue observando en la formación un desplazamiento hacia los emprendimientos gasíferos. De acuerdo con información oficial emitida en agosto de 2017, el 47% del gas generado en la provincia proviene de la extracción no convencional (37% *tight* y 10% *shale*), lo que equivale al 25% del total del país (Ministerio de Energía de Neuquén, 2017). De todos modos, el declive perdura. Entre 2016 y 2017 la extracción de petróleo en el país disminuyó un 14,4% y un 9,3% la de gas (Ministerio de Energía y Minería de la República Argentina, 2018). Si se extiende el análisis, se observa que entre 2007 y 2016 la extracción de crudo cayó un 19,3% y un 11,7% la de gas. El dato más significativo se relaciona con el nivel de reservas, que disminuyó un 17,2% en el caso del petróleo y un 23,9% en el caso del gas durante la última década (Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi”, 2017).

La estadística sobre las reservas evidencia que a pesar de los incentivos y estímulos que otorga la política energética, las inversiones priorizaron la extracción a la exploración, o búsqueda de nuevos descubrimientos. La madurez de los campos convencionales profundiza el problema y encamina aún más las perspectivas hacia la actividad no convencional. A pesar de la disminución del requerimiento de energía y de la intensa actividad en Vaca Muerta, las importaciones continúan: las compras al exterior referidas al rubro Combustibles fueron de 5.687 millones de dólares en 2017, importe que representa un 15,8% más que en 2016 (INDEC, 2018).

Impactos territoriales

La posible analogía con la experiencia del *shale* en Estados Unidos y los incentivos oficiales mantienen el interés de las compañías por Vaca Muerta, a pesar de las oscilaciones del mercado internacional. Y aunque en la actualidad se percibe un relativo *impasse*, a la espera de mejores circunstancias, desde 2010 y hasta el desplome de la cotización del crudo a fines de 2014, la zona de los no convencionales vivió un verdadero “tsunami” (Giuliani & Martínez Guarino, 2015). Las implicancias en el territorio merecen especial atención y han sido tratadas en anteriores contribuciones (Giuliani, Fernández, Hollmann & Ricotta, 2016); (Giuliani, 2016); (Giuliani, 2017). Aquí se reproduce una síntesis.

En torno a la técnica utilizada en la extracción, la fractura hidráulica o *fracking*, existen múltiples interrogantes, que en determinados países han llevado a prohibirlo. Consiste en inyectar agua, arena y aditivos químicos a gran presión para generar fracturas en la roca generadora, reabrir el sistema de poros y conectarlos con el fin de conformar canales artificiales para que migren los hidrocarburos atrapados en la roca. Las críticas apuntan principalmente al uso intensivo de grandes volúmenes de agua y al peligro de contaminación de acuíferos o napas que atraviesan los pozos, como así también al riesgo de que se produzcan sismos. Los organismos oficiales relativizan los resultados de su aplicación argumentando básicamente que no se trata de una práctica nueva, sino que ya ha sido utilizada en la extracción convencional. Un análisis especializado sobre el tema asegura que el riesgo de pérdidas, derrames o accidentes en el manejo del fluido que se inyecta puede ser monitoreado con medidas de prevención y control, mientras que el manejo de los aditivos -que es una de las preocupaciones que suscita el procedimiento- disminuye en la medida que se utilizan productos menos tóxicos. Algunos de los procesos involucrados en esta etapa que requieren seguimiento son, por ejemplo, movimiento e instalación de equipos y personal; transporte, acopio y manejo de las sustancias a inyectar (agua, arena y químicos); recuperación, reúso, tratamiento y disposición del agua de retorno (Sarandón, 2015: 376).

Es el Estado el que debe garantizar un rol activo en cuanto a fiscalización de las tareas desarrolladas en los yacimientos y exigir cumplimiento de protocolos específicos, a fin de prevenir contingencias. Es preciso que el constante empeño por reducir las erogaciones, inherente a la lógica de maximización de beneficios del capital privado, sea contrarrestado con acciones estatales de estricta supervisión. El deterioro ambiental no suele ser incluido por las empresas dentro de los componentes del costo.

Por su parte, las consecuencias en la sociedad pueden ser tanto o más severas. Los procesos de crecimiento demográfico explosivos, como el que se dio en la zona durante el *boom* de los no convencionales -y que seguramente se repetirá cuando los cálculos vuelvan a arrojar factibilidad económica-, si no son contemplados debidamente, pueden provocar daños en el tejido social de muy difícil corrección o inclusive irreversibles.

Uno de los casos más evidentes es el de Añelo, una pequeña localidad de origen rural, que por su ubicación se convirtió en el epicentro de las operaciones. De

acuerdo con los datos del último Censo (2010) cuenta con 2.249 habitantes, aunque se vio desbordada por la frenética actividad desplegada por los distintos actores vinculados al “oro negro”. El incremento poblacional colapsó las instalaciones educativas, sanitarias e inclusive la infraestructura más básica, como las redes de agua, provisión de gas y cloacas, entre otras necesidades.

Entre los clásicos efectos se encuentra el aumento de los precios de las viviendas, potenciado por el déficit habitacional y por la escala salarial de los petroleros, que supera con creces al promedio abonado en el mercado laboral regional. Esta es la causa por la que muchos de los docentes que trabajan en Añelo no viven allí (se calcula que es el 90%), sino que se trasladan desde ciudades aledañas y en algunos casos deben recorrer más de 100 kilómetros para llegar a dar sus clases: viajan en colectivo, en autos particulares o frecuentemente a dedo, por la carga que representa el transporte público o el combustible en sus salarios. En realidad, los precios del conjunto de bienes y servicios están influidos por la fiebre del *shale*, convirtiendo a la región en una de las plazas más caras a nivel nacional.

Las asimetrías en los ingresos indudablemente se relacionan con la deserción escolar. Añelo presenta uno de los mayores valores en el indicador de desgranamiento educativo, ya que 8 de cada 10 alumnos no concluyen el ciclo de 5 años de la escuela media. El problema es atribuido en gran medida a las expectativas que genera en los jóvenes la posibilidad de pertenecer al mundo del petróleo. El único establecimiento secundario de la ciudad no prepara a los estudiantes para trabajar en los hidrocarburos, por lo que muchos lo abandonan e intentan ocuparse en alguna de las compañías del rubro. No todos lo consiguen, teniendo en cuenta que es usual la contratación de personal especializado proveniente de otras provincias, o inclusive del exterior. Por otra parte, el requerimiento de empleo desciende sensiblemente cuando la baja en el precio internacional desalienta las inversiones.

Como contrapartida de las mejores remuneraciones, los empleados petroleros enfrentan el desarraigo y la contingencia de accidentes, tanto durante la jornada laboral como en las saturadas rutas por las que se trasladan. Asimismo, se encuentran expuestos a delicadas situaciones como el consumo de drogas, alcohol en exceso o juego. Más preocupantes aún son las denuncias sobre la existencia de redes de trata de mujeres y niñas para la explotación sexual.

Si bien el foco se coloca en Añelo, la influencia trasciende a las ciudades cercanas a los yacimientos para impregnar el ambiente de la Norpatagonia, escala de actuación que comprende a la provincia de Neuquén y se extiende a Río Negro. Un trabajo elaborado en el marco de un proyecto de investigación de la UNCo, dirigido por la Prof. Elda Micheli (2015) señala síntomas de profundos contrastes y desigualdad en la sociedad neuquina. En 2014, en pleno auge de Vaca Muerta, el 47% de la población era de clase baja y la diferencia de ingresos entre el 6% más rico y el 17% más pobre era de 40 veces. En septiembre de 2017, la Encuesta Permanente de Hogares arrojó un preocupante 27,3% de pobreza en el conglomerado Neuquén-Plottier y un 34% para el conglomerado Viedma - Patagones, que es el que se releva en Río Negro (Encuesta Permanente de Hogares, 2017).

Este breve diagnóstico constituye un punto de partida para reflexionar acerca de las posibilidades de desarrollo y el porvenir de un territorio con riquezas

provistas por la naturaleza. Desde algunas vertientes de la teoría económica se menciona la existencia de una supuesta “maldición de los recursos naturales”, como si fuera un fenómeno irreversible que no se puede eludir (Auty, 1994) (Sachs & Warner, 2001) (Giuliani, 2011). Asumir este razonamiento en el caso de los hidrocarburos significaría naturalizar los perjuicios, sacrificando al territorio ante la necesidad de generar energía (Di Risio, Gavalda, Pérez Roig & Scandizzo, 2012). Paralelamente, implica aceptar que el abastecimiento energético es un negocio impregnado por el afán de lucro del capital. Otra postura, superadora por cierto, consiste en concebir a la política pública como el mecanismo que posibilita enfrentar este supuesto mal, tanto para definir la modalidad y las condiciones de la explotación, como para medir y minimizar las consecuencias.

Escenarios Prospectivos

La Prospectiva es utilizada en la planificación del desarrollo, en tanto propicia la construcción conjunta de una visión de futuro dinámica y a largo plazo y genera la posibilidad de identificar las acciones necesarias para convertir esa visión en políticas públicas, a través de programas o proyectos. Por otra parte, facilita la reflexión sobre la interdependencia entre todas las dimensiones del desarrollo de los territorios, como un proceso que engloba aspectos tanto cuantitativos como cualitativos. Es decir, no sólo tiene en cuenta el aspecto económico, sino que se enfoca en lo social, lo ambiental y también lo institucional. En América Latina hay especialistas formados en las distintas vertientes que estudian la materia a nivel mundial. Ellos confirman que la Prospectiva involucra dos conceptos clave: la anticipación, que expresa la idea de observar lo que está por venir y la producción de imágenes de futuro, generalmente mediante el método de construcción de escenarios. Puede entenderse como un proceso intelectual que permite identificar lo que puede suceder, también llamados “futuros posibles”. Asimismo, habilita la representación de los futuros que tienen mayores probabilidades de acontecer, o “futuros probables”. E incluso, aquellos que se desea que acontezcan, que serían los “futuros deseables”. Los futuros posibles y probables se construyen a partir de mirar objetivamente lo que ocurre en el presente, de reflexionar sobre la realidad y sus alcances. Los futuros deseables “responden a la proyección subjetiva de los anhelos, temores, deseos e intereses de los actores sociales” (Medina Vásquez, Becerra, & Castaño, 2014: 49). Por consiguiente, la prospectiva no se limita a pronosticar los hechos más probables; se trata de una acción abierta que diseña múltiples caminos hacia el futuro, en los que se expresan en forma tangible las derivaciones de las decisiones que se toman hoy.

A partir de estos aportes, surgen cuatro escenarios para la Norpatagonia que, de manera muy sintética, se exponen a continuación:⁸

⁸ La siguiente caracterización surge de un proceso participativo, realizado en el marco del Proyecto de Investigación “El Desarrollo Territorial de la Norpatagonia y sus escenarios futuros” (FaEA -UNC), que incluyó una serie de encuentros con representantes de organismos y diversos participantes locales, pertenecientes al sector público y privado, con el propósito de debatir sobre los posibles escenarios que enfrenta la región. La iniciativa está coordinada por el Grupo Escenarios, integrado por el Arq. Ramón Martínez Guarino, la Arq. Cecilia Barrera y la autora del presente artículo, con el apoyo

1- Escenario Tendencial, definido por la continuidad de lo que se advierte en el presente de la región:

- Escasa planificación, con muy pocos objetivos y estrategias explícitas para el mediano y largo plazo por parte del Estado; gestiones de gobierno centradas en la coyuntura y marcadas por tiempos electorales; excesivo empleo público ante la baja demanda de mano de obra de la industria hidrocarburífera y la debilidad de la economía para crear empleo fuera del petróleo.
- En lo macroeconómico, tanto a nivel nacional como regional: déficit fiscal y restricción externa, inflación y endeudamiento creciente; bajos precios del petróleo y crisis en la fruticultura, con serias repercusiones en el empleo.
- Desde el punto de vista social, los problemas se multiplican: aumentos del nivel general de precios, con la consecuente pérdida del poder adquisitivo y sus consecuencias en el consumo, la producción y el trabajo; crisis en educación y salud; creciente exposición a situaciones perjudiciales como la adicción al juego, a las drogas o al alcohol.
- Crecimiento demográfico desordenado, basado en migrantes de otras partes del país y del exterior, que impacta sobre los servicios, la vivienda y sobre la calidad de vida en general.
- Permanentes conflictos por la instalación de locaciones en tierras habitadas por las comunidades del pueblo mapuce.

Este escenario está enfocado en Vaca Muerta, en la explotación de un recurso no renovable con escaso resguardo del territorio y, por lo tanto, sin garantías de sustentabilidad para la Norpatagonia. Una combinación que deriva en permanentes disputas por el presente sin pensar en el futuro. Al estar sustentado por equilibrios inestables, tarde o temprano desembocará en alguno de los tres escenarios restantes.

2- Escenario Caótico, en el que las condiciones negativas de la actualidad se exacerbarían:

- Predominio del accionar extractivo de grandes corporaciones, sin contemplaciones por los daños ambientales o sociales, con pocas o nulas acciones de regulación y control por parte del Estado.
- Intensificación de las contradicciones y controversias de todo tipo: Provincia-Nación; trabajadores del petróleo-resto de trabajadores; lo urbano y lo rural; neuquinos y rionegrinos; empresas petroleras y superficiarios; entre otras.
- Expansión del negocio inmobiliario, afianzando las prácticas especulativas en torno a la tierra y la vivienda y los cambios regresivos

del Lic. Javier Vitale, CoDirector del Centro de Estudios Prospectivos de la Universidad Nacional de Cuyo.

en el uso del suelo. Multiplicación de loteos en detrimento de las unidades productivas.

- Avance de las perforaciones sobre los entornos urbanos.
- Concentración económica, con mínima distribución del ingreso y débil captación de la renta por parte de una élite local, dependiente de las reglas que fija el sector dominante de este escenario. Profundización de la pobreza y la desigualdad.
- Creciente presencia de flagelos tales como narcotráfico, trata de personas, inseguridad ciudadana.

Es un escenario que, a falta de “licencia social”, para funcionar inevitablemente requiere un aparato represivo que reacciona de manera proporcional a las demandas de los sectores populares.

3- Escenario “Anti Fracking”, resultante de la aceptación del reclamo tendiente a frenar las actividades contaminantes. De prosperar, debería prohibirse cualquier tipo de explotación hidrocarburífera y también la minera, al menos allí donde prevalecen los procedimientos inadecuados y la falta de control. El grado de contaminación depende en gran medida de la capacidad y voluntad de intervención del Estado para inspeccionar el accionar de las empresas que, por naturaleza, tratan de priorizar sus beneficios a costa de las buenas prácticas. Los avances tecnológicos en materia de preservación ambiental son muy importantes, aunque no así su aplicación.

Este escenario resulta poco viable, teniendo en cuenta que la generación de energía en nuestro país es altamente dependiente del gas y el petróleo, con una participación conjunta en la matriz energética que ronda el 85%. Y en caso de tener que recurrir a la importación, como ya se ha analizado, la presión sobre las cuentas externas es uno de los argumentos para la puesta en práctica de políticas que promuevan la búsqueda del abastecimiento interno.

4-Escenario Sustentable, que surge de acuerdos, participación, nuevos paradigmas y nuevos actores. Se funda en el desarrollo humano, en la calidad de vida de los habitantes (actuales y futuros) como prioridad. Es una construcción basada tanto en la participación y el empoderamiento de los ciudadanos como en el cuidado del ambiente que sustenta al territorio. Proviene del debate y el acuerdo sobre las ideas fuerza orientadoras del proceso, a partir de una visión prospectiva con sus cuatro dimensiones, económico-productiva, social-cultural, territorial-ambiental e institucional:

- En lo económico-productivo, la renta derivada de los recursos naturales, particularmente de los que se agotan, debe aplicarse a la diversificación productiva y al desarrollo de fuentes de energía renovables. Alentar el asociativismo, la economía social y las pequeñas y medianas empresas, con la industria agroalimentaria como uno de los ejes a estimular, para proveer a un mundo que demandará cada vez más alimentos. Promover el turismo

y demás sectores que generen trabajo genuino. A nivel nacional, diseñar un plan industrial que se proponga sustituir importaciones y superar la restricción externa. Estimular el conocimiento científico-tecnológico que respalde las acciones.

- En lo social-cultural, se trata de distribuir el ingreso a fin de subsanar las inequidades. Controlar las desigualdades salariales, evitar las distorsiones en el costo de vida, la deserción escolar, las contingencias laborales. Aquí surge la necesidad de profundizar los esfuerzos no sólo para cubrir las necesidades básicas en cuanto a vivienda, educación, salud, sino además para implementar capacitaciones con orientación productiva, así como extender el deporte, la recreación, el arte y la cultura, como redes de contención e integración para la niñez y la adolescencia. Definir políticas de género, que resguarden los derechos de las minorías, de los pueblos originarios. Planificar los efectos del crecimiento demográfico, considerando que las corrientes migratorias serán cada vez más fluidas.
- Desde el punto de vista territorial-ambiental, la expectativa es superar los desequilibrios, de manera de armonizar las distintas zonas con mejoras en la conectividad, las telecomunicaciones y con posibilidades laborales que atenúe el despoblamiento de las regiones más postergadas. El objetivo incluye el manejo racional de los recursos, que minimice el impacto de las actividades económicas y el daño en el territorio.
- La calidad de las instituciones comprende la consolidación de la democracia a través de la división de poderes, la gestión eficiente y transparente de los fondos públicos y la necesaria coordinación entre los niveles de gobierno.

En definitiva, el escenario sustentable es el escenario deseado, el ideal, aquel que la sociedad anhela y al que se tiende con políticas públicas adecuadas.

Reflexiones Finales

En Argentina, la devaluación del peso que sucedió a la profunda crisis de finales de 2001 inauguró un ciclo de crecimiento del Producto Bruto Interno y del comercio exterior. El mantenimiento de un tipo de cambio competitivo y el impulso a la demanda agregada fueron los pilares del período, reforzados por los términos de intercambio favorables a los productos primarios, principales rubros que exporta el país. Hacia 2010 la cuenta corriente de la Balanza de Pagos se tornó negativa y entre los desencadenantes se encuentra la situación del sector hidrocarburífero. La declinación de la oferta interna de petróleo y gas, combinada con los mayores requerimientos para satisfacer una economía en expansión, causó la necesidad de importar energía, comprometiendo las cuentas externas y agudizando la escasez de divisas que históricamente afecta a Argentina y a países de industrialización tardía en general.

Con la intención de revertir la tendencia, se definió el avance sobre los hidrocarburos no convencionales y en especial sobre la formación Vaca Muerta en la

Cuenca Neuquina. Ante la dificultad de obtener el financiamiento involucrado en la explotación, se instrumentaron incentivos para atraer inversores. La asociación con Chevron celebrada en 2013, la reforma de la Ley Nacional de Hidrocarburos concretada al año siguiente y las medidas tomadas por la gestión que gobierna el país desde 2015, garantizan ventajas tendientes a la maximización de ganancias de los capitales. No obstante, las importaciones de energía continúan contribuyendo a la persistente restricción externa, acentuada actualmente por el contexto macroeconómico.

La intensificación de las actividades ha implicado un alto impacto en el territorio desde el punto de vista tanto socioeconómico como ambiental. Y si bien es innegable que la fluctuación de los precios incide en las determinaciones del mercado, así como el costo de los procedimientos, la influencia de los estímulos estatales es significativa. Sería auspicioso que la política pública contemple el manejo de los recursos naturales en beneficio del conjunto de la sociedad. El escenario que depara el futuro se construye a partir de las decisiones que se toman en el presente.

Queda claro que para superar la restricción externa no es suficiente que ingresen al país más divisas de las que egresan, sino que es preciso articular programas tendientes a generar fuentes de energía renovables y cambios en la matriz productiva. Se trata de un complicado desafío, teniendo en cuenta que el Estado va quedando cada vez con menos margen para proyectar un modelo de desarrollo nacional.

Bibliografía

- Amico, F. (2013). "Crecimiento, distribución y restricción externa en Argentina". *Circus*, 31-80.
- Aspiazu, D., Manzanelli, P., & Schorr, M. (2011). *Concentración y Extranjerización. La Argentina en la posconvertibilidad*. Buenos Aires: Capital Intelectual.
- Auty, R. (1994). "Industrial policy reform in six large newly industrializing countries. The resource curse thesis". *World Development*, 11-26.
- Braun, O., & Joy, L. (1981). "Un modelo de estancamiento económico, estudio de caso sobre la economía argentina". *Desarrollo Económico*, 585-604.
- Caligari, R., & Hirschfeldt, M. (2015). "Condiciones para la explotación de recursos hidrocarburíferos no convencionales en la Argentina". En L. Riavitz y otros, *Recursos hidrocarburíferos no convencionales shale y el desarrollo energético de la Argentina* (págs. 213-305). Buenos Aires: Eudeba.
- Cantamutto, F., Schorr, M., & Wainer, A. (2016). "El sector externo de la economía argentina durante los gobiernos del kirchnerismo". *Realidad Económica* N°304, 41-73.
- CENDA - Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino. (2010). *La anatomía del nuevo patrón de crecimiento y la encrucijada actual - La economía argentina en el período 2002-2010*. Buenos Aires: Cara o Ceca.
- Damill, M., & Frenkel, R. (2015). "La economía argentina bajo los Kirchner: una historia de dos lustros". En *¿Década Ganada? Evaluando el legado del Kirchnerismo*. Buenos Aires: Debate.

- Di Risio, D., Gavalda, M., Pérez Roig, D., & Scandizzo, H. (2012). *Zonas de sacrificio. Impactos de la industria hidrocarbúfera en Salta y en la Norpatagonia*. Buenos Aires: América Libre / OPSur.
- Diamand, M. (1973). *Doctrinas económicas, desarrollo e independencia*. Buenos Aires: Paidós.
- Diario Río Negro. (31 de enero de 2018). General Roca, Río Negro.
- Encuesta Permanente de Hogares. (septiembre de 2017). Obtenido de https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_01_17.pdf
- Gaggero, A., & Schorr, M. (2016). "La cúpula empresaria durante los gobiernos kirchneristas". *Realidad Económica* N° 297, 61-91.
- Giuliani, A. (2011). "La maldición de los recursos naturales, una perspectiva crítica. Su proyección en el caso de la provincia del Neuquén". *IV Jornadas de Economía Crítica*. Córdoba, Argentina.
- Giuliani, A. (2013). *Gas y Petróleo en la Economía de Neuquén*. Neuquén: Educo.
- Giuliani, A. (2016). "La Planificación como herramienta orientadora del desarrollo. El caso de la Provincia de Neuquén y la explotación de Vaca Muerta". En C. La Serna, *Estado, Política Pública y Acción Colectiva* (págs. 611-622). Córdoba: Libros del IIFAP. Universidad Nacional de Córdoba.
- Giuliani, A. (2017). "La explotación de hidrocarburos en Argentina en el marco de la governance. El caso de Vaca Muerta". *Revista Administración Pública y Sociedad APyS, IIFAP, FCE, UNC*, <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/APyS/article/view/16813>.
- Giuliani, A., & Martínez Guarino, R. (13 de junio de 2015). 4 escenarios para Vaca Muerta. *Suplemento de Energía, Diario Río Negro*.
- Giuliani, A., Fernández, N., Hollmann, M. & Ricotta, N. (2016). "La Explotación de Vaca Muerta y el impacto Socio-Económico en la Provincia del Neuquén. El Caso de Añelo. Efectos de la reforma de la Ley Nacional de Hidrocarburos (2014)". *Revista Ciencias Administrativas Año 4 - N° 7*, 3-19.
- INDEC. (30 de enero de 2018). www.indec.gob.ar. Obtenido de https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ica_01_18.pdf
- INDEC. (30 de enero de 2018). www.indec.gob.ar. Obtenido de https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=3&id_tema_2=2&id_tema_3=40
- Informe de Coyuntura Económica Grupo GERES. (diciembre de 2017). Obtenido de <http://www.economiageres.com/img/showcase/IIT2017.pdf>
- Instituto Argentino de la Energía "General Mosconi". (13 de diciembre de 2017). www.iae.org.ar. Obtenido de <http://web.iae.org.ar/wp-content/uploads/2017/12/IAE-Mosconi-Informe-Especial-Di-a-del-Petroleo.pdf>
- Manzanelli, P., & Basualdo, E. (2016). Régimen de acumulación durante el ciclo de gobiernos kirchneristas. *Realidad Económica* N° 304, 6-40.
- Medina Vásquez, J., Becerra, S. & Castaño, P. (2014). *Prospectiva y Política Pública para el cambio estructural de América Latina y el Caribe*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.

- Micheli, E. (2015). *Los estratos sociales en Neuquén según los niveles de ingreso de las familias*. Neuquén: Informe elaborado en la UNCo.
- Ministerio de Energía de Neuquén. (2017). *Producción de gas en la Cuenca Neuquina*. Inédito.
- Ministerio de Energía y Minería de la República Argentina. (30 de enero de 2018). Obtenido de <http://www.energia.gob.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3299>
- Resoluciones 46 y 419 E, M. d. (2017). Argentina: Boletín Oficial.
- Riavitz, L., Zambon, H., & Giuliani, A. (2015). "La matriz energética argentina y la restricción externa". *Cuadernos de Investigación*, 110-141.
- Sachs, J., & Warner, A. (2001). "The curse of natural resources". *European Economic Review*, 827-838.
- Sarandón, R. (2015). "Impacto ambiental de la explotación de los recursos no convencionales". En R. L. otros, *Recursos hidrocarburíferos no convencionales shale y el desarrollo energético de la Argentina* (págs. 349-426). Buenos Aires: Eudeba.
- Subsecretaría de Energía, Minería e Hidrocarburos de la Provincia del Neuquén. (2017). *Superficie por operador en áreas concesionadas en la Provincia del Neuquén*. Neuquén: inédito.
- Wainer, A., & Schorr, M. (2014). "La economía argentina en la posconvertibilidad: problemas estructurales y restricción externa". *Realidad Económica* N° 286, 137-173.



Transformaciones socioeconómicas en torno a la extracción de hidrocarburos no convencionales El caso de YPF S.A. en Vaca Muerta¹

Ignacio Oscar Cretini²

Resumen

En este artículo se realiza un estudio de caso de YPF S.A. en base a un análisis cualitativo de triangulación de distintas fuentes de información, para caracterizar los cambios tecno-productivos y principales conflictos y tensiones que ha generado la actividad no convencional en el territorio. Se parte de la hipótesis de que éste nuevo ciclo productivo implica un proceso de modernización tecnológico, con potencialidad para fortalecer un desarrollo endógeno, pero asociado a una mayor conflictividad por el deterioro socioambiental y las disputas territoriales. El trabajo rastrea la trayectoria histórica de YPF en la Cuenca Neuquina y sus transformaciones producto del desarrollo de los HNC. Luego, se analizan los principales conflictos y tensiones identificados. Los resultados reflejan que el proceso de explotación de HNC ha generado un *catch-up* tecnológico, con acumulación de capacidades locales, pero todavía dependiente de tecnología y *know-how* externo, mientras que los conflictos de alta intensidad se asocian a disputas territoriales y socioambientales.

Palabras Claves

innovación – territorio – conflictos sociales

Socioeconomic transformations around unconventional hydrocarbons. The case of YPF S.A. in Vaca Muerta

Abstract

This article analyses the case of YPF SA based on a qualitative analysis of triangulation of different sources of information, to characterize the techno-productive changes and main conflicts and tensions that non-conventional activity has generated in the territory. It is based on the hypothesis that this new productive cycle implies a process of technological catch-up, with the potential to strengthen endogenous development, but associated with greater conflict due to socio-environmental deterioration and territorial disputes. The work traces the historical trajectory of YPF in the Neuquén

¹ El trabajo forma parte de una investigación realizada en el marco del Programa de “Innovación, Desarrollo y Multiculturalismo en América Latina” de la UNSAM, dirigida por el sociólogo Fernando Calderón Gutiérrez. Fue presentado parcialmente en el Taller Internacional “Recursos naturales y desarrollo local: Sostenibilidad, cohesión social y resiliencia” realizado en la UNPSJB, en el mes de octubre de 2017. Se agradecen los valiosos comentarios de Juan Wahren, Deborah Pragier, Juan Pablo Deluca y Fernando Calderón Gutiérrez. Desde ya, cualquier error u omisión es entera responsabilidad del autor.

² Es Lic. en Economía (UBA) y Becario doctoral CONICET del Centro de Investigaciones y Transferencia Golfo San Jorge, de la UNPSJB. Email: ignaciocretini@gmail.com.

basin, and its transformations product of the development of the UH. Then, the main conflicts and tensions identified are analyzed. The results reflect that the UH exploitation process has generated a technological catch-up, with accumulation of local capacities, but still dependent on external technology and know-how, while high intensity conflicts are associated with territorial and socio-environmental disputes.

Keywords

innovation – territory – social conflicts

Introducción

La teoría de la maldición de los recursos naturales (Sachs y Warner, 2001; Frankel, 2010) sostiene que la mayoría de los países en desarrollo que se han especializado en la extracción y exportación de recursos naturales (o, en la actualidad, bienes *commodities*) han obtenido menores tasas de crecimiento económico en el largo plazo que aquellos países con escasas dotaciones de recursos naturales. En particular, la abundancia de recursos naturales desincentivaría la expansión de actividades no tradicionales, reforzando la concentración del ingreso en pocas manos y con ello un sendero de baja propensión a invertir en innovación y desarrollo tecnológico (Cimoli y Rovira, 2008). Por otro lado, induce una dependencia de la renta extractiva (tanto del sector público como privado), alienta el comportamiento cortoplacista y la sobreexplotación del ambiente (Schuldt y Acosta, 2006), afectando principalmente el espacio local y los territorios.

En este marco, las primeras estimaciones difundidas por la *Energy Information Administration* (EIA) de EE. UU en 2011 y 2013³ reabrieron la discusión en relación con el incentivo a la explotación masiva de recursos naturales, con el fin de abastecer el mercado internacional, y el modo de desarrollo nacional y territorial. Estos informes que cuantifican los recursos de hidrocarburos no convencionales técnicamente extraíbles fuera de Estados Unidos –categorización que no contempla la faceta económica, es decir, si es viable su extracción en términos de costos operativos–, sostienen que dos tercios de los recursos gasíferos y petroleros analizados se concentran en seis países, entre los cuales está la Argentina.⁴ Esto posicionó a la Argentina como un actor relevante a nivel geopolítico y, en particular, a la provincia de Neuquén donde se aloca la formación geológica Vaca Muerta.

El objetivo de la investigación es analizar la relación entre lo que se ha denominado “extractivismo informacional” (Calderón, 2015) en el sector petrolero, a partir del Estudio de Caso de YPF S.A. en Vaca Muerta. A tal efecto, el trabajo trata de responder a los siguientes interrogantes: ¿Cómo se modifica la gestión y el

³ En el año 2011 la Advanced Resources Internacional (ARI) realizó un informe que se publicó como parte de una publicación de EIA (*World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States*), con las primeras estimaciones de 69 formaciones de Shale Gas en 32 países. En el año 2013, la EIA amplió dicha información en el informe *Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas Resources: An Assessment of 137 Shale Formations in 41 Countries Other than the United States*, con estimaciones reservas extraíbles de petróleo y gas no convencional en 41 países. El primer informe puede consultarse en <http://www.adv-res.com> y el segundo de <https://www.eia.gov>.

⁴ Para el gas, en orden descendente, son Estados Unidos, China, Argentina, Argelia, Canadá y México; mientras que, para el petróleo, en el mismo orden, son Rusia, Estados Unidos, China, Argentina, Libia y Australia.

desarrollo productivo de YPF con la exploración y explotación en los hidrocarburos no convencionales?, y ¿qué conflictos y tensiones genera en el territorio?

Para responder a dichos interrogantes, el trabajo se divide en los siguientes apartados. En primer lugar, se describe el marco conceptual donde se hilvanan los conceptos de informacionalismo, territorialidad y capacidad de agencia del actor. Luego se detalla la estrategia metodológica, centrada en un abordaje metodológico de triangulación de fuentes de información secundarias, con datos estadísticos provenientes de la Secretaría de Minería de la Nación y entrevistas en profundidad a personal de la empresa y actores de las ciudades de Neuquén y Añelo. En la tercera sección se caracterizan las transformaciones hacia dentro de la empresa, en términos productivos y organizacionales, y su vinculación con la innovación. La siguiente sección presenta una matriz de relaciones y conflictos entre la empresa y los principales actores en el territorio y, finalmente, las conclusiones del trabajo. Finalmente, en las conclusiones se describe el proceso de conformación de un territorio informacional globalizado, creciente diferenciación social y conflictividad, y la polarización de visiones sobre el desarrollo en el territorio, como los principales rasgos de la explotación de HNC.

Marco conceptual

Las estrategias de desarrollo extractivistas o neo-extractivistas, impulsadas por los gobiernos latinoamericanos (en sus diferentes orientaciones políticas) durante el *boom* del precio de los bienes *commodities* de la década del 2000, han sido ampliamente discutidas y caracterizadas en la literatura (Burchardt y Dietz, 2014; Svampa y Viale, 2014; Gudynas, 2009). En particular, este trabajo retoma ciertos aspectos de estas discusiones, enfocándose en las nuevas formas de producción, gestión y organización del trabajo, así como la vinculación con el territorio, de las empresas extractivas en la Era de la información (Castells, 1996).

Las transformaciones de la tecno-economía de la información del último cuarto del siglo XX, junto con la desregulación financiera y la liberalización de los mercados de capitales, generaron una oleada de Inversión Extranjera Directa (IED) hacia los países en desarrollo y economías emergentes, que modificaron la forma en que éstos se insertan en la economía mundial, y el alcance de sus políticas gubernamentales y la disponibilidad de instrumentos estatales en el ámbito del comercio y la competitividad (Chesnais y Simonetti, 2000).

En este contexto, las actividades extractivas se han subsumido a los patrones informacionales de la globalización. Retomando los aportes de Calderón (2015), las empresas extractivas que deben adaptar sus estructuras, incorporando nuevas tecnologías comunicacionales, esquemas organizacionales en Red y mayores esfuerzos de innovación, a partir de la interacción con los Sistema de Innovación locales y redes de innovación global, se redefinen como *Extractivas Informacionales*. Así, el modelo de acumulación extractivista en América Latina se inserta en un mercado mundial que es informacional porque la productividad y competitividad de las empresas en la economía está asociada a su capacidad para generar, procesar y aplicar con eficiencia la información basada en el conocimiento. Por otro lado, los

diferentes factores productivos (mano de obra, capital, materia prima) y activos estratégicos de las empresas (gestión, información, tecnología, mercados), en las diferentes esferas de la producción, el consumo y la circulación, están organizados a escala global, bien de forma directa o mediante una red de vínculos entre diferentes.

En particular, el ingreso masivo de IED en Argentina se produce con las transformaciones estructurales de los años 1990, enfocada en la explotación de ventajas competitivas asociadas a recursos naturales, o a posicionarse dentro del mercado interno (Kulfas, Porta y Ramos, 2002; Chudnosky y Lopez, 2007; Anlló y Ramos, 2008), adquiriendo un peso central en la dinámica productiva del país. La desregulación del mercado energético permitió el ingreso de empresas multinacionales (EMN) en el sector petrolero, profundizando la integración con cadenas de producción global de combustibles fósiles, organizadas en Red y plenamente integradas al sistema financiero internacional⁵. En este contexto de internacionalización de la producción de hidrocarburos, el patrón informacional de las empresas será un activo estratégico para el desarrollo de los HNC, dada la necesidad de una permanente aprendizaje y acumulación de conocimiento sobre la geología local para mejorar la eficiencia productiva.

Por otra parte, para analizar la vinculación de la empresa con los actores del territorio, se utiliza el concepto de territorialidad. Este representa un espacio geográfico atravesado por relaciones sociales, políticas, culturales y económicas que es resignificado constantemente por los actores que habitan y practican ese espacio geográfico, configurando un escenario territorial en conflicto por la apropiación y reterritorialización del espacio y los recursos naturales que allí se encuentran (Wahren, 2012). Las actividades extractivas en un espacio geográfico tienen una historicidad particular (no abstracta), con trayectorias socioculturales determinadas, y es esencialmente globalizado a diferencia de otras territorialidades locales o regionales con menor grado de penetración en los mercados internacionales (Göbel, 2013). Finalmente, se analiza el rol de los actores que intervienen en las actividades extractivas, en función de su capacidad de agencia, la cual se explica por la relación entre las metas y resultados alcanzados por parte de los actores sociales y políticos (Calderón, 2012b). A mayor capacidad de agencia, mayor es la capacidad de incidir en el devenir de una situación, en este caso en relación con la actividad extractiva.

La hipótesis central es que éste nuevo ciclo productivo implica un proceso de modernización tecnológico, con potencialidad para fortalecer un desarrollo endógeno, pero asociado a una mayor conflictividad por el deterioro socioambiental y las disputas territoriales. En este sentido, la falta de interacción y complementariedad entre el Estado Nacional, la empresa y los gobiernos locales, implican una restricción a un posible ciclo virtuoso de crecimiento con innovación, que avance sobre las problemáticas sociales y ambientales del territorio.

⁵ La estructura accionaria y los directorios de muchas de las grandes empresas petroleras responden a una serie de fondos financieros de inversión global (Capital Research & Management, Barclays, State Street, Morgan Stanley, etc.) que, por lo general no tienen un país de origen, al estructurarse como una Red Financiera Global (Formento y Merino, 2011).

Metodología

Este trabajo de investigación indaga en el comportamiento tecnológico e innovador de las empresas extractivas informacionales en el sector petrolero y su vinculación con el territorio, a partir del estudio de caso de la empresa YPF S.A. en la explotación de los HNC en la formación geológica Vaca Muerta. En particular, se busca resaltar las transformaciones que surgen al interior de la Empresa y los principales conflictos que emergen en torno a la actividad no convencional.

La estrategia metodológica de investigación supone que el caso elegido para investigar representa una oportunidad para aprender de un fenómeno novedoso a nivel global, siendo YPF S.A. una empresa público-privada que lidera el proceso de explotación de HNC en Argentina, además de tener una vinculación histórica con el territorio. Para llevar adelante la investigación se consideró que la metodología cualitativa es la más adecuada para comprender el fenómeno. La observación directa de las transformaciones sociales y territoriales, así como la interpretación de la subjetividad de los principales actores, permiten lograr una mejor percepción de las transformaciones en curso. De allí la necesidad de realizar entrevistas en profundidad semi-estructuradas a actores en la empresa, tanto en sus oficinas centrales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A) como en Neuquén, y realizar salidos de campo, para conocer el territorio, situar a los diferentes actores y contar con sus visiones y representaciones.

En este sentido, la principal fuente de información cualitativa surge de entrevistas realizadas entre el 2016 y 2017, en C.A.B.A., la ciudad de Neuquén y el departamento de Añelo. Se realizaron entrevistas a informantes clave y, posteriormente, 20 entrevistas a representantes de la empresa y actores en el territorio. Cabe destacar, que la observación directa en la empresa y el territorio es una dimensión central de la investigación cualitativa, que permitió recoger datos de modo sistemático y no invasivo durante la interacción con los entrevistados en su propio lugar.

Con la información de las entrevistas sumada a la información secundaria recuperada de fuentes oficiales y otros documentos, se abordan los siguientes objetivos específicos. En primer lugar, se caracterizan las transformaciones tecnoproductivas y organizacionales dentro de la empresa, a partir del desarrollo de los HNC en Vaca Muerta. En segundo lugar, se construyó un mapeo de actores (Gutiérrez, 2001) que participan o se ven involucrados con la producción petrolera en el territorio, para conocer sus acciones y los objetivos de su participación. En tal sentido, es importante destacar que en el mapeo de actores se identifican roles y poderes de los actores sociales más relevantes.

Análisis de Caso

Trayectoria de YPF y su vinculación con la Cuenca neuquina

Al igual que otras provincias de la Patagonia (i.e. Chubut), el hallazgo de petróleo en la localidad de Plaza Huincul en 1918 precede a la conformación de la provincia de Neuquén. La exploración y explotación de petróleo en la zona, nace con

la necesidad del Estado nacional de lograr sustituir la creciente demanda de importaciones de combustibles, ante el rápido aumento del consumo en los principales centros urbanos del país. Esto motivaría la creación de la primera empresa estatal petrolera de Latinoamérica, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)⁶, que rápidamente pasaría a tomar posesión de ciertas áreas en la Cuenca Neuquina.

La intervención del Estado a través de la empresa petrolera será central en el proceso de territorialización de Neuquén, a partir del impulso de flujos migratorios, la conformación y gestión de las instituciones, la política, la actividad económica y cultural, hasta el año 1955 cuando se provincializa. Desde entonces el patrón histórico de reproducción económica y dominación provincial se erige en torno de un partido político provincial hegemónico, en el marco de un débil sistema partidario (Favaro, 1992), con importantes redes de intermediación en la región y a nivel nacional, y una alianza estratégica con el sector petrolero.

Entre 1920 y hasta el inicio de la privatización de YPF S.E. en los años 1990, la explotación petrolera en el país fue impulsada principalmente por la empresa nacional, que participaba en toda la cadena productiva, desde la extracción hasta la comercialización final, permitiendo mediante su expansión el fortalecimiento de las economías regionales y del Estado nacional (Plataforma, 2012; Svampa y Viale, 2014). Con el descubrimiento del yacimiento de Loma La Lata, dentro de la formación geológica Vaca Muerta en los años 1970, la provincia pasará a ser la principal productora de gas⁷. Así, la industria petrolera y gasífera cobra un lugar central en la economía provincial y en la matriz energética nacional que, a partir de la reestructuración del sistema energético de los años 1990, pasará a ser intensiva en gas natural.

El rol socioeconómico de YPF, que había adquirido un capital simbólico en el imaginario colectivo⁸, comenzará a erosionarse durante el proceso de la dictadura cívico-militar, con las denominadas privatizaciones periféricas (Basualdo y Barrera, 2015), que implicaron relaciones preferenciales entre determinados grupos económicos y ciertos agentes estatales, constituyendo ámbitos privilegiados de acumulación (Castellani y Serrani, 2010). Con las reformas estructurales de los años 1990, se implementaron una serie de políticas estatales de desregulación de la

⁶ El camino hacia la creación de la primera empresa petrolera estatal de Latinoamérica, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), se consolidará en 1922, y hasta 1930, el coronel Mosconi conducirá la empresa, con un ambicioso plan para incrementar la producción de la empresa estatal, hacerla crecer “aguas abajo” a partir de la compra de las Estaciones de Servicios y la construcción de Refinerías, y mejorar las condiciones de vida de los obreros petroleros (Solberg, 1986).

⁷ El yacimiento convertiría a la provincia en la principal productora de gas del país, con una participación que osciló en torno al 50% hasta la actualidad. Datos extraídos del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, <http://www.energia.gob.ar>, con fecha 15 de enero de 2018.

⁸ La historia de YPF, que fue el modelo que adoptaron otras petroleras estatales en Sudamérica, desde su creación en 1922 hasta su privatización en la década de los noventa estuvo fuertemente asociada a ideales de autodeterminación e industrialización (Observatorio Petrolero Sur y D’Elia, 2014).

actividad petrolera (Kozulj y Bravo, 1993)⁹, mientras que a la par se fragmentó, redujo y privatizó de forma gradual YPF, hasta que en 1999 pasaría de forma definitiva a manos de la Corporación Repsol.

La privatización de YPF, que se tradujo en la desaparición de las economías regionales, pymes y minifundios, en gran medida ligados a la empresa estatal, también generó transformaciones profundas en la territorialidad. En particular, la provincia de Neuquén será cuna de los primeros movimientos piqueteros de trabajadores petroleros excluidos, y la evidencia misma de la desregulación abrupta de un sector, en el marco de un régimen macroeconómico neoliberal¹⁰. La privatización generó la creación de un conjunto de empresas locales (spin off), directamente vinculadas a REPSOL-YPF como proveedores de servicios. Estas se verían fuertemente afectadas al final del período de Convertibilidad, y muchas desaparecerían para el comienzo de la década del 2000 (Landriscini y Carignano, 2015).

Con la salida del régimen de Convertibilidad, el Estado comenzó a regular el sector petrolero mediante la aplicación de retenciones a las exportaciones y acuerdos de precios para evitar trasladar el costo de la fuerte devaluación del año 2002 a los sectores manufactureros y hogares. Esto contribuyó a que la economía se recupere a tasas elevadas a partir del 2003, pero sin un acompañamiento de la producción de petróleo, que mantendrá una tendencia declinante, a la cual se sumaría la producción de gas en 2004¹¹. El gobierno intentó frenar esta situación con la aplicación de diversos programas y planes de incentivos a empresas del sector, para estimular la actividad privada¹², así como la creación de ENARSA -Energía Argentina S.A.- en el año 2004, que sin embargo no lograron evitar la “crisis energética”. En este sentido, la caída en la extracción de petróleo y gas, que afectó al conjunto de territorios petroleros del país, tuvo un impacto significativo en las cuentas públicas de

⁹ Entre 1989-1990, se sancionaron cuatro decretos clave (1.055/89, 1.212/89, 1.589/89 y 2.778/90) que desregularon y liberalizaron este mercado (en términos de precios, exportaciones e importaciones, aranceles y divisas).

¹⁰ El modelo de la convertibilidad (1989-2001) dio lugar a un proceso de extranjerización del sector, con el arribo de empresas multinacionales petroleras, que consolidó la “comoditización” de los hidrocarburos (su mercantilización para la exportación), mediante una lógica cortoplacista y predatoria de subexploración del territorio y sobreexplotación de los yacimientos (Barrera, 2013).

¹¹ La producción de petróleo alcanzó un pico histórico de 1998, al momento en que se concretaba la privatización total de YPF, y a partir de entonces se contrajo sistemáticamente, mientras que la extracción de gas registró la misma tendencia a partir del 2004. Específicamente, la producción de petróleo pasó de 49.152 miles m³ en 1998 a 33.199 miles m³ en 2012 (una contracción de 32,4%), mientras que la producción de gas se contrajo de 52.385 millones m³ en 2004 a 44.124 millones m³ en 2012. Datos consultados en <http://www.iapg.org.ar/estadisticasnew/>, con fecha 29 de septiembre 2016.

¹² A partir del año 2008 se llevaron adelante los programas Gas Plus, Petróleo Plus y Refinación Plus, que implicaban incentivos a inversiones en exploración y explotación en nuevos yacimientos, incorporación de tecnología, etc. Por otra parte, se puso en práctica el programa Energía Total para subsidiar la sustitución de energía, especialmente gas, por combustibles líquidos, con mecanismos de compensación monetaria por la diferencia desde el Estado (Sabbatella, 2012).

Neuquén¹³, donde YPF - controlada por Repsol hasta 2012- era la principal operadora. Como afirma Giuliani et al. (2016) estas circunstancias ocasionaron serias dificultades para cumplir con los compromisos del Estado (en especial los relativos a la masa salarial correspondiente al empleo público) y elevaron significativamente el endeudamiento público provincial, que se ha convertido en otra de las variables inherentes a un modelo cada vez más dependientes del desarrollo de la industria de hidrocarburos.

Ante la falta de respuesta en materia de inversión por parte de la mayor empresa petrolera REPSOL-YPF,¹⁴ en mayo de 2012 el Estado Nacional impulsó la expropiación del 51% del paquete accionario de la empresa, pasando a manos de los Estados nacional y provinciales, mediante la ley 26.741 que declaró de “interés público nacional” el logro del autoabastecimiento hidrocarburífero. A pesar de que esto implicaba la dirección estratégica del Estado sobre la empresa, se sostenía su carácter de sociedad anónima y seguiría funcionando de acuerdo con la ley de sociedad privada. Este esquema mixto, se alejaba del neoliberal imperante desde 1989¹⁵, pero tampoco implicaba un retorno a la Sociedad del Estado que la caracterizó durante gran parte del siglo XX (Sabbatella, 2012). El Estado recuperaba su rol planificador del sector, con el objetivo prioritario del abastecimiento interno, con la creación de un Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas para efectivizar todo lo estipulado en la ley, y una Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica de ese Plan (Sabbatella, 2012).

Con la renacionalización de la empresa se presentó el Plan Estratégico de YPF 2013-2017, que tenía como objetivo final lograr que Vaca Muerta fuera el primer desarrollo masivo de Hidrocarburos No Convencionales por fuera de EE. UU¹⁶, para convertir a Argentina en exportador neto de energía (YPF, 2012)¹⁷. Luego de la sanción de la Ley N° 27.007, a fines de 2014, que regula las formas de operar los No Convencionales, YPF comenzó a buscar asociaciones con grandes firmas nacionales e internacionales (Pluspetrol, Pampa Energía, Chevron, Dow Chemical, Petronas, entre otras) para adquirir más rápidamente la tecnología en no convencionales, disminuir

¹³ Las regalías provinciales pasaron de representar el 46% de los ingresos corrientes en 2007 a menos del 25% en la actualidad (Giuliani, Fernández, Hollmann, y Ricotta, 2016).

¹⁴ El Estado intentó frenar la tendencia declinante de la producción de petróleo y gas con un primer intento de “argentinización” de YPF, alentando la entrada de capitales nacionales a la empresa a través del grupo Petersen (familia Eskenazi) en el año 2008, el cual llegó a alcanzar el 25% de su capital accionario. Sin embargo, esta medida fracasaría, al acoplarse a las prácticas igualmente predatorias y cortoplacistas, a la par que se agudizaba la estrategia de Repsol de fuga de utilidades al exterior y desinversión programada en el mercado local (Serrani, 2013).

¹⁵ La instrumentación de la Ley de “Soberanía hidrocarburífera” “derogaba explícitamente elementos fundamentales del paradigma neoliberal impuesto en 1989-1990 como la libre disponibilidad de los recursos extraídos, la libertad de precios y la libre exportación e importación.

¹⁶ En muy poco tiempo, la principal economía del mundo logró incrementar exponencialmente la producción interna de hidrocarburos, especialmente de gas, a partir de la explotación masiva de yacimientos de tight y shale. Esto contribuyó a que las importaciones netas de energía se redujeran de un 30% del consumo total de energía en 2005 al 13% en 2013 (EIA, 2015, pp. 17).

¹⁷ Este plan contaba con tres etapas. La primera, de “Alto Impacto” (2012-2013), para revertir la tendencia negativa en los niveles de extracción. La segunda, sería de “Crecimiento”, y posteriormente, el llamado “Nuevo Paradigma”, que apuntaba al desarrollo masivo de no convencionales.

los plazos de aprendizaje y conseguir la financiación que el país no podía proveer (Sapag, 2015). De la formación geológica Vaca Muerta, que se extiende en un área de más de 30.000 km², YPF posee concesiones que significan una participación de 12.000 km² (40% del total), de las cuales un 77% tendría petróleo y el resto se repartiría entre gas húmedo y gas seco (Giuliani et al., 2016).

EL traspaso del mando de la empresa, de manos privadas extranjeras a directores estatales con una gerencia técnica de experiencia internacional, marcó un punto de inflexión en la gestión de la empresa, su política de inversión y producción. La reinversión de las ganancias y utilidades de la empresa se vieron plasmadas en una expansión de la inversión total en explotación de un 40% interanual en 2014 y un 5% en 2015, a pesar de la caída del precio internacional del barril de petróleo en ese año¹⁸. En particular, las inversiones en explotación no convencional, concentradas en la zona de Vaca Muerta, crecieron a una tasa mayor en igual período (70% en 2014 y 12% en 2015), alcanzando los 2.190,68 millones de dólares corrientes en 2015, lo cual representaba un 44% de la inversión total de explotación (U\$S 4.992,336 millones)¹⁹.

La empresa se enfocó en aumentar la productividad de sus pozos convencionales en todo el país con sus recursos, mediante recuperación mejorada y otras técnicas, para poder direccionar el capital financiero de las alianzas con EMN (como Chevrón y Dow) y la colocación de deuda en el extranjero, a la formación geológica Vaca Muerta. Con el cambio de gobierno, en 2016 se frena el proceso de fuerte expansión y se opta por una estrategia más conservadora, en línea con un perfil de una Corporación que participa del mercado financiero internacional, y comienza un sendero de reorientación hacia una empresa energética diversificada, que avanza en nuevos campos de aplicación como, por ejemplo, el desarrollo de baterías de Litio.

No obstante, el crecimiento inicial en la inversión en explotación y exploración se vio reflejado en un incremento significativo de la producción de petróleo y gas en los principales yacimientos no convencionales. En el primer caso, la producción de petróleo dentro de la concesión Loma Campana (epicentro de los no convencionales), pasó de no producir nada a alcanzar los 1.588.662 de m³ en 2016, representando un 24% de la producción de la Cuenca Neuquina y casi un 12% de toda la producción de crudo de YPF. Por su parte, la producción de gas en las concesiones Loma Campana y El Orejano (los dos principales yacimientos de gas no convencional) alcanzó 1.434.435 Mm³, que implica un 10,3% de la producción de gas en la Cuenca Neuquina y un 9,3% del total producido por YPF²⁰.

Innovación y cambio-tecnológico

¹⁸ Esta tendencia se revierte en 2016, con una caída de 34% en la inversión en explotación.

¹⁹ Información elaborada en función de los datos propiciados por las Declaraciones Juradas de la empresa. Extraídos del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, <http://www.energia.gob.ar>, con fecha 1 de octubre de 2017.

²⁰ La Cuenca Neuquina representa más del 90% de la producción de gas de YPF, lo cual explica la similitud de los guarismos entre la Cuenca y el total de YPF. Los datos mencionados surgen de estimaciones propias en base a datos consultados en el Ministerio de Energía y Minería, <http://www.energia.gob.ar/home/hidrocarburos.php>.

El desarrollo de los HNC marca un quiebre con la producción convencional, donde la distinción entre recursos y reservas por un lado y entre distinto tipo de reservas por el otro es una práctica relativamente probada. En el caso de los HNC resta mucho por descubrir e investigar de modo de poder identificar la dimensión efectiva de las reservas dentro de los recursos disponibles. En este sentido, las mayores innovaciones se han concentrado en las actividades “aguas arriba” (o lo que se denomina *upstream*)²¹, que son las que conllevan mayor riesgo, especialmente en la fase de exploración, y también las más intensivas en capital (Aggio, Lengyel, Milesi y Pandolfo, 2017). Estas se centran en innovaciones en la ingeniería de perforación, lo que demanda investigación aplicada y desarrollos para la adaptación de las nuevas tecnologías de fractura a las características específicas del lugar (Landriscini y Carignano, 2015). Un ejemplo de esto es la sustitución de cerca del 90% de las arenas cerámicas utilizadas en la fracturación hidráulica,²² provenientes de Brasil, China y Estados Unidos, por arenas extraídas de las provincias de Chubut y Entre Ríos, que son procesadas en una planta de arena en Añelo. Este desarrollo además de implicar una innovación que redujo sensiblemente los costos del insumo, contribuyó a sustituir importaciones y desarrollar proveedores locales. En este sentido, en la Cuenca Neuquina comenzaron a configurarse redes y ejecutar múltiples proyectos de diversa envergadura para la exploración y evaluación del potencial productivo de la formación Vaca Muerta (Landriscini y Carignano, 2015), con lo cual gran parte del proceso de innovación que lleva adelante YPF junto con las empresas proveedoras de servicios asociadas y los institutos de Ciencia y Tecnología (CyT) vinculados, tienen un anclaje territorial.

Para la extracción de HNC se implementa la fractura hidráulica o fracking,²³ técnica que se utiliza desde hace aproximadamente 60 años en la industria petrolera mundial, aunque hasta hace dos décadas sólo era utilizada en yacimientos petrolíferos denominados convencionales (Rahm, 2011), para incrementar el rendimiento de aquellos pozos que se encontraban en la fase descendente de su producción²⁴. Esta técnica se ha combinado con la tecnología para perforar pozos horizontales y diagonales, diseños de perforación *multipad* (varios pozos en la misma locación) con equipos de perforación móviles, pozos geo-referenciados y otros desarrollos tecnológicos, que permiten optimizar la extracción de reservorios que son intrínsecamente más costosos²⁵ y menos productivos que los pozos tradicionales,

²¹ El upstream consiste en las actividades de exploración y producción (EyP). La primera incluye los estudios geológicos que se realizan para definir potenciales acumulaciones de hidrocarburos, mientras que la segunda comprende las actividades de explotación (perforación y producción) para extraer el hidrocarburo en caso de que los estudios geológicos hayan indicado su presencia.

²² Este es un componente básico que, junto con el agua y otros gélicos, forman la mezcla que es inyectada en el proceso de fracturación hidráulica de las rocas.

²³ El fracking no es la perforación del pozo per se (que se debe hacer igual que en el caso de los convencionales), sino el proceso de fractura de la roca madre mediante el poder de los fluidos para liberar los hidrocarburos (Holloway y Rudd, 2013).

²⁴ En el mismo sentido, los Hidrocarburos No Convencionales también son conocidos desde hace mucho tiempo.

²⁵ Cabe destacar que los costos por barril utilizando las técnicas no convencionales se han reducido en los últimos años incentivando un aumento en la producción en distintas zonas de Estados Unidos.

dada su baja permeabilidad y porosidad de la roca. La estrategia para convertir los exigüos márgenes de ganancias de los pozos no convencionales en retornos aceptables que permitan recuperar el capital invertido se basa en una fuerte inversión inicial para ganar escala mediante la explotación masiva.

Esto no sólo implica un esfuerzo de capital inicial mayor que la industria tradicional, sino que también amplía el horizonte productivo (para recuperar la inversión), y necesita la permanente incorporación de mejoras de procesos y tecnología para reducir costos. En términos de procesos, se pasa de la extracción convencional, con una planificación sujeta a la variabilidad del precio del petróleo, a un modo de producción tipo *factoría*, donde la planificación estratégica, la estandarización del equipamiento y la permanente optimización de los procesos²⁶ para bajar los costos, marcan el avance de la actividad. Por otro lado, la Unidad de No Convencionales de YPF cuenta con tecnología de punta para el sector, la automatización de procesos y la operación y monitoreo a distancia de lo que ocurre en todos los pozos en tiempo real, desde un centro de Control en Añelo,²⁷ y está desarrollando nuevas tecnologías en función de las demandas de la industria²⁸.

Las capacidades que rápidamente acumuló la empresa, mediante el apoyo y la interacción con CONICET, Universidades y empresas locales, conforman un espacio de innovación endógeno que podría posicionarse a escala global, tal como describe uno de los referentes del área de No Convencionales, “lo bueno es que acá estamos probando algunas cosas que las contratistas o las empresas estas que fabrican tecnología como Schlumberger o Halliburton deciden por primera vez probarla en Vaca Muerta”.

Empresa Red en el territorio

El desarrollo de los HNC requiere enormes sumas de capital financiero, desarrollo tecnológico y *know-how*, que no posee YPF S.A. En este sentido, para acceder a financiamiento de capital la empresa conformó alianzas con otros *players*

Una parte importante de la producción estadounidense (cerca al 50%) ya es viable entre 50 y 60 dólares. Consultado en <http://www.aem-energy.org/razones-de-la-caida-de-los-precios-del-petroleo/>, con fecha 20 de mayo de 2016.

²⁶ Uno de los referentes de la Regional No convencional de la empresa ilustra esto, explicando que “es como la época de Henry Ford esto, todo se mide”.

²⁷ En este sentido, dentro de la teoría de la innovación en los últimos años ha crecido la idea de que las industrias basadas en recursos naturales (NR), junto con las industrias de procesamiento, pueden proporcionar espacios o ventanas de oportunidad para la innovación, que servirían de plataforma para estrategias de desarrollo (Perez, 2010; Dantas, Marin, Figueiredo, Bravo-Ortega, 2013). En el caso de la extracción de hidrocarburos, un ejemplo renombrado es el de las reservas de petróleo en aguas profundas, en la capa Pre-Sal en Brasil, exploradas y explotadas por Petrobras (Perez, Marin y Navas-Aleman, 2014). Las complejidades de su explotación demandaron aumentar la innovación tecnológica y la acumulación concomitante de capacidades para innovar en torno a estos recursos, teniendo en cuenta la necesidad de adaptación de tecnologías a las especificidades locales, la demanda de maquinaria y tecnologías de la información, infraestructura y logística, y el encadenamiento aguas abajo.

²⁸ Un ejemplo, es el desarrollo conjunto con Y-TEC de una aplicación para celular para que los geólogos e ingenieros de la compañía puedan monitorear y hacer un seguimiento de la trayectoria de perforación de los pozos, en particular, los horizontales que requieren un seguimiento más preciso.

internacionales con capital financiero, como Chevron y Dow, para realizar proyectos de exploración. Además, las potencialidades de Vaca Muerta permitieron a la empresa apalancarse en el mercado de capitales internacional, mediante la colocación de Obligaciones Negociables (principalmente, en la bolsa de Nueva York). Para acceder a la tecnología y *know-how*, selló alianzas estratégicas con empresas como Schlumberger, Petronas y StatOil, que poseen el expertise en no convencional o la capacidad tecnológica para desarrollarlo.

Esto permitió a la empresa optimizar sus procesos productivos y de gestión, subcontratando aquellas actividades que no están en su núcleo de activos estratégicos, y profundizando en la generación de capacidades en torno al proceso de exploración y explotación no convencional, a partir de una mayor colaboración tecnológica con otras empresas y Centros de I+D especializados, dada la creciente complejidad de la base tecnológica y de conocimiento. En la etapa de *upstream* la tercerización de actividades del proceso productivo en diversas empresas proveedoras que funcionan como prestadoras de equipamientos y servicios es prácticamente absoluta²⁹. La aparición de nuevos jugadores como prestadores de servicios especializados y de tecnología, en respuesta a las particularidades del proceso de fracturación múltiple, modificaron las relaciones inter-empresariales e institucionales (Landriscini y Carignano, 2015).

Hubo una reconfiguración de los proveedores de YPF, y una mayor interconexión en red, con el objetivo de trabajar de forma más estrecha con sus proveedores, impulsando un proceso de catch-up tecnológico y de procesos (en programas de recuperación de pozos maduros, y en la exploración y desarrollo en yacimientos no convencionales), mediante programas de capacitación en cogestión con otros organismos como INTI y CONICET³⁰. Sin embargo, como afirman Lavarello y Sarabia (2017) las diferencias de criterios entre quienes decidían las contrataciones a nivel de gerencia productiva general y los usuarios técnicos finales, y el escaso interés de YPF por desarrollar proveedores, continuaron favoreciendo la importación de equipamiento y tecnologías. De este modo, la tecnología núcleo y el know-how para la fracturación hidráulica continúa siendo suministrada por grandes empresas contratistas extranjeras, con los cuales las redes de proveedores locales no pueden competir o integrarse a través de un proceso de upgrading *funcional* y/o, como proveedores tecnológicos locales especializados. Incluso las fuertes asimetrías entre actores locales y globales pueden implicar una limitación a la interacción y la acumulación de capacidades externas a la firma. En este sentido, la vinculación de las

²⁹ Operaciones complejas como perforación, cementación, construcción de las instalaciones de superficie, terminación, mantenimiento o aumento de producción, son realizadas prácticamente en su totalidad por empresas prestadoras de servicios con equipamientos específicos propios.

³⁰ Un caso particular es el Programa Sustenta que tiene como objetivo impulsar el crecimiento de proveedores regionales de productos y servicios de la empresa. Este Programa estuvo destinado en la mayoría de los casos a proveedores de capital nacional, mayormente PyMEs familiares, con extensas trayectorias en el rubro, a raíz del despliegue territorial y social que tuvo YPF en gran parte del siglo XX. Sin embargo los recursos asignados al Programa no fueron particularmente significativo en relación con los gastos totales de la empresa -US\$ 50 millones frente a 2.800 de inversión total promedio anual entre 2012 y 2014-, que se canalizaron a través de grandes contratistas globales, quienes cuentan con las tecnologías necesarias para estos desarrollos (Lavarello y Saravia, 2017).

empresas locales con grandes empresas petroleras puede ser una forma de innovar, ante la falta de habilidades y capacidades para operar en un contexto de transacciones codificadas, pero también puede significar un proceso de *lock-in* difícil de revertir, que condiciona el sendero de desarrollo de las empresas locales.

Para realizar investigaciones que permitan generar innovaciones en torno a los no convencionales, la empresa trazó una alianza estratégica con organismos públicos de ciencia y tecnología involucrando investigadores de otras partes del país. Específicamente, la empresa creó junto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el CONICET el emprendimiento YPF Tecnologías (Y-TEC), en donde YPF tiene el 51% de participación y el CONICET el restante 49%. Su finalidad es realizar investigaciones que aporten desarrollos tecnológicos, conocimientos, bienes y servicios para la explotación de hidrocarburos no convencionales, el desarrollo de tecnologías para energías renovables, biotecnología industrial, tecnología para el sector agrícola, desarrollo de materiales y bioenergía. Se trata del centro de investigación aplicada más grande de la Argentina, con una superficie de más de 13.000 m², 47 laboratorios y 12 plantas piloto³¹.

Las transformaciones en la esfera productiva y tecnológica también fueron acompañadas por cambios significativos en términos organizacionales y de Recursos Humanos. La complejidad creciente del proceso de estimulación hidráulica y fracturación ha demandado un mayor trabajo interdisciplinario, con la incorporación de profesionales de diversas áreas. En particular, surgieron nuevas especialidades dentro de la geología y la ingeniería, como son la geomecánica y la ingeniería de estimulación, que pasaron a desarrollarse internamente y forman parte del *know-how* estratégico de la empresa.

El área de no convencional incrementó la demanda de trabajo altamente calificado en operaciones centrales y de menor calificación en tareas periféricas (Landriscini y Carignano, 2015). Con más de 400 empleados en la Gerencia Regional de No Convencional, cerca del 60% del personal tiene menos de 34 años y son en su gran mayoría ingenieros, geólogos y geofísicos, que se han especializado y capacitado dentro del no convencional. De acuerdo con un entrevistado del área No Convencional, “el principal activo que tiene hoy YPF es el equipo de profesionales de No Convencional”. Trabajan muy vinculados con investigadores de Y-Tec y otros Centros de Investigación y Tecnología especializados, provenientes de diferentes disciplinas (matemáticos, físicos, Ingenieros en Informática y otros). Como contraparte, la automatización de procesos, y el monitoreo y control centralizado de los pozos no convencionales, ha reducido la cantidad de trabajadores necesarios y ciertas tareas propias de la actividad convencional.³²

Conflictos en el territorio

³¹ Información extraída de la página web de Y-TEC, <https://y-tec.com.ar/Paginas/Nuestra-historia.aspx>, con fecha 13 de noviembre de 2017.

³² Por ejemplo, una tarea que se suprimió es la del control de los pozos de forma diaria, que es realizada por un recorridor de las empresas de servicios en los Convencionales. Con el monitoreo permanente de lo que ocurre en los pozos, se puede detectar el pozo que tiene problemas y enviar al recorridor directamente.

En esta sección se presentan los principales conflictos que caracterizan la territorialidad neuquina e interpelan, directa o indirectamente, a YPF en el territorio. Los conflictos se ordenaron en función de una tipología inspirada en las categorías de análisis utilizadas en la investigación coordinada por Calderón (2012b). Siguiendo dicho trabajo, se toman como variables centrales la *intensidad del conflicto* y la *capacidad de procesamiento del conflicto* tanto de la empresa como de los otros actores involucrados. La primera variable en este trabajo refleja el grado de malestar que generan los distintos contextos, y la capacidad de respuesta mediante la acción colectiva del actor. En relación con la capacidad de procesamiento de conflictos, está dada tanto por las capacidades institucionales y estaduales para gestionar el conflicto como por la forma en la que la empresa tiende a abordarlo. Dentro de cada categoría se optó por una diferenciación binaria entre casos de baja o alta intensidad, y aquellos con baja o alta capacidad de procesamiento de conflictos.

Cuadro 1

Matriz de interacción y conflictos principales con actores locales

	Capacidad de procesamiento	
Intensidad del conflicto	Baja	Alta
Bajo	Conflictos socio-urbanos No hay un actor definido, pero involucra a la sociedad civil y el Gobierno local	Distributivos Empresas Locales Gobierno provincial Sindicato de Petroleros Privado
Alto	Socioambientales Sindicato de Empleados Estatales Comunidades Mapuches Crianceros	Territoriales Sociedad Civil Comunidades Mapuches Crianceros

Fuente: Elaboración propia

Conflictos de baja intensidad y baja capacidad de procesamiento. Estos conflictos se asocian con el “mundo” de los trabajadores petroleros que históricamente se han conformado con una identidad de grupo construida en oposición al resto de la sociedad, de gran solidaridad y fuertemente homogénea. Dicha solidaridad de grupo se exterioriza con los sindicatos, que organizan gran parte de los espacios de las comunidades locales, haciendo de la cultura petrolera una parte relevante de la identidad territorial. Estos rasgos culturales se perciben de forma dialéctica por el resto de la sociedad civil que no se ve directamente involucrada con el sector. Por un lado, el trabajador petrolero produce cierto malestar y rechazo en el imaginario colectivo, asociado al crecimiento de la prostitución, el narcotráfico, el machismo y el

incremento del costo de vida.³³ Por otra parte, la actividad petrolera contribuye al proceso de diferenciación social a través de la expansión del consumo masivo, generando cierta distinción en los trabajadores petroleros que acceden a salarios muy superiores al promedio del lugar, y un sentimiento aspiracional, especialmente en los jóvenes. Estos problemas que afectan al trabajador petrolero y se hacen presente en los espacios de trabajo, involucran principalmente a las empresas prestadoras de servicios que son las que generan la mayor demanda directa de mano de obra, y no a la esfera de YPF y, por lo tanto, su capacidad de acción.

Conflictos de bajo intensidad y alta capacidad de procesamiento. En este grupo se incluyen los conflictos clásicos por la distribución del ingreso o renta petrolera entre la empresa, las empresas locales, los trabajadores y el Estado provincial. El sector se caracteriza por sindicatos fuertes que disputan parte del excedente petrolero de la empresa; sin embargo, esta disputa por la renta suele ser negociada y procíclica. En este sentido, para impulsar el desarrollo de los HNC se acordó un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) con las empresas y el Sindicato de Petroleros Privados local, que reduce los costos laborales de las empresas y flexibiliza las condiciones laborales de los trabajadores petroleros³⁴. Por otra parte, el Estado Provincial a través de su empresa, GyP S.A., también busca apropiarse de una parte de la renta petrolera, mediante el sistema de *carry* o *acarreo*³⁵. Este sistema es cuestionado por YPF, que considera que desincentiva la inversión, en particular, la extranjera. Sin embargo, ambos procesos se dan en el marco de negociaciones fluidas e institucionalizadas. En relación con las empresas prestadoras de servicios, en el caso de aquellas que son pequeñas suelen tener baja capacidad de negociación de los contratos, y deben absorber los aumentos salariales y de costos. Sin embargo, con el desarrollo no convencional sucede que gran parte de la tecnología, insumos y servicios de explotación es provista por un puñado de grandes EMN que tienen alto

³³ Los elevados salarios en relación con el promedio local y la migración de trabajadores que genera el sector petrolero se traducen en escases de viviendas, aumentos de alquileres y bienes y servicios que afectan a toda la población.

³⁴ Dentro de las modificaciones que reducen el costo laboral se destaca la jubilación de todo el personal que esté en condiciones de jubilarse, los controles de ausentismo, el personal de operaciones especiales afectado a tareas operativas de campo realizará un diagrama de “2x1” (es decir dos días de trabajo por uno de descanso) en vez de “1x1”. En relación a las condiciones de trabajo, los trabajadores excedentes de los distintos servicios podrán ser reubicados en tareas diferentes a las que venían realizando, trabajaran con viento (dependiendo de las condiciones operativas del pozo), siendo el Company Man y el jefe de equipo los únicos responsables que cuentan con la autoridad para tomar la decisión de detener el equipo, tanto el montaje como el desmontaje de los equipos se podrá realizar en horarios nocturnos (que no se podía hacer), los equipos de torre o las cuadrillas de producción o mantenimiento deberán continuar operando aun cuando falte algún integrante (siempre que la operación y las cuestiones técnicas de seguridad estén garantizadas). Información consultada en <http://www.diariamenteneuquen.com.ar/V3.0/2016/10/20/firmaron-las-nuevas-reglas-laborales-para-los-petroleros/>.

³⁵ El sistema se denomina así porque la firma provincial se sube al contrato de concesión petrolera con el socio privado, haciéndose de una parte de las ganancias futuras, sin aportar capital para la inversión inicial. Desde la empresa se cuestiona la postura de la empresa provincial, que sólo concesiona la explotación a otras empresas para obtener una renta y disputa la renta con otras empresas privadas, incluida YPF S.A.

poder de negociación para fijar precios no competitivos (por encima del costo). Esto ha sido otro incentivo para YPF para desarrollar tecnología propia y sustituir ciertos insumos estratégicos, como las arenas importadas.

Conflictos de alto intensidad y baja capacidad de procesamiento. Este grupo está compuesto por conflictos socioambientales, centrados en zonas rurales, y vinculados directamente con la contaminación de napas subterráneas, el uso intensivo del agua, la erosión del suelo y el deterioro de la flora y fauna local. En esta zona, de histórica producción ganadera, agrícola y frutícola, las empresas petroleras mantienen conflictos con los crianceros y las comunidades mapuches.

Los crianceros de Añelo se ubican en las zonas áridas de la meseta y son pequeños productores de varias generaciones en el lugar, que se dedican principalmente a la cría extensiva de animales. Son un actor esencialmente atomizado, con baja comunicación y organización entre sus miembros, en gran medida afectados por el aislamiento geográfico. En general, demandan agua, resarcimiento económico y compensación por el deterioro de sus condiciones de vida y de reproducción simple, debido principalmente a la erosión de los campos, por el aumento del tráfico de camionetas y camiones, y la creación de picadas, que impacta en la siembra y el ganado (mayormente caprino), forzando el encierro de los animales y su alimentación a base de forraje. Gran parte de ellos se denominan *fiscaleros*, porque poseen la tierra para trabajar, pero no tienen el título de propiedad, lo cual los deja en una situación de vulnerabilidad para insistir en sus reclamos. En muchos casos reciben el apoyo externo de otros sectores sociales u organizaciones sindicales, como de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), o abogados y ONGs enfocadas en defender a los propietarios superficiarios, que compensan parcialmente la asimetría de fuerzas.

En cambio, las comunidades mapuches de la zona de Vaca Muerta³⁶ se caracterizan por ser un actor con mayor organización y autonomía en el territorio, que integra redes globales diversificadas con organizaciones ecologistas, ONGs y otros movimientos de pueblos originarios a escala continental e internacional, con mayor capacidad de acción y difusión de sus demandas. Además, poseen un conjunto de legislación y jurisprudencia que los respalda, otorgándole mayor capacidad de agencia (Calderón, 2012a)³⁷.

En este contexto, los conflictos con la empresa se dan en el territorio, generalmente zonas rurales. Son de alta intensidad y esporádica radicalización porque la mayoría de las veces derivan en cortes de ruta o de los accesos a los pozos de perforación, para forzar una respuesta de la empresa y el Estado provincial, además de instalar sus demandas en el espacio público. De manera frecuente, la respuesta del Estado se da a través de la intervención de las fuerzas de seguridad,

³⁶ Las principales comunidades afectadas por la actividad No convencional en la zona y con mayor participación en las disputas territoriales son Paynemil, Kaxipayiñ y, más recientemente, la Comunidad Campo Maripe.

³⁷ Al respecto se destacan el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la reforma de la Constitución que se hizo en 1994 en Argentina, la Constitución de la provincia del 2006, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada en el 2007 y jurisprudencia de la Comisión Interamericana de DD.HH.

para destrabar las protestas, y la judicialización de los conflictos. En particular, YPF S.A. mantiene una estrategia de diálogo y rápida resolución de los conflictos, que suele ser más efectiva con los campesinos, en su mayoría fiscaleros. Las comunidades mapuches, en cambio, imponen mayores condiciones sobre la utilización del territorio y han realizado demandas de remediación ambiental que pasan a instancias judiciales. La baja capacidad de procesamiento de estos conflictos se correlaciona con falta de información sobre la problemática ambiental³⁸ y, un cuestionamiento a los reclamos ambientales de la comunidad mapuche, con origen en una dialéctica de la negación del otro (Calderón, Hopenhayn y Ottone, 1996), fundamentalmente, la cosmovisión mapuche.

Conflictos de alta intensidad y alta capacidad de procesamiento. Estos son los conflictos territoriales, que se entrecruzan con los socioambientales, y abarcan tanto zonas rurales como urbanas. Dentro de las zonas urbanas, la expansión de la actividad petrolera no convencional ha acentuado antiguas disputas territoriales y generado nuevas tensiones. La instalación de nuevos parques industriales y logísticos, de abastecimiento y servicios, y centros de transporte y administración, en parte incentivada por algunos municipios como en el caso de Añelo, han generado un rápido crecimiento demográfico por migraciones intra provinciales, interprovinciales e internacionales, que no fue acompañado por la infraestructura de servicios y vivienda necesarios. De este modo, el principal problema asociado a la actividad petrolera es el rápido incremento del precio de los inmuebles y el acceso a la tierra, que afecta tanto en la localidad de Añelo como la ciudad de Neuquén y toda la zona de Confluencia. Como menciona un entrevistado oriundo de Neuquén “en cualquier pequeño pueblo o ciudad, que vaya por esta zona vas a encontrar asentamientos de gente que necesita un pedazo de tierra y necesita quedarse, y se instala (...) No hay acceso a la tierra, básicamente, ni para los que vienen ni para los de acá. El acceso a la tierra es casi imposible, empuja a la gente indefectiblemente a las tomas”.

En las zonas áridas y de baja densidad poblacional cercanas a la cuenca del río Neuquén, las empresas petroleras tienen disputas por el usufructo de los espacios con dos actores específicos, los pobladores locales (*crianceros*) y los pueblos originarios. En este sentido, la actividad petrolera afecta sensiblemente el territorio, desplazando otras actividades productivas tradicionales, como la cría de animales, que representa el modo de reproducción social de los pobladores locales y comunidades mapuches. Los *crianceros*, gran parte de las veces sin un título de propiedad sobre la tierra, tienen una baja capacidad de agencia (negociar mejores condiciones ante las empresas petroleras). La población mapuche, en cambio, posee un mayor nivel de organización interna y externa (con redes globales) y resistencia,

³⁸ Al respecto, en la Universidad local hay un divorcio entre las ciencias sociales más “críticas” y las exactas “más utilitarias”, que en gran parte reciben apoyo financiero de las empresas petroleras y tienen una alianza de larga duración. Se plantean, por ejemplo, complejas superposiciones entre la actividad extractiva y la agricultura frutícola en relación con la contaminación del agua y las consecuencias sobre el medio ambiente, poniendo en discusión los beneficios del emprendimiento para la región.

con lo que ha logrado mejores condiciones de negociación con las empresas en términos de servidumbre y derechos por el uso de la tierra.

En este sentido, un fenómeno interesante es la re-identificación de aquellos crianceros que habitan la zona desde hace décadas con sus orígenes mapuches, que vuelven a reproducir la vida en comunidad y sus tradiciones. Esto responde en parte a un mecanismo de resiliencia de los pobladores, ante la escalada de conflictos con las empresas petroleras y el Estado provincial. Ante la falta de resolución de los conflictos y mecanismos de intermediación y diálogo, los pobladores se han organizado en comunidades y vinculado con ONG's internacionales, para obtener mejores condiciones de negociación y mecanismos de intermediación legal e institucional. De todos modos, la empresa tiene una alta capacidad de procesamiento del conflicto, habiendo establecido distintos acuerdos con la mayoría de las comunidades locales y crianceros en función de las diferentes demandas de resarcimiento por la explotación de los recursos debajo de la tierra.

Conclusiones

En el presente trabajo se realiza una caracterización del *extractivismo informacional* en los HNC y su territorialidad, a partir del estudio de caso de la empresa YPF S.A. El trabajo analiza las transformaciones tecno-informacionales hacia adentro de la empresa y, hacia afuera, las relaciones y tensiones en torno a la empresa en el territorio. De este análisis se desprenden tres rasgos sobre la dinámica productiva y territorial de la actividad no convencional.

En primer lugar, la conformación de un territorio informacional globalizado. La viabilidad productiva de Vaca Muerta depende de una base tecnológica compleja (digitalización de la información, uso de nuevas tecnologías de la información y automatización de procesos) que avanza rápidamente y demanda permanente aprendizaje. A diferencia de la explotación convencional de hidrocarburos, la producción no convencional se estructura en modo *factoria*, con un monitoreo constante de lo que ocurre en el campo. Esto requiere una mayor cantidad de trabajadores altamente calificados y de diversas disciplinas, incluso nuevas especialidades, y un proceso de catch-up tecnológico de la red de empresas locales para acompañar el proceso productivo, y una mayor articulación en Red, con el apoyo de instituciones de CyT como, por ejemplo, la alianza estratégica con Y-TEC.

Por otra parte, la empresa, así como los actores del territorio se mueven en redes globales. El desarrollo de los no convencionales se sustenta en la vinculación con el capital financiero internacional, con empresas extranjeras prestadoras de servicios y mayor interacción con centros de CyT internacionales. De forma análoga, el resto de los actores del territorio utilizan las plataformas informacionales para vincularse globalmente. Tal es el caso de las comunidades mapuches y sus alianzas con otras comunidades de pueblos originarios (como el pueblo Kichwa de Sarayaku, Ecuador, o los Sioux en EE. UU.) y ONG's.

En segundo lugar, una creciente diferenciación social y conflictividad territorial. La actividad petrolera dinamiza la economía regional y genera fuertes movimientos migratorios, modificando zonas urbanas y rurales. El gobierno provincial y local no

poseen la capacidad de resiliencia necesaria para abordar los desequilibrios en el mercado laboral (disparidad salarial) e inmobiliario (dificultad en el acceso a la tierra, a vivienda y servicios públicos), así como las problemáticas sociales vinculadas al mundo petrolero, que se han acentuado en la ciudad de Neuquén y emergieron rápidamente en la comuna rural de Añelo.

A la creciente diferenciación social en las zonas urbanas se suman los conflictos territoriales y socioambiental que alimentan una frustración de expectativas sobre los impactos futuros de la actividad petrolera. En este contexto, los mapuches parecen ser un actor relevante de resistencia y cuestionamiento del modelo extractivista informacional, pero desconectado de otros actores que presentan demandas similares³⁹.

En tercer lugar, polarización de visiones del desarrollo en el territorio. La explotación de HNC exalta la perspectiva binaria del desarrollo, basada en la dialéctica de la negación de las visiones alternas sobre el territorio y sus significados. Es decir, se acentúan las visiones y discursos de aquellos que cuestionan y se oponen radicalmente a la lógica extractiva y, del otro lado, de aquellos que lo consideran como el modelo de desarrollo sostenible a largo plazo. Las discusiones públicas permanentemente se centran en “el riesgo” de la actividad, si es calculable y, por ende, cuál es el costo real de esta actividad, pero no hay información certera y muchas veces es ambigua sobre el impacto socioambiental⁴⁰. En este sentido, no se han generado espacios de diálogo y canales de comunicación desde las instituciones públicas, en gran medida producto de una negación del otro y sus demandas⁴¹.

A grandes rasgos, se verifica un cambio acelerado de la dinámica informacional local asociada a una globalización de los procesos productivos y los conflictos en torno a los impactos territoriales y ambientales de la actividad, que sobrepasa los tiempos de las instituciones y la gestión política. En este marco, se estaría gestando un nuevo campo de historicidad en función de una alianza de YPF con la red de empresas locales, la elite política hegemónica y empresas multinacionales, conformando un bloque histórico nacional, regional y global, en función de un extractivismo petrolero informacional. Por otro lado, el proceso de territorialización es cuestionado y resistido principalmente por dos actores que ostentan cierta capacidad de agencia: un movimiento mapuche ecologista, con redes informacionales globales, y una fracción significativa del sindicalismo estatal, con capacidad de movilización social.

³⁹ Cabe mencionar que una fracción de las comunidades logró visibilizar sus reclamos en gran medida debido a su acercamiento con otros actores en la conformación de la *Mutisectorial contra el Fracking* (integrado por estudiantes, la asamblea por el agua (APCA) y los obreros de Zanon, y otros), en las protestas contra el acuerdo de YPF S.A. y Chevron en el año 2013.

⁴⁰ Por un lado, la gente de la CTA y las comunidades informan sobre los diferentes focos de contaminación petrolera y, por otro lado, representantes de las empresas y fracciones dentro de la Universidad afirman que no hay contaminación de aguas superficiales y, probablemente, tampoco de napas.

⁴¹ De hecho, la creación del Grupo de Dialogo Neuquino (GDN), donde se han reunido múltiples actores que discuten los problemas territoriales, surge de una necesidad de participación en la política pública por parte de la sociedad.

En particular, los cambios demográficos acelerados, la conflictividad social y disputas territoriales asociadas a la expansión de la actividad extractiva, inciden directamente sobre la agenda de políticas públicas provinciales. En particular, en el marco de una política de liberalización del mercado de hidrocarburos, y la reactivación más violenta de los conflictos territoriales y ambientales durante el 2017. La incertidumbre sobre la evolución del desarrollo territorial demanda reforzar los canales de diálogo entre los actores involucrados y espacios de intermediación. Además, la capacidad de resiliencia de la provincia dependerá en gran medida de la forma en que se aproveche la ventana de oportunidad que abre la extracción de HNC, y el procesamiento de los conflictos.

En este sentido, el desarrollo de políticas industriales activas contribuiría a la generación de capacidades tecnológicas locales, el impulso de proveedores especializados, y la red de conocimiento local. Por otra parte, una mayor planificación urbanística y rural, en base a la construcción de viviendas y el control del mercado inmobiliario, favorecería el procesamiento de conflictos. Asimismo, la generación de información confiable y certera sobre la contaminación permitiría impulsar programas de remediación ambiental y territorial, en cooperación con el Estado nacional y las empresas petroleras.

Bibliografía

- Aggio, C.; Lengyel, M., et al. (2017), *Desafíos y oportunidades de innovación en la producción de Petróleo y Gas No Convencionales en la Argentina*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación, Documento de Trabajo N° 10.
- Anlló, G. y Ramos, A. (2008), *Innovación, estrategias empresariales y oportunidades productivas de las firmas extranjeras en Brasil y Argentina*, Santiago de Chile, Serie Documento de Proyecto CEPAL.
- Barrera, M. (2013), "Beneficios extraordinarios y renta petrolera en el mercado hidrocarburífero argentino", *Desarrollo Económico-Revista de Ciencias Sociales*, Buenos Aires, 53, 209/210, 169-194.
- Basualdo, E. y Barrera, M. (2015), "Las privatizaciones periféricas en la dictadura cívico-militar. El caso de YPF en la producción de petróleo", *Desarrollo Económico-Revista de Ciencias Sociales*, Buenos Aires, 55, 216, 279-304.
- Burchardt, H. J. y Dietz, K. (2014), "(Neo-)extractivism a new challenge for development theory from Latin America", *Third World Quarterly*, 35, 3, 468-486.
- Calderón, F., Hopenhayn, M. y Ottone, E. (1996), *Esa esquivada modernidad. Desarrollo, ciudadanía y cultura en América Latina y el Caribe*, Caracas, Nueva Sociedad.
- Calderón, F. (2012a), "Diez tesis sobre el conflicto social en América Latina", *Revista CEPAL*, 107, 7-30.
- Calderón, F. (Coord.) (2012b) *La protesta social en América Latina*, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, Vol. 1.
- Calderón, F. (2015), "Navegar contra el viento. O las perspectivas de América Latina en la era de la información", *Revista de Sociología*, 30, 11-29.

- Castellani, A. y Serrani, E. (2010), "La persistencia de los ámbitos privilegiados de acumulación en la economía argentina. El caso del mercado de hidrocarburos entre 1977 y 1999", *H-Industri@*, Buenos Aires, 4, 6, 1-31.
- Castells, M. (1996), *La Era de la Información. Economía, sociedad y cultura*, México, Siglo XXI, Vol. 1.
- Cimoli, M. y Rovira, S. (2008), "Elites and Structural Inertia in LatinAmerica: An Introductory Note on the Political Economy of Development", *Journal of Economic Issues*, 42, 2, 327-347.
- Chesnais, F y Simonetti, R. (2000), "Globalization, foreign direct investment and innovation", en: François Chesnais, Grazia Ietto-Gillies y Roberto Simonetti (Eds.), *European Integration and Global Corporate Strategies*. Londres y Nueva York, Routledge, 2-23.
- Chudnovsky, D. y López, A. (2007), "Inversión extranjera directa y desarrollo: la experiencia del Mercosur", *Revista de la CEPAL*, 9 2, 7-23.
- Energy Information Administration-EIA, (2015), *The Annual Energy Outlook 2015*. [En línea]. EIA, www.eia.gov/forecasts/aeo. Consultado: 10 de junio de 2017.
- Dantas, E., Marin, A., Figueiredo, P.N., y Bravo-Ortega, C. (2013), "The Emerging Opportunities for Innovation in Natural Resource-based Industries in Latin America: Only Potential or Being Realised?", *Technological Learning and Industrial Innovation Working Paper Series: Policy Brief*, Getulio Vargas Foundation (FGV).
- Di Tella, T. S., Brams, L., Reynaud, J-D., y Touraine, A., (1967). *Sindicato y Comunidad. Dos tipos de estructura sindical latinoamericana*. Buenos Aires, Argentina: Editorial del Instituto Torcuato Di Tella.
- Favaro, O. (1992), "Territorio y petróleo: La intervención estatal en la industria petrolera. El caso Neuquén (1884-1955)", Neuquén, *Revista de Historia*, 3, 159-180.
- Formento, W., y Merino, G. (2011), *Crisis financiera global, la lucha por la configuración del Orden Mundial*, Buenos Aires, Peña Lillo/Ediciones Continente.
- Frankel, J. A. (2010), "The Natural Resource Curse: A Survey", *National Bureau of Economic Research Working Paper*, Cambridge, MA, No. 15836.
- Giuliani, A. M., Fernández, N., Hollmann, M. A. y Ricotta, N. (2016), "La Explotación de Vaca Muerta y el Impacto Socioeconómico en la Provincia de Neuquén. El Caso de Añelo. Efectos de la Reforma de la Ley Nacional de Hidrocarburos (2014)", *Ciencias Administrativas*, 4, 7, 3-19. [En línea]. Revista Digital, FCE, UNLP, <https://revistas.unlp.edu.ar/CADM/article/view/2069>. Consultado: 10 de octubre de 2017.
- Göbel, B. (2013), "La minería del litio en la Puna de Atacama: interdependencias transregionales y disputas locales", *Iberoamericana*, XIII, 49, 135-149. [En línea]. *Iberoamericana*, <https://journals.iai.spk-berlin.de/index.php/iberoamericana/article/view/363>. Consultado: 11 de noviembre de 2017.
- Gudynas, E. (2009), "Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo. Contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual", en: Schuldt, J.; Acosta, A. et al., *Extractivismo, Política y Sociedad*. Quito, Centro Andino de Acción

- Popular (CAAP) y Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), 187-225.
- Gutiérrez, P. M. (2001), "Mapas sociales: método y ejemplos prácticos", *Diálogos: Educación y formación de personas adultas*, 25, 26-36.
- Holloway, M.D. y Rudd, O. (2013), *Fracking. The Operations and Environmental Consequences of Hydraulic Fracturing*, Canada, John Wiley & Sons, Inc.
- Kozulj, R. y Bravo, V. (1993), *La política de desregulación petrolera argentina. Antecedentes e impactos*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.
- Kulfas, M.; Porta, F. et al. (2002), *Inversión extranjera y empresas transnacionales en la economía argentina*, Buenos Aires, CEPAL.
- Landriscini, G. y Carignano, A. (2015), "Hidrocarburos no convencionales en la Cuenca Neuquina en Argentina. Inversión, innovación y empleo. Una oportunidad para las PyMEs", *Revista Pymes, Innovación y Desarrollo*, 3, 1, 54-78.
- Lavarello, P. y Sarabia, M. (2017) "La política industrial en la Argentina durante la década de 2000", en: Martín Abeles, Mario Cimoli y Pablo Lavarello (Eds.), *Manufactura y cambio estructural. Aportes para pensar la política industrial en la Argentina*, Libros de la CEPAL, 149, Santiago, CEPAL, 157-200.
- Observatorio Petrolero Sur y D'Elia, E. (2014), "A nivel global ¿Cuál ha sido el rol de las empresas petroleras con respecto a los yacimientos no convencionales? ¿Y el de Estados Unidos?", en AA.VV., *20 Mitos y Realidades del Fracking*, Buenos Aires, El Colectivo, 29-38.
- Pérez, C. (2010), "Technological dynamism and social inclusion in Latin America: a resource-based production development strategy", *CEPAL Review*, 100, 121-141.
- Pérez, C., Marín, A. y Navas-Alemán, L. (2014), "The possible dynamic role of natural resource-based networks in Latin American development strategies", en: G. Dutrénit y J. Sutz (eds), *National Innovation Systems, Social Inclusion and Development*, Edward Elgar Publishing, 380-412.
- Plataforma 2012 (2012), "Por una verdadera estatización de los recursos energéticos. La crisis de YPF o el fracaso de una política energética". [En línea]. <http://www.plataforma2012.org.ar/index.php/documentos/documentos/47-por-una-verdadera-estatizacion-de-los-recursos-energeticos>. Consultado: el 5 de agosto de 2017.
- Rahm, D. (2011), "Regulating hydraulic fracturing in shale gas plays: The case of Texas", *Energy Policy*, 39, 2974-2981.
- Sabbatella, I. (2012), "La política petrolera de la posconvertibilidad: de la herencia neoliberal a la expropiación de YPF", *Argumentos. Revista de crítica social*, 14, 149-180.
- Sachs, J. D. y Warner, A. M. (2001), "Natural Resources and Economic Development. The curse of natural resources", *European Economic Review*, 45, 827-838.
- Sapag, L. F. (2015), *Entender Vaca Muerta: Fracking: ¿zona de sacrificios ambientales o tierra prometida?*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Prometeo Libros.
- Schuldt, J. y Acosta, A. (2006), "Petróleo, rentismo y subdesarrollo ¿una maldición sin solución?" *Nueva sociedad*, 204, 71-89. [En línea]. Nueva Sociedad,

- <http://nuso.org/articulo/petroleo-rentismo-y-subdesarrollo-una-maldicion-sin-solucion/>. Consulta: 2 de enero de 2018.
- Serrani, E. (2013), "Transformaciones recientes en la industria petrolera argentina: el caso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 1989-2012", *Revista de Gestión Pública*, II, 1, 247-280.
- Solberg, C. E., (1986), *Petróleo y nacionalismo en la Argentina*, Buenos Aires, Hyspamérica Ediciones Argentina S.A.
- Svampa, M. y Viale, E. (2014). *Maldesarrollo. La argentina del extractivismo y el despojo*, Buenos Aires, Katz Editores.
- YPF, (2012), *Plan de los 100 días*. [En línea]. YPF <https://www.ypf.com/inversoresaccionistas/Lists/Presentaciones/30082012%20Presentaci%C3%B3n%20Plan%20Estrat%C3%A9gico.pdf>. Consultado: 10 de juli de 2017.
- Wahren, J. (2012), "Movimientos Sociales, y territorios en disputa. Experiencias de trabajo y autonomía de la Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi, Salta", *Trabajo y Sociedad*, Santiago del Estero, Argentina, 19, 133-147. [En línea]. Scielo, http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1514-68712012000200008. Consultado: 10 de diciembre de 2017.



Transformaciones tarifarias y efectos en la Región Patagónica Camuzzi Gas del Sur y la distribución de gas natural, 1999-2017¹

Esteban Serrani²

Resumen

Hacia comienzos de los años noventa, Argentina inició una serie de transformaciones económicas de carácter estructural, cuya magnitud y profundidad no tienen antecedentes en la historia argentina. En ese marco, la desregulación de los servicios públicos y la privatización de las empresas que los brindaban fueron prácticamente completas. El presente artículo busca analizar las transformaciones en el marco regulatorio del servicio público de gas natural, la dinámica de los principales conflictos tarifarios en la cadena gasífera y sus especificidades patagónicas, dando cuenta de la relación entre el Estado y la empresa Camuzzi Gas del Sur. Por características climáticas y de distribución de su población, esta región presenta un uso intensivo del servicio y ha tenido un tratamiento regulatorio y tarifario particular que se busca estudiar, al tiempo de conocer cómo estas especificidades han impactado tanto en la producción como en la evolución tarifaria y el consumo residencial.

Palabras claves

Camuzzi Gas del Sur – tarifas – distribución - gas natural – Patagonia

Tariff transformations and their effects in the Patagonian Region. Camuzzi Gas del Sur and natural gas distribution segment, 1999-2017

Summary

Towards the beginning of the 1990s, Argentina initiated a series of structural economic transformations, whose magnitude and depth have no precedents in Argentine history. In this context, the deregulation of public services and the privatization of the companies that provided them were practically complete. This article seeks to analyze the main transformations in the regulatory framework of the public natural gas service, the dynamics of the main tariff conflicts in the gas chain and their Patagonian specificities, knowing the relationship between the State and Camuzzi Gas del Sur. Due to climatic characteristics and distribution of its population, this region presents an intensive use of this service; for this reason, it has had a particular regulatory and tariff treatment that it is intended to study, at the time of knowing how these specificities have impacted both production and rate evolution and residential consumption.

Keywords

Camuzzi Gas del Sur – tariff – distribution - natural gas - Patagonia

¹ Este trabajo contó con financiamiento del CONICET. Se agradecen los valiosos comentarios de ambos referatos anónimos que han permitido mejorar la versión original del presente artículo y desde ya se los exime de cualquier error u omisión que aquí pudiera expresarse.

² Sociólogo y Doctor en Ciencias Sociales (UBA). CONICET. IDAES-UNSAM. UBA. Correo electrónico: estebanserrani@yahoo.com.ar

Introducción

Hacia comienzos de los años noventa, Argentina inició una serie de transformaciones económicas de carácter estructural, cuya magnitud y extensión no tienen antecedentes en la historia argentina. Estas han profundizado ciertas acciones y orientaciones de políticas públicas que asistieron a modificar los ejes ordenadores de la economía en general (Novaro y Palermo, 2006; Pucciarelli, 2006), de la intervención estatal (Castellani, 2009; Sidicaro, 2001) y del desempeño empresario (Schvarzer, 1998, Gerchunoff y Cánovas, 1995). Se sentaron las bases de un proyecto de cuño neoliberal que generó una profunda concentración del ingreso y acrecentó ostensiblemente el endeudamiento externo y la fuga de capitales; este proyecto también consolidó la disolución del mercado de trabajo y apuntaló una profunda desarticulación del tejido industrial con una creciente disminución de la participación de los asalariados en el ingreso social (Basualdo, 2006).

En ese contexto de profundos cambios en la estructura económica, la privatización de las empresas de servicios públicos fue prácticamente completa, los mecanismos de regulación de la competencia fueron sustantivamente alterados y los dispositivos para la determinación de los precios y su evaluación en el tiempo fueron cambiados por sistemas de mercado, significativamente distintos respecto al modelo de presencia dominante del Estado en tanto prestador de los servicios. A modo exploratorio, el presente artículo busca analizar las transformaciones en el marco regulatorio del servicio público de gas natural, la dinámica de los principales conflictos tarifarios en la cadena gasífera y sus especificidades patagónicas, dando cuenta de la cambiante relación entre la orientación de la intervención del Estado y el comportamiento empresario de Camuzzi Gas del Sur (CGS), la empresa concesionaria de la distribución en la Región Patagónica. Por características climáticas y de distribución de su población, esta región presenta un uso intensivo de este servicio y ha tenido un tratamiento regulatorio y tarifario particular que se busca estudiar, al tiempo de conocer cómo estas especificidades han impactado tanto en la producción como en la evolución tarifaria y el consumo residencial.

El artículo está organizado en cinco apartados, presentados en orden cronológico. El primer apartado cubre el período 1999-2001, y analiza los conflictos tarifarios y financieros que CGS afrontó hacia finales de la convertibilidad, que dieran origen al actual fondo patagónico. En el segundo apartado, que se extiende entre 2002 y 2003, se presentan las principales transformaciones regulatorias con la sanción de la Ley de Emergencia Pública y los conflictos que se dieron en la cadena gasífera a partir de la pesificación de las tarifas. En tercer lugar, se reconstruye el sinuoso camino, que se extendió entre 2003 y 2015, de renegociación transitoria de los contratos de licencia de los servicios de distribución de gas natural y sus conflictos asociados, al tiempo que se presta atención a las modificaciones tarifarias. En el cuarto apartado se presentan los lineamientos generales de la política tarifaria de la alianza Cambiemos (2016-2017), centrada en reducir los subsidios y en dolarizar los valores finales de las tarifas. En el quinto apartado se presenta la evidencia empírica de los impactos que las transformaciones energéticas han tenido en la evolución de la

producción, el consumo y las tarifas a lo largo de todo el período en análisis. Finalmente, se trazan las conclusiones del trabajo.

Atraso y conflictos tarifarios en el fin de la Convertibilidad (1999-2001)

El marco regulatorio que transformó la actividad del gas natural y la privatización de Gas del Estado fue sancionado el 20 de mayo de 1992 bajo la Ley N° 24.076, organizando el sector alrededor de ocho regiones donde empresas o consorcios de empresas brindarían monopólicamente el servicio de la distribución (en 1997 se sumaría la novena distribuidora, Gasnea) (Azpiazu, 2003). Su reglamentación se dio por medio del Decreto N° 1.738/92, que describe los requisitos en relación a la calidad del servicio, las inversiones de capital, las restricciones a la transferencia y constitución de gravámenes sobre los activos, las restricciones a la titularidad por parte de los productores, transportadoras y distribuidoras de gas, etc. De ese marco regulatorio se desprende la estructura tarifaria que reformuló el sistema de monopolio estatal que rigió hasta 1992, fundado en Gas de Estado. En líneas generales, todos los usuarios finales (residenciales, entes públicos, comercios, industrias, usinas de generación eléctrica o usuarios de GNC) seguirían pagando en la tarifa final los tres componentes centrales, que no variaron respecto al modelo anterior: un precio del gas natural, un costo de transporte y un margen de distribución, más impuestos (FIEL, 1998). Sin embargo, las reformas incorporaron dos mecanismos novedosos para la configuración tarifaria.

El primero es el sistema de *pass-through*. El mismo permite al concesionario de distribución pasar a la tarifa final el precio desregulado que paga por la compra del gas natural en boca de pozo y el costo regulado del transporte que el fluido recorre desde el yacimiento hasta la puerta de entrada al área de concesión de la distribuidora (FLACSO, 1998). En líneas generales, las distribuidoras no obtienen ganancias o pérdidas sobre estos dos componentes de la tarifa final.³

El segundo es el sistema de *price-cap*⁴. A los fines de determinar una tarifa razonable, el ENARGAS fija precios máximos que la distribuidora cobra a sus usuarios finales por un período de tiempo determinado. Estos precios puede ser ajustados por dos vías: el primer ajuste implicaba una revisión semestralmente en base al *price producer index* de Estados Unidos (PPI), a los fines de cubrir la evolución de los costos de la licenciataria. Esta revisión se ajustaba por un factor de eficiencia “X” y por un factor de inversión “K”. El segundo mecanismo implicaba una revisión tarifaria cada cinco años, a los fines de determinar si ésta implicaba una “tarifa razonable” para la licenciataria, sin afectar los otros objetivos tipificados en el artículo 2 de la ley de 1992 (Kozulj, 2000; Gerchunoff, et al., 2003; Azpiazu, 2003)

³ Salvo algún desacople que pueda surgir entre la contratación en firme de una determinada capacidad de transporte y la demanda final.

⁴ Stephen Littlechild (1983) fue el artífice de lo que actualmente se conoce como *Price-cap*, cuando a comienzos de 1980 a través de un informe presentado al gobierno del Reino Unido, propuso esta novedosa metodología como modelo de regulación tarifaria en el naciente proceso de privatización de empresas públicas de aquel país.

La licencia en la Patagonia fue otorgada en diciembre de 1992 al consorcio integrado por Camuzzi⁵, CNG Cayman Three Limited y Sempra Energy International Chile Holdings (CGS). La misma tiene una duración de 35 años (prorrogables por diez más), abarca la región al sur del Río Colorado (Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires, provincias del Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur) y fue adjudicada con un sistema de distribución formado por 2.500 kilómetros de gasoductos y 9.500 kilómetros de ramales y cañerías de distribución (UNIREN, 2005).

En efecto, más allá de que la adopción generalizada del método de regulación por precios *price-cap* en Argentina estuvo vinculada al auge que en el mundo tuvo la regulación por incentivos y la influencia de los diseños regulatorios aplicados en Inglaterra durante la década de 1980, son varios los estudios que han afirmado que los usuarios finales no se han beneficiado ampliamente por el incremento de la eficiencia en la productividad del sector (Azpiazu, 2003; Chisari et al., 1999; Gerchunoff, et al., 2003).

Sin embargo, lejos de afirmar que los conflictos tarifarios en Argentina comenzaron exclusivamente a partir del cambio de reglas de juego originado por la pesificación de tarifas implementado en 2002 bajo la presidencia interina de Eduardo Duhalde, los mismos fueron intensos algunos años antes en la Patagonia, alrededor de la implementación y cumplimiento de la denominada “tarifa diferencial” del subsidio patagónico.

Con la privatización de Gas del Estado en 1992, se estableció que todos los años se dispondría de una partida especial en el presupuesto nacional para subsidiar las tarifas residenciales de la Patagonia. La misma se calcula a partir de la publicación de dos cuadros tarifarios para cada subzona, el primero con una tarifa plena (que contempla la remuneración a los productores por el gas natural, a las transportistas y el margen de distribución –ganancia– de una “tarifa razonable” para CGS como responsable de la distribución) y el segundo es un cuadro diferencial, que implica un valor sustancialmente menor, que es el que finalmente pagan los usuarios. El diferencial de recaudación entre el cuadro pleno (el que la distribuidora usa para pagar por el gas y el transporte, y para calcular su margen de rentabilidad) y el cuadro diferencial (el que usa la distribuidora para cobrarle a la demanda final) debía ser cubierto por una partida especial del Tesoro Nacional, en concepto de subsidio al consumo en la Patagonia. El mecanismo institucional adoptado para la implementación del subsidio se instrumentaba a través de erogaciones por parte del Estado Nacional hacia las provincias patagónicas, quienes eran las encargadas de cumplimentar el pago a CGS. Así, los habitantes patagónicos pagan una tarifa diferencial en relación con los del resto del país, dependiendo de la provincia, la región dentro de ésta (los de la Cordillera reciben un subsidio mayor a los de la zona

⁵ Camuzzi fue una de las mayores inversiones extranjeras directas de Italia en la Argentina y sus actividades abarcaban cuatro rubros: distribución de gas a través de Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur (empresa que interesa particularmente en este trabajo), de energía eléctrica a través de la concesión en la zona este de la costa atlántica de Edea y en Río Negro por Edersa, de transporte de energía eléctrica en la Patagonia a través de Transpa, y dos empresas de distribución de agua en las localidades de Balcarce y Laprida, en la provincia de Buenos Aires (UNIREN, 2005).

atlántica, ya que deben regularmente afrontar temperaturas más crudas, especialmente en invierno) y el segmento de consumo.

Sin embargo, entre 1999 y mediados de 2001, el Estado Nacional no giró esos fondos a las provincias, generando una deuda de la licenciataria con los productores de gas natural, que equivalía a 108 millones de pesos entre capital, intereses e IVA sobre los intereses, según los estados contables de la empresa. En este contexto, a pesar de varias reuniones entre el Secretario de Hacienda Jorge Baldrich, el subsecretario de Combustibles Cristian Folgar, los ministros de Economía de las provincias afectadas y directivos de CGS, hacia mediados de noviembre de 2001 no habían logrado acordar una propuesta de solución que conformara a todas las partes, dilatándose el conflicto. Según declaraciones de Folgar, “le propusimos a la empresa documentar la deuda, definir su monto y pagarle la totalidad con bonos. Ahora los directivos de la compañía tienen que consultar con los accionistas y mañana (por hoy), en una nueva reunión, escucharemos la respuesta de la empresa” (Diario La Nación, 14 de noviembre de 2001). Ante el rechazo de la propuesta por parte de la empresa, el 15 de noviembre de 2001, CGS anuncia que comenzaría a cobrarles a sus clientes la “tarifa plena” de distribución, situación que generaría un alto impacto en la factura final, casi duplicando el valor que hasta ese momento los hogares afrontaban, en un marco de deflación y estancamiento económico (Basualdo, 2006). Los voceros de la empresa aducían que debían implementar esta medida ya que CGS “compra el gas sin ningún descuento y lo vende a un precio subsidiado; no cobra el subsidio y, por las leyes tributarias, debe pagar impuestos sobre ingresos que no tuvo” (Diario La Nación, 15 de noviembre de 2001).

En este contexto de suma tensión, el 16 de noviembre se presentaron recursos de amparo para detener en la Justicia Provincial la facturación que había anunciado aplicando las tarifas plenas. El 19 de noviembre de 2001, el juez de instrucción de Trelew Jorge Pflieger, ordenó a CGS que se abstenga de aplicar la tarifa plena hasta que se solucione el conflicto de fondo alrededor de la deuda. Asimismo, el 23 de noviembre el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro ordenó a CGS suspender el aumento de las tarifas, respondiendo a un recurso de amparo formulado por la fiscalía del Estado provincial.

En el contexto de creciente crisis fiscal y externa a nivel nacional, y en el marco de este conflicto regional, a fines de noviembre de ese año el gobierno nacional presentó al Congreso Nacional una propuesta para que el financiamiento del subsidio patagónico no dependiera del Tesoro nacional (propuesta que debía ser evaluada para incluirse en la Ley de Presupuesto Nacional para el ejercicio 2002). La misma consistía en la creación de un cargo extra-tarifario de 0,004 pesos por cada metro cúbicos de gas consumido que todos los usuarios no patagónicos debían pagar en sus facturas. Lo recaudado a través de ese cargo por las distribuidoras de todo el país debía ser depositado en un fideicomiso, que serviría para cubrir la brecha de recaudación entre la tarifa plena y la diferencial de CGS. Como afirmó Carlos Bastos el 26 de noviembre de 2001, Ministro de Infraestructura del gobierno de la Alianza, “en lugar de que el subsidio esté incluido en el presupuesto nacional, los consumidores de gas que no estén en la región (sur) pagarán un ligero aumento, que contribuirá a subsidiar a los habitantes de la Patagonia. Estamos estudiando

establecer una especie de subsidio cruzado" (Diario La Nación, 27 de noviembre de 2001). La propuesta fue finalmente aprobada en diciembre de 2001 para el ejercicio presupuestario 2002, y constituía un subsidio cruzado que, formalmente, está prohibido por el marco regulatorio del sector, ya que en artículo 41 de la Ley N° 24.076 se define que "en ningún caso los costos atribuibles al servicio prestado a un consumidor o categoría de consumidores podrán ser recuperados mediante tarifas cobradas a otros consumidores".

En definitiva, más allá de las discusiones sobre la actualización tarifaria quinquenal y que las revisiones semestrales realizadas hayan tenido poco impacto en las tarifas finales (Kozulj, 2000: 50), con anterioridad a la pesificación de los contratos de servicios públicos ya existían conflictos de abastecimiento en la Patagonia que giraban alrededor de la tarifas de gas natural, muchos de los cuales se intensificarían en los siguientes años.

Pesificación y crisis en la distribución durante el duhaldismo (2002-2003)

Luego de los traumáticos episodios de diciembre de 2001 y de la crisis institucional que le siguió, a comienzos de 2002 fueron tomadas una serie de medidas de alto impacto en la economía, sobre todo por las consecuencias regresivas que tendrían en la estructura social (Pucciarelli y Castellani, 2014; Basualdo, 2006). En un contexto, mediante la Ley N° 25.561 de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario, el 6 de enero de 2002 se declara la emergencia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, que seguiría vigente al menos hasta el 31 de diciembre de 2017, luego de varias prórrogas (Pucciarelli y Castellani, 2014).

Respecto a la cuestión tarifaria, en su artículo 8 se dispuso que quedaban sin efecto las cláusulas de ajuste en dólares (o en otras monedas extranjeras), las cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros países y cualquier otro mecanismo indexatorio para todos los contratos celebrados por la Administración Pública, entre ellos los de servicios públicos. Los precios y tarifas resultantes quedaron establecidos en pesos a la relación de 1 dólar es equivalente a 1 peso argentino. Al sancionar la Ley de Emergencia, el Congreso Nacional autorizó al Poder Ejecutivo Nacional a renegociar los contratos de servicios públicos (artículos 8 y 9), debiendo contemplar el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos, en la calidad de los servicios y los planes de inversión, en el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios, en la seguridad de los sistemas comprendidos y en la rentabilidad de las empresas (en sintonía con la Ley N° 24.076).

Sin embargo, el proceso de reconfiguración tarifaria en la Patagonia no estuvo exento de conflictos entre CGS tanto con el gobierno nacional como con distintos actores del resto de la cadena gasífera. A mediados de 2002, CGS tenía dos frentes de disputa con el Estado: por un lado, la renegociación de las tarifas en el nivel nacional, luego de que la ley de emergencia pública eliminó el ajuste al dólares y a la inflación de los Estados Unidos; y por otro lado, los 160 millones de pesos que reclamaba que se le adeudaba en concepto de subsidio al gas patagónico (deuda de 108 millones de pesos reconocida por el gobierno anterior, a lo que la empresa le adicionaba 42

millones de pesos adicionales en concepto de intereses por mora, según los estados contables de la empresa para el año 2002).

En este marco, el presidente interino Eduardo Duhalde declaró que “la Argentina no puede ni debe pagar en una economía globalizada servicios públicos más caros que en otros países” (Diario Clarín, 16 de enero de 2002), anticipando el arduo proceso de renegociación con las empresas privatizadas. En ese contexto, Juan Martín Blaquier, Presidente de CGS Argentina, afirma tras semanas de negociación:

Para no entrar en default las compañías tienen que presentarles una alternativa a los tenedores de bonos. ¿Y qué les van a presentar si no se sabe cómo va a seguir el negocio? El default no es una presión, es una consecuencia de que se hayan roto los contratos (...) Pero el concepto es el siguiente: los contratos hay que respetarlos. Nos podemos sentar y discutir cómo pasamos la situación coyuntural. Pero queremos que se respete el contrato. Entendemos el mal momento y estamos dispuestos a dar una mano. Todas las empresas presentamos propuestas similares: rebajas de impuestos, de inversiones, etcétera. Pero la situación del gas es distinta de otros servicios públicos: no paga canon, no tiene inversiones pendientes porque ya las hizo, nunca ha pedido una renegociación de los contratos. Es más, en el año 2000 nos congelaron la indexación de las tarifas por la inflación de los EE.UU. Hubo distintas cosas que el Gobierno no cumplió en su momento. Entonces la negociación no es como en otras concesiones (Diario La Nación, 13 de abril de 2002)

Finalmente, la Ley N° 25.565 de Presupuesto General de la Administración Pública Nacional sancionó en su artículo 75 el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, luego conocido como “subsidio patagónico” o “fondo patagónico”. En sintonía con la propuesta enviada al Congreso el año anterior, la ley dispuso compensar las tarifas de gas natural de usuarios residenciales no sólo para la región patagónica sino también para la Puna en el norte del país, además de subsidiar la venta de cilindros, garrafas de GLP y gas propano comercializado a granel en todas estas zonas. Con el Decreto N° 786/02 se reglamentó el cargo extra-tarifario para financiar el fondo patagónico de acuerdo con la propuesta elevada al Congreso a finales de 2001.

De esta manera, se había logrado desactivar, hacia el adelante, el primer conflicto que CGS tenía en marcha (el más coyuntural pero urgente para la empresa), vinculado a la reglamentación de la forma de recaudación de los fondos para solventar el subsidio patagónico. Sin embargo, como consecuencia no buscada, este mismo proceso abrió dos conflictos adyacentes en tanto que los fondos recaudados a través del cargo extra-tarifario sólo estarían disponibles para la empresa varios meses más tarde de la sanción del decreto reglamentario (debido al desfase contable entre consumo, facturación y cobro).

El primer conflicto se desarrolló entre los segmentos de producción y distribución, entre Repsol-YPF y CGS. A raíz de la mora en el pago del fondo patagónico por parte del Estado Nacional, CGS acumuló una deuda de 60 millones de pesos con las principales productoras de gas natural. Repsol-YPF era la empresa con la que mantenía la mitad de la deuda y fue quien mantuvo la postura más dura con CGS. Con anterioridad a la reglamentación del subsidio patagónico, el 06 de Mayo del 2002 le comunicó que sólo podría disponer de 500.000 m³/día respecto a la solicitud de 2,2 millones de m³/día de su producción de la cuenca neuquina (Estados Contables de CGS, 2002), generando un potencial problema de desabastecimiento para distintos tipos de usuarios en la Patagonia. Ante esta novedad, CGS solicitó a otras empresas productoras de gas de la cuenca si disponían del volumen faltante, y ante la negativa encontrada como respuesta (y en sintonía con la Ley N° 24.076), instó a los usuarios de la demanda interrumpible de su zona de concesión (usinas de generación eléctrica e industrias con uso intensivo de gas natural) que interrumpieran sus consumos. Sin embargo, aun con esos cortes programados, el volumen de gas restante no era suficiente para cubrir la demanda de usuarios considerados prioritarios (residencial, pequeños y medianos comercios, entes oficiales, sub-distribuidoras y GNC). Esta situación llevó a que, en primer lugar la empresa se declare en “estado de emergencia” en el marco de la Resolución N° 716/98 y, a continuación, se constituya un Comité de Emergencia conformado por las restantes empresas distribuidoras, las transportistas y el ENARGAS para buscar alternativas al conflicto. Finalmente, el Comité decidió solicitar a los grandes clientes ubicados en las restantes provincias que interrumpieran sus consumos hasta disponer de un volumen suficiente para abastecer la región Neuquina, y paralelamente se aprobó un préstamo de gas por 48 horas desde distintas empresas distribuidoras a CGS para solucionar la situación de emergencia (Estados Contables de CGS, 2002). Finalmente, a las soluciones temporales encontradas por el Comité de Emergencia, Repsol-YPF terminaría acordando proveer a CGS el gas necesario durante los siguientes siete días para evitar cortes a los usuarios residenciales de la Patagonia. En ese contexto, el gobierno decidió saldar su deuda con CGS a partir de la emisión de un bono por 160 millones de pesos transferible deducible de retenciones, que serviría para cancelar la deuda que tiene con CGS y para el pago de impuestos y otros pasivos.

El segundo conflicto en la cadena gasífera se desarrolló entre los segmentos de transporte y distribución, entre TGS y CGS, alrededor del precio del gas licuado de petróleo (GLP) para uso domiciliario en la Patagonia. El grueso de la producción de GLP se exportaba a precio internacional, aunque una pequeña porción del mismo se comercializaba en el mercado interno envasado, con precio regulado por la Secretaría de Energía de la Nación. Para mediados de 2002, el precio interno de la tonelada de GLP para distribución domiciliaria era de 300 pesos (Resolución N° 2.612/2002) mientras que el precio promedio obtenido por la exportación giraba alrededor de los 650-700 pesos, marcando un diferencial que duplicaba el valor interno. Por este motivo, los productores de GLP (la transportista TGS era uno de las mayores productores del país a partir de la utilización de la Planta de Tratamiento del Complejo General Cerri en la Provincia de Buenos Aires) se negaban a venderle a

CGS al precio regulado por la Secretaría de Energía. En pleno invierno de junio de 2002, CGS declaró una nueva emergencia del abastecimiento, ahora de GLP por redes en la Patagonia. Luego de varios días de desabastecimiento de distintas localidades en la Patagonia (y ante el temor a que tuviera un alto impacto en los hogares en medio de la estación más fría del año), la Secretaría de Energía llegaría a un acuerdo con TGS para la provisión de GLP a la demanda domiciliar patagónica al precio regulado establecido hasta septiembre de ese año, momento a partir del cual habría nuevas reuniones para determinar un nuevo precio de referencia interno, aunque el conflicto alrededor del desacople de los precios internos del GLP frente a los precios internacionales de exportaciones persistirían muchos años más.

En definitiva, la pesificación de los contratos de servicios públicos implementada a partir de la Ley de Emergencia Pública contribuyó a agravar los conflictos arrastrados desde finales de la Convertibilidad en el campo tarifario, y la resolución de la controversia alrededor del fondo patagónico significó el diseño de un mecanismo institucional que transfirió el peso económico del Estado Nacional a los usuarios del resto del país a través de la implementación de un subsidio cruzado, que estaba taxativamente prohibido por el marco regulatorio legislado en 1992.

Congelamiento tarifario, cambios regulatorios y política tarifaria durante el kirchnerismo (2003-2015)

Luego del congelamiento tarifario, de los conflictos alrededor de los precios de la energía en los distintos segmentos y de las complicaciones alrededor del abastecimiento interno y el mantenimiento de la cadena de pago, en mayo de 2002 se publica un nuevo cuadro tarifario que contempló un incremento de entre 3% y 4% sobre el cargo variable de la tarifa residencial (dependiendo las diferentes regiones) y entre 5% y 6% sobre el variable de la tarifa comercial, quedando sin modificaciones los cargos fijos. Respecto a CGS, el incremento promedio de los cargos variables para la Patagonia fue de 4,6% para los residenciales y de 5,6% para los comerciales (aunque en promedio, el valor del cargo variable en la Patagonia representaba algo menos de 60% del valor del mismo cargo en Capital Federal).

En el marco de una nueva renegociación con el FMI, el director general del Fondo Monetario Internacional (FMI), Horst Köhler, mantuvo una reunión con un grupo de grandes empresas multinacionales que operaban en Argentina, entre los que estaba Martín Blaquier (CGS y Adespa)⁶, según crónicas periodísticas de la época. En ese contexto, Blaquier fue muy crítico respecto a la situación del país: “Si no mejoramos nuestros ingresos es utópico pensar en nuevas inversiones. Y una economía que quiera crecer no debe descuidar esto. Los servicios públicos están en situación límite” (Diario La Nación, 24 de junio de 2003). En ese mismo marco, Paolo Rocca, titular de Techint, pese a que participaba en el segmento energético a través

⁶ Entre otros participantes estuvieron Jorge Brito y Norberto Peruzzotti (Asociación de Bancos Argentinos), Juan Bruchou (Citibank), Enrique Cristofani (Banco Río), Carlos Heller (Asociación de Bancos Públicos y Privados), Mario Vicens (Asociación de Bancos de la Argentina), Luis Pagani (Asociación Empresaria Argentina), Paolo Rocca (Techint) y Alberto Alvarez Gaiani (Unión Industrial Argentina).

de TGN, afirmaba que “puedo dar fe de las dificultades que el retraso tarifario trae. Con TGN perdimos mucho dinero, pero eso no nos habilita a obviar los inconvenientes que también tienen los usuarios (...). En este contexto, los cambios en el país serán paulatinos” (Diario La Nación, 24 de junio de 2003).

En retrospectiva, esa discusión retórica fue ganada por el presidente de Techint. Es que finalmente, la tarifa de distribución quedaría sin modificaciones hasta finales de 2004, cuando el Estado Nacional, a través de la Unidad de Renegociación y Análisis de los Contratos de Servicios Públicos (UNIREN), inicia un proceso de discusión contractual para la normalización de los contratos con las empresas privatizadas de servicios públicos. Este proceso comenzó en 2005 con la negociación de Cartas de Entendimiento, de Acuerdos Transitorios de Adecuación de Tarifas (Acuerdo Transitorio) y continuó hasta 2014 con los Acuerdos de Renegociaciones Contractuales Integrales (Acta Acuerdo), siendo Metrogas la última en firmarlo. Los acuerdos buscaban configurar los criterios y los mecanismos para llegar a determinar la nueva tarifa que las nueve distribuidoras del país pasarían a cobrar luego de las modificaciones contractuales que se produjeron en 2002. El recorrido implicaba diferentes pasos. En primer lugar, la configuración de un régimen tarifario de transición a partir de la readecuación de precios y tarifas; en segundo lugar, tras anularse la indexación semestral automática por PPI, se debía establecer un nuevo mecanismo de monitoreo de costos (MMC) aplicable a la tarifa durante el período de vigencia del régimen de transición; en tercer lugar, se iba a establecer un aumento sobre la tarifa de distribución aplicable a los clientes de la demanda prioritaria; y en cuarto lugar se fijaría un régimen de tarifa social destinado a hogares de bajos ingresos.

En este contexto, el gobierno nacional y CGS iniciarían las negociaciones en enero de 2005 a partir de una Carta de Entendimiento, que fue un documento propuesto por la UNIREN a la empresa, conteniendo una propuesta con los términos y las condiciones para la adecuación del contrato de la licencia de 1992 a la nueva coyuntura. El 28 de abril de 2005 la misma fue sometida a audiencia pública en la Cámara Arbitral de Cereales de Bahía Blanca, en la cual la empresa adoptaría una posición de férreo rechazo a las condiciones propuestas por la UNIREN. Específicamente, y aduciendo que el documento no reflejaba los argumentos esgrimidos por la empresa, CGS rechazó la propuesta de aumentar 15% en promedio las tarifas de ese año, y también la revisión semestral de costos con posibilidades de actualización tarifaria si estos variaban más del cinco por ciento en ese lapso. El fracaso de la audiencia pública abrió un nuevo período de negociación entre el UNIREN y la empresa, que finalizaría el 26 de abril de 2007, casi dos años más tarde, cuando se firmaría la Carta de Entendimiento entre CGS y UNIREN, que permitiría iniciar el camino para regularizar la situación tarifaria del contrato de licencia de distribución.

Sin embargo, para terminar de avanzar en la firma del Acuerdo Transitorio, la UNIREN exigía como condición que las empresas de servicios públicos desestimaran las demandas arbitrales antepuestas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. El 22 de noviembre de 2003 Camuzzi Internacional (que tenía participación accionaria sobre Camuzzi

Gas del Sur y Camuzzi Gas Pampeana) reclama por supuestas violaciones al Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (TBI) celebrado entre la Argentina y la Unión Belgo-Luxemburguesa. Específicamente en el segmento de la distribución de gas, su reclamo se centró en el incumplimiento de derechos contractuales a una tarifa en dólares estadounidenses, con ajustes automáticos periódicos en función de la variable “costo” de la tarifa (índice PPI) y oportunidades periódicas para revisar las tarifas. Al mismo tiempo, Sempra Energy International (sociedad controlante del 43,6% de Sodigas Sur y Sodigas Pampeana⁷), el mismo día inicia otro arbitraje por supuestas violaciones al TBI celebrado entre la Argentina y Estados Unidos, aduciendo los mismos incumplimientos contractuales que Camuzzi Internacional. En este contexto, el conflicto radicaba en que mientras Camuzzi Internacional tenía intenciones de suspender el pedido de arbitraje ante el CIADI para acordar con UNIREN, la empresa norteamericana insistía en sostenerlo, y aun habiendo vendido sus acciones en Sodigas de Argentina en 2006, en 2007 obtuvo un laudo que hacía lugar a su posición en el CIADI, comprometiendo al Estado argentino a pagar una compensación de 128 millones de dólares (más intereses). Este desenlace comprometía aun más las negociaciones entre CGS y el Estado Nacional, quien se mantenía firme en no ceder ese punto de la negociación con las empresas privatizadas de servicios públicos. De esta manera, apeló el fallo aduciendo que el CIADI se excedió en sus facultades, ya que el artículo XI del TBI establece que ese acuerdo “no impedirá la aplicación por cualquiera de las partes de las medidas necesarias para el mantenimiento del orden público, el cumplimiento de sus obligaciones para el mantenimiento o la restauración de la paz”.

En el marco de estas negociaciones internacionales en el CIADI, el 23 de agosto de 2008 CGS y UNIREN firmaron un primer Acuerdo Transitorio cristalizado en el Decreto N° 2.149/2009. En el mismo, se dispone un aumento de 25% sobre la tarifa de distribución promedio considerando el conjunto de usuarios, a lo cual se le adicionaba otro 2% sobre la tarifa de distribución promedio para la ejecución de obras de ampliación de redes y conexión de frentistas no usuarios. Finalmente, se determinaba que el período de transición tarifaria terminaría en 2009, cuando se iniciaría la Revisión Tarifaria Integral (RTI) para la normalización contractual.

Todo el proceso quedaría allanado cuando el 29 de junio de 2010 un Comité Ad Hoc del CIADI haría lugar al pedido de la Procuración del Tesoro de la Nación de anulación del fallo contra el Estado argentino.⁸ Al siguiente mes se firmaría el Acta Acuerdo de Renegociación Contractual, que ratifica lo dispuesto en el primer Acuerdo Transitorio de 2008, dando por culminado el proceso transitorio de negociación entre el Estado y CGS.

Sin embargo, más allá de las negociaciones alrededor de los Acuerdos Transitorios y sus ratificaciones, y de haber resuelto el arbitraje en el CIADI, no habría actualización tarifaria hasta 2014. Como medida compensatoria, en noviembre

⁷ Sociedades argentinas que a su vez, poseían 90% de Camuzzi Sur y 86% de Camuzzi Pampeana.

⁸ Fallo disponible en: http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ICSIDBLOBS/OnlineAwards/C8/DC1550_Sp.pdf Último acceso: 15 de abril de 2018.

de 2012 el ENARGAS implementó el FOCEGAS (Resolución N° 2.407/12), un cargo fijo extra-tarifario diferenciado por categoría de usuario, que sería cobrado bimestralmente a todos los usuarios y destinado exclusivamente a la ejecución de obras de infraestructura, mantenimiento y todo otro gasto conexo necesario para la prestación del servicio público. Si bien el cargo significó la posibilidad de obtener ingresos adicionales para inversión en obras, Juan José Mitjans, presidente de CGS, informaba el 18 de julio de 2012 por nota a la Comisión Nacional de Valores como un hecho relevante que:

La falta de incremento en la tarifa de distribución que no se ha modificado desde el año 1999, sumado al permanente incremento en los costos de explotación hasta el momento han sido absorbidos por la Sociedad, han colocado a la Sociedad en una situación financiera delicada. (...) la Sociedad está extremando las medidas en orden a preservar sus operaciones en un modo acorde con las exigencias financieras impuestas por la prestación del servicio público y ha informado a las autoridades competentes de esta situación (Disponible en <https://aif.cnv.gov.ar/descargas/web/blob/4?idDoc=175231>. Ultimo Acceso: 14 de mayo de 2018).

Sin embargo, luego de meses de presión de las distribuidoras por la actualización tarifaria para no interrumpir la cadena de pago del sistema gasífero, en abril de 2014 se implementó un incremento del precio de gas natural en el PIST y un incremento tarifario para el transporte y la distribución de gas natural, bajo el programa que fuera denominado “Esquema de Racionalización del Uso del Gas Natural”.

La Resolución N° 226/2014 publicada en el Boletín Oficial establece los diferentes precios del gas natural en boca de pozo para cada región del país, argumentando que “resulta oportuno contemplar un esquema que procure un consumo racional del gas, incentivando el ahorro para generar un uso responsable y eficiente de los recursos y, en tales términos, se prevé el otorgamiento de beneficios para todos aquellos consumidores residenciales y comerciales de servicio completo que reduzcan su demanda”.

Este esquema implicó un incremento promedio para el país de 550% en el precio del gas natural, de 20% en el componente de transporte y, en base a un estudio económico-financiero realizado por el ENARGAS, se incrementó diferencialmente el margen de distribución para cada empresa, a los fines de hacer frente a la prestación del servicio de distribución y las inversiones necesarias para una prestación adecuada. Sin embargo, aduciendo criterios climáticos de uso intensivo del gas natural, las tarifas diferenciales no fueron aumentadas en la Patagonia, sólo incrementando el cuadro pleno que incluía una mejora en los ingresos de la empresa. De esta manera, el impacto fue nulo para los usuarios patagónicos, mientras que se amplió el subsidio necesario para cubrir la brecha entre el cuadro pleno y el diferencial. Durante el 2014 se antepusieron diversos recursos de amparo que fueron

avalados por varios tribunales judiciales en diferentes partes del país, impidiendo la plena aplicación de las nuevas tarifas. A los efectos del caso patagónico, estos no tuvieron impacto porque finalmente, la tarifa final no fue modificada. Más allá del incremento de 2014, desde mediados de 2013 hasta mediados de 2015 gran parte de las distribuidoras interrumpieron el pago a las productoras por la compra de gas natural, sabiendo que éstas no podrían cortar el suministro por ser un servicio público. En octubre de 2014, este proceso de ruptura de la cadena de pago llevó a que Pan American Energy (PAE), una de las empresas petroleras más grande del país, iniciara un pedido de quiebra para CGS (y de Camuzzi Pampeana) por la deuda acumulada.⁹

Más allá de que ningún pedido de quiebra para alguna distribuidora llegó a concretarse, esta situación imprimió una dinámica de mucha tensión al sector, ya que a la persistencia de los amparos judiciales contra la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios, se le sumaba el potencial riesgo de profundizar el corte de la cadena de pago impulsado por las deudas que las distribuidoras mantenían con las productoras. Este escenario forzó a que el Estado Nacional implementara una medida transitoria y excepcional, ampliando los subsidios económicos para las empresas distribuidoras. Bajo la Resolución N° 263/2015 se aprobó una erogación con carácter de asistencia económica transitoria pagadera en diez cuotas consecutivas por un total de 2.590 millones de pesos, con el objetivo de solventar los gastos corrientes y las inversiones asociadas al normal funcionamiento de la prestación del servicio público. Además, se establecía la necesidad de cancelar las deudas contraídas y vencidas hasta el día 31 de diciembre de 2014 con las productoras de gas natural, se obligaba a destinar parte de los fondos percibidos al pago del costo del gas natural cuyo vencimiento se produzca durante el año 2015, ordenaba que las distribuidoras no podrían acumular más deuda por compras de gas natural realizadas a partir de la fecha de entrada en vigencia de la Resolución, como tampoco podrían repartir dividendos entre los accionistas durante ese período contable.

El paulatino levantamiento de los amparos a la aplicación de las tarifas plenas sumado a los subsidios en forma de asistencia económica transitoria permitió a las distribuidoras mejorar sus resultados económicos hacia finales de 2016, momento en que se logró facturar con los cuadros plenos durante un invierno completo.

Quita de subsidios e incremento tarifario bajo la Alianza Cambiemos (2016-2017)

Apenas asumido el gobierno de la alianza Cambiemos, éste se amparó en un diagnóstico de “crisis energética” para habilitar una rápida revisión de la política energética kirchnerista, fundamentalmente en lo que hacía a la revisión tarifaria pero también en la paralización de los planes anteriormente diseñados en materia hidroeléctrica, nuclear y carbonífera (Barrera, et al., 2017). En este contexto de búsqueda de reconfigurar la lógica y los mecanismos de la intervención del Estado en

⁹ Unos meses más tarde PAE también pediría la quiebra de Metrogas, la distribuidora de gas natural con más usuarios del país, por una deuda de aproximadamente 30 millones de dólares a septiembre de 2015.

la economía, la política tarifaria de los servicios públicos se centró especialmente en la reducción de los subsidios a partir del incremento de la tarifa final sobre los usuarios abastecidos por las empresas distribuidoras.

El gobierno argumentó que se buscó “normalizar el precio de gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST), otorgando un sendero gradual y previsible de reducción de subsidios hasta alcanzar precios libres, a la cual se le sumaba una política de subsidios para hogares vulnerables a través de una tarifa social y la continuidad del programa HoGar”.¹⁰ En este contexto, el gobierno nacional buscó reducir los subsidios con incrementos semestrales en base a un sendero de precios (Cuadro N° 1), para llegar al precio de 6,72 dólares por millón de BTU en octubre de 2022 en la Patagonia, identificado por el MINEM como el “precio de equilibrio” del sistema y similar al promedio en dólares de la paridad de importación de 2016. En esta región, el sendero de precios para consumo residencial implica un incremento de 4.100% entre marzo de 2016 (momento que se inicia la reducción de subsidios e incremento tarifario) y octubre de 2022 (período en que se llegaría al “precio de equilibrio” identificado por el MINEM).

Cuadro N° 1

Sendero de precios del gas natural PIST para la demanda prioritaria abastecida por distribuidoras, quita de subsidios e incrementos en Patagonia. 2016-2022. En dólares por millón de BTU y porcentajes.

Período	Precio promedio ponderado en resto del país (USD/MMBTU)	Precio promedio ponderado en Patagonia (USD/MMBTU)	% de quita de subsidio	% Aumento en Patagonia (respecto semestre anterior)
Mar-16	1,29	0,16	98%	-
07-Oct-16	3,42	1,29	81%	706%
01-Abr-17	3,77	1,48	78%	15%
01-Oct-17	4,19	1,69	75%	14%
01-Abr-18	4,68	1,93	71%	14%
01-Oct-18	5,26	2,2	67%	14%
01-Abr-19	5,96	2,52	62%	15%
01-Oct-19	6,8	2,89	57%	15%
01-Abr-20	6,8	3,32	51%	15%
01-Oct-20	6,8	3,81	43%	15%
01-Abr-21	6,8	4,38	35%	15%
01-Oct-21	6,8	5,05	25%	15%
01-Abr-22	6,8	5,82	13%	15%
01-Oct-22	6,8	6,72	0%	15%

Fuente: Ministerio de Energía y Minería de la Nación.

¹⁰ Presentación realizada el 31 de marzo de 2017 por Juan José Aranguren, Ministro de Energía y Minería de la Nación, en el marco de la conferencia de prensa para presentar la modificación tarifaria correspondientes a los usuarios abastecidos por distribuidoras. Disponible en <https://www.minem.gob.ar/prensa/26159/se-anunciaron-cambios-en-la-tarifa-de-gas-natural>. Último acceso: 12 de mayo de 2018.

Asimismo, también buscó “normalizar” las licencias de transporte y distribución respecto a las Actas Acuerdo de renegociación y avanzar hacia la realización de la RTI, para la cual se realizaron distintas Audiencias Públicas. Más allá de lo discutido en las mismas, el MINEM mantuvo su propuesta inicial de quita de subsidios e incremento tarifario, implementándose en tres etapas: abril de 2017, diciembre de 2017¹¹ y abril de 2018.

Sin embargo, diversos amparos judiciales detuvieron la implementación de los nuevos cuadros tarifarios (al igual que lo sucedido en 2014). Hacia mediados de mayo de 2016, la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Isabel Yáñez, hizo lugar al recurso de amparo presentado por tres concejales de Río Gallegos, resolviendo ordenar “la inmediata suspensión de los efectos de la Resolución 28/16 del Ministerio de Energía de la Nación en Santa Cruz” por la cual se estableció el incremento en las tarifas de gas (Diario El Patagónico, 21 de mayo de 2016). En la provincia de Chubut, a los pocos días del fallo en Santa Cruz, el juez federal de Rawson, Hugo Ricardo Sastre, ordenó suspender la aplicación del aumento de la tarifa del gas dispuesto para todos los usuarios de la Provincia de Chubut, expidiéndose a favor de una solicitud de medida cautelar presentada por el Gobernador Mario Das Neves, el Fiscal del Estado, Diego Martínez Zapata y el Defensor del Pueblo de Chubut, Héctor Simionati, contra el Estado Nacional, el Ministerio de Energía, ENARGAS y CGS. En la resolución, el magistrado ordenó: suspender el cobro de las facturas de gas emitidas según el nuevo cuadro tarifario; que no se apliquen cortes en el suministro de gas por falta de pago; re-facturar las boletas ya emitidas aplicando el cuadro tarifario anterior; y que se compensen en las próximas facturas a los usuarios que ya las hubiesen pagado con los aumentos (Diario El Diario de Madryn, 23 de abril de 2016). Asimismo, hacia finales de ese mismo mes, y en sintonía con Santa Cruz y Chubut, el juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete, hizo lugar al recurso de amparo presentado por representantes de la Cooperativa Metalúrgica Renacer, una fábrica que fue recuperada por los operarios de la ex Aurora Grundig, y determinó la suspensión del aumento de tarifas y le ordenó a Camuzzi Gas del Sur que emita “nuevas facturas de conformidad con el cuadro tarifario anterior” (Diario Clarín, 31 de mayo de 2016).

Como respuesta a los amparos aceptados y a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el incremento del precio de gas natural, en junio de 2016 el ENARGAS estableció un límite en el incremento del importe final a facturar a los usuarios residenciales y comerciales del 400% y 500% respectivamente respecto del valor que hubiera correspondido facturar aplicando, al consumo del período actual, el cuadro tarifario vigente al 31 de marzo de 2016. En este contexto, un año después de la primera asistencia transitoria, el ENARGAS informó al MINEM la necesidad de constituir un nuevo subsidio en la forma de asistencia económica transitoria para cada una de las distribuidoras por un total de 3.450 millones de pesos (Resolución N°

¹¹ Único período de todo el sendero de incrementos propuesto por el Poder Ejecutivo que no se realiza en octubre sino en diciembre, ya que el gobierno buscó evitar que la discusión tarifaria sea utilizada por la oposición durante la campaña de las elecciones de mitad de mandato.

312/2016), en las cuales CGS recibiría 438 millones de pesos (Camuzzi Pampeana recibiría otros 570 millones).

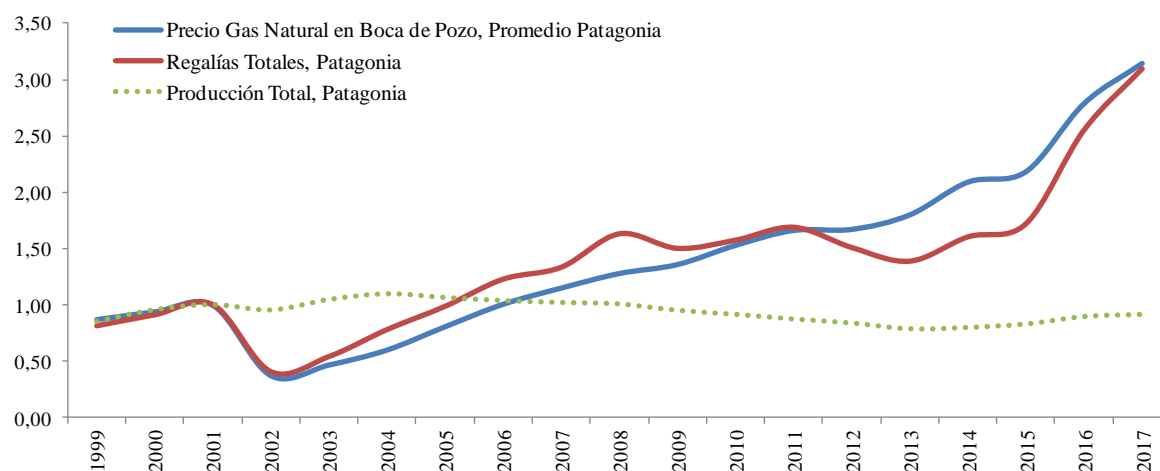
Más allá de los imponderables que fue encontrando el proceso de incremento tarifario de la alianza Cambiemos, la actualización continuó durante 2017 y comienzos de 2018 (meses de escritura de este texto). A comienzos de 2018, la oposición política al partido de gobierno logró aprobar un proyecto en el Congreso Nacional para congelar los incrementos programados para 2018 y retrotraer los cuadros tarifarios a los vigentes en diciembre de 2017, sin embargo, el proyecto terminaría siendo vetado por el Poder Ejecutivo Nacional al día siguiente de la aprobación parlamentaria. Esta situación es el emergente de la relevancia para la política nacional que tienen las discusiones de los impactos tanto fiscales como en el poder adquisitivo de los asalariados del programa de “sinceramiento” de los precios de la energía impulsado desde el gobierno nacional.

Resultados sobre los precios, las tarifas y el consumo (1999-2017)

Al analizar la evolución de mediano plazo de algunos indicadores relevantes de la industria gasífera, se aporta evidencia que permite comprender la dinámica y algunos de los principales conflictos tarifarios en la cadena gasífera y sus especificidades patagónicas. Para comprender el segmento de la distribución de gas natural y la relación entre el Estado y CGS, resulta conveniente vincular la evolución tarifaria con uno de sus componentes centrales, que es el precio del gas natural en boca de pozo. Como se desprende del Gráfico N° 1, las regalías totales percibidas por las provincias patagónicas han evolucionado positivamente junto con el incremento del precio del gas natural, ambos medidos en dólares corrientes. Esto significó un incremento de recaudación para las provincias patagónicas de 3,9% anual acumulativo entre 2001 y 2015, apalancado por el incremento de 5,1% anual del precio de gas, ya que en el mismo período hubo una caída de 1,3% en la producción local de este fluido.

Gráfico N° 1

Evolución del precio promedio en dólares de gas natural en boca de pozo, de las regalías totales en dólares y de la producción de gas natural en metros cúbicos. Región Patagónica. 1999-2017. Año Base 2001 igual a 1.



Fuente: elaboración propia en base a información del Ministerio de Energía y Minería de la Nación.

Es decir que mientras en 2001 el precio en boca de pozo promedio país era de 1,62 dólares por millón de BTU, hacia finales de 2015 el mismo era de 3,54 dólares, situación que posibilitó incrementar la recaudación de las provincias en un contexto de caída de la producción local. Esta dinámica (precios en alza y producción en declino) se extendió hasta la expropiación de YPF y la implementación del Plan Gas en 2012, que logró revertir el declino de una década de la producción de gas natural (Serrani y Barrera, 2018).¹²

En efecto, en un contexto de deterioro de la producción local producto de la dinámica de un sector organizado alrededor de la iniciativa de la empresas privadas como producto de las reformas estructurales de la década anterior (Serrani y Barrera, 2018; Serrani, 2012 y 2013), el incremento del precio en boca de pozo significó un mecanismo de financiamiento para las provincias patagónicas por la vía de las regalías gasíferas. Estos efectos se acrecentaron en los años siguientes, en tanto la tendencia de los tres indicadores tuvo una evolución positiva desde 2014. Producto de la política fiscal de reducción de subsidios a la producción gasífera implementada por la alianza Cambiemos, el precio en boca de pozo creció 44% entre 2015 y 2017, pasando de 3,54 a 5,10 dólares por millón de BTU; la producción, luego de una caída constante entre 2004-2013, comienza a recomponerse como producto del Esquema de Racionalización del Uso de Gas Natural de 2014 y entre 2015-2017 presenta un incremento de 10% en la Patagonia, pasando de 88,2 a 96,9 millones de metros cúbicos día. En este sentido, la combinación de ambos procesos aumentó 80% la recaudación de regalías entre 2015-2017 (Gráfico N° 1).

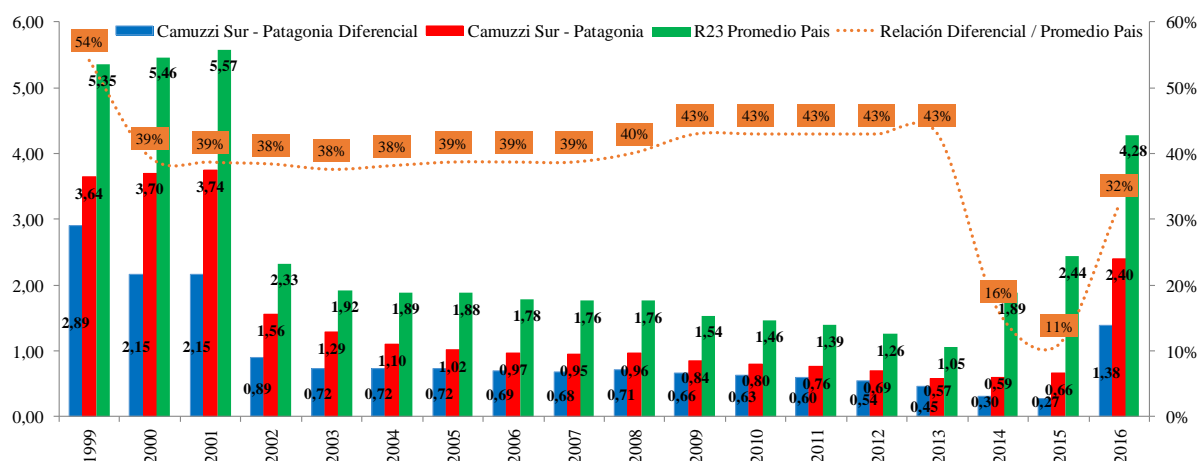
¹² La caída de la producción entre 2001-2012 fue del 16%. Pero si se toma desde 2004, año de mayor producción gasífera en la historia del sector, la pérdida de producción local fue de casi un cuarto respecto a la oferta local de 2012 (Gráfico N° 2).

Sin embargo, este proceso de incremento de los precios en boca de pozo sólo fue trasladado parcialmente a la tarifa de distribución de gas natural por redes: en 2002, 2004 y 2014 (excepto las regiones alcanzadas por el subsidio patagónico). La particularidad tarifaria de la Patagonia se observa en la evolución disímil entre la tarifa plena y la tarifa diferencial. Tomando un usuario de consumo medio (segmento R23) de CGS, desde 1999 hasta 2016 la tarifa diferencial de CGS representó en promedio 67% de su tarifa plena. Así, la tarifa diferencial para todo el período bajo análisis en promedio representó 38% de la tarifa R23 del promedio país; es decir, que un usuario patagónico pagó poco más de un tercio del valor unitario del que abonó un usuario promedio el mismo segmento en el resto del país (Gráfico N° 2). Al analizar la evolución a partir de 2002 se encuentran resultados similares. A partir del congelamiento tarifario entre 2004-2013 y de la actualización realizada en 2008 sobre la tarifa diferencial, mientras un usuario en la Patagonia pagaba 0,89 dólares por millón de BTU en 2002, en el resto del país se pagaba 2,33 en promedio, lo que significa que la tarifa diferencial promedio para un usuario de consumo medio en Patagonia significaba 38% de la del resto del país. Doce años más tarde en 2013, con la actualización sobre el diferencial de 2008 y a pesar de que el precio de la unidad de consumo disminuyó en dólares (0,30 y 1,05 dólares por millón de BTU, respectivamente), la relación sólo aumentó cinco puntos porcentuales, hasta llegar a representar 43% de la del promedio país (Gráfico N° 2).

Sin embargo, con el incremento tarifario de 2014 y el congelamiento del cuadro diferencial para CGS, se amplía la brecha entre la tarifa plena y la diferencial de CGS, pasando a representar sólo 11% de la tarifa promedio país en 2015, la más baja relación de los últimos 25 años.

Gráfico N° 2

Evolución de la tarifa plena y diferencial de CGS y de la tarifa promedio país para usuarios de consumo medio (segmento R23). Argentina. 1999-2016. En dólares por millón de BTU, sin impuestos y relación porcentual.



Fuente: elaboración propia en base a cuadros tarifarios publicados por el ENARGAS.

La política implementada a partir de diciembre de 2015 por el gobierno de la alianza Cambiemos implicó una quita escalonada de subsidios que impactó en la evaluación tarifaria, esta vez incluyendo a la Patagonia a partir de un fuerte incremento tanto de la tarifa plena como en la diferencial: mientras la primera se incrementó 265% respecto a 2015 (pasando de 0,66 a 2,40 dólares por millón de BTU), la segunda lo hizo en 418% (de 0,27 a 1,38 dólares por millón de BTU), cuando el incremento tarifario en el resto del país fue bastante menor, de 75% (de 2,44 a 4,28) (Gráfico N° 2). Esta disparidad tiene sentido en la lógica del programa de incrementos tarifario propuesto por el gobierno nacional, que busca que todos los usuarios del servicio público del país, independientemente de su consumo, paguen un mismo precio de gas natural en la tarifa final (excepto tarifa social). Es decir, al no haberse incrementado las tarifas diferenciales en 2014 en la Patagonia y al tener precios diferenciales en el componente del gas natural de la tarifa de distribución respecto al resto del país, en este programa del MINEM la velocidad de incrementos en la Patagonia debe ser mayor a la del resto del país para que en 2022 confluyan al precio objetivo de 6,78 dólares por millón de BTU (precio previsto en 2019 para el resto del país). En este sentido, si hacia finales de 2015 la tarifa diferencial en Patagonia llegó a presentar 11% del valor de la unidad respecto a la tarifa del promedio país, a finales de 2016 ésta había escalado hasta llegar a significar 32% (Gráfico N° 2).

En efecto, al analizar la evolución de la tarifa diferencial para un usuario de consumo medio, en este caso del segmento de consumo R31, desde el final del gobierno kirchnerista y durante el primer año de la Alianza Cambiemos, se pueden observar los impactos en las distintas provincias patagónicas. Como producto del virtual congelamiento tarifario a partir de 2008, sumado a que en 2014 la tarifa diferencial no fue aumentada, el primer ajuste semestral implementado por el gobierno de la alianza Cambiemos significó un incremento promedio en dólares de 680% para la tarifa de los usuarios R31 patagónicos.¹³ Medida en dólares por millón de BTU, el incremento unitario de la tarifa diferencial no tuvo incrementos porcentuales disímiles entre las distintas provincias, aunque sí se observan impactos en el precio final. Siempre a partir de un usuario R31 y sus respectivos segmentos de consumo para cada provincia, Neuquén presenta el precio promedio más elevado de la región, ya que si en 2015 era de 0,52 dólares por millón de BTU, este pasó a 4,43 (incremento de 759%). Por su parte, Río Negro tiene el precio más bajo (paso de 0,32 a 2,73, incremento de 744%), mientras que Chubut presentó el menor incremento porcentual (564%) pasando de 0,56 a 3,75 dólares por millón de BTU (Gráfico N° 3).

Sin embargo, luego de la judicialización del incremento en 2016, de las directrices de la Corte Suprema de Justicia y de la limitante en porcentajes para los incrementos en la factura final dispuesto por el ENARGAS a dirección del MINEM, en los cuadros tarifarios presentados en el segundo semestre de 2016 la tarifa diferencial cayó 63% para un usuario R31 promedio patagónico, pasando de 4,06

¹³ Medido en pesos corrientes, el incremento promedio fue de 1.144% entre abril de 2016 y 2015, guarismo que circuló en la prensa especializada por aquellos días.

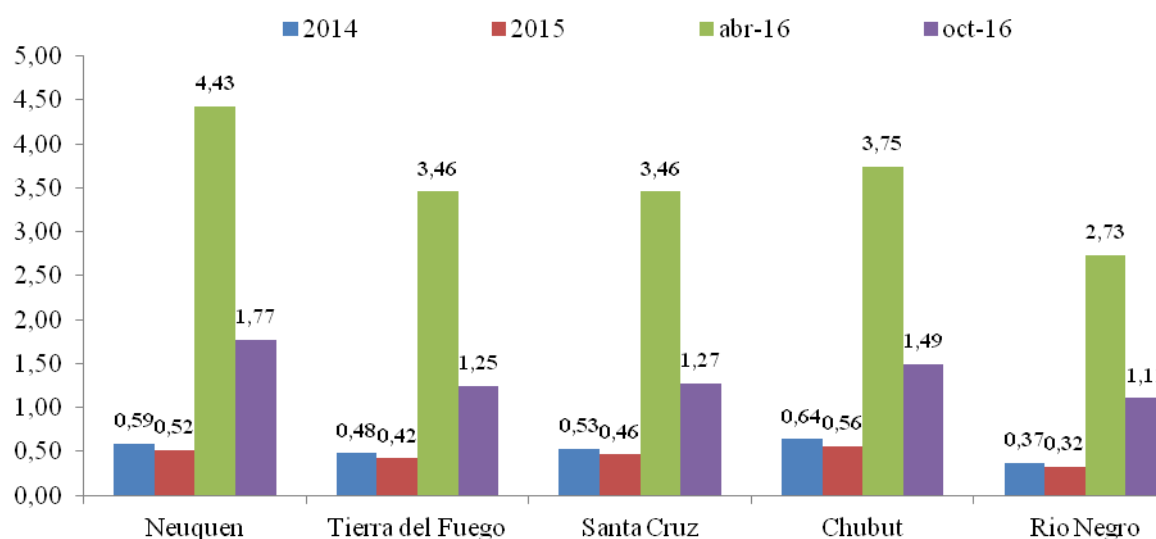
dólares por millón de BTU en abril de 2016 a 1,51 a partir de octubre de ese año (Gráfico N° 3).

En este sentido, aun con un incremento de 172% respecto al promedio de la tarifa diferencial patagónica de 2015, el retroceso en el aumento tarifario significó una disminución significativa en el impacto sobre el gasto en el servicio de gas natural residencial de los usuarios patagónicos. Sólo a fines ilustrativos, si se tomara en consideración la factura final de un usuario R31 de Tierra del Fuego, que consumió 4.000 metros cúbicos en su período bimestral de invierno, en 2015 hubiese pagado 579 pesos, 7.552 pesos en abril de 2016 (1.204%) y en octubre de 2016 la factura bimestral hubiese llegado hasta los 2.726 pesos (+371% respecto a 2015 y -64% respecto a abril de 2016). Tomando el mismo ejemplo para el caso de Chubut, pero con un consumo bimestral de 2000 metros cúbicos, en 2015 hubiese pagado 386 pesos, en abril de 2016 la factura hubiese sido de 4.087 pesos (+959) y en octubre, 1.627 pesos (+322 respecto a 2015 pero -60% contra abril de 2016).

Anualizando el gasto en pesos corrientes, respecto a la tarifa vigente en 2015 ese usuario R31 fueguino tendría que haber destinado 5.368 pesos adicionales de aplicarse el cuadro tarifario de octubre de 2016, pero con el cuadro de abril de 2016, los ingresos anuales adicionales necesarios para cubrir el mismo consumo hubiesen alcanzado los 12.065 pesos. En el caso del usuario R31 chubutense, los ingresos anuales adicionales necesarios para afrontar el mismo consumo con el cuadro de octubre de 2016 hubiesen sido 2.952, mientras que con el cuadro de abril de 2016 hubiera sido necesario destinar 5.839 pesos anuales adicionales.

Gráfico N° 3

Evolución de la tarifa diferencial de CGS según provincias patagónicas. Argentina. 2014, 2015, abril de 2016 y octubre de 2016. En dólares por millón de BTU, sin impuestos.



Fuente: elaboración propia en base a información del ENARGAS.

Por último, resulta pertinente entender la evolución del consumo en el marco de las transformaciones tarifarias de las últimas dos décadas. En efecto, al no trasladarse el incremento del precio del gas natural a la tarifa de distribución (hasta 2014 en el resto del país y hasta 2016 en la Patagonia), esta decisión política es un elemento sustantivo para comprender la evolución del consumo gasífero residencial, en el marco de un conjunto extendido de comentarios que buscan presentar la política de subsidios como el vector que explica la declinante oferta local de gas natural y/o los cortes en el suministro por un “derroche” o “despilfarro energético” causado por el “abuso en el consumo de gas”. La política pública que busca reducir el déficit fiscal a partir de quitar los subsidios a la energía es impulsada por el MINEM, pero tiene al Presidente de la Nación como protagonista, quien además de los reiterados comentarios informales, en una nota de su autoría publicada en el Diario El Litoral afirmó que:

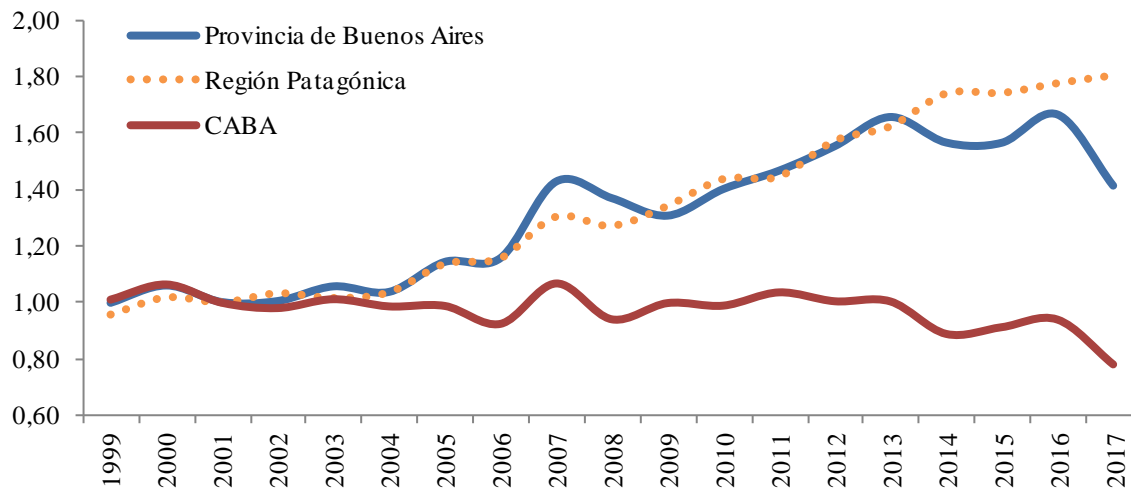
Durante años nos hicieron creer que el gas y la electricidad eran gratis, que los subsidios eran un regalo, que el derroche no tenía costo. El subsidio a la energía era tan imprudente que, por ejemplo, un hogar humilde pagaba lo mismo que un departamento que consumía dos, tres, cuatro veces más. Incoherencias como ésta hicieron que se haya llegado al extremo de calefaccionar veredas con lozas radiantes en algunas ciudades del sur del país, mientras había otras como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires donde miles de personas sufrían los cortes de luz durante días. El sistema era irresponsable, cortoplacista, y nos llevó al límite (Diario El Litoral, 29 de mayo de 2018).

La evolución del consumo residencial muestra que, desde 2001 el consumo patagónico estuvo en sintonía con el de la provincia de Buenos Aires (PBA), siendo muy superior al presentado en CABA (Gráfico N° 4). En este sentido, entre 2001 y 2013 (año anterior al incremento de tarifas) el aumento anual de consumo fue de 4,3% y de 4,1% para Buenos Aires y Patagonia, respectivamente, mientras que en CABA el consumo se mantuvo estable entre puntas.¹⁴ Con posterioridad al incremento tarifario de 2014 y con el sendero de incrementos propuestos a partir de 2016, se evidencia una reducción del consumo residencial en 2017 respecto a 2014 en la PBA de 9,8% y en CABA de 12,4%, mientras que en la Patagonia aumentó 3,7% (Gráfico N° 4). Si se pudieran aislar los efectos climáticos en este comportamiento, podría considerarse como hipótesis que ese excedente de consumo en la Patagonia se explica por efecto del congelamiento tarifario con posterioridad al 2014, y por la revisión en octubre de 2016 del incremento en la tarifa diferencial de abril de ese año (caída de 63% para los usuarios R31 patagónicos).

¹⁴ Con un pico de consumo en 2007, año muy frío en todo el país que incluso hiciera nevar en CABA el 9 de julio de 2007, suceso que no ocurría desde 1918.

Gráfico N° 4

Evolución del consumo residencial total de gas natural en regiones y provincias seleccionadas. Argentina. Año Base 2001 igual a 1.

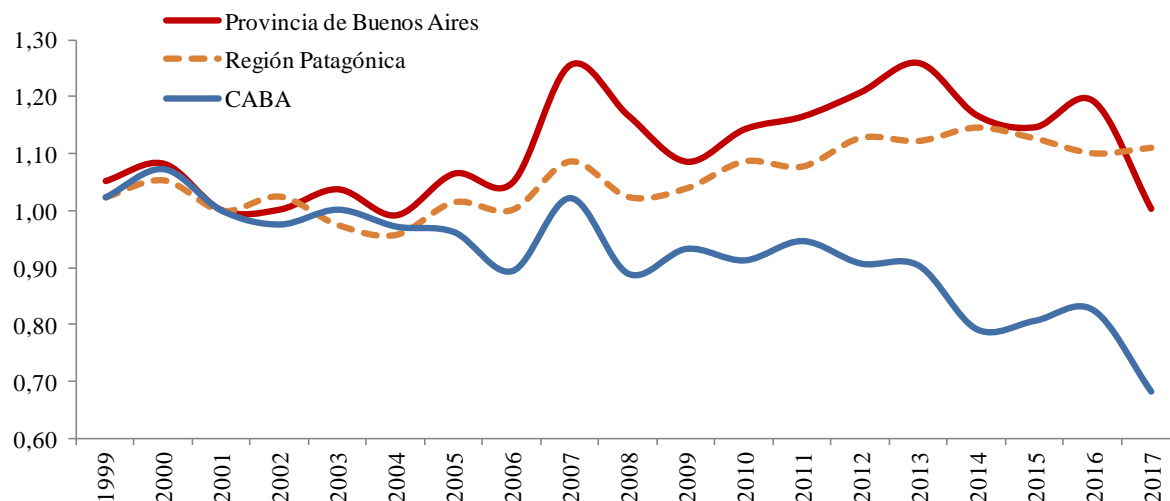


Fuente: elaboración propia en base a información del ENARGAS.

Sin embargo, al observar la evolución del consumo residencial por usuario, se encuentran una serie de matices interpretativos a la lógica argumental sostenida actualmente, de que los subsidios energéticos llevaron implícitamente prácticas de derroche energético que terminaron generando “un sistema irresponsable”. Sobre todo, porque permite despejar la relación de si la necesidad de aumentar la oferta interna para satisfacer la creciente demanda se debe a un incremento del consumo por hogar o al aumento de los hogares conectados a la red (o quizás a una combinación de ambos).

El contraste de la evolución del consumo residencial por usuario conectado al sistema de distribución marca una trayectoria divergente entre CABA y la Región Patagónica: mientras en la primera el consumo por usuario cayó 0,8% anual acumulativo entre 2001 y 2013, en la segunda creció 1% anual (Gráfico N° 5). Sin embargo, por las características climáticas (mayor frío) y por las particulares propias de los hogares (hogares con más metros cuadrados por usuario para calefaccionar) parece conveniente comparar a la Región Patagónica con la PBA antes que con CABA. Al hacer esta comparación entre 2001-2013, se evidencia que la PBA tuvo un incremento superior al Patagónico de consumo por usuario, llegando a representar una variación de 1,9% anual (Gráfico N° 5).

Gráfico N° 5
Evolución del consumo residencial por usuario de gas natural en regiones y provincias seleccionadas. Argentina. Año Base 2001 igual a 1



Fuente: elaboración propia en base a información del ENARGAS.

Sin embargo, con posterioridad a 2014, la variación del consumo por usuario presentó una caída en las tres zonas: CABA con 3,6%, PBA con 3,7% y aunque bastante menor, en Patagonia cayó 1% anual (Gráfico N° 4). Pero si se analiza especialmente el impacto de la quita de subsidios implementada por el gobierno de Cambiemos en el consumo por usuario, los efectos son contundentes en la caída del consumo tanto CABA (-17%) como en la PBA (-16%), aunque no así en la Patagonia, que se mantuvo estable con una leve tendencia alcista.

Palabras finales

Las reformas estructurales implementadas durante la década de 1990 llevaron implícitas una sustantiva transformación en la organización de los servicios públicos que conjugó desregulación sectorial y privatización de las empresas estatales, con una transferencia de la lógica de organización del sector a los agentes de mercado por la vía de la regulación tarifaria que combinó los efectos del *pass through* y del *price-cap* en la tarifa final de la distribución de gas natural por redes.

En este contexto, suele argumentarse que los conflictos alrededor de las tarifas de los servicios públicos comenzaron con posterioridad a la sanción de la Ley de Emergencia Pública de 2002, contexto en el cual primero se pesifican y luego virtualmente quedan congelados los mecanismos de actualización en relación tanto a los coeficientes de eficiencia como de inversión y la actualización por la variación en los índices de inflación internacionales (PPI). Sin embargo, las transformaciones en el marco regulatorio y el análisis de la cambiante relación entre la orientación de la intervención del Estado y el comportamiento empresario de CGS permite ejemplificar que los conflictos propios del servicio de distribución gasífera

comenzaron un tiempo antes de la mencionada ley (aunque sin duda que con posterioridad a 2002 los mismos se agudizaron).

Un primer gran conflicto se dio alrededor de los mecanismos para solucionar la brecha entre la tarifa plena y la diferencial en el largo plazo. Las disputas alrededor del financiamiento del subsidio patagónico encontró una salida que no está habilitada por el marco regulatorio vigente, ya que el mismo es un subsidio cruzado en donde los usuarios de una parte del país pagan un cargo extra-tarifario para financiar la tarifa subsidiada de los usuarios de otras regiones del país. Sin embargo, en un contexto de políticas neoliberales de austeridad, pero con especial énfasis en los últimos años al calor de la crisis sistémica de la convertibilidad cambiaria, la salida encontrada fue trasladar el peso económico del subsidio al resto de los usuarios del país. Con posterioridad a la crisis de 2001-2002 no sólo se agravaría la tensión alrededor del subsidio patagónico, sino que se sucedieron un conjunto de conflictos alrededor de los precios de los servicios públicos, que produjeron serios problemas en la cadena de pago y en el abastecimiento del sector gasífero. Estas disputas entre las empresas privatizadas, las productoras gasíferas y el Estado nacional se extenderían durante casi una década entre 2004-2014, alrededor del proceso de renegociación de las Actas Acuerdo del marco transitorio hacia la sanción de la definitiva RTI.

Sin embargo, sobre la discusión que se plantea públicamente respecto a la linealidad entre subsidios energéticos y derroche de consumo, la evidencia empírica presenta matices necesarios de ser considerados para un análisis integral de la temática. Desde una aproximación exploratoria, este trabajo ha encontrado que a pesar de que la tarifa diferencial de un usuario de consumo medio representó en promedio 38% la tarifa del resto del país, en todo este proceso no se observa un incremento superior en la evolución del consumo por usuario en la Patagonia respecto a la PBA (aunque si respecto a CABA). Esta evidencia en principio permitiría relativizar, o al menos matizar, las afirmaciones que sostienen que la ampliación de la brecha entre un consumo global creciente del sistema y una oferta local decreciente, se explica necesariamente por el derroche del consumo residencial, que al estar fuertemente subsidiado, permitió un crecimiento desmedido. Sin embargo, si bien el incremento tarifario de 2014 estuvo minado en su implementación por una serie de recursos de amparos abalados judicialmente, la particularidad patagónica permite interpretar que al no ser trasladado a la tarifa diferencial, asociado a la revisión en octubre de 2016 del incremento en dólares de 680% de abril de 2016, ambos factores podrían servir como hipótesis explicativa de una parte del excedente de consumo por usuario evidenciado entre 2014-2017 en la Patagonia respecto de Buenos Aires y de CABA.

El definitiva, de acuerdo al sendero de precios del gas natural para el consumo residencial (y comercial, que aunque aquí no ha sido trabajado, correría la misma suerte) que el gobierno nacional ha determinado hasta 2022 en la Patagonia, que está dolarizado y refleja el promedio de la paridad de importación que Argentina afrontó en 2016: ¿es posible que la población, que tiene un uso intensivo del recurso público por cuestiones climáticas, afronte un incremento de 4.100% en el costo del gas natural distribuido en seis años, sin que eso implique una reducción de consumo que ponga

en riesgo tanto el acceso al servicio público como la estabilidad de largo plazo de la cadena de pago? Y en esta dirección, ¿es posible sostener que este incremento no va a afectar el nivel de actividad de las pequeñas y medianas empresas y emprendimientos, que son fundamentalmente los que mayor empleo demandan en el país? Son preguntas que hasta ahora, el actual gobierno nacional evita responder públicamente.

Bibliografía

- Azpiazu, D. (2003). *Las privatizaciones en la Argentina. Diagnóstico y propuestas para una mayor competitividad y equidad social*. Buenos Aires, Fundación OSDE.
- Basualdo, E. (2006). *Ensayos de historia económica argentina. Deuda externa y sectores dominantes desde mediados del siglo XX a la actualidad*, Buenos Aires. Siglo XXI Editores.
- Barrera, M., Sabbatella, I. y Serrani, E. (2012). *Historia de una privatización: Cómo y por qué se perdió YPF*. Buenos Aires, Capital Intelectual.
- Castellani, A. (2009). *Estado, empresas y empresarios. La conformación de ámbitos privilegiados de acumulación entre 1966 y 1989*. Buenos Aires, Editorial Prometeo.
- Chisari, O.; Estache, A. y Romero, C. (1999). "Winners and Losers from Utility Privatization: Lessons from a General Equilibrium Model of Argentina". *The World Bank Economic Review*, N° 13 (2).
- Gerchunoff, P., Greco, E., y Bondorevsky, D. (2003). "Comienzos diversos, distintas trayectorias y final abierto: más de una década de privatizaciones en Argentina, 1990-2002". Documento 34, Serie Gestión Pública. Santiago de Chile, CEPAL.
- Gerchunoff, P. y Cánovas, G. (1995). "Privatizaciones en un contexto de emergencia económica". *Desarrollo Económico*, N° 34:136.
- Kozulj, R. (2000). "Resultados de la reestructuración de la industria del gas en la Argentina". Documento 14, Serie Recurso Naturales e Infraestructura. Santiago de Chile, CEPAL.
- Littlechild, S. (1983). *Regulation of British Telecommunications' Profitability: Report to the Secretary of State*. Great Britain, Department of Industry.
- FLACSO (1998). *Privatizaciones en la Argentina: Marcos regulatorios tarifarios y evolución de los precios relativos durante la convertibilidad*. Buenos Aires, FLACSO
- Novaro, M. y Palermo, V. (1996). *Política y poder en el gobierno de Menem*. Buenos Aires, Editorial Norma.
- Pucciarelli, A. (2006). "Introducción: La contradicción democrática", en Alfredo Pucciarelli (coord.), *Los Años de Alfonsín. ¿El poder de la democracia o la democracia del poder?* Buenos Aires, Siglo XXI Editores
- Pucciarelli, A. y Castellani A. (2014). *Los años de la Alianza. La crisis del orden neoliberal*. Buenos Aires, Siglo XXI Editores.
- Schvarzer, J. (1998): *Implantación de un modelo económico. La experiencia argentina entre 1975 y el 2000*. Buenos Aires, AZ Editora.

- Serrani, E. (2012). *Estado, empresarios y acumulación privilegiada de capital. Análisis de la industria petrolera argentina (1988-2008)*. Tesis para optar por el Doctorado en Ciencias Sociales. Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires.
- Serrani, E., (2013). América Latina y su política petrolera frente a las últimas tendencias internacionales. Perspectivas regionales a partir del análisis de Brasil y Argentina. *Foro Internacional*, LIII, pp.182-213.
- Serrani, E. y Barrera, M.A. (2018). "Los efectos estructurales de la política energética en la economía argentina, 1989-2014". *Revista Sociedad y Economía*, No 34 (enero-jun. 2018), pp. 121-142.
- Sidicaro, Ricardo (2001): *La crisis del Estado y los actores políticos y socio-económicos en la Argentina (1989-2001)*. Buenos Aires, Libros del Rojas, UBA
- UNIREN (2005). Informe de Justificación de la Propuesta de Carta de Entendimiento UNIREN – Camuzzi Gas del Sur. Disponible en http://www.uniren.gob.ar/audiencias_publicas/inf_jus_sur.pdf. Último acceso: 22 de abril de 2018.

Fuentes

- Estados contables de Camuzzi Gas del Sur, años 1999, 2000, 2001 y Enero-Septiembre de 2002. Comisión Nacional de Valores de la República Argentina. Disponible en: <http://www.cnv.gov.ar/sitioWeb/Empresas>. Último acceso: 14 de mayo de 2018
- Diario Clarín.
- Diario La Nación.
- Diario Página/12.
- El Diario de Madryn.
- Diario El Patagónico.



Producción y sostenimiento de la vida en Comodoro Rivadavia Notas sobre la participación femenina en la economía extractiva hidrocarburífera¹

Renata Hiller², Belén Aguinaga³, Natalia Barrionuevo⁴ y Paolo Paris⁵

Resumen

El artículo presenta los principales lineamientos teórico-metodológicos del Proyecto "Economía hidrocarburífera extractiva y relaciones de género. Trabajo femenino en la Cuenca del Golfo San Jorge" desarrollado en la Universidad Nacional de la Patagonia (UNPSJB), en el ámbito del Centro de Investigación y Transferencia Golfo San Jorge del CONICET. A partir de los aportes del feminismo materialista y la economía feminista se reconsideran los conceptos de *trabajo* y *producción*. Se presenta una serie de datos estadísticos que permite cuestionar y comprender de otra manera cómo se produce y reproduce la vida en Comodoro Rivadavia, atendiendo a la heterogénea participación de las mujeres en la economía extractiva hidrocarburífera.

Palabras clave

economía feminista – trabajo no remunerado – industria petrolera

Abstract

The article presents the main theoretical-methodological guidelines of the Research Project "Extractive hydrocarbon economy and gender relations. Women's work in Cuenca del Golfo San Jorge" developed at Universidad Nacional de la Patagonia (UNPSJB), within the Centro de Investigación y Transferencia Golfo San Jorge of CONICET. From the contributions of materialist feminism and feminist economics, the concepts of work and production are reconsidered. A series of statistical data is presented in order to question and understand in another way how life is produced and reproduced in Comodoro Rivadavia, taking into account the heterogeneous participation of women in the extractive hydrocarbon economy.

Keywords

feminist economics – unpaid work – oil industry

¹ El trabajo forma parte del Proyecto 1365/17 "Economía hidrocarburífera extractiva y relaciones de género. Trabajo femenino en la Cuenca del Golfo San Jorge" financiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNPSJB. Agradecemos los comentarios de los evaluadores y de Natalia Escobar Váquiro.

² CONICET CIT Golfo San Jorge/UNPSJB. Contacto: renhillier@gmail.com

³ Maestranda en Trabajo Social, FHCS/UNPSJB. Contacto: belenaguinaga2015@gmail.com

⁴ Docente-investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNPSJB. Contacto: barrionuevonatalia.s@gmail.com

⁵ Docente-investigador de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la UNPSJB. Contacto: ppaolo_84@hotmail.com

El objetivo de la exposición que dio origen a este texto fue presentar a las y los asistentes del Taller Internacional *Recursos naturales y desarrollo local: Sostenibilidad, cohesión social y resiliencia* algunos de los lineamientos del Proyecto “Economía hidrocarburífera extractiva y relaciones de género. Trabajo femenino en la Cuenca del Golfo San Jorge”. También fue oportunidad propicia, de manera más general, para introducir y familiarizar a las y los colegas que nos visitaron en aquella oportunidad en lo que es la ciudad de Comodoro Rivadavia y nuestro trabajo cotidiano en la Universidad Pública local.

Así, lo primero que debiera decirse es que este proyecto de investigación no se deslinda del resto de las labores que la Universidad y el Centro de Investigación y Transferencia (CIT) Golfo San Jorge nos demandan. Nuestro horizonte apunta al conocimiento y comprensión sobre este particular territorio que es el Golfo San Jorge, en pos de contribuir a su desarrollo. Algunxs de nuestros colegas del CIT provenientes de otras disciplinas observan el Golfo como un espacio convexo, colocando su mirada en la “Pampa Azul”, los recursos marítimos, la flora y la fauna que habita el mar y sus costas. Otrxs⁶, en cambio lo vemos como un territorio cóncavo, concentrados en la producción hidrocarburífera que se desarrolla desde hace más de un siglo en el continente. El diálogo y la discusión respecto de qué entender por “desarrollo” y cómo mensurar sus dimensiones sociales, políticas, históricas, son parte aquel horizonte. De ahí que unos de los primeros interlocutores de nuestro trabajo pretendemos que sean aquellos colegas que abordan este mismo territorio (sus recursos naturales, sus propiedades biológicas, las herramientas tecnológicas para transformarlo) en pos de lograr un diálogo interdisciplinario rico y diverso.

Otrxs de nuestros interlocutores principales, y de los más inmediatos, son las y los estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. La integración entre docencia, investigación y la “extensión universitaria” es un interrogante constante en nuestro proyecto. Nos preguntamos cómo divulgar el conocimiento producido. Revisamos en el espacio de aula los presupuestos teóricos y epistemológicos que orientan la investigación. Este artículo y su publicación en la *Revista Identidades* es una apuesta por extender al conjunto de la comunidad universitaria de nuestra Facultad los lineamientos centrales de un trabajo que, de lo contrario, queda muchas veces encriptado en publicaciones académicas desconocidas para lxs estudiantes de grado.

⁶ Consideramos al lenguaje como una práctica, más que como un conjunto de reglas gramaticales, sintácticas o de cualquier otro orden (moral, racional). Con el feminismo, reconocemos la problemática invisibilidad que produce el lenguaje misógino. Pero a la vez, convivimos, escribimos y actuamos políticamente con ese lenguaje de manera “paradojal”, al decir de Wendy Brown (2000). Se espera que este artículo sea comprendido, que su lectura resulte inteligible y que los signos representen @lgun/a c*sx en la cabeza del lector. Si ello no sucede, fracasaría como práctica comunicativa. Por eso se decide una opción pragmática. Cuando es posible se adoptan fórmulas genéricamente neutras y de lo contrario, se usa el universal masculino o “las y los”. Finalmente, en algunos casos se acude al uso de la “x” como una tachadura que indica aquella condición paradojal ante el lenguaje, recordando que “su verdad es su no verdad” (Derrida, 1989: 151).

Así, una de las cosas que solemos mencionar en clase es la particular mirada que ofrecen las ciencias sociales. Asumido el giro hermenéutico, entendemos que la ciencia puede ofertar una mirada entre las tantas que conviven (en disputa) en la sociedad. En particular, nos interesa defender que esta mirada “torcida”/crítica, que incomoda - que lleva a Sidicaro (1992) a mencionar a la sociología como una “ciencia de la sospecha”, que invita a la desnaturalización de todo lo existente- puede ofrecer un conocimiento “útil”⁷ acerca de nuestra sociedad y los problemas contemporáneos que nos aquejan, así como para pensar soluciones alternativas.

En esta oportunidad, el desafío será analizar, en base a teoría, una serie de datos cuantitativos elaborados por agencias estatales (INDEC y otros). La estadística es sin duda un modo bastante particular de conocer el mundo: supone la posibilidad de generalizar y cuantificar la vida social, observando fenómenos de manera panorámica. Claro que dicha producción de los datos se sustenta en teorías (y muchas veces, prejuicios) que orientan qué y cómo indagar. La propuesta en este caso será reconocer la riqueza de la producción y disponibilidad de datos que hoy ofrecen las agencias públicas de estadísticas y censos, y su necesaria articulación con fundamentos teóricos que orienten su lectura y análisis. Entonces, ofrecer esta “mirada torcida” desde las ciencias sociales permitirá conocer de otro modo (y, ojalá, comprender mejor) la economía extractiva hidrocarburífera de nuestra región. Para eso, en lo que sigue se presentan los objetivos y lineamientos teóricos del proyecto, luego se analizan dos conjuntos/“paquetes” de datos disponibles: el módulo de trabajo doméstico no remunerado y trabajo voluntario implementado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en 2013 y una serie de datos sobre nivel de actividad y empleo privado registrado. Luego se comparten las estrategias de investigación conexas que pueden servir a la triangulación de aquellos datos, ofreciendo una mirada que permita complejizar el análisis tomando en consideración la perspectiva de las y los agentes. Hacia el final, compartimos algunas reflexiones que vuelven sobre el contexto espacial y temporal en que este trabajo fue presentado.

De la producción del petróleo al sostenimiento de la vida: problematizar el *trabajo* a partir de la teoría feminista materialista

La narrativa social y política, pero también gran parte de la producción científico académica suele contar a Comodoro Rivadavia (o a ese particular territorio del Golfo San Jorge que evoca nuestro CIT) como una tierra de *trabajo* y *producción*. El perfil económico de la Cuenca, centrado en la explotación extractiva hidrocarburífera determina formas específicas de comprender ambos términos. Y dichas formas están fuertemente vinculadas a los modos en que se organizan las relaciones de género.

Hablamos de una triple invisibilidad del trabajo de las mujeres: epistémica (qué se entiende por trabajo y producción), estadística (cómo y qué se mide en el empleo, cuáles son las fuentes de información disponibles) y a nivel del sentido

⁷ ¿Útil para quién? ¿Deben las ciencias sociales ser “útiles” y qué sería ello en todo caso? Interrogan varios como Lahire (2006) en el programa de la materia Sociología/Módulo en Ciencias Sociales, en que algunas de nosotras nos desempeñamos como docentes.

común (percepciones e imaginarios sociales) que operan simultáneamente. En conjunto, consolidan una verdad acerca de los vínculos entre mujeres, trabajo y producción en la región que se autocorroboran y sedimenta un piso del cual resulta difícil despegarse: aquel que coloca en polos casi opuestos a “las mujeres” y “la producción y el trabajo”, siendo este último uno de los principales asignadores de recursos (materiales y simbólicos) en cualquier sociedad, y en la comodoreña en particular.

Interesa entonces a nuestro proyecto historizar el mundo del trabajo petrolero en la Cuenca desde una perspectiva de género; esto es: asumiendo las relaciones entre varones y mujeres como un producto histórico y contingente, fruto y materia de relaciones de poder (Scott, 1993, Connell, 2001, entre otros)⁸. A su vez, describir y analizar el trabajo femenino (remunerado y no remunerado) y su participación en la economía hidrocarburífera de la Cuenca en los últimos años. Enseguida veremos la magnitud del trabajo doméstico que en general éstas realizan y también, cómo muchas veces incluso su participación en el mercado laboral remunerado resulta opacada. Finalmente, un tercer objetivo apunta a indagar sobre las características de las mujeres actualmente vinculadas a la actividad petrolera. Interesa conocer sobre sus trayectorias laborales, pero también sobre sus relacionamientos dentro y fuera del espacio laboral, en particular sus trayectorias familiares, conyugales y la participación y formación de organizaciones sociales, políticas o sindicales.

Para ello, nos servimos de los aportes que varios feminismos⁹ vienen planteado desde la década del setenta en torno a la conceptualización de los modos de producción y reproducción de la vida. En primer lugar, respecto de la invisibilidad epistémica de las tareas de cuidado y su conceptualización como “trabajo”: sea la definición de *trabajo* que se adopte, resulta difícil no admitir que las tareas de cuidado y reproducción de la vida que se desarrollan en el interior de los hogares conllevan un gasto de energía y consumo de tiempo asimilables a la fuerza de trabajo mercantilizada en los sistemas capitalistas. A su vez, ya los propios Marx y Engels refirieron la centralidad de la reproducción (del obrero) en la dinámica capitalista y, específicamente, en la determinación del salario (que no es otra cosa que la expresión de la lucha de clases) (Marx, 1973). Sin embargo, como señala Antonella Picchio, en los sistemas capitalistas no es tanto el trabajo doméstico el que permanece oculto, sino la relación que mantiene con la producción capitalista (Picchio, 1994).

Reintegrar estas actividades en el centro de la dinámica socioproductiva lleva a repensar que antes que el sostenimiento “de la industria”, “del precio del barril” o cualquiera de los otros términos con que solemos designar la dependencia local de

⁸ Un estado del arte crítico sobre la participación de las mujeres en la industria hidrocarburífera de la Cuenca del Golfo San Jorge en el siglo XX puede consultarse en Paris y Hiller (2016).

⁹ Como suele suceder en una perspectiva político académica tan fecunda como el feminismo, resulta siempre injusto referir solo uno o dos nombres propios. De ahí que por ejemplo Cristina Carrasco hable de un “debate sobre trabajo doméstico” que se dio a lo largo de una década. En nuestro caso, resultaron centrales las lecturas de las autodenominadas “feministas materialistas” (Caloz-Tschopp y Veloso Bermedo, 2012). Para una conceptualización del cuidado desde la perspectiva de las políticas públicas tal como aquí interesa, se recomienda la Introducción de Esquivel, Faur y Jelin (2012).

nuestra monoproducción, está el sostenimiento de la vida. En palabras de Cristina Carrasco

Centrarse explícitamente en la forma en que cada sociedad resuelve sus problemas de sostenimiento de la vida humana ofrece, sin duda, una nueva perspectiva sobre la organización social y permite hacer visible toda aquella parte del proceso que tiende a estar implícito y que habitualmente no se nombra. Esta nueva perspectiva permite además poner de manifiesto los intereses prioritarios de una sociedad, recuperar todos los procesos de trabajo, nombrar a quiénes asumen la responsabilidad del cuidado de la vida, estudiar las relaciones de género y de poder y, en consecuencia, analizar cómo se estructuran los tiempos de trabajo y de vida de los distintos sectores de la población (Carrasco, 2003: 5).

Garantizar el sostenimiento de la vida conlleva un sinnúmero de actividades que demandan tiempo (limpiar la casa, asear y arreglar ropa, realizar compras, preparar y cocinar alimentos, realizar tareas de mantenimiento del hogar, acompañar y ayudar en las tareas escolares, asearse y asear a otros que dependen de nosotros) y otras tantas en las que el tiempo “se pierde” (buscar precio, hacer trámites, llevar y traer cosas y personas...). A su vez, ofrecer cuidados a otro/as es ofrecer un mundo más “vivable”. Nadie puede sobrevivir sin ser cuidado, indican Valeria Esquivel, Eleonor Faur y Elizabeth Jelin para resaltar la centralidad de estas actividades que “incluyen todo lo que hacemos para mantener, continuar y reparar el mundo en que vivimos, haciéndolo lo mejor posible (Tronto 1993 en Esquivel, Faur y Jelin, 2012: 17).

Hablamos entonces del cuidado de bebés y niños, del cuidado de ancianas y personas con enfermedades prolongadas, o que “requieren asistencia”; pero también cuidamos de quienes “no la requieren”: el trabajo doméstico la mayoría de las veces incluye la reproducción social de varones adultos sanos, en algunos casos *ultraproductivos*. Lo vemos en las esposas de importantes actores de la economía local (gerentes, empresarios, cargos jerárquicos en la industria petrolera) que realizan enormes tareas de producción y reproducción de ese varón ultra-productivo que es su marido, y que algún día deberán ser sus hijos. Que aprendan idiomas, que sostengan una alimentación balanceada y acorde a los requerimientos de cada uno de los integrantes del hogar: que los chicos coman “sano” y que el señor tras sus 9, 14 o 3 horas de trabajo, pueda también hacer *crossfit* sin morir en el intento. En su tarea de señalar la familia como “herramienta de la producción” en el mundo de las empresas internacionales petroleras, Alejandra Boschetti (2010) refiere:

El trabajo doméstico y de cuidado realizado por mujeres produce bienes y servicios no destinados al mercado (y por ello desvalorizados) pero básicos y esenciales para que el mercado funcione. Implica no solo la reproducción y subsistencia biológica, sino también el bienestar, la calidad de vida, los

afectos, las relaciones, etc., es decir todo aquello que hace que seamos personas. Esta actividad básica para la reproducción de la fuerza de trabajo y el mantenimiento de personas saludables, con estabilidad emocional, seguridad afectiva, capacidad de relación y comunicación, etc., características humanas sin las cuales sería imposible el funcionamiento de la esfera mercantil capitalista, permite el desplazamiento de costes desde la esfera capitalista hacia la esfera doméstica (Boschetti, 2010: 6).

Entender como *trabajo* estas tareas, trajines, pasiones que cotidianamente realizan mayoritariamente las mujeres permite “colocar de lleno a las mujeres en la definición del capitalismo” (Rubin, 1996: 39). A su vez (en un giro muy caro a los feminismos en general) la corriente materialista procura radicalizar el materialismo histórico del cual se nutre para analizar las relaciones sociales de producción. Lo que ingresa como “producción” en estas corrientes pueden ser tanto bienes, como servicios o personas. Eso permitirá por ejemplo a Paola Tabet considerar los “intercambios económico sexuales” que suceden no solo en los espacios prostibulares, sino también puertas adentro del hogar conyugal, colocando de relieve la imbricación entre la gestión de la sexualidad, la división sexual del trabajo y el desigual acceso a los recursos (Tabet, 2012).

En síntesis, en términos epistemológicos para estas corrientes de la teoría feminista el *trabajo* siempre tuvo las características que varixs autores encuentran en el actual posfordismo: flexible, a tiempo completo, con necesidad de adaptación a los tiempos, que insume “alma y cuerpo” del trabajadorx (Virno, 2003). Cerrando nuevamente con Carrasco:

Estas actividades no valoradas -que incorporan una fuerte carga subjetiva- son precisamente las que están directamente comprometidas con el sostenimiento de la vida humana. (...) Actividades que incluyen la alimentación, el afecto y, en ocasiones, aspectos poco agradables, repetitivos y agotadores, pero absolutamente necesarios para el bienestar de las personas. Un trabajo que implica tareas complejas de gestión y organización, necesarias para el funcionamiento diario del hogar y de sus habitantes. Un trabajo que se realiza día tras día los 365 días del año, en el hogar y fuera de él, en el barrio y desde el puesto de trabajo remunerado, que crea redes familiares y sociales, que ofrece apoyo y seguridad personal y que permite la socialización y el desarrollo de las personas. La magnitud y responsabilidad de esta actividad lleva a pensar -como he señalado en otra ocasión- en la existencia de una “mano invisible” mucho más poderosa que la de Adam Smith, que regula la vida cotidiana y permite que el mundo siga funcionando (Carrasco, 2003: 8).

A su vez, esta “mano invisible” tiene su correlato en términos estadísticos. Esto es, a la hora de mensurar cuáles actividades son registradas como *trabajo* o *actividad*. Desde la economía neoclásica, las sociedades capitalistas son entendidas como un sistema de relaciones entre hogares, empresas y Estado. Estas instituciones se interrelacionan para la producción y distribución de los bienes y servicios que las personas necesitan a través de su mercantilización y valorización en el mercado. Por tanto, aquellos bienes y servicios que no tengan valor de mercado o sean intercambiados por dinero, quedan por fuera del cálculo económico. Eso explica que ante una misma tarea (por ejemplo, la limpieza de la casa o el cuidado de ancianxs), la estadística oficial la registre o no como actividad y producto (en la Encuesta Permanente de Hogares y como parte del Producto Interno) según se realice en el dulce hogar, o para tercerxs.

Por el contrario, la economía feminista aboga por una modificación del foco central del análisis económico, pasando del intercambio y la elección a la provisión; esto es, a los bienes y procesos necesarios para la supervivencia humana (Nelson, 1993 y 1996 en Rodríguez Enríquez, 2012: 28). Con ello, incorpora las relaciones de género en el centro de la explicación del funcionamiento de la economía, indicando el carácter sistémico de los trabajos de cuidado en la dinámica económica capitalista (Picchio, 2005). En términos metodológicos, el desafío de dimensionar y visibilizar estos trabajos de cuidado viene siendo respondido mediante la elaboración de Encuestas sobre Uso del Tiempo (EUT). Esta herramienta permite a su vez realizar ejercicios donde se procure traducir dicho tiempo en algún valor económico mensurable¹⁰.

En lo que sigue, se presenta el módulo de trabajo doméstico no remunerado y trabajo voluntario implementado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en 2013 y se analizan algunos de sus resultados para la región. Tras ello, se revisan otra serie de datos vinculados a las tasas de actividad y otras del trabajo registrado. Veremos que se trata de números “más conocidos”, pero que, vistos bajo esta nueva óptica feminista, pueden informar cuestiones bien distintas a las que se desprenden habitualmente en los análisis económicos.

Mensurar el sostenimiento de la vida: datos de la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo

En 2013 y hasta ahora por única vez el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) introdujo en su Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU) un módulo adicional con el objetivo de captar información respecto de la participación y el tiempo destinado por las personas de 18 años y más a las tareas domésticas, al cuidado de miembros del hogar y al trabajo voluntario (INDEC, 2014). Dicho módulo constituye hasta la fecha la mejor información de alcance nacional que permite visibilizar la magnitud de las tareas de cuidado y del trabajo voluntario, y su

¹⁰ Sobre la monetarización e incorporación del trabajo de cuidado al sistema de Cuentas Nacionales que permite ampliar el ciclo de la renta considerando estas actividades, ver Picchio, 2005 y Rodríguez Enríquez, 2012 así como sus numerosas y ricas referencias.

desigual distribución entre varones y mujeres, así como entre las clases sociales. Resulta por tanto un material rico para el análisis local, aun teniendo en cuenta una serie de salvedades.

Corina Rodríguez Enríquez (2014) señala varias de las limitaciones metodológicas que tuvo este estudio: en principio, se trató de un módulo acotado y no de una Encuesta de Uso del Tiempo (EUT), por lo que las tres únicas preguntas referidas al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado interrogaron sobre el tiempo dedicado el día anterior a una serie de quehaceres domésticos (limpieza de casa, aseo y arreglo de ropa, preparar y cocinar alimentos, compras para el hogar, reparación y mantenimiento del hogar), al apoyo en tareas escolares a miembros del hogar, y al cuidado de niños, enfermos o adultos mayores miembros del hogar. Este listado de tareas puede no resultar exhaustivo y no permite distinguir la muy habitual simultaneidad de tareas. Tampoco se consideraron las variaciones que puede haber entre días típicos o no típicos, o entre días de semana y fines de semana (o, entre laborados en el mercado y de “descanso”). Asimismo, la mera percepción y recordación “en tiempo” por parte de cada encuestado/a seguramente produce una información menos fidedigna que si se interrogara mediante otros instrumentos como los diarios de actividades, que desagregan el tiempo en fracciones de media hora o diez minutos. Finalmente, señala Rodríguez Enríquez este relevamiento incorporó una “llamativa condición” al requerir al menos una hora diaria para ser considerado activo en alguna tarea de cuidado. Con ello es posible que se pierda la captación de las tareas realizadas en menos tiempo, “y que de esta forma se reduzca artificialmente la brecha del tiempo dedicado por varones y mujeres” (2014: 4).

Aun con estas limitaciones, el estudio permite dimensionar el tiempo y la participación que requieren estas actividades no remuneradas: en el país, tres de cada cuatro personas se involucran en ellas y en promedio destinan 5,3 horas diarias (ver INDEC, 2014: 2). Claro que la encuesta también mostró que las mujeres destinan un tiempo sustantivamente mayor que los varones; que las jornadas de trabajo no remunerado de las mujeres se incrementan en su edad central, cuando hay menores de 6 años en el hogar, cuanto menor es la jornada de trabajo en el mercado laboral, y cuanto peor es el nivel de ingreso del hogar en el que viven. Con ello, como indica nuevamente Rodríguez Enríquez, “la desigualdad en el uso del tiempo y en la intensidad del tiempo dedicado al trabajo no remunerado es una experiencia socio-económicamente estratificada, que se convierte por tanto en un vector reproductor de desigualdades” (Rodríguez Enríquez, 2014: 4).

Al considerar la información disponible para la región, es importante señalar que la presentación de datos preliminares por parte del organismo público se agrupó siguiendo un criterio provincial, por lo que el análisis agrega los datos de Rawson-Trelew y Comodoro Rivadavia-Rada Tilly que son los aglomerados que capta la EAHU, junto con otras localidades pequeñas agrupadas como “resto de Chubut”. Con ello, en lo que sigue se consideran algunos de los datos disponibles en los que es posible identificar algunas particularidades e hipotetizar especificidades locales:

En principio, llama la atención que en general tanto los varones como las mujeres residentes en Chubut participan más en el trabajo doméstico no remunerado que la media nacional y en comparación con la mayoría del resto de las provincias.

Tanto en lo que refiere a los quehaceres domésticos, como en el apoyo escolar y el cuidado de niños, ancianos y enfermos, la mayor participación de unos y otras resulta indicativo de la intensiva familiarización de estas actividades vinculadas al “bienestar”. Ni el mercado (a través de instituciones privadas como geriátricos, para el apoyo escolar, servicios de reparaciones, limpieza y otros trabajos domésticos remunerados) ni el Estado (mediante jardines maternales, talleres para niños/as, asistencia a la tercera edad, entre otros) ofrecen estos servicios en cantidad y calidad suficientes, por lo que en general resultan en tareas que se absorben dentro del hogar (y con ello, mayoritariamente sobre las mujeres) (ver Cuadro 1).

Cuadro 1

Tasa de participación y tiempo diario promedio de Trabajo Doméstico No Remunerado (TDNR) y grupos de actividades. Por sexo y jurisdicción.

	Total País				Chubut			
	Varones		Mujeres		Varones		Mujeres	
	Tasa de participación	Tiempo	Tasa de participación	Tiempo	Tasa de participación	Tiempo	Tasa de participación	Tiempo
Quehaceres domésticos	50,2	2,4	86,6	3,4	54,7	2,3	88,5	3,9
Apoyo escolar	6,9	1,9	19,3	2,1	8,1	1,7	21,6	1,9
Cuidado	16,8	3,8	31,0	6	19,7	3,6	36,6	6,2
TOTAL TDNR	58,2	3,4	88,9	6,4	62,9	3,4	90,7	6,7

Jurisdicciones seleccionadas de INDEC, 2014

Es interesante historizar este dato por cuanto la producción académica resalta el papel que en el pasado desempeñaron las empresas petroleras (y particularmente, de YPF) en la provisión de una serie de servicios sociales de amplio alcance. De los clubes sociodeportivos al camión que pasaba cambiando las bombitas de luz quemadas, la imagen de estas empresas en el pasado contradice un presente en que la gestión de la vida cotidiana corre cada vez más por cuenta de los individuos. La provisión de vianda en los lugares de trabajo o su “externalización” en las familias, el aseo de la ropa de trabajo y otras cuestiones análogas seguramente han sufrido importantes variaciones que sería importante rescatar. Por ejemplo, contrastar las políticas habitacionales de otrora (la provisión de vivienda para los trabajadores de acuerdo a su estatus conyugal) con las actuales (desmantelado el sistema de pueblos campamentos en pos de la radicación intermitente de los trabajadores en piezas de hotel o casas cercanas al yacimiento, muchas veces bajo régimen de contrato a cargo del propio trabajador y cuya gestión doméstica también debe afrontar) puede resultar una puerta de ingreso interesante para comprender los “modos de producción” petroleros de cada período¹¹.

¹¹ Es interesante resaltar que este proceso no es exclusivo de la Cuenca hidrocarburífera del Golfo San Jorge, ni de la producción petrolera. Un proceso análogo analizan los colegas chilenos para el caso de la gran minería del cobre: “La vida del campamento, al volcarse exclusivamente a la actividad laboral,

Luego, este relevamiento oficial permite poner de relieve la persistente delegación de estas tareas en las mujeres, más allá de cuál sea su rol dentro del hogar, o sea que participe o no en el mercado de trabajo remunerado. Para el caso de Chubut, aun cuando las mujeres desocupadas e inactivas destinan mayor cantidad de tiempo al trabajo doméstico no remunerado, el 92% de las mujeres ocupadas también dedican un tiempo significativo (más de seis horas diarias) a estas tareas. Como señala Rodríguez Enríquez para el conjunto del país, ello redundaría en “jornadas de trabajo total muy prolongadas diariamente, lo que les limita la disponibilidad de tiempo para sí (dedicadas al autocuidado, al esparcimiento o la capacitación)” (2014: 4). Por el contrario, en general para los varones del país la condición de actividad o el hecho de ser jefes de hogar o cónyuges no altera su participación en el trabajo doméstico no remunerado. En Chubut, incluso se da la particularidad de que son los varones jefes quienes participan más (en tasa y cantidad de horas) que quienes son cónyuges. Otro tanto sucede con los varones inactivos o desocupados, que participan menos que los ocupados (Cuadro 2). Las asimetrías de género se extienden a otros y otras integrantes del hogar, donde (tal como sucede en general en el resto del país) las mujeres dedican el doble de tiempo que los varones (Cuadro 3).

Cuadro 2

Tasa de participación y tiempo diario promedio de TDNR
según sexo y por jurisdicción.

	Ocupados/as				No ocupados/as			
	Tasa participación		horas		Tasa participación		horas	
	varones	mujeres	varones	mujeres	Varones	mujeres	varones	mujeres
Total nacional urbano	57,9	89,3	3,5	5,9	58	88,5	3,2	6,8
Chubut	64,4	92,1	3,4	6,4	58,7	89,5	3,3	7,1

Jurisdicciones seleccionadas de INDEC, 2014

viene a constituir una ‘economía política sin familia’, es decir, el campamento como equipamiento colectivo se transforma en una ‘prótesis de la familia conyugal’, un ‘dispositivo sostenedor’ del cual la familia depende para su sobrevivencia, pero del cual se desprende territorialmente” (Hernández Román y Pavez Ojeda, 2012: 63).

Cuadro 3

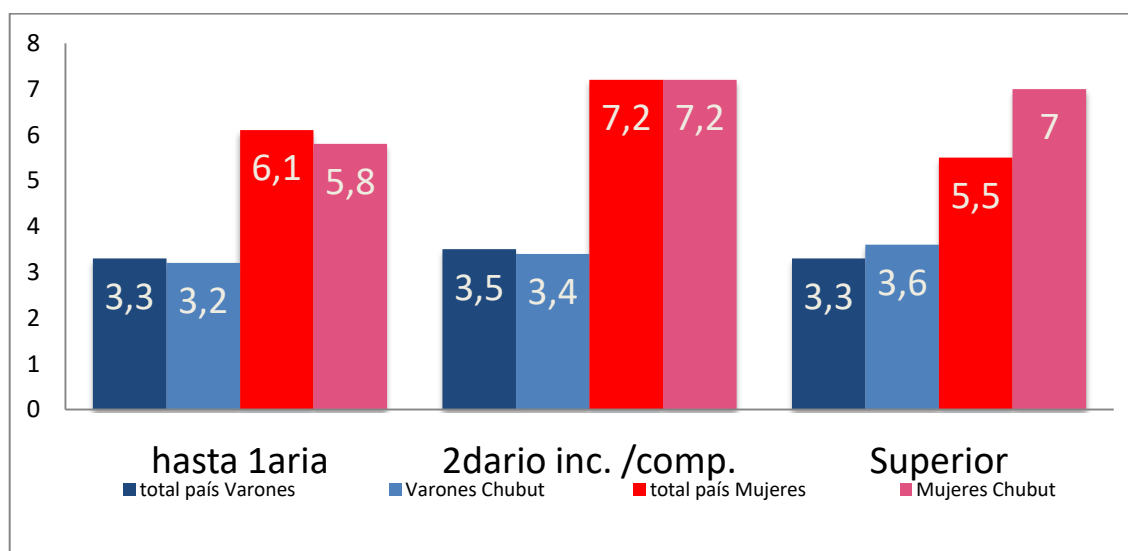
Horas promedio dedicadas al TDNR (quienes participan)
según sexo y relación de parentesco con el/la jefe de hogar, por jurisdicción.

	Jefe/a		Cónyuge		Hijos/as, hijastros/as, yernos y nueras		Otros/as	
	varón	mujer	varón	mujer	varón	mujer	varón	mujer
Total nacional urbano	3,6	5,3	3,4	7,6	2,7	5,5	2,6	5
Chubut	3,8	5,3	2,8	8,1	2,2	5,1	2,8	5,4

Jurisdicciones seleccionadas de INDEC, 2014

Gráfico 1

Tiempo diario promedio de TDRN (en horas).
Por sexo, nivel educativo y jurisdicción.



Jurisdicciones seleccionadas de INDEC, 2014

Por lo general, la dedicación a las actividades domésticas disminuye entre las mujeres que han accedido a mayores niveles de educación. Sin embargo aquí reside una particularidad de Chubut respecto del resto del país (Gráfico 1). La permanencia de las mujeres más educadas en las tareas domésticas no remuneradas puede tener tanto que ver con la falta de provisión por parte del mercado y el Estado que referíamos recién; como con el hecho de que muchas mujeres incluso con educación superior están fuera del mercado laboral o “concilian” su participación, negociando horarios reducidos (así, a veces las empresas parecieran ser más flexibles que las dinámicas familiares). Para analizar en detalle el asunto, será necesario orientar la mirada hacia el mundo del trabajo remunerado y observar qué tipo de incentivos y oportunidades existen para unos y otras. Eso permitirá observar persistentes brechas de género en la calidad del empleo que pueden desalentar incluso a mujeres

profesionales. Luego, analizar estos datos tomando en consideración la perspectiva de lxs agentes permitirá a su vez comprender cómo se abordan, en la experiencia personal, estos condicionantes estructurales.

Finalmente, la Encuesta sobre Trabajo No Remunerado y Uso del Tiempo también buscó contar con información sobre la población que realiza actividades de trabajo gratuito para la comunidad y para otros hogares, así como el tiempo que destina para llevarlas a cabo. Para eso, se incluyó un bloque destinado a cuantificar este trabajo voluntario. En este caso, fue medido en horas trabajadas durante la semana anterior a la entrevista (INDEC, 2014).

Aquí nuevamente Chubut presenta algunas particularidades que conviene señalar: mientras que el trabajo voluntario para otros hogares es menor que la media del total nacional urbano, resulta significativo el tiempo y dedicación insumido por parte de las mujeres en el trabajo voluntario en organizaciones (ver Cuadro 4). Cabría contrastar este dato con la participación femenina en espacios de conducción de las mismas.

Cuadro 4

Tasas de participación y horas promedio por semana dedicadas a actividades que componen el trabajo voluntario según sexo, por jurisdicción.

4.a Apoyo a otros hogares						
	varones		mujeres		total	
	tasa	tiempo	tasa	tiempo	tasa	tiempo
Total nacional urbano	4,9	8,1	8,4	8,5	6,8	8,4
Chubut	4	5,1	7,4	5,3	5,7	5,3
4. b Trabajo voluntario a través de organizaciones						
	varones		mujeres		Total	
	tasa	tiempo	tasa	tiempo	tasa	Tiempo
Total nacional urbano	2,9	6,5	4,5	4,8	3,7	5,4
Chubut	3,4	7,6	7,4	4,7	5,5	5,6

Jurisdicciones seleccionadas de INDEC, 2014

En definitiva, el módulo sobre Trabajo Doméstico no Remunerado y Trabajo Voluntario introducido por el INDEC en el año 2013 en su Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU), aun con las limitaciones consignadas, permite comenzar a visibilizar y mensurar la magnitud de las tareas de cuidado y del trabajo voluntario, y su desigual distribución entre varones y mujeres, así como al interior de cada uno de estos grupos. Los datos disponibles para Chubut indican que las mujeres de la zona, lejos de ser “inactivas” (como enseguida veremos que aparecen mayoritariamente en los relevamientos sobre ocupación) destinan su jornada laboral al conjunto de faenas necesarias para el sostenimiento de la vida, y de la industria.

Comprender las particularidades locales y las variaciones históricas que el modelo extractivo supone, se vuelve una tarea central. ¿Qué bienes y servicios vinculados al cuidado ofrecen los estados provincial y municipales? ¿cuáles proveen hoy las empresas? ¿cuál es la oferta del mercado? ¿Qué modelo familiar orienta la provisión de estos servicios? Y finalmente, algunos interrogantes que no por coyunturales son menos acuciantes: ¿cómo puede haberse alterado este panorama tras la catástrofe que produjo el temporal de marzo/abril de 2017? ¿quiénes y cómo habrán corrido con los esfuerzos que supone la pérdida de servicios esenciales y condiciones infraestructurales mínimas? ¿cuánto se habrán redoblado los tiempos y energías demandadas para las tareas más sencillas, como hacer las compras, cocinar o disponer de agua potable?

Incorporar en el escenario de la vida social las tareas de cuidado que se desarrollan en los hogares invita también a reformular y reconsiderar muchas de las herramientas con que se abordan las relaciones económicas y, específicamente aquellas vinculadas con el mundo del trabajo. De aquí en más, trabajo y empleo requieren ser distinguidos conceptualmente:

“En primer lugar, debido a que la interacción de ambos tipos de actividades resulta en un factor que condiciona la vida de hombres y mujeres de manera diferente; en segundo lugar, porque dicha distinción contribuye a identificar el aporte económico global de las personas y en particular de las mujeres; y en tercer lugar, porque para analizar la problemática del empleo femenino es indispensable relacionar ambos conceptos” (Espino, 2012: 191).

Como indica Corina Rodríguez Enríquez, “El hecho que las mujeres concentren la mayor parte de las responsabilidades de cuidado, atendiéndolas con su propio trabajo no remunerado, dificulta su plena participación económica” (2014: 6). En lo que sigue, entonces, presentamos un panorama en base a datos estadísticos que nos permitirán considerar otra serie de asimetrías de género, ahora en el mundo del empleo.

Asimetrías en el mundo del trabajo remunerado: datos sobre empleo privado registrado

La economía feminista y los estudios sociales sobre el trabajo con perspectiva de género vienen señalando desde hace tiempo las persistentes asimetrías que enfrentan varones y mujeres en el mercado laboral latinoamericano (Wainerman, 2003; Gutiérrez 2007; Esquivel, 2012, entre otros). Como vimos, la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo no ha redundado en una equitativa participación de los varones en las tareas domésticas, de modo que éstas enfrentan casi en solitario el desafío de “conciliar”¹² tiempos y trabajos (familiar y laboral). Ello hace que autoras como Hirata insistan en que “la división sexual de la precarización del

¹² Amplía Carrasco: “Este proceso de ‘conciliación’ ha exigido a las mujeres desarrollar distintas formas de resistencia individual, adaptaciones y elecciones diversas que tienen que ver con reducciones del trabajo familiar, con la organización del trabajo de cuidados y con formas específicas de integrarse en el mercado de trabajo” (Carrasco, 2003: 11).

trabajo no puede ser explicada o elucidada sin que se analice la dimensión extra-laboral, principalmente la relación entre hombres y mujeres en el universo doméstico” (Hirata, 2009: 25, *traducción propia*). Pero no es solo la carga del trabajo doméstico lo que dificulta la participación de las mujeres en el mundo del trabajo remunerado contemporáneo: estereotipos de género y transformaciones en los regímenes laborales alimentan y retroalimentan procesos de segregación laboral. También, pueden existir procesos de reconversión económica (cambios en lo que se produce y cómo se produce) que refuercen o maten las tendencias, como enseguida veremos.

Las formas que hoy asume la participación de las mujeres en el mundo de la producción y la economía “formal” de Comodoro Rivadavia difícilmente puedan comprenderse sin tomar a su vez en cuenta las tendencias básicas del escenario del trabajo actual crecientemente desregulado, precarizado y flexible¹³. A la vez, será necesario considerar los vertiginosos ciclos de la economía local y las tendencias más generales del mercado laboral nacional en los últimos años: por una parte, lo que se conoce como la fase de “segundo boom petrolero”; por la otra, la recomposición del empleo a nivel nacional y ciertas variaciones en la composición sectorial.

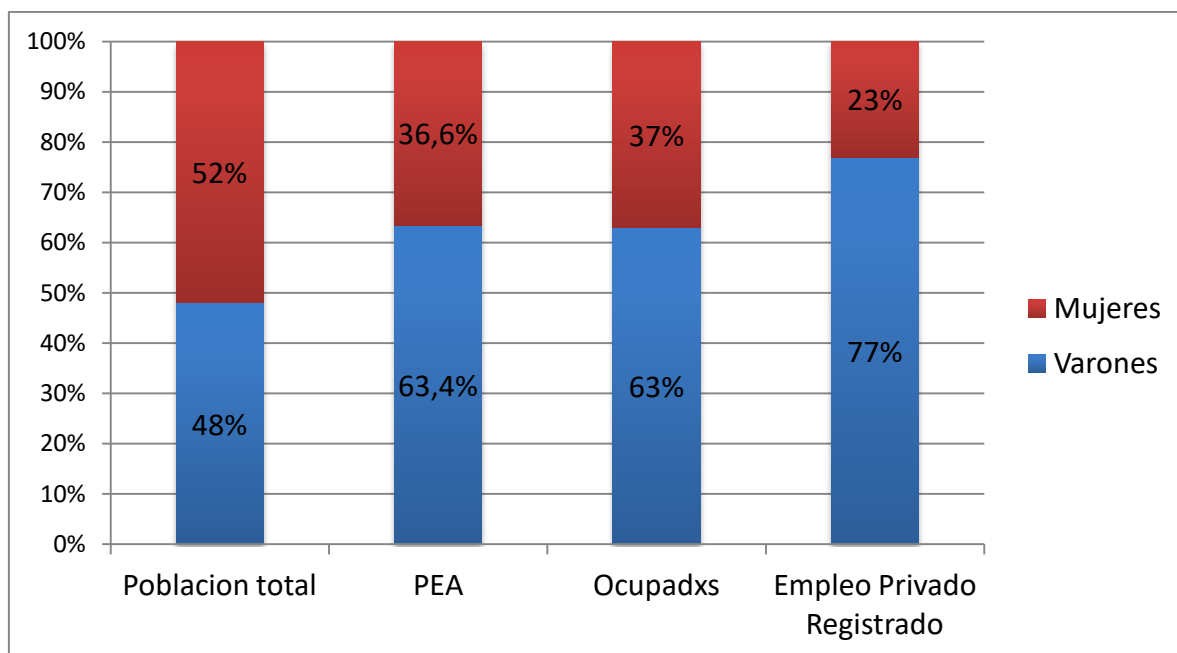
Varias son las consideraciones que pueden hacerse respecto de la participación de las mujeres en el mundo del trabajo remunerado en la Cuenca del Golfo San Jorge. Como en el apartado anterior, interesa hacer un ejercicio práctico de análisis de datos estadísticos disponibles para ver si allí existe la posibilidad de realizar un diagnóstico de situación y, de esa manera, contribuir a un análisis federal que tome en consideración las particularidades locales¹⁴. Al respecto, es nuevamente en la economía feminista donde encontramos aportes y lecturas sobre trabajo asalariado, que permiten considerar las brechas de género que pueden darse según las tasas, la variedad de sectores y ocupaciones, o en términos salariales (Rojo Brizuela y Tumini, 2008).

Siguiendo el estudio realizado por Victoria Castillo, Valeria Esquivel, Sofía Rojo, Lucía Tumini y Gabriel Yoguel (de la Dirección General de Estudios y Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social MTEySS, 2007), sostenemos que la desigualdad entre varones y mujeres en las posibilidades de acceso al mundo del trabajo se expresa en los diferentes niveles de participación en la Población Económicamente Activa (PEA), de inserción en el empleo remunerado, y en particular en la bajísima participación que presentan las mujeres en el empleo asalariado privado registrado.

¹³ Sobre la desregulación, precarización y flexibilización del trabajo en América Latina, ver Todaro y Yañez, 2004 e Hirata y Kergoat, 2007.

¹⁴ Cabe referir en este sentido el esfuerzo colectivo de Eguía, Piovani y Salvia por compilar una variedad de estudios en torno a las asimetrías inter e intragéneros de varias áreas metropolitanas de la Argentina, entre los que se incluye un importante antecedente de nuestro trabajo llevado a cabo por la Dra. Myriam González (2007).

Gráfico 2
Participación de hombres y mujeres en la población, PEA, ocupadxs y empleo privado registrado.



Elaboración propia en base a: Población, PEA y Ocupadxs: Aglomerado CR/RT 2do trim. 2016 EPH; Empleo Privado Registrado: Golfo San Jorge 2016 SIPA Gráfico 2.

En el Gráfico número dos es posible observar que si bien el aglomerado que conforman las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly cuenta con más mujeres que hombres¹⁵, son éstos quienes integran en mayor medida la población económicamente activa (recordemos una vez más que las actividades no remuneradas que se desarrollan en el ámbito doméstico no son captadas por la EPH). Así, apenas cuatro de cada diez integrantes del mundo del trabajo remunerado son mujeres (mientras que la mayoría de éstas permanecen como “inactivas” para la estadística oficial). Sin embargo, estos mismos datos pueden ser presentados de otro modo, al indicar que casi cuatro de diez trabajadorxs ocupados son mujeres. Dicho de este modo, no solo varían unas centésimas porcentuales (dado que entre las mujeres la desocupación es menor que en los varones, al menos para el período

¹⁵ La supuesta masculinización de la población local no se corrobora en los datos estadísticos actuales (ni en el Censo 2010 que fuera objeto de varias críticas, ni en los relevamientos periódicos de la EPH). Con miras a observar si esto al menos se daba entre la población en edad de trabajar, recortamos el segmento de 18 a 70 años, pero allí tampoco se corrobora. Concluimos entonces que dicha supuesta masculinización de la población puede tener que ver con: a) Grupos de varones que no son captados en estos relevamientos (trabajadores golondrina); o b) parte de los entendidos del sentido común, vinculados a la mayor visibilidad de los varones en los ámbitos públicos.

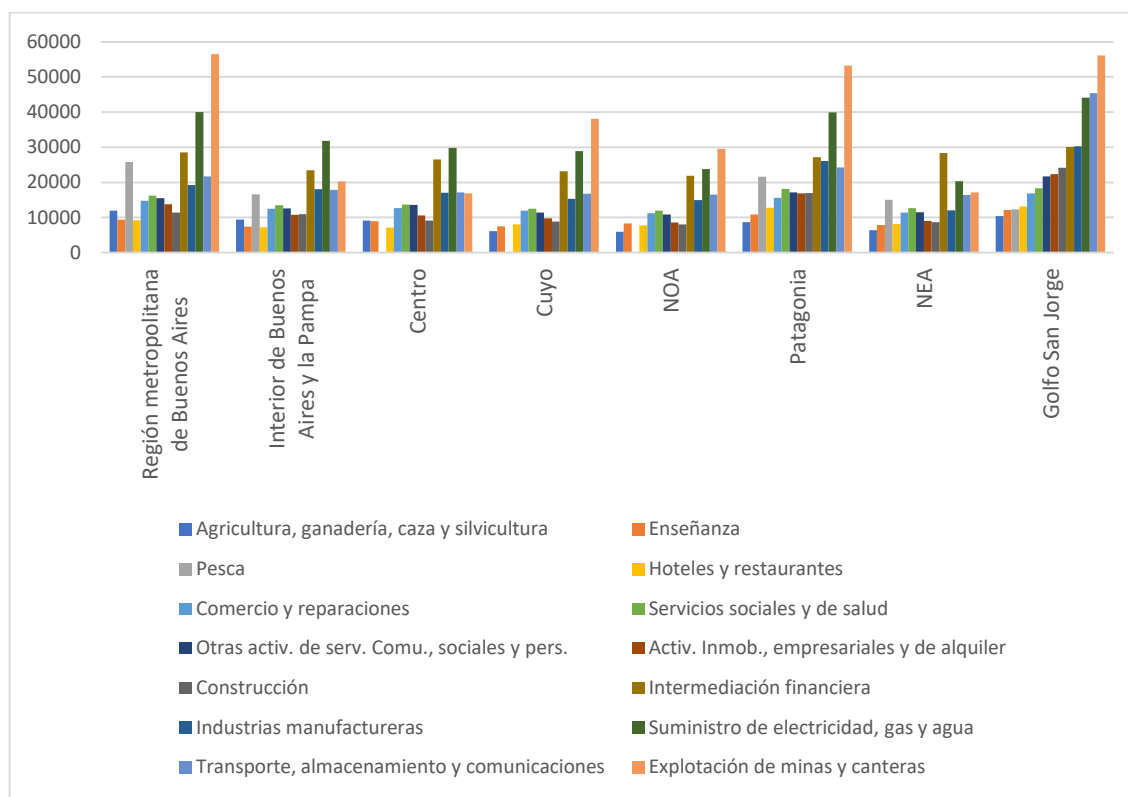
considerado), sino que se pone de relieve que, aunque no las veamos, allí están y en una proporción bastante considerable. Finalmente, lo que también se observa en el Gráfico dos es que dicha participación femenina se reduce drásticamente si se consideran los datos del empleo privado registrado, captados por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)¹⁶. Tomar en consideración este último relevamiento, tal como propone el Informe del MTEySS del 2007, pone de relieve la particular dificultad de las mujeres en el acceso al empleo formal, con provisión social. Con ello, es posible comenzar a interrogar sobre las cualidades de los trabajos a los que acceden hombres y mujeres, así como sobre su diferente reconocimiento material y simbólico.

Analizando la información disponible provista por el SIPA, es importante tener en cuenta que nuestra región es de las más desiguales en términos salariales: apenas superada por el heterogéneo mundo del área metropolitana de Buenos Aires, la Patagonia en general y la Cuenca del Golfo en particular confronta salarios en el sector de explotación de minas y canteras que superan los cincuenta mil pesos, junto con otros que apenas rondan los doce mil, en el caso de la enseñanza¹⁷ (ver Gráfico 3).

¹⁶ Respecto del SIPA y los datos aquí presentados, es importante resaltar que el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del MTEySS distingue entre las llamadas “Áreas Económicas Locales” al “Golfo San Jorge” donde reúne información correspondiente a Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia, así como de otras localidades menores (Rada Tilly y Sarmiento, de Chubut, y Jaramillo, Koluel Kaike, Las Heras y Pico Truncado, de Santa Cruz).

¹⁷ Cabe referir que en estos promedios están excluidos ciertos tipos de trabajadores (Trabajadoras/es en casas particulares, Asalariados no registrados, Trabajadores por cuenta propia, patrones y trabajo familiar, Empleo público) por lo que las asimetrías observadas podrían ser aún mayores si se consideraran estos tipos.

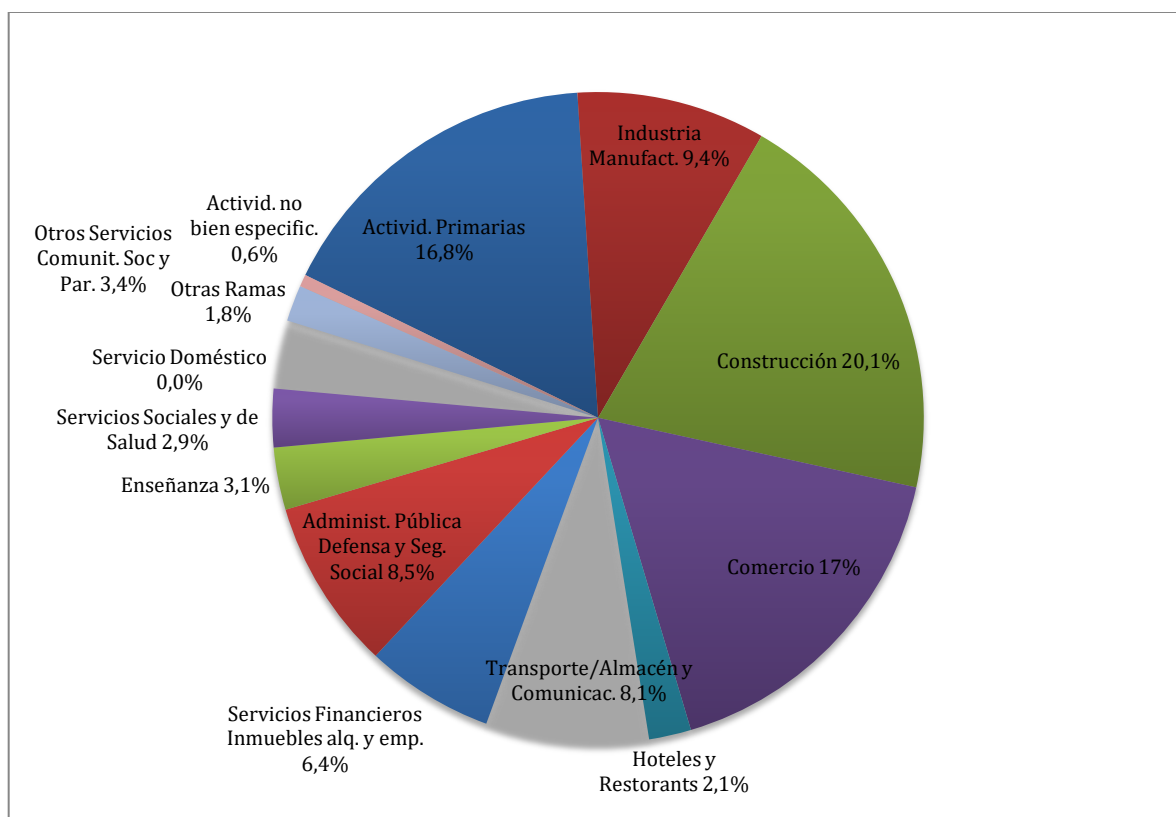
Gráfico 3
Remuneraciones promedio por sector económico
(Regiones y Área Económica local seleccionada)



Elaboración propia en base a SIPA 2016

Por el momento, no contamos con la información desagregada por sexo, por lo que es a partir de la Encuesta Permanente de Hogares que podemos hipotetizar el sesgo genérico de estas asimetrías salariales tomando en cuenta la distribución de las categorías ocupacionales para hombres y mujeres captadas en este instrumento (y guardando las salvedades correspondientes al tratarse de universos distintos). Así, si recién indicábamos que “aunque no las veamos (a las mujeres en el mercado laboral), siempre están”, esta división por sexo según las categorías ocupacionales discriminadas por la EPH nos permite corroborar que las mujeres se concentran en las actividades peor remuneradas (enseñanza; servicios sociales y de salud) y más invisibles (servicio doméstico) (ver gráficos 4 y 5).

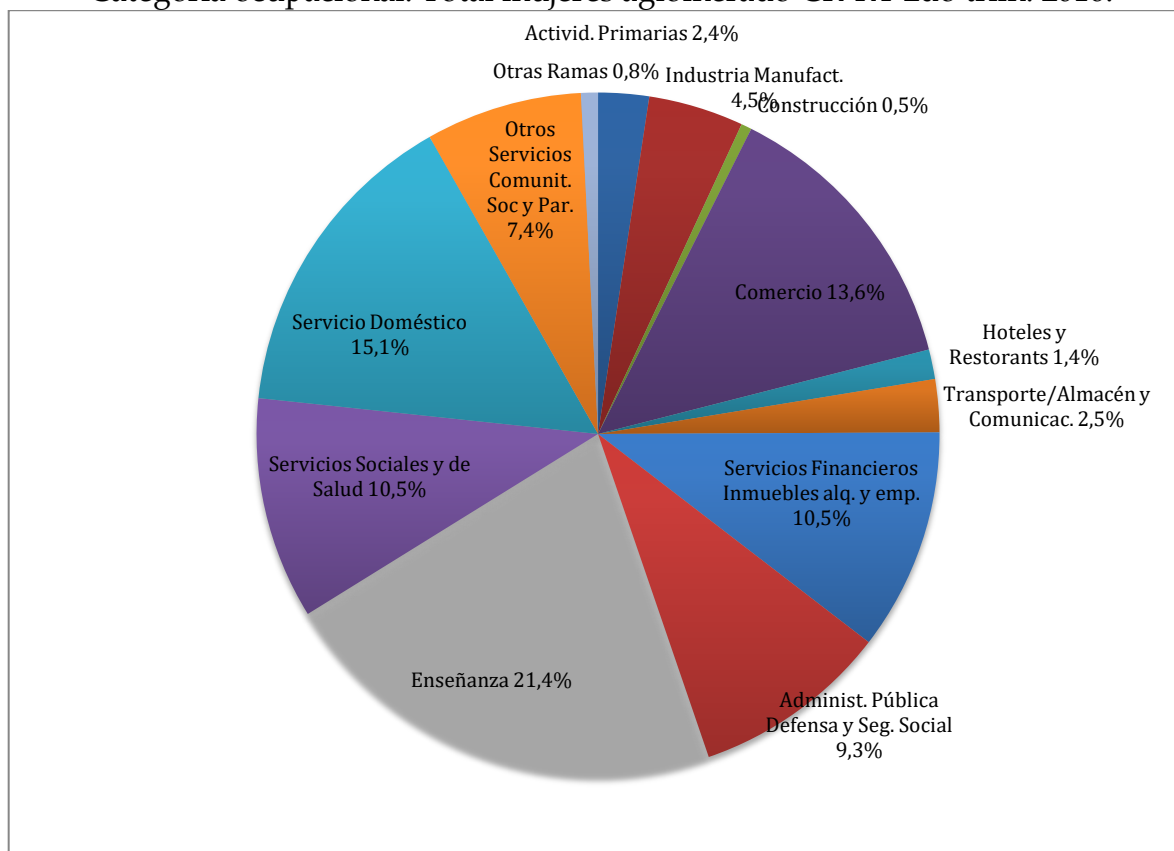
Gráfico 4
Categoría ocupacional. Total varones aglomerado CR-RT 2do trim. 2016.



Fuente: EPH

Gráfico 5

Categoría ocupacional. Total mujeres aglomerado CR-RT 2do trim. 2016.



Fuente: EPH Gráfico 4.

Finalmente, también contamos con informaciones sistematizadas en otros estudios que invitan a profundizar en los análisis. Por ejemplo, el informe ya referido del MTEySS (que sí cuenta con datos desagregados por sexo) identifica un interesante proceso que sería importante registrar a nivel local: la creciente participación femenina en el sector industrial de “Productos de petróleo”. Allí se observa una evolución creciente de la participación de las mujeres en este tipo de empleo en la década comprendida entre 1996 y 2006: partiendo desde una baja tasa de feminidad del 10,7% en 1996 hasta alcanzar la media industrial a fin del período, con una participación en torno al 18,9. Cabe interrogar la evolución de este proceso a lo largo del llamado “segundo boom petrolero” y en el espacio específico de la Cuenca del Golfo San Jorge.

En definitiva, las primeras incursiones en los datos estadísticos secundarios provistos por el SIPA y el INDEC invitan a un trabajo más sistemático que, confiamos, permitirá hacer mejores lecturas que ayuden a completar este mapeo sobre la situación laboral de mujeres y varones en la región. Así, si bien tal como señalan Eguia y Piovani, estas fuentes de información no construyen los datos a partir de marcos conceptuales fundados en la perspectiva de género (limitándose a introducir la variable “sexo” y omitiéndola en la mayoría de las lecturas que disponibilizan).

En la medida que ésta (*la variable “sexo”*) se asocia con determinados roles en el mercado de trabajo, su consideración global en relación con las tasas de actividad, de empleo y desocupación, con las ramas de actividad (que tienden a presentarse más masculinizadas o feminizadas, y que se vinculan con niveles variables de estabilidad, precariedad, ingresos, etc.), con la percepción de beneficios sociales, entre otras variables, permite avanzar en el sentido de un análisis que trascienda la mera caracterización descriptiva de la situación de hombres y mujeres (Eguía y Piovani, 2015: 54).

A su vez, los distintos universos captados en cada uno de estos relevamientos y la habitual agregación de los datos en la escala provincial son indicativos de los particulares desafíos que conlleva el abordaje de este territorio comprendido como la “Cuenca del Golfo San Jorge”.

Una agenda de investigación en curso: trayectorias de mujeres trabajadoras

Nuestro proyecto de investigación no apunta simplemente a la constatación de desigualdades entre varones y mujeres, sino que

Hablar en términos de división sexual del trabajo es: 1. Mostrar que esas desigualdades son sistemáticas y 2. Articular esa descripción de la realidad con una reflexión sobre los procesos mediante los cuales la sociedad utiliza esa diferenciación para jerarquizar las actividades y por tanto, los sexos; en suma, para crear un sistema de género (Hirata y Kergoat, 2007: 596).

Así, aquel “sistema de género” que refieren Hirata y Kergoat no existe antes de su articulación en diversas áreas de la vida social, donde la laboral será -desde nuestra perspectiva marxista- una de las centrales. Con esto pretendemos insistir sobre la construcción social de la división sexo-genérica y cómo la dicotomización del mundo en ámbitos masculino y femenino no es más que un producto histórico (político, económico y cultural), y por tanto, cambiante y posible de ser transformado.

De ahí que nuestra propuesta triángule aquella dimensión descriptiva, basada en datos estadísticos, con una de corte cualitativo, orientada a comprender la experiencia de mujeres trabajadoras. El estudio de trayectorias laborales de mujeres en la Cuenca del Golfo San Jorge permite no solo observar la heterogeneidad de maneras en que éstas contribuyen a la economía global y las características de su inserción en el mercado laboral, sino también reconstruir sus propias historias laborales, las respuestas ante expectativas muchas veces contradictorias (ser madre, ser profesional, aportar económicamente al hogar, ser moderna e independiente) y

sus representaciones en torno al trabajo. En definitiva, colocar de relieve la agencia y la capacidad transformadora de los sujetos en general y de las mujeres en particular.

El enfoque biográfico y la reconstrucción de trayectorias laborales resultan el abordaje privilegiado para reintroducir la agencia, el tiempo y el espacio en nuestro estudio que, de otro modo, permanecería estático y centrado en los determinantes estructurales. Por el contrario, revalorizar a los sujetos como objeto de investigación permite, a partir de sus experiencias y visiones, reconstruir sentidos compartidos en torno al trabajo, y la diversidad de estrategias que despliegan las mujeres. Las trayectorias laborales visibilizan los distintos mecanismos de género que condicionan la experiencia laboral de varones y mujeres, y cómo afectan sus grados de autonomía, a la vez que permiten identificar procesos de construcción y cambio en las relaciones inter e intra genéricas. Asimismo, la perspectiva de “trayectorias” rescata y pone de relieve la importancia del tiempo y el espacio, y sus posibles escalas múltiples (el nivel macro temporal y macro espacial, el nivel meso temporal y meso espacial y el nivel micro temporal y micro espacial) (Muñiz Terra, 2012).

Así, el estudio de las trayectorias laborales permite conocer las características de la participación de las mujeres en la producción y reproducción de la vida en la Cuenca del Golfo San Jorge y su imbricación con otros órdenes de la vida, como el familiar, conyugal o el tiempo dedicado al ocio o a la participación en la vida pública. A la vez, las trayectorias laborales como unidad de análisis no sólo hacen visibles las oportunidades que una determinada época ofrece a sus integrantes, sino también las relaciones que existen entre cambios socioeconómicos y culturales, por una parte, y transformaciones de las subjetividades personales y sociales, por la otra (Todaro y Yañez, 2004: 197). Conviene citar *in extenso* la definición que brindan las colegas chilenas del Centro de Estudios sobre la Mujer (CEM):

Entendemos por *trayectoria laboral* los itinerarios visibles, los cursos de acción y las orientaciones que toma la vida de los individuos en el campo del trabajo, y que son el resultado de acciones y prácticas desplegadas por las personas en situaciones específicas a través del tiempo. Estas acciones y prácticas se desarrollan en condiciones materiales y sociales y en contextos institucionales definidos. Se constituyen en el interjuego de diferentes ámbitos sociales e institucionales donde los sujetos sexuados ocupan una posición particular, condicionada por factores estructurales (la organización y división social y sexual del trabajo), prescripciones sociales e imágenes y representaciones de género que circulan y regulan las relaciones sociales. Están animadas, a su vez, por las representaciones y significaciones que el sujeto tiene de sí y de su medio en diferentes momentos del curso de su biografía, y por las relaciones con los otros presentes en su entorno social. Las trayectorias se van definiendo y redefiniendo de manera no lineal a través del tiempo, de acuerdo con la experiencia biográfica, el momento del ciclo de vida, las condiciones y

oportunidades ofrecidas por el mercado de trabajo, la percepción de los límites y potencialidades personales, y los cambios sociales y culturales (Todaro y Yañez, 2004: 198).

Nuestro proyecto contempla entonces la realización de unas cincuenta entrevistas en profundidad a mujeres de distintas generaciones. Nos interesa especialmente conocer la trayectoria de mujeres vinculadas a la industria hidrocarburífera, pero consideramos inicialmente también la inclusión de otros dos grupos de mujeres: a partir de nuestras consideraciones teóricas, un subgrupo de mujeres trabajadoras del hogar, donde poder relevar y visibilizar la experiencia de aquellas que dedican su tiempo a las tareas de cuidado; luego, y como grupo de “control”, un subgrupo de mujeres trabajadoras docentes, entre las que posiblemente encontremos mejores elementos de comparación con nuestro grupo de interés principal. Nos focalizamos en mujeres vinculadas a la industria hidrocarburífera porque nos interesa conocer estos recorridos minoritarios para observar dificultades específicas que enfrentan las mujeres empleadas en este sector fundamental de la economía de la región, pero también para identificar estrategias de resistencia u oposición que puedan orientar cambios y transformaciones. Asimismo, centrarnos en la perspectiva de las mujeres constituye para nosotras la puerta de entrada para considerar las relaciones de género que más generalmente se desarrollan en esta industria, analizando prácticas empresariales y experiencias laborales y sindicales que se vienen desarrollando en el presente y pasado reciente.

Coda de cierre: hacer justicia a la vulnerabilidad

En octubre de 2017, la mesa en que originalmente estas palabras tuvieron lugar se llamaba “Retos de desarrollo social y cohesión social”. Efectivamente, producir y reproducir la vida en Comodoro Rivadavia a pocos meses del temporal de marzo-abril de ese mismo año se presentaba como un desafío complejo para muchas y muchos de sus habitantes. Habíamos visto en las aulas cómo tras la clase inaugural horas antes del temporal (una tarde cálida y húmeda en que muchxs se iniciaban en la vida universitaria) la cantidad de estudiantes que regresaron tras el mes de suspensión de actividades fue mucho menor. Hubo que cambiar ritmos, recorridos y rutinas, prácticas habituales. Sin contar las pérdidas materiales (pero que son también simbólicas) de bienes, recuerdos, insumos de trabajo, casas... Luego, enfrentar la paradoja de una ciudad arrasada por el agua... sin agua. Convivir con la precariedad.

Tal como atravesó las jornadas del Taller internacional *Recursos naturales y desarrollo local: Sostenibilidad, cohesión social y resiliencia*, el desarrollo económico y social no siempre marchan de la mano en las economías extractivas. Varios de los trabajos consignados en este dossier así lo detallan. Sin embargo la palabra “retos” presente en el título de mesa contenía, a nuestro modo de ver, un sesgo masculinista que quisimos discutir. Retarse a duelo fue durante tiempo el modo de resolver los conflictos, sobre todos los vinculados a cuestiones de hombría y honor. Reiterar ese gesto varonil de ofrecer o aceptar el reto era, para nosotras, parte del problema.

Quizás no se trate de enfrentar empecinadamente una batalla que parecería perdida de antemano, sino de asumir y poner en primer plano las propias debilidades, nuestra misma condición de vulnerabilidad.

Desde hace tiempo Judith Butler (2004) viene insistiendo con la necesidad de repensar el sujeto político desanclado de la idea de poder y autonomía. En un contexto en que enormes contingentes son arrojados a una vida precaria, quizás sea momento de pensar la acción política de quienes, precisamente, no son sujetos soberanos de sí mismos. Esta nueva propuesta teórico política invita a repensar la mayoría de las categorías con que hemos abordado el cambio social. De manera análoga, las economistas feministas convocan la experiencia de las mujeres para comprender y conocer más acabadamente lo que suele llamarse “economía”:

En mi opinión, un enfoque basado en la experiencia de las mujeres tenderá a permitir un mayor alcance de la perspectiva y del análisis minucioso de las condiciones de vida, debido a su práctica cotidiana de cuidar cuerpos, pasiones y relaciones. Su punto de vista, además, revela la profunda inseguridad de los sujetos «fuertes», es decir, de los hombres adultos (blancos europeos y de clase media) considerados normalmente como el modelo social. Se trataría de utilizar esa percepción de vulnerabilidad, adquirida en el ámbito de la intimidad, como fuente de sabiduría y de imaginación colectiva (Picchio, 2005: 5).

Reconsiderar los conceptos de trabajo y producción a la luz de estas teorías nos permitió replantear la economía extractiva hidrocarburífera local poniendo de relieve el sostenimiento de la vida como eje de análisis. Ello llevó la atención hacia las tareas de cuidado y atención que tanto hombres como mujeres, adultxs o niñxs, “sanos” o con afectación de la salud, requieren. Y por ende, orientó nuestras preguntas hacia quiénes realizan estas tareas, qué tiempo insumen en ellas y qué desigualdades sociales se producen y reproducen allí. Luego, consideramos algunos datos disponibles para trazar un primer panorama general de la distinta inserción de varones y mujeres en el mercado de trabajo, con miras a conocer los tipos y cualidades de empleos disponibles para unos y otras. Finalmente, presentamos la perspectiva de “trayectorias laborales” con que pretendemos complementar nuestro análisis, considerando la imbricación entre estructuras sociales y acciones subjetivas que moldean las vidas de hombres y mujeres.

Con este recorrido, aspiramos a contribuir al conocimiento de la industria hidrocarburífera en nuestra región, considerando las relaciones de género como un punto de mira preferencial para adentrarse en la división social del trabajo, las relaciones laborales, prácticas empresariales, experiencias sindicales y en general, los sentidos y representaciones sociales acerca del trabajo. Asimismo, visibilizar la agencia de las mujeres en la producción y reproducción de la sociedad implicará también de suyo la denuncia de los modos asimétricos en que se distribuyen los bienes sociales (materiales y simbólicos) de acuerdo al género.

En este sentido, el proyecto aspira aportar al conocimiento que la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNPSJB ofrece sobre la realidad socioproductiva de nuestra región desde una perspectiva feminista. Con ello, contribuye a incorporar el estudio sistemático de las relaciones de género en el seno de nuestra Facultad y con ello, la formación de estudiantes, becarios/as e investigadores. También, esta perspectiva considera la conexión entre conocimiento teórico y práctica política, apostando a incidir mediante la colaboración, articulación y promoción de iniciativas orientadas a lograr mayor equidad de género y, con ello, a la democratización de las relaciones sociales en general en nuestra región.

Bibliografía

- Boschetti, A. (2010), "Familias transterritoriales, multilinguísticas y sociocomunicacionales", *Congreso Internacional "Las políticas de equidad de género en prospectiva: nuevos escenarios, actores y articulaciones"*. Área Género, sociedad y políticas, FLACSO Argentina. Buenos Aires, Argentina.
- Brown, W. (2000), "Suffering Rights as Paradoxes", *Constellations*, 7, 208-229.
- Butler, J. (2004), "Repensar la vulnerabilidad y la resistencia", *Conferencia XV Simposio de la Asociación Internacional de Filósofas*, Universidad de Alcalá [en línea] Alcalá <http://www.institutofranklin.net/sites/default/files/files/Repensar%20la%20vulnerabilidad%20y%20la%20resistencia%20Judith%20Butler.pdf> Consulta: 8 de mayo de 2018.
- Caloz-Tschopp, M. C. y Veloso Bermedo, T. (Co-dirs.) (2012), *Tres feministas materialistas* (Vols. I y II). Santiago de Chile, Escaparate Ediciones.
- Carrasco, C. (2003), "La sostenibilidad de la vida humana: ¿un asunto de mujeres?", en: *Mujeres y Trabajo: cambios impostergables*. Porto Alegre, Veraz Comunicação.
- Connell, R. (2001), "La organización social de la masculinidad", en: Valdes, T. y Olavarria, J. (Eds.) *Masculinidad/es: poder y crisis*. Santiago de Chile, ISIS-FLACSO:Ediciones de las Mujeres N° 24, 31-48.
- Derrida, J. (1989), *La escritura y la diferencia*. Barcelona, Anthropos.
- Eguía, A. y Piovani, J. I. (2015), "Trabajo, pobreza y género. Tendencias en el Gran La Plata 1990-2011", en Ortale, M. S. et al., *Género, trabajo y políticas sociales*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CLACSO, 53-86.
- Espino, A. (2012) "Perspectivas teóricas sobre género, trabajo y situación del mercado laboral latinoamericano", en: Esquivel, V. (Ed.), *La economía feminista desde América Latina. Una hoja de ruta sobre los debates actuales en la región*. Santo Domingo, ONU Mujeres, 190- 246.
- Esquivel, V. (Ed.) (2012), *La economía feminista desde América Latina. Una hoja de ruta sobre los debates actuales en la región*. Santo Domingo, ONU Mujeres.
- Esquivel, V., Faur, E. y Jelin, E. (Eds.) (2012), *Las lógicas del cuidado infantil. Entre las familias, el Estado y el mercado*. Buenos Aires, IDES.
- González, M. S. (2007), "La participación femenina en el mercado de trabajo de Comodoro Rivadavia (1992-2002)", en Eguia, A., Piovani J. I. y Salvia, A. (Comps). *Género y trabajo. Asimetrías intergéneros e intragéneros. Áreas*

- metropolitanas de la Argentina, 1992-2002*. Buenos Aires, Universidad de Tres de Febrero, 174-195.
- Gutiérrez, M. A. (Comp.) (2007), *Género, familias y trabajo: rupturas y continuidades. Desafíos para la investigación política*. Buenos Aires, CLACSO.
- Hernández Román, G. y Pavez Ojeda, J. (2012), "Neoliberalización y flexibilidad en el mundo del trabajo. Notas sobre los trabajadores de la minería en Chile", *Revista Sociedad Hoy* 23, 2do Semestre, 49-66.
- Hirata, H. y Kergoat, D. (2007), "Novas configurações da divisão sexual do trabalho", *Cadernos de pesquisa*, 37 (132), 595-609.
- INDEC (2014), Encuesta sobre trabajo no remunerado y uso del tiempo [en línea] INDEC, Buenos Aires, https://www.indec.gob.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=4&id_tema_2=31&id_tema_3=117 Consulta: 8 de mayo de 2018.
- Lahire, B. (Dir.) (2006), *Para qué sirve la sociología*. Buenos Aires, Siglo XXI.
- Marx, C. (1973 [1849]), "Trabajo Asalariado y Capital", en: Marx, C. y Engels, F., *Obras Escogidas*, Tomo IV. Buenos Aires, Editorial Ciencias del Hombre, 124-153.
- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social MTEySS (2007), "Cambios en la composición por sexo del empleo registrado 2002-2006: efecto del nuevo patrón de crecimiento sobre el trabajo femenino", en: *Trabajo, ocupación y empleo. Los retos laborales en un proceso de crecimiento sostenido*. Serie Estudios/7. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social MTEySS.
- Muñiz Terra, L. (2012), "Carreras y trayectorias laborales: una revisión crítica de las principales aproximaciones teórico metodológicas para su abordaje", *RevLMeCS (Revista Latinoamericana de Metodología en Ciencias Sociales)*, Vol. 2, nº 1.
- Paris, P. y Hiller, R. (2016), "Petroleras. Trabajo femenino en la Cuenca del Golfo San Jorge", *VIII Congreso Latinoamericano de Estudios del Trabajo*, de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo, Buenos Aires, agosto.
- Picchio, A. (1994), "El trabajo de reproducción", en: Borderías, C., Carrasco, C. y Alemany, C., *Las mujeres y el trabajo. Rupturas conceptuales*. Madrid, Fuhem-Icaria, 453-490.
- Picchio, A. (2005), "La economía política y la investigación de las condiciones de vida", en: Cairó, G. y Mayorodmo, M. (Comps.) *Por una economía sobre la vida. aportaciones desde un enfoque feminista*, Barcelona, Icaria Editorial.
- Rodríguez Enríquez, C. (2012), "La cuestión del cuidado: ¿el eslabón perdido del análisis económico?", *Revista CEPAL*, 106, 23-36.
- Rodríguez Enríquez, C. (2014), "El trabajo de cuidado no remunerado en Argentina: un análisis desde la evidencia del Módulo de Trabajo no Remunerado", *Documentos de Trabajo "Políticas públicas y derecho al cuidado"*. Buenos Aires, ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género), 1-24.
- Rojo Brizuela, S. y Tumini, L. (2008), "Inequidades de género en el mercado de trabajo de la Argentina: las brechas salariales", *Revista de Trabajo*, año 4, Número 6, 53-70.

- Rubin, G. (1996 [1975]), "El tráfico de mujeres: Notas sobre la "economía política" del sexo", en Lamas, M. (Comp.), *El género: la construcción cultural de la diferencia sexual*. México, PUEG, 35-96.
- Scott, J. (1993 [1988]), "El género: una categoría útil para el análisis histórico", en: Cangiano, M. C. y DuBois, L. (Eds.) *De mujer a género. Teoría, interpretación y práctica feminista en las ciencias sociales*. BsAs, CEAL.
- Sidicaro, R. (1992), "Las sociologías después de Parsons", *Revista Sociedad*, Buenos Aires, 1, 7-25.
- Tabet, P. (2012), "La gran estafa: intercambio, expoliación, censura de la sexualidad de las mujeres", en: Caloz-Tschopp, M. C. y Veloso Bermedo, T. (Co-dirs.) *Tres feministas materialistas*, Vol. II. Santiago de Chile, Escaparate Ediciones, 149-198.
- Todaro, R. y Yáñez, S. (2004), *El trabajo se transforma. Relaciones de producción y relaciones de género*. Santiago de Chile, Centro de Estudios de la Mujer.
- Virno, P. (2003), *Gramática de la multitud. Para un análisis de las formas de vida contemporáneas*. Madrid, Traficantes de Sueños.
- Wainerman, C. (Comp.) (2003), *Familia, trabajo y género. Un mundo de nuevas relaciones*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.



Comercio sexual en contextos extractivos: La “casita de chapa” de YPF y la prostitución reglamentada

Melisa Cabrapan Duarte¹

Resumen

Este artículo se produce en el marco de mi investigación doctoral sobre la configuración de economías sexoafectivas en Rincón de los Sauces, una localidad petrolera de Norpatagonia Argentina, que ha dado cuenta de la relevancia de situar el estudio de caso etnográfico dentro de la llamada “comarca petrolera neuquina”, circuito productivo de petróleo de la provincia, que incluye a las ciudades de Plaza Huincul, Cutral Co y más recientemente a Añelo, con la exploración de Vaca Muerta. A su vez, y sobre todo, también resulta relevante en términos analíticos situar la región y recuperar algunos antecedentes para reconstruir y analizar el vínculo entre el comercio sexual y la industria hidrocarburífera. De esta manera, el objetivo es indagar esa relación a partir de analizar el caso de “la casita de chapa”, un burdel instalado y regentado por la empresa estatal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) en Plaza Huincul, desde principios hasta mediados del siglo XX. Para esto, retomaré una serie de fuentes históricas, primarias y secundarias, y discursos de distintos actores sobre la prostitución en contextos petroleros, con la finalidad de analizar los significados producidos sobre el surgimiento y permanencia del comercio sexual en sitios extractivos en el pasado y que se actualizan en el presente.

Palabras clave

Prostitución - contextos petroleros - comercio sexual - Norpatagonia - extractivismo

Sex trade in extractive contexts: YPF's “casita de chapa” and regulated prostitution

Abstract

This article is produced on the framework of my doctoral research on configuration of sex-affective economies in Rincón de los Sauces, an oil town in Argentine Norpatagonia, which has shown the importance of situating the ethnographic case study within the so-called “comarca petrolera neuquina”, oil production circuit of the province, which includes the cities of Plaza Huincul, Cutral Co and more recently Añelo, with the exploration of Vaca Muerta. In turn, and above all, it is also relevant in analytical terms to situate the region and recover some background to reconstruct and analyze the link between the sex trade and the hydrocarbon industry. In this way, the objective is to investigate this relationship by analyzing the case of the “casita de chapa”, a brothel installed and run by the state company Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) in Plaza Huincul, from the beginning to the middle of the century XX. For this, I will return to a series of historical sources, primary and secondary, and speeches of different actors about prostitution in oil industry contexts, with the purpose of analyzing the meanings produced on the emergence and permanence of the sexual trade in extractive sites in the past and that they are updated in the present.

Keywords

Prostitution - oil industry contexts - sex trade - Norpatagonia - extractivism

¹ Becaria doctoral del CONICET; Perteneciente al Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (CONICET/UNRN); adscripta al doctorado de Antropología Social de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad de Buenos Aires. E-mail: melisa_cd@hotmail.com.ar

Introducción

Este trabajo se enmarca dentro de una investigación etnográfica doctoral sobre la configuración de economías sexoafectivas en Rincón de los Sauces, una localidad petrolera de Norpatagonia Argentina (Cabrapan Duarte, en prensa). Los avances de la misma han dado cuenta de la relevancia de situar el estudio de caso dentro de la llamada “comarca petrolera” neuquina, en tanto forma parte del circuito productivo de petróleo de la provincia, articulado principalmente con Plaza Huincul y Cutral Co, más recientemente con Añelo a partir de la exploración de Vaca Muerta, y con la capital de la provincia; y sobre todo, también resulta relevante en términos analíticos recuperar los antecedentes regionales sobre el vínculo entre el comercio sexual² y la industria hidrocarburífera.

De esta manera, el objetivo aquí es indagar esa relación a partir de analizar el caso de la “casita de chapa” de Plaza Huincul, un burdel instalado y regentado por la empresa estatal de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), desde principios hasta mediados del siglo XX. Aunque retroceder en el tiempo pueda sugerir un abordaje histórico a la cuestión, mi interés está en retomar una serie de eventos y estudios de la historia que son significativos para reflexionar sobre un problema contemporáneo, el del comercio sexual en sitios extractivos. Sin embargo, no se trata del “telón de fondo” de una escena actual o de buscar similitudes o diferencias respecto de cómo se expresaba el fenómeno de la prostitución³ en el pasado. La propuesta no es utilizar a la historia como un escenario descriptivo de tiempos remotos, sino basarme en ella y en los elementos que ofrece para contextualizar, analizar y problematizar los procesos, los sentidos y las relaciones sociales y genéricas que han dado lugar a la producción y reproducción del comercio sexual en zonas petroleras.

Atender a la relevancia de ese pasado para comprender las relaciones sexoeconómicas y afectivas contemporáneas entre petroleros y “mujeres de la noche”⁴, y a modo de indagar las configuraciones y características de esos vínculos, supone repensar los intercambios analíticos entre la historia y la antropología⁵ con la

² La referencia al comercio/mercado sexual resulta útil en tanto permite superar la única referencia al sexo comercial (“prostitución”), incluyendo en este universo una diversidad de actividades o modalidades tales como alterne, baile erótico, pornografía, sexo virtual y acompañamiento, entre otras, al tiempo que contempla las distintas formas de inserción en el mercado del sexo, incluyendo aquellas consentidas que implican o no un contrato explícito de sexo por dinero, hasta modalidades que involucran situaciones de trata y explotación sexual de personas (Piscitelli 2005; Agustín 2007). A su vez, el concepto habilita a estudiar tanto la oferta como la demanda de servicios sexuales e indagar también los sentidos que se configuran en torno a esos consumos en sus distintos contextos (Leonini 2004; Nencel 2007; Bernstein 2008).

³ Cabe decir que si bien el término “prostitución” es de uso común tanto socialmente como en ciertos espacios académicos en tanto refiere al intercambio de sexo por dinero, también encubre una valoración moral negativa o peyorativa donde “prostituir” es sinónimo de “corromper” o “degradar”. Por lo tanto, en este trabajo el sexo comercial será nombrado como “prostitución” en el caso de que provenga de otra fuente discursiva, no de un uso propio.

⁴ Es una categoría nativa de autoadscripción y refiere a las mujeres que participan en el comercio sexual del contexto en el que se estudia.

⁵ Como suele plantearse, lo que diferencia a la Antropología Social de la Historia es que la primera “interroga a sujetos contemporáneos al investigador y la otra interpela a los que solo dejaron huellas de actividades pasadas” (Lorandi, 2012:22) y, en consecuencia, la temporalidad de los objetos y sujetos

finalidad de reconstruir procesos y prácticas de la acción social que son sincrónicos, pero cuya constitución y transformación puede observarse en su diacronía. En palabras de Stolcke (2008), apelar a la historia “permite adquirir conciencia del pasado para entender mejor el presente” y, en este sentido y en el caso que me ocupa, indagar el surgimiento, permanencia y cambios de/en el comercio sexual en zonas petroleras de la Patagonia permite ver, por un lado, cómo éstos se produjeron y significaron a través del tiempo y, por otro, cómo se manifiestan en la contemporaneidad. Cabe decir que este artículo no se centrará en un análisis del mercado del sexo en sitios de extracción de hidrocarburos en el presente en tanto el interés está en recuperar y reconstruir procesos previos que, a mi entender, dieron lugar a las expresiones y representaciones actuales del comercio sexual en estos contextos.

No obstante, en el siguiente apartado se harán algunas referencias sobre ese presente y desarrollaré cómo es representado el comercio sexual en la región en la que se estudia y desde los estudios sobre extractivismo. Luego, las dos secciones siguientes serán en torno a la “casita de chapa” y del análisis de documentos históricos primarios y secundarios (expedientes de notas, normativas y judiciales) y de discursos de actores (vinculados a la industria de hidrocarburífera) que la involucran directamente o la interpelan al referir al desenvolvimiento de las casas de prostitución en contextos petroleros patagónicos. La primera parte contextualizará el burdel de YPF dentro del período y marco legal de la prostitución reglamentada, describiendo algunos eventos y caracterizando las representaciones del comercio sexual para la época. Mientras la segunda, situará a la casita en un momento de transición a la abolición del sistema reglamentarista y, a la vez, a su permanencia ante la excepción a la regla abolicionista, mostrando las justificaciones sociohistóricas y políticas y fundamentadas en un orden de género específico.

¿La prostitución como efecto del extractivismo?

El fenómeno de la prostitución que se desenvuelve en contextos petroleros es comúnmente referido –más que estudiado– como un consecuencia negativa del extractivismo⁶, junto a otras problemáticas sociales, ambientales y territoriales (Svampa y Viale 2014), o como una patología social (Acosta y Guijarro 2016), producto de la explotación de la naturaleza. A su vez, en la última década y con los

de estudio dan lugar, en algunas ocasiones, a abordajes metodológicos diferentes. Sin embargo, como sostiene Lorandi, esta característica no implica que las discusiones epistemológicas sean distintas ya que, por ejemplo, los archivos no son un reflejo directo de la realidad y tampoco los discursos de los interlocutores. El vínculo entre estas disciplinas se ha ido desarrollando con el tiempo a partir de las necesidades de cada una de recurrir a la otra tanto para indagar en el pasado de las comunidades sincrónicas a los antropólogos o para recuperar, la historia, dimensiones de análisis ofrecidas por la antropología. En este sentido, Viazzo (2003: 38) dice que desde los años '80 “los límites se han difuminado mucho y para los antropólogos la necesidad de integrar la investigación etnográfica con más o menos profundas indagaciones históricas se ha convertido casi en un lugar común.”

⁶ Refiere a la extracción intensiva y con fines de exportación de los recursos naturales (Gudynas 2009). También utilizo el concepto de “regimen extractivista” que es la formación socio-geo-económica estructurada a partir de la extracción y comercialización de la naturaleza (Machado Aráoz 2015).

avances de una gubernamentalidad articulada en los regímenes⁷ de combate a la trata de personas con fines de explotación sexual (Piscitelli 2012, Varela 2015, Kempadoo 2016) la prostitución en estos entornos pasó a ser leída como trata de personas con fines de explotación sexual⁸, que es la modalidad sexoeconómica más coercitiva y violenta dentro del comercio sexual –aunque no la única.

En esta dirección, en lo que respecta al comercio sexual en zonas petroleras de la Patagonia, el mismo es representado desde el sentido común⁹ como un espacio que promueve casi exclusivamente la trata de personas, a pesar de que exista una diversidad de experiencias o de grados de consentimiento por parte de quienes desenvuelven distintas prácticas sexoeconómicas. A su vez, ese sentido común es retroalimentado por el discurso social, mediático¹⁰ y de distintos organismos gubernamentales y tiende a señalar que las localidades patagónicas que basan su economía en la industria hidrocarburífera, al tiempo que constituyen “la ruta del petróleo”, organizan “la ruta de la trata”, o uno de sus recorridos en el país. Por ejemplo, un informe del Observatorio Petrolero Sur (2010) remarca que “la industria hidrocarburífera, [la] concentración de hombres lejanos a sus hogares y [los] altos sueldos, resultan una combinación tentadora para las redes de trata de mujeres y niñas para la explotación sexual”, mientras que la actual Procuraduría de Trata y Protección de Personas dice que si bien “en medios tampoco se registran numerosas

⁷ El concepto de “regimen atitrata” (del inglés *antitrafficking*), refiere tanto al marco normativo para combatir la trata de personas, como a las expresiones político-ideológicas del feminismo abolicionista que utiliza la retórica de los derechos humanos. Estos regímenes con sus distintas modalidades según el contexto, intervienen en la regulación del comercio sexual, y afectan los intercambios sexoeconómicos consentidos y a los grupos de trabajadorxs sexuales que demandan reconocimiento y derechos laborales (Bernstein 2010).

⁸ El “Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños”, creado en el 2002 en Palermo, Italia (ratificado en Argentina y que dio lugar a la Ley Nacional N° 26.364 de “Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas” en el año 2008) complementa la “Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, y define a la “trata de personas” como: “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”.

⁹ Geertz (1994 [1983]) define el sentido común como una interpretación de las immediateces de la experiencia, que se construye históricamente y está sujeto a pautas de juicio definidas. Es un sistema cultural que descansa en la convicción social de que su posesión se relaciona con su valor y validez, y que éstos son incuestionables.

¹⁰ En el marco de la implementación de legislaciones antitrata en sus niveles nacionales, provinciales y municipales desde el año 2008, algunos casos adquirieron repercusión mediática y, de algún modo, produjeron o reforzaron sentidos sobre la prostitución en el sur. Por ejemplo, “Las Casitas” de Rio Gallegos, “el barrio prostibulario más grande del país” según La Alameda, una ONG dedicada a combatir la trata sexual y laboral, y el activismo de Alike Kinan, autopercebida como sobreviviente de una red de trata de personas en Ushuaia, le dieron mayor visibilidad al comercio sexual en la Patagonia, tiñéndolo de un carácter coercitivo y de explotación y alentando imaginarios totalizadores de trata de personas sobre estos lugares.

víctimas explotadas en las provincias del sur [es] prácticamente imposible pensar que esto no sea una realidad en la zona” (UFASE-INECIP 2012: 37). En este sentido, presentan a estos espacios –regionales y extractivistas– como propicios para el negocio delictivo de la trata, a pesar de que en términos estadísticos las provincias patagónicas no expresen altas recurrencias de casos de explotación sexual, o en comparación con el resto del país, según sus propios informes (PROTEX 2015).

Por otro lado, la tendencia a representar a los sitios extractivos de la Patagonia como lugares para la trata también encuentra sentido en la percepción de que es la predominante presencia de hombres la principal causa de la existencia del comercio sexual. A pesar de que esto sea válido en tanto sugiere efectivamente la importancia de la demanda, no puede constituirse la sola presencia masculina como la única justificación de la existencia del comercio sexual. En este marco, la propuesta es reconstruir las condiciones sociohistóricas y políticas que tuvieron lugar en sitios de extracción de petróleo masculinos y masculinizados y que organizaron la oferta y la demanda de sexo comercial y formas de relacionamiento particulares entre hombres y mujeres.

En este sentido, resulta fundamental para el estudio de estos contextos considerar al género, como “un elemento constitutivo de las relaciones sociales, las cuales se basan en las diferencias percibidas entre los sexos, y (...) [como] una forma primaria de las relaciones simbólicas de poder” (Scott 2008[1999]:65). Este énfasis en la dimensión política permite no solamente deconstruir el sistema sexo-género¹¹ (Rubin 1975), sino también recurrir a una definición de la sexualidad, menos como un hecho dado e incuestionable, como el resultado de distintas prácticas sociales que dan significado a las actividades humanas y que expresan también negociaciones de poder (Weeks 1998).

A modo de referir a algunos estudios realizados en la Patagonia sobre la configuración del género en entornos petroleros, el trabajo de Ciselli (2002) analiza las modalidades de intervención de la YPF estatal en Comodoro Rivadavia, desde principios hasta mediados del siglo XX, en la organización de la vida privada de los trabajadores y de cómo éstas dieron lugar a determinadas relaciones genéricas y a un proceso social donde se interrelacionaron la familia, la escuela y el trabajo. Mientras el hombre y trabajador petrolero se constituyó como jefe de familia y proveedor, la mujer fue la responsable de la unidad doméstica, de la crianza de los hijos y de colaborar con la inserción de los varones en las escuelas técnicas de la empresa, además de quedar circunscriptas a la realización de trabajos –feminizados– de enfermería o magisterio. Por su parte, la investigación de corte empírico de Barrionuevo (2016) indaga cómo el trabajo petrolero en Comodoro Rivadavia produce desigualdades de género en directa articulación con desigualdades de clase

¹¹ El sistema sexo-género es un conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana; es decir, un conjunto de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores sociales elaborados a partir de la diferencia sexual anátomo-fisiológica/biológica. En su obra, y a partir de este concepto, Rubin insistió en señalar que la subordinación de las mujeres es la consecuencia de las relaciones que organizan y producen el género, y que son las convenciones y formas de organización a partir de lo biológico/el sexo las que determinan sistemas de opresión, y las que deben ser disputadas (Rubin, 1975).

y cómo éstas se (re)estructuran durante la etapa de la post-privatización de YPF, a partir de recuperar las experiencias y discursos de las esposas de los trabajadores de la industria. Mientras que Palermo (2017), articulando un análisis del trabajo y del género, estudia la producción de masculinidades en el trabajo petrolero y la interpreta no sólo como resultado de la disciplina fabril sino como requerimiento de la misma. Las características del trabajo petrolero (mano de obra casi exclusivamente masculina, alto grado de exigencias físicas y de productividad) y cómo éste ha ido variando en sus distintas etapas con mayor o menor presencia estatal, parecen configurar modos de “ser hombre” que hacen a una pedagogía productivista y a una subjetividad obrera funcional al extractivismo de hidrocarburos.

Estas investigaciones, más allá de diferir entre sí respecto del objeto o problema de estudio, ofrecen abordajes a la dimensión genérica en íntima relación con el extractivismo, indagando su peso en la definición de roles y relaciones. Esto constituye un escenario indispensable para estudiar el comercio sexual y comprender en qué marcos de significación tiene lugar, más que sólo decir que “el petróleo genera prostitución” y que “la prostitución es siempre coercitiva y violenta”. Como sostiene Mahy (2011), el modo de percibir o entender el comercio sexual en sitios de explotación de recursos naturales depende del posicionamiento feminista¹², pero también de cómo se valore el extractivismo, aunque la tendencia parece ser siempre la de victimizar a quienes –principalmente mujeres– participan allí, invisibilizando su capacidad de agencia y de evaluación de posibilidades de movilidad socioeconómica. Así como predomina un imaginario sobre “el lado oscuro” (*the dark side*) de las ciudades petroleras (Obeng-Odoom 2014), producto de su inmoralidad y peligrosidad –también representado así por los medios de comunicación y activistas del medioambiente– que promueve prácticas marginales, entre ellas, la prostitución.

En este marco de discusión y de desacuerdos, quiero ir hacia atrás en el tiempo e intentar reconstruir el proceso de institucionalización del comercio sexual en un área de yacimientos, atendiendo a la participación e influencia de la industria petrolera en la configuración de las relaciones sexo-afectivas. Considero que indagar en los antecedentes contextuales de la prostitución en zonas petroleras permite reconocer qué actores participaron en su promoción y a partir de qué sentidos y representaciones sobre ella y, a su vez, cuáles fueron los eventos que dieron lugar a transformaciones o permanencias del mercado del sexo en estos contextos. Estas son

¹² Cabe decir que el comercio sexual es un tema controversial en tanto existen diversos posicionamientos, perspectivas y formas de intervención o legislación, que disputan significados contrapuestos sobre el mismo. Los feminismos en sus expresiones activistas y teórico-académicas reflejan discrepancias en su interior y no hay acuerdo sobre determinados aspectos – y lo que es más preocupante a mi parecer– tampoco un diálogo entre perspectivas (por ejemplo, abolicionistas y a favor de la regularización del trabajo sexual) que contribuya a generar mejores condiciones para lxs involucradxs en el comercio sexual y que contrarreste las violencias que se producen y reproducen de distintos modos en estos entornos. Mi investigación se inscribe dentro de la antropología feminista como una ruptura epistemológica y un modo de producción teórico basado en el dato etnográfico y atento a las relaciones de poder y de desigualdad para deconstruirlas y transformarlas (Harding 1987; Moore 1991) y mi interés está en recuperar las experiencias vividas en el comercio sexual y las significaciones sobre él, que son múltiples y representan distintas subjetividades y trayectorias que impiden una única definición sobre el mercado del sexo.

algunas pistas necesarias para dimensionar y comprender la actualidad del comercio sexual en sitios extractivos y las relaciones sexoeconómicas y genéricas estructuradas en mayor o menor medida en torno a él y a sus efectos.

La “casita de chapa”, un caso de prostitución reglamentada

Las ciudades vecinas de Plaza Huincul y Cutral Co, cuyo surgimiento y desarrollo se dio con la presencia de la YPF estatal (Favaro 2001) tienen historias o “secretos a voces” que hablan de un cabaret de la empresa, la “casita de chapa” y que involucran en esas escenas a trabajadores del petróleo y a prostitutas. Algunos estudios actuales interpretan este hecho como una situación de explotación sexual y prostitución forzada que responsabiliza al estado (Contreras H. 2010), en tanto YPF instaló y regenteó este cabaret. Como destaca una noticia periodística que anuncia la presentación del libro autobiográfico del ingeniero ypefiano¹³ nacido en Plaza Huincul Roberto Villa, titulado “Los caminos del petróleo”:

El primer prostíbulo de Plaza Huincul, habilitado a mediados de la década del 20, se conformó a partir de una decisión estratégica empresarial de los popes de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y se constituyó con jóvenes llegadas desde locales nocturnos de la calle Corriente de Buenos Aires. La casa de tolerancia fue levantada por la firma petrolera con las mismas artes que construyó el campamento donde surgió la ciudad y las jóvenes que allí trabajaban eran empleadas del Estado argentino.¹⁴

En su libro, Villa (2007) relata sus experiencias en las cuencas petrolíferas argentinas como ingeniero en petróleo, destaca la soledad y aislamiento de la Patagonia¹⁵, y le dedica un capítulo a los burdeles y la vida nocturna en Plaza Huincul. Hace mención a que el administrador de YPF en Plaza Huincul, el ingeniero Alberto Landoni le propuso en 1930 al presidente e ingeniero militar de la empresa estatal Enrique Mosconi el proyecto 1120 que implicaba la apertura de la casa de

¹³ “Ypefiano” es una denominación nativa que refiere a los trabajadores que brindaron servicios a YPF durante su período estatal, previamente a la privatización del año 92.

¹⁴ “El primer prostíbulo de Plaza Huincul era del Estado”; Diario Rio Negro, 6 de mayo de 2007. Disponible en: <http://www1.rionegro.com.ar/diario/2007/05/06/20075v06s05.php>

¹⁵ La película “Plaza Huincul (Pozo uno)”, con la dirección de Lucas Demare y el guión de Sixto Pondal Ríos, y estrenada el 1960, reconstruye la búsqueda de petróleo en Plaza Huincul a cargo de un grupo de hombres que se inician como petroleros. Además de los hechos históricos a los que remite, la película recrea los escenarios de soledad y hostilidad del ambiente desértico y desolado de alrededor de 1918 y también produce situaciones de ficción más dramáticas que involucran relaciones sexoafectivas entre los obreros y unas pocas mujeres. Entre ellas, la única que acompaña al campamento que es la esposa del capataz y que es asesinada por él al encontrarla con otro obrero, y la emblemática Carmen Funes. Más conocida como “La Pasto Verde”, fue una mujer que participó de la Guerra del Paraguay y de la Conquista del Desierto, sirviendo a las tropas, y luego se instaló en una aguada de la llanura en Neuquén hasta su muerte en 1917. En el verdor de su rancho y con animales convirtió su casa en el lugar obligado de paso y abastecimiento de troperos y de los que buscaban los “lloraderos de petróleo”, abasteciéndolos con agua y servicios. Los pobladores la recuerdan como la fortinera vigorosa, ágil, servicial, alegre y de gran belleza, lo que la ha convertido en objeto de expresiones literarias, musicales y en relatos y crónicas orales locales (Siracusa 2009).

citas¹⁶, con la finalidad de evitar el éxodo de trabajadores petroleros a la capital neuquina y su no retorno a los puestos de trabajo, situación que sucedía los días de franco. A su vez, el periodista Alejandro Bianchi en su libro *“Argentina Saudita”* agrega que “otro inconveniente eran las peleas entre los empleados. [y que] Había una mayoría aplastante de solteros que, ante la escasez de mujeres, merodeaban a las señoras casadas” (2015:20), lo que era percibido como un problema que el cabaret vendría a resolver.

En ese contexto la empresa estatal creó el burdel conocido como “la casita de chapa”. Como cuenta un ypefiano, hoy en día muy activo en la Fundación YPF y residente de Plaza Huincul, la casa estaba registrada con el Nro. 424 en los legajos, también era nombrada como “la casita verde” y controlada por el Servicio Social y Médico de YPF:

las contrataban, y de Buenos Aires mandaban las postulantes, con fotos, con legajos, con historias, y acá se elegían. La gente de obra social. “Che, qué te parece, está linda, y ésta, ésta no”. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tenían que traer buen servicio, para profesionales, técnicos y operarios. Entonces, tiene que ser hábil, útil y en condiciones de atender a los tres en distintos días. (Marzo de 2017, Plaza Huincul)

De esta manera, las prácticas sexoeconómicas de los trabajadores petroleros no sólo estuvieron organizadas o promovidas por la empresa, sino que al crearse “la casita de chapa” durante el período reglamentarista de la prostitución en la Argentina tuvo que ajustarse a sus exigencias y características. La prostitución reglamentada o patentada hasta su abolición en 1936 con la Ley Nacional de Profilaxis de las Enfermedades Venéreas (N° 12.331), fue el sistema que reguló:

el mal social inextirpable e irradicable ante el cual sólo era posible desplegar una actitud pragmática: la de la tolerancia (...) Fue vista como un problema que excedía la esfera meramente individual, privada; pensada en términos públicos y, por ende, un asunto que concernía específicamente al estado

¹⁶ Cabe decir que esto sucedió durante el período reglamentarista de la prostitución (desde fines del siglo XIX hasta la sanción de la Ley de Profilaxis en 1936) que combinaba aspectos sanitarios, político-administrativos y policiales tanto para prostitutas como para casas de tolerancia. Como señala Guy (1994), “si el gobierno no podía terminar con la prostitución, por lo menos podía controlar sus manifestaciones más perniciosas” (pág. 67). De este modo, en 1864 declaró en Buenos Aires que las leyes de control de la prostitución eran ineludibles, y el Concejo Deliberante autorizó los burdeles en 1875 a través de una ordenanza “redactada por políticos y médicos más interesados en el lugar donde se ejercía la prostitución que en proteger la salud pública, la ley acentuaba el uso de prácticas tales como mantener a los rufianes fuera de los burdeles y a las prostitutas alejadas de los edificios públicos, las iglesias y la vía pública y establecía que la erogación para tratar las enfermedades de las prostitutas no provendrían de la municipalidad, sino del fondo recaudado con la multas” (págs. 68 y 69).

municipal, el cual pasó así a tener injerencia también en asuntos vinculados con la sexualidad (Múgica 2014b: 51).¹⁷

En este sentido, el reglamentarismo fue uno de los modelos existentes para regular los locales con oferta de servicios sexuales a través de controles policiales y sanitarios para las “pupilas” y de delimitar la espacialización de la prostitución. Concebida como un “mal necesario” y “tolerado”, creó reglas para la localización de las casas (lejos de las escuelas y de las iglesias, por ejemplo), organizó la circulación y exhibición de las mujeres en la vía pública, su forma de vestir, y la realización de controles médicos periódicos, con una doble preocupación: sanitaria y moral. Y así, dado que “la casita de chapa” se instaló en el período en el que la prostitución estaba reglamentada en base a lógicas y normativas de control sanitario, hace sentido que el área de salud de YPF fuera la responsable de ordenar la actividad entendida como un “virus”, una “infección” o la “llaga de los pueblos civilizados”, entre otras.

Por su parte, además de que el tratamiento de la prostitución fue desde una mirada patológica, fue el cuerpo de las prostitutas el que se patologizó y señaló como principal responsable de la propagación de enfermedades. Esta percepción predominó tanto para las pupilas que se encontraban registradas dentro del sistema patentado como para las clandestinas –consideradas aún más peligrosas– lo que denota las formas de control social de la sexualidad femenina, y cómo era valorada y ordenada la disrupción de los roles de género y de prácticas sexoafectivas tradicionales asignadas/os a las mujeres (Fernández y Hernández 2014).

El vínculo de los cuerpos de las mujeres y de “esas mujeres” en particular, las del comercio sexual, con su salud –aunque con la “salud pública”– se evidencia en determinados relatos. Roberto de Cutral Co, de 68 años de edad, hijo de los primeros ypefianos y también ex trabajador petrolero, del área de comunicaciones, recuerda su infancia y la “casita de chapa” de mediados del siglo XX:

En Plaza Huincul había un prostíbulo que era regenteado por YPF (...) le decían “la casa de chapa”, no se hablaba de prostitución, viste, era la casa de chapa. Y yo tenía, no sé, tenía 13 años, 12, íbamos a la pileta de natación que está en el campamento 1, no sé si la viste. Ahora está muy destruido, antes era una pileta hermosa. Nosotros vivíamos pegados a la pileta, y para ir a la pileta, que era de YPF también, tenías que hacer la revisión; ya no estaba más, donde hoy es el sanatorio Plaza Huincul, era el hospital de YPF. Y hacíamos la revisión para la pileta ahí. Vos ibas a YPF, te daban el carnet con la foto, y de ahí ibas al hospital. Y un día determinado los médicos atendían a la tarde, te revisaban los pies, te hacían la revisión para una pileta de natación. Y muchas veces íbamos y estaban

¹⁷ La historiadora refiere al municipio de la ciudad de Rosario (primer lugar donde se implementó y también se suprimió el sistema reglamentarista) aunque la dinámica es aplicable al resto del país. (Para el caso rosarino ver Múgica 2014a).

las prostitutas ahí haciéndose la revisión. Te imaginas, nosotros teníamos 11, 12 años. Pasábamos mirándolas porque estaban vestidas con ropa de trabajo [gesto de que murmuraban entre ellos mientras las miraban] (...) A los ojos de hoy, las mujeres andan en la calle así, pero para esa época, andar ya con polleritas cortas, no era que andaban exageradas, ni llamativas, nada. Sabíamos que iban todas juntitas, y esperando turno, y ahí les hacía la revisión el médico de YPF. Y después, en la calle no las veías nunca, jamás. Y después, bueno, con el tiempo se cerró. (Junio de 2016, Cutral Co)

Las “chicas que fumaban”, como Roberto y sus amigos las llamaban, no tenían una presencia activa en los espacios públicos del pueblo –esto tiene que ver con que probablemente tenían una serie de restricciones de la empresa en base a normativas reglamentaristas que limitaban su libre circulación, como algo característico de este modelo, señalado anteriormente– sino que era en instancias muy ocasionales que podían verlas, como en el hospital. Esto responde al objetivo de reglamentar la prostitución como un modo de preservación de la salud y de la moral, como se dijo, pero no precisamente de las mujeres que vendían servicios sexuales, sino y sobre todo de los clientes/hombres. Esta preocupación médica puede observarse en estudios históricos realizados sobre la pionera ciudad petrolera de Comodoro Rivadavia, que recuperan a través del archivo documentos de la empresa sobre temas relativos a la salud de sus trabajadores y que también dan cuenta de la participación de éstos en el comercio sexual. Por ejemplo, Fuentes (2005) retoma las denuncias del Administrador de la Explotación Nacional del Petróleo a la Municipalidad local, donde se responsabiliza a los prostíbulos y a sus pupilas de las enfermedades venéreas del personal obrero ya que de 104 obreros asistidos, 33 habrían sido diagnosticados de sífilis y blenorragia, entre otras:

Siendo cosa que preocupa a la administración, se solicita al señor Presidente del Consejo se haga más estricta la fiscalización de las pupilas de las casas de Tolerancia de ese “Municipio”, rogándole encarecidamente la conveniencia de que se le preste real importancia a este asunto, para beneficio del personal obrero en general. (Carta en Libro de Actas y Sesiones del Comisionado Municipal, Folio 149, año 1919; en Fuentes 2005: 8)

Así, el pedido de control de la salud de las pupilas por parte de la empresa, tenía la finalidad de resguardar la salud de los obreros y de su productividad en el yacimiento. Es decir, para la época, la prostitución era interpretada como un problema que afectaba a la población en general y, de este modo, el municipio debía hacerse cargo. Sin embargo, al ser los principales afectados la mano de obra de la industria de hidrocarburos, en tanto también eran los principales consumidores del comercio sexual, también se constituía como un asunto de la empresa tratar esta

problemática y exigir el control de enfermedades venéreas. Un pedido que realizó una regenta en 1929, visibiliza la participación e importancia de los trabajadores petroleros en/para su negocio:

Invocamos a Ud. [la Intendencia] que tan dignamente vela por los intereses de la comuna, deje sin efecto tal horario que dentro de los actuales momentos de crisis afecta en una forma alarmante nuestros intereses, unidos al adelanto de (1) hora en las Zonas petrolíferas, sin estar en otros detalles que dentro del desenvolvimiento de esta localidad muy Diurno y nada Nocturno como en grandes ciudades (AHMCR, Exp. 471/F, año 1929; en Infeld 2009: 106)

Esta cita, donde la administradora de un burdel solicita a los poderes municipales un permiso para la modificación del horario de apertura del negocio, da cuenta, por un lado, de la relevancia de estos clientes y, por otro, de que las mujeres que trabajaban en las casas estaban atentas a los distintos factores que repercutían en la economía del mercado sexual. Por ejemplo, tenían un registro de las características laborales de los obreros y del contexto, como el horario de sus jornadas laborales, porque esta información organizaba la venta de servicios sexuales. Por su parte, la instalación y permanencia de las casas de prostitución en ciudades petroleras tuvo directa relación con la demanda masculina y con “satisfacer las necesidades de hombres solos y aislados”; esto, por razones laborales y como producto de la migración, tanto de solteros como casados sin familia en destino, “situación que en consonancia con los modelos de sexualidad imperantes, los transformaba en verdaderos focos de libido contenida, de deseos sexuales, de lascivia y lujuria refrenada que debía tratar de encauzarse...” (Múgica 2014b: 50).

Sin embargo, las justificaciones del reglamentarismo del desenfreno sexual de los hombres no eran totalmente compartidas y, en este sentido, no pudieron sostenerse por mucho tiempo debido a la resistencia ejercida principalmente desde la Iglesia y familias dominantes que la consideraban un atentado contra la moral, en vez de una preservación de ella. Por ejemplo, como señala el estudio de Argeri (1999) sobre prostitución y control estatal entre 1880 y 1920 en la provincia de Río Negro – que comparte territorio norpatagónico con la zona de estudio– si bien la instalación de burdeles en distintas localidades rurales y urbanas fue promovida por algunas autoridades y ciudadanos, también fue negada por otros interpretándola como “la peor plaga que pudo haber traído la locomotora”, paradójico símbolo de progreso y desarrollo económico y territorial para la época. A diferencia de las principales capitales del país (Buenos Aires, Rosario, Córdoba) donde las primeras reglamentaciones surgieron antes de fines del siglo XIX), en Río Negro recién entre 1900 y 1910 se dictaron las primeras ordenanzas. Este fue un período de gran conflictividad en tanto “la reglamentación de la prostitución estuvo influida por: los discursos al uso, contradictorios entre sí –higienistas y católicos–; los avatares del juego político –debido a la mayor o menor influencia de la Iglesia Católica sobre el gobernador y funcionarios de turno–; la sanción de leyes nacionales; las presiones de

los embrionarios grupos dominantes locales” (Argeri 1999:221). Y al mismo tiempo fue la policía la institución encargada de controlar las casas con oferta sexual, exigiéndoles ciertos requisitos para su sostén o apertura (a las pupilas, a quienes regenteaban y a las instalaciones) y la que, de esta forma, interpretó e impuso las normas arbitrariamente según sus intereses.

La “casita de chapa” como excepción a la regla abolicionista

Fue así que avanzados los años 30, en los contextos provinciales comenzaron las legislaciones para eliminar el reglamentarismo hasta que el 1936 la Ley de Profilaxis, de alcance nacional, dio inicio al sistema legal abolicionista que predomina hasta el presente. Éste suprimió o abolió las medidas reglamentaristas, penalizando los establecimientos donde se ejerciera o incitara a la prostitución y a quienes los regentearan. Es decir, los burdeles se volvieron ilegales, y a pesar de que durante los primeros años no hubo definición sobre si la venta de un servicio sexual cometía un acto delictivo, en 1940 la Corte Suprema reafirmó el fallo donde las actividades de mujeres individuales debían ser exceptuadas de los artículos 15 y 17, sin ser penalizadas por el ejercicio prostitución (Guy 1994).¹⁸

El giro en la legislación de la prostitución tuvo el objetivo de organizar la profilaxis de las enfermedades venéreas, pero además de la preocupación higienista de la época, se trató de una discusión parlamentaria para el combate al proxenetismo. Esto sucedió en sintonía con la agenda feminista internacional que desde fines del siglo XIX, a través organizaciones, reuniones y legislaciones internacionales destinaron sus esfuerzos a la erradicación de la “trata de blancas”, problemática que fue nombrada en esos términos en tanto refería principalmente al tráfico de mujeres europeas hacia el llamado “Nuevo mundo”, es decir, hacia América del Sur.¹⁹ Sin embargo, como sostiene Guy (1994), si bien se conocían hechos concretos de mujeres europeas engañadas, secuestradas y llevadas a distintas ciudades, como Buenos Aires, Río de Janeiro y México, y el escándalo de la Zwi Migdal²⁰ había cobrado atención pública, también predominaban imaginarios respecto de la vulnerabilidad de la mujer que emigraba de su lugar de origen –Europa–, y sobre la inmoralidad de

¹⁸ No obstante, cabe decir que desde esos tiempos hasta el presente existen regulaciones locales como los códigos contravencionales y de faltas que, por ejemplo, sancionan la oferta y demanda ostensible de servicios sexuales en espacios públicos, y son administrados por la policía. Este poder, a su vez, actúa con discrecionalidad para criminalizar a quienes ejercen la prostitución (Para un análisis de esta problemática y en la actualidad, ver Daich y Sirimarco 2015).

¹⁹ Por ejemplo, en 1876, la feminista Joséphine Grey Butler fundó la Federación Abolicionista Internacional y en 1885 se creó en Londres la Asociación Judía para la Protección de Jóvenes y Mujeres (JAPGW). También se dieron los primeros encuentros convocados por Naciones Unidas, como el Congreso Internacional para la supresión de la trata de blancas en 1902, entre otros.

²⁰ La Zwi Migdal fue una organización de rufianes judíos que operó burdeles legales y clandestinos en distintas ciudades del país. Conocida desde comienzos del siglo XX como “Sociedad de Varsovia”, ante la denuncia de la Asociación Judía para la Protección de Jóvenes y Mujeres de tráfico y trata de blancas de mujeres inmigrantes, cambió su nombre y en 1930 fue Raquel Liberman quien acusó a la Zwi Migdal de explotación sexual. Esto dio lugar a escándalos públicos y a una serie de debates legislativos que pusieron la problemática en el candelero.

los países de la periferia que las corrompían y/o abusaban: “Buenos Aires era conocida internacionalmente como un tenebroso puerto de mujeres desaparecidas que se veían obligadas a vender su cuerpo (...) [como] una ciudad inmoral llena de hombres irresponsables” (págs.17 y 18).

En este marco de discusiones y cambios en la regulación de la prostitución, la “casita de chapa” parece haber sido afectada y posiblemente clausurada, como lo connota un expediente del año 1938.²¹ Se trata de un pedido que el gobernador militar Enrique R. Pilotto le hizo al Ministro del Interior Doctor Diógenes Taboada, señalándole que las autoridades administrativas de YPF en Plaza Huincul ya “habían solucionado a su manera el serio problema que la aplicación estricta de la Ley 12.331 les había creado”. Ese problema tenía que ver, como había diagnosticado el médico de la empresa, el doctor Zani²², con que desde el cierre del burdel el 30 de junio de 1937, las enfermedades venéreas se habían incrementado, siendo afectados principalmente los obreros solteros, pero también “era raro el matrimonio de obreros en que ambos cónyuges no aparecieran contagiados”. De ese modo, la solución por parte de la petrolera había sido “permitir el funcionamiento de un café-bar servido por camareras”. Respecto de esto, el gobernador escribió:

tiene a mi juicio el grave inconveniente de volver –en cierto modo– a la prostitución patentada con todos los males que la Ley ha querido extirpar de raíz. Además, siendo un local donde se expenden bebidas y atendido por mujeres, pronto se producirán rivalidades, incidentes y hasta hechos delictuosos que provocarán la necesaria intervención de la justicia y ésta se verá en el caso no sólo de aplicar las penas que correspondan sino que tendrá que constatar la violación de la Ley de Profilaxis por las mismas autoridades encargadas de vigilar su aplicación y cumplimiento. (Nota N° R296, Ministerio del Interior,)

En este sentido, si bien la autoridad expresó las consecuencias de “volver” al reglamentarismo y un retroceso en la normativa “que ha tenido la virtud de dar un golpe de maza al tratante de blancas y, por otro, restringir la corrupción administrativa inevitable” –refiriéndose a la ley de profilaxis–, también indicó que la aplicación estricta de sus prescripciones ocasionaba males en muchas regiones del

²¹ Ministerio del Interior, Nota N° R296, 20 de mayo de 1983. Le agradezco enormemente a Romina Behrens haberme compartido este archivo así como otras fuentes que cito.

²² El médico Victor Ezio Zani fue el director del Hospital de YPF en Plaza Huincul desde principios de la década del 30 y es considerado uno de los fundadores de Cutral Co. Por designación del entonces gobernador de Neuquén el Coronel Carlos H. Rodríguez formó parte de la primera comisión de la Superintendencia del llamado “Barrio peligroso” rebautizándolo en 1933 como “Pueblo Nuevo”. Junto a “Miguel Benassar, Juez de Paz de Plaza Huincul, y al Agrimensor Luis Baka, Jefe de Estudios y Proyectos de YPF, acompañados por un peón, se reunieron en el límite del Octógono, sobre un mojón de YPF, y comenzaron las tareas de trazado del pueblo, y posteriormente, el reparto de los lotes a los pobladores” (Extraído del sitio web de la Municipalidad de Cutral Co).

país y especialmente en la Patagonia. Para Pilotto, esos males eran la clandestinidad de la prostitución, la falta de controles médicos y de medicamentos, y el principal defecto de la 12.331 “haber dispuesto su aplicación uniforme y simultánea en todo el territorio de la República.” La autoridad hizo referencia a la desproporción entre hombres y mujeres, al predominio de los primeros por la presencia de obreros y también por la llegada de tropas, lo que ocasionaría, dice, “verdaderas tragedias de orden sentimental o pasional a que no fue ajeno el viejo ejército conquistador del desierto [y] (...) explosiones naturales cuando se juntan hombres y mujeres en la proporción de 100 a 1.” Nuevamente, este discurso actualizó, por un lado, la percepción del deseo sexual incontrolable – tácitamente heterosexual–de los hombres y, por otro, la percepción de que evitaba la peligrosidad tanto de la clandestinidad como de las posibles violencias sexuales que esos hombres podían cometer hacia las mujeres que no trabajaban en el comercio sexual –o inclusive entre/hacia ellos mismos.

En este marco, habilitar y controlar la prostitución volvía a constituirse como una justificación para el retorno de medidas reglamentaristas excepcionales y en zonas excepcionales por sus características y/o “necesidades”. Como expresa Bertello (2010), “los prostíbulos en regla eran concebidos como una institución formal e indispensable para evitar males mayores como las violaciones y el rapto de mujeres” (pág. 72); sin embargo, la historiadora reconstruye el caso de una joven que expresa cierta cooptación involuntaria para el comercio sexual en la región petrolera. Se trata de María, de la zona de Cutral Co y Plaza Huincul en 1940, donde la menor de edad es iniciada en la prostitución en un contexto “donde prevalecía un gran número de hombres solos”. Bertello muestra a partir del análisis de expedientes judiciales, hechos tales como que el proxeneta había llevado a María en algunas ocasiones a los campamentos petroleros, adquiriendo estos sitios complicidad en el hecho delictivo. Sin embargo, esas fuentes que la autora analiza no son suficientes para reconstruir la experiencia de la joven respecto del grado de coerción impuesto sobre ella por parte de los actores que aparecen vinculados en el caso. Así como sucede con lo que Lvovich (1993) dice sobre la posible presencia y operaciones de la famosa red judía de trata de blancas Zwi Migdal en Neuquén, inclusive durante el reglamentarismo a nivel nacional que autorizaba el comercio sexual:

Durante la década de 1910 encontraremos cuatro casas de tolerancia en Neuquén, en las que convivían prostitutas argentinas, chilenas, españolas y francesas con caftanes, madamas y pupilas de origen ruso, polaco y judío, lo que nos lleva a suponer la ramificación hasta regiones tan alejadas de la organización de trata de blancas Zwi Migdal (Lvovich 1993: 87)

Otra vez, la alta tasa de masculinidad en el norte de la Patagonia como consecuencia de la demanda de mano de obra para la construcción del Dique Neuquén, el tendido de las vías férreas a Zapala y la explotación petrolífera en Plaza Huincul funciona como justificación no sólo del desarrollo de la prostitución a principios y mediados del siglo XX en la región, sino como causa de la trata. El autor

destaca la condición migratoria de las mujeres como una de las evidencias de la participación de la red en la región, y también da por sentado que ellas no podrían haber elegido tal destino de manera autónoma, sino únicamente habiendo sido engañadas por rufianes mientras que, ante esta generalización, el estudio de McGee Deutsch (2010) analiza los matices en las relaciones entre rufianes y mujeres migrantes.²³

Entonces, la alta presencia masculina, así como las percepciones de su peligrosidad sexual y epidemiológica fueron los argumentos que a partir de gestiones realizadas desde la provincia de Neuquén dieron lugar a los pedidos atendidos durante el primer gobierno de Perón (1946/1952). Se modificaron mediante el Decreto N° 10.638 de 1944 los artículos 15 y 17 de la ley N° 12.331. En términos generales, se incorporaron excepciones a la prohibición de casas de prostitución considerando las “necesidades y situaciones locales” y se incorporó la no penalización de las mujeres que voluntariamente trabajaran en las casas autorizadas y de sus administradores/gestores.²⁴

A su vez, como analiza Behrens (2017) la solicitud de apertura de los burdeles en áreas específicas tuvo mayor repercusión en 1942 cuando desde la Zona Militar de Comodoro Rivadavia, la Agrupación Patagonia, una guarnición militar con sede central en esta ciudad y comando en Río Gallegos con el 9° Destacamento, presentó un informe al Ministerio de Guerra que fue atendido por el Ministerio del Interior. Este señalaba las problemáticas de salud que traía la prostitución clandestina dada la falta de control sanitario, pedía la modificación de la ley de profilaxis social para el caso de las guarniciones militares, y proponía regulaciones específicas tales como la reubicación de las casas dentro de la jurisdicción militar y su organización según los destinatarios (tropa, oficiales, civiles). A su vez, esta solicitud, así como otras

²³ Por ejemplo, el estudio de McGee Deutsch (2010) retoma casos de mujeres que participaron en la “organización delictiva”, tanto como prostitutas como madamas, y encuentra una diversidad de experiencias y características en ellas. La autora destaca una serie de aspectos, tales como la flexibilidad ante la realización del trabajo sexual y el alterne con otro tipo de actividades; o que frente al imaginario de que se trataba únicamente de judías traficadas y explotadas sexualmente, éstas representaban un porcentaje mínimo y también eran conscientes de que sus cuerpos e identidades colaboraban con el ideal de la nación, lo que les otorgaba ciertos márgenes de agencia y de negociación. De este modo, lo interesante de su estudio es cómo aborda a la Zwi Migdal desde otro tipo de fuentes y, así, da lugar a un conocimiento distinto e invisibilizado en otros trabajos respecto de este tema y/o caso.

²⁴ Art. 15: Queda prohibido en toda la República el establecimiento de casas o locales donde se ejerza la prostitución, o se incite a ella; con excepción de aquellas cuyo funcionamiento fuera autorizado por la Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social, con aprobación del Ministerio del Interior (...) atendiendo a necesidades y situaciones locales (...) debiendo los establecimientos autorizados sujetarse a las normas sanitarias que se impongan por la reglamentación.

Art. 17: Los que sostengan, administren o regenteen, ostensible o encubiertamente, casas de tolerancia, serán castigados con una multa de mil pesos moneda nacional (...) El simple ejercicio de la prostitución por la mujer, en su casa, en forma individual e independiente, sin afectar el pudor público, no constituye el delito penado por este artículo. Tampoco constituye delito el ejercicio de la prostitución, por la mujer, o el desarrollo de las tareas necesarias de gestión o de administración, realizadas por mujeres, cuando se trata de actividades respectivamente cumplidas dentro y para los establecimientos autorizados en los términos del artículo 15. (Anales de la legislación argentina)

similares realizadas desde Río Gallegos, estuvieron motivadas por “el problema fisiológico en las unidades, el comportamiento inmoral y bajo rendimiento físico e intelectual, la producción de hechos anormales de carácter sexual y la realización de sustitutos al acto sexual fisiológico entre los soldados conscriptos” (Behrens 2017: 8).

Así, el desarrollo de prácticas sexuales inmorales en entornos eminentemente masculinos como consecuencia de la prohibición de las casas de prostitución –como supuesta justificación– significó un problema a ser atendido. La concentración de hombres en los campamentos militares, también aplicable a la industria petrolera, fue vista con preocupación a la hora de posibilitar el “desvío sexual” y de contradecir el mandato nacional de autoafirmación de la masculinidad heterosexual. Como señalan Acha y Ben (2005), con el peronismo y su promoción del modelo familiarista fusionado con los discursos católico (principalmente durante el primer gobierno)²⁵ y médico-higienista-psiquiátrico, las prácticas sexuales desviadas de las normas, entre ellas, la homosexualidad, se constituyeron como una problemática a ser atendida, y de ahí, la persecución y represión de los “amorales” o “invertidos” como prueba del moralismo de Estado.

Al mismo tiempo, la consideración de la reapertura de los prostíbulos se produjo en sintonía con la búsqueda de la preservación de una identidad masculina exacerbada (“con el peronismo éramos todos machos”) y con la creencia de que estas decisiones eran un paliativo que evitaba males mayores. En 1954, el presidente Perón mediante el Decreto N° 22.532 autorizó la instalación de las casas de prostitución en toda la República que 5 años después fue derogado por Frondizi (Decreto N° 4863/59). Finalmente, en 1964 Illia como presidente terminó con el “rebrote reglamentarista” o con las “excepciones” del abolicionismo que duraron 20 años, cuando invalidó el decreto 10.638 del año 44, ratificando el Convenio de Naciones Unidas para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena de 1949 (Diario de sesiones de la Cámara de Senadores Tomo I 1965, en Behrens 2017). Como señala Guy (1994), si bien estas modificaciones o interrupciones de la ley de profilaxis no tuvieron mayor trascendencia en Buenos Aires dada la resistencia de algunos grupos de poder opositores y eclesiásticos, sí fueron funcionales para “proporcionar entretenimientos de carácter femenino a los soldados apostados en bases remotas, en particular en el Sur” (Guy, 1994: 226) y también, agregó, para las poblaciones de los enclaves petroleros e industriales de la Patagonia.

Final y probablemente como consecuencia de los cambios en las legislaciones, el burdel regentado por YPF en Plaza Huincul se sostuvo hasta 1966. El cierre de la “casita de chapa” fue promovido por el monseñor Jaime de Nevares, quien simultáneamente a apoyar las huelgas de los obreros de la construcción de la represa El Chocón, hizo una campaña para el cierre de los prostíbulos en la provincia (Bianchi 2015). Pero la clausura al parecer definitiva no significó la desvinculación de las mujeres de los clientes petroleros, como cuenta el capacitador de Fundación YPF:

²⁵ “La entente institucional entre peronismo y catolicismo finalmente se fracturó a fines de 1954 [segundo período peronista]. El conflicto se desencadenó por la resistencia católica a ciertas reformas del orden parental, como la modificación de la discriminación entre las filiaciones legítima e ilegítimas, el divorcio vincular, y la mentada cuestión de la ley de profilaxis.” (Acha y Ben 2005: 18)

todo un historial de cómo se seleccionaba. Pibas jóvenes, hermosas pibas. Mujercitas más o menos grandecitas, porque tenías que cubrir todo (...) Y las dejaban por tres meses. Cada tres meses se renovaba el plantel, tratando de evitar la continuidad, y siempre alguna se quedaba viste, se enganchaban. Eso es lo que se trató, pero no se consiguió. Nadie domina el sentimiento. (Plaza Huincul, febrero 2017)

El ex trabajador de la industria petrolera, además de contar algunas de las características generales de funcionamiento de la casita, habla de las formas de intervención de la empresa estatal en la vida íntima de los trabajadores, no sólo organizando sus prácticas y consumos sexuales, sino controlando inclusive los involucramientos con las mujeres al intentar delimitar su permanencia. Sin embargo, como también expresó el entrevistado, muchas de las mujeres de la “casita de chapa” de YPF se quedaron en la localidad, formaron pareja, y hoy en día muchas de ellas “son las abuelas del pueblo”. Sus pasados fueron de algún modo olvidados u ocultados, así como los legajos de la casa n° 424 que tenían registro de ello, quemados. Y esto, dice el ypefiano, con la finalidad de proteger la reputación de las familias de las “mujeres de mala vida” o de las “chicas que fumaban”, en tanto devinieron ciudadanas al permanecer en el destino laboral y vincularse sexoafectiva y contractualmente con los trabajadores de la industria hidrocarburífera.

A modo de cierre

La “casita de chapa” es un antecedente que articula en la comarca petrolera neuquina los escenarios del trabajo petrolero con los del comercio sexual y que expresa una serie de significados que fueron desarrollados en este artículo. Por un lado, las justificaciones para la apertura de un burdel en una localidad petrolera por parte de una institución estatal cuyo contexto y marco regulatorio de la prostitución reglamentada habilitaba. Entendido como un “mal inevitable” que podía ser tolerado bajo ciertas formas de control higienista y moral, fue el área de salud de YPF la que se ocupó de la instalación y regulación de la casita, orientándose, a su vez, por la normativa nacional. No sólo se trataba de una alta presencia masculina en un destino que prometía el desarrollo del país, sino que “esos hombres solos necesitaban mujeres” y era un deber proporcionárselas; no tanto para consentir sus deseos, sino para hacerlo alentando su productividad.

Sin embargo, cuando la prostitución patentada pareció volverse costumbre, después de medio siglo, a mediados de los años 30, irrumpieron las leyes abolicionistas. Fue principalmente por motivos de salud y profilaxis, pero también como consecuencia de lo que comenzó a identificarse como un problema que debía ser atendido: el combate a la “trata de blancas”. Pero esto, más que suspender los consumos sexoeconómicos, en muchas ocasiones los clandestinizó y, en consecuencia, produjo un incremento de las enfermedades venéreas que alarmó a las autoridades (por ejemplo, del ejército y municipales de la Patagonia) que recurrieron

a solicitar una excepción en zonas con “necesidades especiales”. La misma fue otorgada, y el paréntesis reglamentarista que duró alrededor de 20 años respondió explícitamente a una preocupación sanitaria pero, sobre todo –aunque de manera más tácita– a una construcción de masculinidad hegemónica²⁶ que se vio atentada por las prácticas sexuales inmorales entre “esos hombres solos” en espacios militares e industriales.

De esta manera, la “casita de chapa” no solamente fue instalada por YPF con la finalidad de satisfacer las necesidades de la mano de obra masculina de la industria hidrocarburífera, sino que hubo un contexto legal y político que habilitó que esto sucediera, y que fue organizado en torno a una preocupación higienista y moral que concebía que la prostitución era un mal inevitable que debía ser tolerado y controlado por el Estado y sus empresas. Sin embargo, a la hora de suceder un cambio de paradigma y promoverse desde distintos frentes (salud, feminismo, iglesia) la abolición del sistema reglamentarista, la resistencia a adaptarse a las nuevas formas fue grande, entendiéndola como una medida contraproducente. Ésta producía mayor clandestinidad, provocando enfermedades venéreas que quedaban fuera del control sanitario e incrementaba las violencias hacia las mujeres (violaciones, trata) y, además, promovía relaciones sexoafectivas homosexuales que provocaban escándalos. Estos fueron los argumentos en contra del abolicionismo, pero que lejos de tener alcance desde todo el territorio nacional, fue en los sitios con predominante presencia masculina donde tuvieron más éxito y en un determinado contexto político, peronista.

En el caso elegido, fue en gran parte YPF la responsable gestionar el comercio sexual en la comarca petrolera neuquina con centro administrativo y de principal extracción en Plaza Huincul y que organizó las prácticas de relacionamiento sexoeconómico de los trabajadores a partir de su fuerza interventora. No obstante, su incidencia sobre los ámbitos laborales, y de la vida tanto pública como privada, y en términos de género y sexualidad, también encontró formas de vincularse entre hombres y mujeres que escaparon a su control, como la de evitar que “mujeres de la noche” formen familia con los trabajadores petroleros. Es en ese sentido que podemos preguntarnos cómo operan los regímenes extractivistas en la configuración de las múltiples dimensiones de la vida de quienes participan en ellos; cómo estructura sus trayectorias socioeconómicas, laborales, ambientales, e íntimas, entre otras, y, al mismo tiempo, cuáles son las fugas que dan lugar al agenciamiento de las personas.

Así, y por último, si nos limitamos a decir que “la prostitución es un efecto negativo de la extracción de recursos naturales” y que, además, sólo ocurre en su modalidad coercitiva, no queda lugar para buscar los modos en que circulan e irrumpen las subjetividades que no se significaron ni significan a sí mismas como víctimas y victimarios. Considero que es necesario identificar cuáles son y cuáles fueron los poderes detrás de la instalación y sostenimiento del comercio sexual en la cuenca neuquina, sin pretender encontrar “culpables”. Indagar en los procesos

²⁶ Entendida como esquema que organiza políticamente los espacios, las interacciones entre los sujetos y sus deseos y representaciones respecto de lo que significa “ser hombre” (Connell 2003).

sociohistóricos en los que tuvo lugar el surgimiento, permanencia y clausura del comercio sexual, recuperando sus contextos políticos pero también de producción de sentidos socioculturales y de género posibilita una mayor comprensión de lo que significó el vínculo entre el petróleo y la prostitución en la Patagonia Argentina, y de lo que podría significar en el presente.

Bibliografía

- Acha, O. y P. Ben (2005), "Hipótesis para una historia de la homosexualidad en la Argentina urbana (1945-1955)", *Actas de las X Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia*. Escuela de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes, UNR, Rosario.
- Acosta, A. y J. Cajas Guijarro (2016), "Patologías de la abundancia. Una lectura desde el extractivismo". En Burchardt et. al. (eds.) *Nada dura para siempre. Neo-extractivismo tras el boom de las materias primas*. Quito: Ediciones Abya-Yala. Pp. 39-425.
- Agustín, L. M. (2007) "Introduction to the Cultural Study of Commercial Sex", *Sexualities* Vol. 10, N° 4.
- Argeri, M. E. (1999), "La peor plaga que pudo haber traído la locomotora". Prostitución y control estatal en un Territorio Nacional Norpatagónico: Río Negro 1880-1920", *Anuario de Estudios Americanos*, vol. 56, no 1, pp. 217-235.
- Barrionuevo, N. (2016), "Trabajo petrolero y desigualdades de género en Comodoro Rivadavia: reactualizaciones históricas", *Identidades*, Dossier 3, Año 6.
- Bianchi, A. (2015), *Argentina Saudita. La maldición de la nueva promesa petrolera*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Behrens, R. (2017), "Era una mujer muy decente. El prostíbulo de La Coca en el marco de la lucha antivenérea (1944-1959)". Ponencia presentada en las XIII Jornadas Nacionales de Historia de las mujeres. VIII Congreso iberoamericano de Estudios de género: "Horizontes revolucionarios. Voces y cuerpos en conflicto". Buenos Aires, del 24 al 27 de julio de 2017.
- Bernstein, E. (2008), "O significado da compra: desejo, demanda e o comércio do sexo", *Cadernos Pagu* N°31. Pp.315-362.
- Bernstein, E. (2010), "Militarized Humanitarianism Meets Carceral Feminism: The Politics of Sex, Rights, and Freedom in Contemporary Antitrafficking Campaigns", *Signs: Journal of Women in Culture and Society* vol. 36, N° 1.
- Bertello, C. (2010), "Mapa de una corta vida prostibularia" En Gabriel Rafart (comp.) *Historia social y política del delito en Patagonia*. Neuquén: EDUCO, Universidad Nacional del Comahue. Pp. 71-85.
- Cabrapan Duarte, M. (en prensa), "Economías sexoafectivas en una localidad petrolera: un abordaje etnográfico al comercio sexual" en Susanne Hofmann y Melisa Cabrapan Duarte (comps.) *Género, sexualidades y mercados sexuales en sitios extractivos de América Latina*. México: CIEG-UNAM.
- Ciselli, G. (2002), "Trabajo femenino en la industria petrolera de Chubut (1919-1962)", *Andes*, N° 13.
- Connel, R. W. (2003). *Masculinidades*. México: PUEG-UNAM.

- Contreras Huayquillán, A. (2011), "La casita de chapa. Prostitución Estatal de YPF". En Bidaseca K. y V. Vazquez Laba (Comps.) *Feminismos y Poscolonialidad. Descolonizando el feminismo desde y en América latina*. Buenos Aires: Ediciones Godot, Colección crítica. Pp. 261-273.
- Daich, D. y M. Sirimarco (2015) *Policías y prostitutas en la Argentina: el control territorial en clave de género*, en Daich, D. y M. Sirimarco (Comps.) *Género y violencia en el mercado del sexo: política, policía y prostitución*. Buenos Aires: Biblos. Pp. 61-84.
- Favaro, O. (2001), *Estado, política y petróleo. La historia política neuquina y el rol del petróleo en el modelo de provincia, 1958-1990*. Tesis de doctorado, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata.
- Fuentes, J. (2005), "Trabajo, Género y Salud en Comodoro Rivadavia. Un estudio a través de las Reglamentaciones sobre Casas de Tolerancia (1914-1937)". En I Jornadas de Historia Social "Los Trabajadores en la Patagonia", Neuquén.
- Fernández, J. y D. Hernández. (2014), "La devolución de las cacerolas: representaciones sobre la mujer en la construcción de la Nación Argentina" en Barrancos D., Guy D. y A. Valobra (eds.) *Moralidades y comportamientos sexuales. Argentina, 1880-2011*. Buenos Aires: Editorial Biblos. Pp. 131-154.
- Geertz, Clifford (1994[1983]). "El sentido común como un sistema cultural" en *Conocimiento local. Ensayos sobre la interpretación de las culturas*. Paidós Básica. Pp. 93-117.
- Guy, D. J. (1994), *El sexo peligroso: la prostitución legal en Buenos Aires, 1895-1955*. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
- Harding, S. (1987), "¿Existe un método feminista?" en Harding (Ed.) *Feminism and Methodology*. Bloomington/Indianapolis: Indiana University Press. Pp. 9-34.
- Infeld, A. (2009), *Pobres y prostitutas. Políticas sociales, control social y ciudadanía en Comodoro Rivadavia (1929-1944)*. Rosario: Prohistoria Ediciones.
- Kempadoo, K. (2016), "Revitalizando o imperialismo: campanhas contemporâneas contra o tráfico sexual e escravidão moderna", *Cadernos Pagu* (47), Campinas, Núcleo de Estudos de Gênero-Pagu/Unicamp.
- Leonini, L. (2004), "Os clientes das prostitutas. Algumas reflexões a respeito de uma pesquisa sobre a prostituição em Milão", en M. Schnup (org.), *Masculinidades*, San Pablo, Boitempo, pp. 79-107.
- Lorandi, A. M. (2012), "¿Etnohistoria, Antropología Histórica o simplemente Historia?", *Memoria Americana, Cuadernos de Etnohistoria* N° 20 (1 y 2). Pp. 17-34.
- Lvovich, D. (1993), "Pobres, borrachos, enfermos e inmorales. La cuestión del orden en los núcleos urbanos del territorio del Neuquén (1900-1930)", *Estudios Sociales* N° 5. Pp. 83-91.
- McGee Deutsch, S. (2010), "Not a novices. Prostitutes" En *Crossing borders, claiming a nation: a history of Argentine Jewish Women*; Durham: Duke University Press. Pp. 105-122.
- Machado Aráoz, H. (2015), "Ecología política de los regímenes extractivistas. De reconfiguraciones imperiales y re-ex-sistencias decoloniales en Nuestra América", *Bajo el Volcán*, 15, 23, 11-51.

- Mahy, P. (2011), "Sex Work and Livelihoods: Beyond the 'Negative Impacts on Women' in Indonesian Mining" en Lahiri-Dutt K. (ed.) *Gendering the Field Towards Sustainable Livelihoods for Mining Communities*. ANU E Press, The Australian National University. Pp. 49-66.
- Moore, H. L. (1991), *Antropología y feminismo*. España: Ediciones Cátedra, Universitat de València.
- Música, M. L. (2014a), *La ciudad de las venus impúdicas: Rosario, historia y prostitución, 1874-1932*. Rosario: Laborde Editor.
- Música, M. L. (2014b). "Mal social y tolerancia: discursos y prácticas sobre la prostitución reglamentada en Rosario (1874-1932)" en Barrancos D., Guy D. y A. Valobra (eds.) *Moralidades y comportamientos sexuales. Argentina, 1880-2011*. Buenos Aires: Editorial Biblos. Pp. 49-72.
- Nencel, L. (2008), "Pacharacas, putas, chicas de su casa: etiquetando feminidad y sexualidad masculina en Lima", en M. Melhuus y Stolen K.A. (comps.), *Machos, putas, santas. El poder imaginario de género en América Latina*, Buenos Aires, Antropofagia. pp. 65-88.
- Observatorio Petrolero Sur. (2010), "El negocio de la trata en la ruta del petróleo" Disponible en <http://opsur.wordpress.com/2010/04/21/el-negocio-de-la-trata-en-la-ruta-del-petroleo/>
- Obeng-Odoom F. (2014). "Oil, sex, and temporary migration: The case of Vienna City, Sekondi-Takoradi, Ghana", *The Extractive Industries and Society* 1. Pp. 69-74
- Palermo, H. M. (2017). *La producción de la masculinidad en el trabajo petrolero*. Buenos Aires: Editorial Biblos.
- Piscitelli, A. (2005). "Apresentação: gênero no mercado do sexo", *Cadernos Pagu* N°25. Pp.7-23.
- Piscitelli, A. (2012), "The Emotional Strength of the Language of Human Rights: international trafficking of humans involving Brazilians". Paper prepared for the American Anthropological Association Meeting.
- PROTEX. 2015. Resumen ejecutivo - Informe Anual.
- Rubin, G. S. (1996), "El tráfico de mujeres: notas sobre la 'economía política' del sexo", en M. Lamas (comp.) *El género: la construcción cultural de la diferencia sexual*, México, Miguel Ángel Porrúa/PUEG-UNAM, pp. 35- 96.
- Siracusa, G. (2009), "Pasto Verde: metonimia de una historia negada", *Revista Pilquen* Sección Ciencias Sociales, Año XI, N° 11. Pp. 1-5.
- Stolcke, V. (2009), "Los mestizos no nacen sino que se hacen", *Avá*, N°14.
- Svampa, M. y E. Viale (2014), *Maldesarrollo. La Argentina del extractivismo y el despojo*. Buenos Aires: Katz.
- UFASE-INECIP. 2012. Informe "La trata sexual en argentina aproximaciones para un análisis de la dinámica del delito".
- Weeks, J. (1998), *Sexualidad*, México, Paidós/PUEG-UNAM
- Varela, C. (2015), "La campaña antitrata en la Argentina y la agenda supranacional". En Daich, Deborah y Mariana Sirimarco (coords.) *Género y violencia en el mercado del sexo: política, policía y prostitución*. Buenos Aires: Biblos. Pp. 109-149.

- Viazzo, P. P. (2003), "La antropología histórica: ¿nueva disciplina o terreno de frontera?", *Introducción a la antropología histórica*. Pontificia Universidad Católica del Perú. Pp. 17-62.
- Villa Ghigo, R. (2007), *Por los caminos del petróleo*. Impreso en Talleres Trama S.A Buenos Aires.



Petróleo, planificación urbana y exclusión residencial en Comodoro Rivadavia¹

Santiago Bachiller²

Resumen

Fruto de un trabajo de campo de corte etnográfico sobre tomas de tierras y conformación de asentamientos informales en Comodoro Rivadavia (provincia de Chubut, Argentina), el propósito general del artículo consiste en examinar el vínculo entre desigualdad y petróleo. Tomando al espacio urbano como eje de análisis, el presente trabajo gira en torno a la exclusión residencial. Específicamente, en el texto se revisa el nexo entre desigualdad y petróleo en base a dos dimensiones: el déficit habitacional, y los modos desiguales de acceso al suelo urbano. Un objetivo secundario de este trabajo supone desentrañar el tipo de urbanismo resultante de un modo concreto de acumulación de capital basado en la producción de hidrocarburos. En tal sentido, el último encabezado se organiza en torno las inundaciones que azotaron a la ciudad en marzo-abril del 2017, pues entendemos que dicha "catástrofe natural" puso de manifiesto los efectos colaterales de un déficit histórico en materia de planificación urbana.

Palabras clave

desigualdad - petróleo - exclusión residencial - inundaciones - planificación urbana

Oil, urban planification and residencial exclusion in Comodoro Rivadavia

Abstract

As a result of ethnographic fieldwork on land takeovers and the establishment of informal settlements in Comodoro Rivadavia (Chubut province), the general purpose of the article is to examine the link between inequality and oil. As indicated by Barrionuevo and Peters (2016), in Comodoro oil shapes social relations and nature/society relations, generating strong inequalities. Likewise, Peters (2016) argues that the inflow of natural resources often ends up damaging the development of a country or a locality. Taking the urban space as the axis of analysis, the present work revolves around residential exclusion. Specifically, the text reviews the nexus between inequality and oil based on two dimensions: the housing deficit, and the unequal modes of access to urban land. A secondary objective of this work is to unravel the type of urbanism resulting from a specific mode of capital accumulation based in the production of hydrocarbons. In this sense, the last heading is organized around the floods that hit the city in March-April 2017, since we understand that this "natural catastrophe" revealed the collateral effects of a historical deficit in urban planning.

Keywords

inequality - oil - residencial exclusion - floods - urban planning

¹ El contenido del presente trabajo fue presentado en el Taller Internacional Recursos naturales y desarrollo local: sostenibilidad, cohesión social y resiliencia, el cual se desarrolló en Comodoro Rivadavia entre el 3 y el 5 de octubre de 2017. A su vez, el artículo se inscribe en los proyectos de investigación radicados en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) dirigidos por el Dr. Santiago Bachiller y financiados por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y por la UNPA.

² CONICET-UNGS-UNPA, santiago.bachiller@gmail.com

El presente artículo es resultado de un trabajo de campo sobre tomas de tierras y conformación de asentamientos en Comodoro Rivadavia (provincia de Chubut, Argentina). Dicha ciudad patagónica se encuentra sobredeterminada por la producción de hidrocarburos; como señalaron Barrionuevo y Peters (2016), el petróleo moldea los vínculos sociales y las relaciones naturaleza/sociedad, generando fuertes desigualdades. Tomando al espacio urbano como eje de análisis, el objetivo general del presente texto consiste en examinar el nexo entre desigualdad y petróleo.

Analizando los debates sobre la renta petrolera, Peters (2016) señala que tales discusiones asumieron una posición dual, alternando enfoques que calificaron a la presencia de hidrocarburos como una bendición, con otros que retrataron a la situación como una maldición. Por un lado, durante las etapas de *boom* petrolero, es decir cuando el precio internacional del barril del petróleo se dispara y la industria extractiva demanda mano de obra, la ciudad patagónica cuenta con las mejores estadísticas nacionales de empleo y de pobreza a nivel nacional. Por el otro, las crisis del sector impactan fuertemente en dichas cifras; asimismo, el modelo de acumulación monoproduktivo basado en el petróleo constantemente desencadena fuertes brechas salariales, eleva los precios de la canasta básica familiar, conlleva déficits de infraestructura y acceso a servicios urbanos, problemas de cohesión social, etc. Por consiguiente, diversos investigadores afirman que los países que poseen una abundancia de riqueza natural en petróleo también suelen ostentar un triste récord en cuanto a su incapacidad de proveer estándares de vida decentes para su población (Gledhill, 2008; Reyna y Behrends, 2011); de modo similar, Peters (2016) sostiene que la afluencia de recursos naturales frecuentemente termina perjudicando el desarrollo. Más aún: la maldición de la abundancia, frecuentemente vinculada por la literatura académica con la denominada “enfermedad holandesa”, condujo a cuestionar al desarrollo en tanto un término que en occidente ha sido sacralizado (Gudynas y Acosta, 2017). Reflexionando sobre un modelo de desarrollo basado en la extracción de hidrocarburos, el déficit particular que en este artículo interesa analizar se liga con la exclusión residencial y el crecimiento urbano.

A nivel metodológico, la investigación se estructuró en torno a un trabajo de campo de corte etnográfico que fue iniciado en el 2011, y que continúa desarrollándose en el presente. Con el propósito de develar las dificultades de acceso al suelo que padecen amplios conjuntos poblacionales de la ciudad, el estudio se basa en técnicas de investigación cualitativas como la observación participante; asimismo, cobraron gran relevancia las entrevistas semiestructuradas focalizadas en los empleados de distintas dependencias municipales (Catastro, Secretaría de Tierras, Secretaría de Hábitat, etc.), en los pobladores de diversos asentamientos, y en los empleados o dueños de empresas constructoras y/o inmobiliarias.

Con el propósito de indagar la dimensión territorial de la relación entre petróleo y desigualdad, el primer apartado supone un ejercicio de contextualización en el cual se presentan datos asociados con el impacto de la industria del petróleo en la ciudad chubutense. El segundo título implica, en cambio, desarrollar con un mayor nivel de profundidad el aspecto urbano. En tal sentido, se destacan los modos desiguales de acceso al suelo urbano, las dificultades que los sectores populares

padecen en esta materia, así como el déficit habitacional que históricamente afectó a la ciudad de Comodoro Rivadavia. Un propósito secundario del artículo reside en discutir el tipo de urbanismo resultante de un modo de acumulación de capital basado en el petróleo. En tal sentido, el último encabezado se organiza en torno a las trágicas consecuencias vinculadas con la falta de planificación urbanística propias de una ciudad petrolera, las cuales se pusieron de manifiesto ante una “catástrofe natural”. Las inundaciones de principios del 2017 pusieron en evidencia el colapso urbanístico de una ciudad cuya planificación tradicionalmente se limitó a la extracción y circulación de hidrocarburos. Finalmente, la conclusión representa un espacio de reflexión sobre los puntos principales que fueron tratados a lo largo del texto.

Desigualdad y petróleo en Comodoro Rivadavia

Según el último censo nacional, en el 2010 Comodoro Rivadavia poseía 177.038 habitantes; situada en el centro este de la Patagonia Argentina, dicha localidad representa el epicentro de la zona hidrocarburífera conocida como Golfo de San Jorge. Como veremos a lo largo del texto, la producción de petróleo sobredetermina la vida social local. La noción de “espacio de los flujos”, acuñada por Manuel Castells, nos permite analizar cómo la desigualdad social se expresa en el espacio urbano comodorense. En un contexto de intensificación del proceso de globalización, este concepto destaca la organización de la sociedad contemporánea en torno a una serie de redes de producción que, mediante las telecomunicaciones, conectan en una escala planetaria al capital, a las informaciones estratégicas, y a los miembros de una elite cosmopolita. Las ciudades serían nodos que se posicionan jerárquicamente al interior de una red específica de producción, mientras que cada nodo posee sus respectivos territorios subordinados (Castells, 2001). La red que aquí interesa destacar se encuentra determinada por la producción mundial de petróleo, e inscribe a Comodoro Rivadavia como uno de sus múltiples nodos.

Según uno de los principales periódicos locales, en el 2014 el Golfo de San Jorge aportó el 49% del petróleo nacional (El Patagónico, 27 de octubre de 2014). Consecuentemente, Comodoro Rivadavia percibe ingresos derivados de la extracción de hidrocarburos que cualquier otra ciudad del país envidiaría; siempre según dicho medio de comunicación, en el 2014 la municipalidad recibió 789,5 millones de pesos en concepto de regalías petroleras (El Patagónico, 29 de marzo de 2015). A su vez, esta producción de hidrocarburos supone la generación de una enorme riqueza que se traduce en tasas muy favorables de empleo y pobreza en comparación con otras localidades del país. Siguiendo los datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, observamos que a fines del 2011 la tasa de desempleo en el conglomerado Comodoro Rivadavia-Rada Tilly era del 2,9%, mientras que la de pobreza rondaba el 3% (datos disponibles en Bachiller, Baeza, et al, 2015). Pero el petróleo puede ser tanto una bendición como una maldición. Paradójicamente, y a pesar de estos indicadores, Svampa (2014) retrató a la localidad patagónica como la capital nacional de la trata de mujeres, la prostitución y el crimen, como una sociedad asolada por el narcotráfico, la violencia y las adicciones. Por otra parte, dichas cifras reflejaban un

contexto de expansión internacional de la actividad petrolera; por el contrario, el actual escenario de crisis internacional del sector, junto al estancamiento de la economía nacional, impactó negativamente en la localidad patagónica³; tal es así que, volviendo a la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC (2017), constatamos que en el primer semestre del 2017 la tasa de desempleo trepó al 5,3%, mientras que la pobreza escaló al 15,7% (en dicho período, la tasa de desempleo nacional se situaba en torno al 9,2%, y la de pobreza rondaba el 28,6%; estos datos pueden ser consultados en la tabla número 1 localizada en la sección anexos).

La brecha salarial ocupa un lugar fundamental en las desigualdades ligadas con un modelo de acumulación de capital monolítico basado en el petróleo. En el 2013, los salarios medios de las remuneraciones en el sector petrolero de Comodoro Rivadavia duplicaron el salario promedio del total de los sectores en la ciudad. Así, el 10% más rico de la población ocupada percibía un ingreso 30 veces superior al del 10% de los trabajadores más pobres (Usach y Freddo, 2014). Debido a los elevados salarios (aún en los puestos de menor jerarquía que no requieren un alto grado de formación), el ingreso en el mercado laboral del petróleo constituye la inserción de preferencia y de mayor prestigio social para la mayoría de los habitantes (Grimson y Baeza, 2011). No obstante, la capacidad de absorción de mano de obra de tal mercado es bastante limitada, con lo cual la enorme mayoría de la población no logra acceder al nivel adquisitivo propio de dicha industria extractiva⁴. Por otra parte, en una ciudad cuyos precios se encuentran moldeados por el mundo del petróleo, el costo de vida en la ciudad patagónica es uno de los más altos del país. A modo de ejemplo cabe mencionar que, en el 2013, una familia tipo de la provincia de Chubut precisaba 5.787,98 pesos para no ser pobre; en Comodoro, dicha canasta familiar (que no incluye los precios relacionados con la vivienda) se disparaba a los 9.330,85 pesos (datos disponibles en Bachiller, Baeza, et al, 2015). Estas diferencias afectan especialmente a quienes no gozan de un salario propio de la industria petrolera.

Como veremos en el próximo apartado, las desigualdades se intensifican en lo que respecta al acceso al suelo urbano y la vivienda.

La exclusión residencial en una ciudad petrolera

Un vector clásico a partir del cual se expresa la desigualdad consiste en las distintas vías de acceso al suelo urbano por parte de diferentes grupos sociales. Como sostuvimos en otro trabajo (Bachiller, Baeza, et al, 2015), en sus orígenes, a principios del siglo XX, la ciudad se expandió hacia la zona norte en función de la creación de campamentos empresariales (por lo general petroleros). Los beneficios de ingresar en dichas empresas/campamentos excedían el plano laboral pues, entre

³ En plena etapa de *boom* petrolero, a mediados del 2008 el barril de petróleo llegó a la cifra récord de los 133,9 dólares por barril. En agosto del 2017 el valor del mismo barril no superaba los 50 dólares (al respecto, consultar la tabla número 1 en la sección anexos).

⁴ El sector extractivo y sus servicios relacionados emplea en torno al 19% de los ocupados de la ciudad (dato disponible en Bachiller, Baeza, et al, 2015). A su vez, en este punto también es preciso señalar que la desigualdad se expresa en términos de género, ya que la industria petrolera contrata mayormente a hombres entre sus filas.

otras cuestiones, también suponían el acceso a una vivienda próxima al sitio de empleo. Hoy en día, el trabajo continúa siendo el principal eje articulador para la obtención de una vivienda; esto es así no sólo por el ingreso económico que el mismo supone, sino también porque la mayoría de los escasos planes oficiales de vivienda con los que cuenta la ciudad son destinados a determinados sindicatos. Así, para el 2017 el Instituto Provincial de la Vivienda (en adelante IPV) planificó la construcción de 381 viviendas en la ciudad; el 43% de las mismas serían destinadas a los sindicatos petroleros y de camioneros (Dupuy, 2017). Por consiguiente, en este punto es posible trazar una línea de continuidad con el pasado: quienes no cuentan con ciertos privilegios de pertenencia laboral ven seriamente obstaculizadas sus posibilidades de satisfacer sus demandas habitacionales.

En Comodoro existe una correlación histórica entre *booms* petroleros y expansión urbana (Bachiller, Baeza, et al, 2015): es decir, los momentos de mayor crecimiento urbano coincidieron con los incrementos del precio internacional del barril de petróleo y la consiguiente intensificación de la producción (al respecto, consultar las tablas número 1 y 3 localizadas en la sección anexos). En tales etapas, la ciudad atrae a miles de migrantes y los precios del suelo se disparan, motivo por el cual la mayoría de los “recién llegados”, así como muchas familias comodorenses, no logran acceder al suelo y a la vivienda por las vías reconocidas legalmente como válidas. Entonces, la toma de tierras y la autopromoción de la construcción de la vivienda se constituyen en los mecanismos predilectos para satisfacer mínimamente las necesidades habitacionales. Es lo que ocurrió a fines de la década de 1950’, cuando el gobierno de Frondizi (1958-1962) facilitó la explotación petrolera a empresas privadas. En tales años la ciudad vivió su primer *boom* petrolero, el cual se tradujo en la llegada masiva de migrantes procedentes del sur de Chile y del noroeste argentino, así como en la ocupación de las laderas de los cerros del sur y especialmente del oeste de la ciudad. No casualmente, el último crecimiento significativo de la ciudad coincidió con el último *boom* petrolero acaecido entre el 2005 y el 2010. Tampoco es casualidad que durante esos años la ocupación masiva de tierras haya vuelto a cobrar un lugar central en la expansión urbana.

En una ciudad que nació y se desarrolló en función de la producción de petróleo, la desigualdad histórica también se expresó al interior de las unidades territoriales. En los campamentos petroleros, la desigualdad urbana supuso reproducir en el espacio barrial las jerarquías laborales. Es decir, las empresas delimitaron claramente el espacio, alojando en las mejores zonas y viviendas al personal jerárquico, y relegando a los operarios a las áreas más desfavorables. Por otra parte, probablemente una particularidad de Comodoro respecto de otras ciudades consista en la fuerte diferenciación en cuanto al material y el estilo de construcción de las viviendas que se observan al interior de los asentamientos. En Comodoro este tipo de espacios no suelen ser homogéneos. Especialmente a medida en que transcurren los años, las viviendas tipo rancho suelen intercalarse con casas consolidadas características de las clases medias. Al respecto, vale la pena recordar la distinción entre desigualdades estructurales y dinámicas (Fitoussi y Rosanvallon, 1997). Las estructurales constituyen las formas más tradicionales de desigualdad, y se encuentran condicionadas por la jerarquía de los ingresos entre categorías sociales

(básicamente entre obreros y ejecutivos). En cambio, las nuevas formas de desigualdad son más dinámicas, suponen recalificaciones de diferencias dentro de categorías que anteriormente eran homogéneas, son diferencias intracategoriales. Estando muy vinculadas con accidentes en las trayectorias, refieren a cómo personas que provienen de un mismo sector social, que poseen cualificaciones idénticas, observan cómo se distancian socioeconómicamente en función del azar. El punto es que, en Comodoro, las desigualdades dinámicas se canalizan a partir del ingreso al mundo del petróleo. Los vecinos pueden haber asistido a una misma escuela, compartido los mismos espacios barriales y hasta poseer una trayectoria vital similar; sin embargo, muchos de quienes consiguieron empleos en el petróleo construyen viviendas fastuosas sin mudarse de barrio, generando fuertes contrastes al interior de una misma unidad territorial.

En las últimas décadas la ciudad vivió un crecimiento explosivo (ver tablas número 2 y 3 localizadas en la sección anexos). En el 2001 la superficie ocupada era de 3440 hectáreas, mientras que la población era de 135.632 personas. Luego del último *boom* petrolero, el censo nacional del 2010 determinó que la mancha urbana abarcaba 4461 hectáreas y que la población se situaba en 175.916 personas (Bachiller, Baeza et al, 2015). Con el fin del *boom* petrolero, y en un contexto de estancamiento económico, Comodoro siguió creciendo, aunque a un ritmo menos intenso. Periódicos de la región calculaban que, en el 2017, la superficie urbanizada abarcaba unas 5590 hectáreas, mientras que la población rondaba las 205.504 personas (Diario Jornada, 7 de diciembre de 2017). A modo de hipótesis, aquí se sostiene que la ciudad continúa expandiéndose incluso en períodos de recesión debido a que la presión por obtener un sitio donde residir no fue satisfecha en etapas previas de bonanza económica. Asimismo, si la expansión urbana en ciertas coyunturas se desliga del crecimiento poblacional, es debido a las lógicas de apropiación y de reinversión (en suelo) de la renta petrolera.

Del trabajo de campo realizado se desprende que el crecimiento urbano acaecido durante el último *boom* petrolero se produjo especialmente a partir de tres factores: el desarrollo urbano de Rada Tilly, la construcción de departamentos en el centro de la ciudad, y un feroz proceso de tomas masivas de tierras.

En los últimos 15 años, nuevas dinámicas de segregación se ensañaron con la espacialidad urbana local. En algunos casos, la segregación se manifestó en la proliferación de emprendimientos inmobiliarios bajo un formato de barrios cerrados; pero esta ha sido una excepción urbanística antes que una regla. De hecho, la principal modalidad de expansión y segregación se ligó con el aumento poblacional de Rada Tilly, municipio autónomo que se localiza a 12 kilómetros de distancia de Comodoro y que, en la práctica, funciona como un barrio residencial de la ciudad. Comparando los censos del 2001 y 2010, Comodoro incrementó su población en un 30,5%. En términos relativos, se trata de un porcentaje mayor al crecimiento del país y de la provincia (que fueron del 10,6% y del 23,2% respectivamente; es posible consultar estos datos en la tabla número 3 localizada en la sección anexos). Ahora bien, con un 45%, Rada Tilly ha sido la ciudad que más creció de la provincia de Chubut en esos 9 años de registro (datos disponibles en Bachiller, Baeza, et al, 2015). El punto a destacar es que en Rada Tilly no se han verificado ni tomas de tierras ni

construcciones mediante planes de viviendas por parte del Estado. Por el contrario, tal incremento poblacional desmedido en tan corto tiempo sólo refleja un intenso proceso de segregación socioresidencial, a partir del cual las clases con mayor capacidad adquisitiva de Comodoro (por lo general asociadas con el petróleo) se han trasladado a dicha villa balnearia. Las entrevistas realizadas a empresarios de la construcción y/o de inmobiliarias confirman que la capacidad de apropiación del excedente del *boom* petrolero es el factor que explica el crecimiento de Rada Tilly; en tal sentido, uno de tales empresarios recordaba que en tal localidad “hace 10 años un lote valía 10 mil dólares, hoy está en 150 mil dólares” (entrevista a MS, 1 de marzo de 2017); es decir, un mismo lote no edificado aumentó un 1500% en 10 años⁵.

En dichas entrevistas constatamos una plena coincidencia entre los empresarios en cuanto a las percepciones del territorio y la zonificación de sus prácticas. El acuerdo unánime sostiene que en la ciudad “hay pocos lugares buenos para construir” y todos apuntan a las mismas áreas: Rada Tilly, el centro, kilómetro 3, los barrios Roca y Pueyrredón; en contadas ocasiones se menciona algún que otro barrio como La Loma, Diadema, o el km8. Un antiguo presidente de la Cámara Inmobiliaria llegó a sostener que el mercado “está zonificado naturalmente”, lo cual debe traducirse en que en la Cámara no reciben consultas de quienes residen en barrios periféricos y que, a su vez, ellos nunca asesorarían a nadie para que se mudase a barrios que no sean Rada Tilly, el centro, el km3, Roca o Pueyrredón. Estos criterios de zonificación muestran hasta qué punto el mercado inmobiliario se encuentra condicionado por el mundo del petróleo: la zonificación implica que Rada Tilly y sus alrededores están destinados a petroleros, y que dichos empresarios mayoritariamente se despreocupan de los barrios populares (donde no residen petroleros).

En segunda instancia, la mayor parte de las nuevas construcciones se localizaron no sólo en Rada Tilly, sino también en el centro de la ciudad. En tal sentido, los empresarios del mundo inmobiliario coincidieron en que, por falta de suelo y por una cuestión de rentabilidad, en los últimos años el mercado se volcó a la construcción en altura. Lo que se construyó fueron básicamente departamentos pequeños, de 1 o 2 ambientes, ahorrando en la calidad de los materiales. Estas construcciones nuevas fueron financiadas por inversores locales; es decir, por comodorenses que apuntaron a una segunda o tercer vivienda para alquilarla a hombres solteros que llegan a la ciudad con un empleo en el petróleo. Otro dato significativo que surgió en las entrevistas es el siguiente: pese a la proliferación de las construcciones en el área céntrica, Comodoro posee una densificación baja. Ello es así por dos razones: en primer lugar, por la cantidad de departamentos vacíos (recordemos que son una segunda o tercer vivienda de un propietario que los construyó para alquilarlos); en segunda instancia, porque se trata de espacios pequeños, orientados a hombres que viven solos. Finalmente, los entrevistados nos explicaron que las mejores casas en alquiler y los departamentos más amplios, de tres o más ambientes, son destinados a quienes se dedican al petróleo y viven con sus

⁵ Buscando garantizar el anonimato de las personas, en el artículo las entrevistas realizadas son citadas mediante iniciales ficticias.

familias. Uno de los entrevistados remató esta idea sosteniendo que “quienes no están en el petróleo alquilan lo que queda” (entrevista a RF, 6 de junio de 2017).

En Comodoro los precios del mercado inmobiliario corren en sintonía con la renta petrolera, mientras que para la mayoría de la población los ingresos evolucionan a un ritmo mucho más lento (Usach y Freddo, 2014); por si fuera poco, los precios del suelo urbano se expresan en dólares, mientras que los salarios lo hacen en pesos. Un antiguo presidente de la Cámara Inmobiliaria local confirmaba la incidencia del mundo del petróleo en los precios de ventas de lotes y departamentos estableciendo que “Comodoro depende del tema del petróleo, es más caro porque esto se acostumbra a esos salarios” (Entrevista a PB, 23 de octubre de 2013). Así, el alquiler de un departamento de uno o dos ambientes en enero del 2015 oscilaba entre los 3000\$ y 8000\$, representando uno de los valores más alto del país. En la ciudad chubutense, los alquileres fluctúan en función del petróleo, y ello es así pues el 70% de las propiedades del mercado en alquiler son cooptadas por las operadoras petroleras de la zona (Bachiller, Baeza, et al, 2015).

En algunos casos, el presente del mercado inmobiliario ha sido caracterizado en términos de crisis, en otros como de estancamiento; más allá de los matices de dicho diagnóstico, en todas las entrevistas tal panorama negativo ha sido señalado como un rebote de lo que sucede en la industria de los hidrocarburos. En los relatos de estos empresarios se reconoce una vinculación intrínseca del mercado inmobiliario respecto del petróleo, la cual trasciende las coyunturas. De tal modo, la ciudad se construye de a ráfagas. Si en la actual etapa de crisis sólo se comercializan viviendas en función de su valor de uso, durante los *booms* petroleros hay una gran disponibilidad de líquido y predomina el valor de cambio de la vivienda. Más aún: algunos entrevistados afirmaron que durante los períodos de apogeo económico la presencia del petróleo “genera ilusiones”, desemboca en la posibilidad de “pedir cualquier cosa”; se trata de valores que difícilmente encuentren un comprador, pero que en todo caso elevan hasta tal punto las expectativas, que terminan incrementando los precios promedios de los inmuebles. Lo llamativo es que, según confirman los entrevistados, en muy raras ocasiones dichos precios retroceden durante los períodos de crisis y, cuando lo hacen, el repliegue siempre es muy marginal.

En tercer instancia, cabe resaltar que el fuerte crecimiento urbano de la última década, y las consiguientes dinámicas de segregación, no se explican como un resultado de la densificación de los barrios preexistentes y consolidados en la trama urbana, sino que han sido producto de una expansión hacia las periferias mediante las tomas masivas de tierras y la autopromoción en la construcción de las viviendas (Usach y Freddo, 2014; Bachiller, Baeza, et al, 2015). Como sostuvo un informante clave (cuaderno de campo, conversación con RP, 8 de junio de 2015), entre el 2005 y el 2010, y especialmente a fines del 2008 y principios del 2009, “hasta las macetas se tomaban en Comodoro”. Dicha proliferación de asentamientos guardó relación con un mercado del suelo que se orientó a las élites (por lo general vinculadas con el petróleo), sin preocuparse por construir viviendas en áreas periféricas de la ciudad; a ello debemos sumar el incremento de los precios del suelo resultado del *boom*

petrolero, así como la ineficacia estatal a la hora de resolver la emergencia habitacional.

Evidentemente, el Estado en sus distintos niveles (municipal, provincial y nacional) es un agente fundamental en la producción y reproducción de las desigualdades urbanas. En una ciudad donde la planificación urbana brilló por su ausencia, las desigualdades en la configuración de la ciudad se vinculan con un mercado constructor e inmobiliario que tradicionalmente se movió sin restricciones. Por un lado, la ausencia estatal se tradujo en la insuficiente cantidad de unidades habitacionales construidas. El mayor constructor de viviendas estatales en la ciudad es el IPV. Entre fines del 2011 y agosto del 2014, el IPV construyó, financió y entregó 422 viviendas en Comodoro Rivadavia (en Bachiller, Baeza, et al, 2015). Asimismo, y en parte como consecuencia de las inundaciones, de las 381 viviendas prometidas en el 2017, el IPV sólo entregó 5 residencias (Diario Jornada, 15 de octubre de 2017). En paralelo, a principios del 2013 existían más de 7.000 expedientes solicitando terrenos a la municipalidad local, y sólo unos 2.200 lotes disponibles (dato disponible en Bachiller, Baeza, et al, 2015). Según fuentes periodísticas del 2016 (El Patagónico, 28 de agosto de 2016), en la ciudad habría unas 3.000 ocupaciones de tierras⁶. De modo similar, el último registro nacional de asentamientos, realizado por la ONG Techo, plantea que en Comodoro existen 30 asentamientos en donde residen 2449 familias (Techo, 2017). A su vez, la Dirección Nacional de Planificación Estratégica Territorial calcula que en el 2017 en Comodoro unas 27.354 personas residían en barrios vulnerables, lo cual equivale al 13,81% de la población (Diario Jornada, 7 de diciembre de 2017). Teniendo en cuenta estas cifras, resulta evidente que la capacidad de intervención estatal es insignificante respecto de las dimensiones del problema habitacional.

“Desastres naturales”, petróleo y planificación urbana

Todas las personas entrevistadas, ya sea funcionarios municipales, empresarios de la construcción y/o de inmobiliarias, o pobladores de asentamientos, coincidieron en diagnosticar una histórica ausencia estatal en materia de planificación urbana. Para ser más preciso, habría que matizar estas afirmaciones señalando algunos ejemplos que van en sentido contrario. Como se sostuvo anteriormente, en la zona norte de la ciudad existió cierta planificación de los campamentos luego devenidos en barrios, aunque la misma siempre fue empresarial (ya sea de compañías privadas o estatales como YPF) antes que urbana. Por otra parte, probablemente la Gobernación Militar (1943-1955) haya sido la etapa donde el poder político impuso mayores condiciones a la industria petrolera (Carrizo, 2010). No obstante, la Gobernación Militar no se apartó de dos elementos recurrentes en la historia comodorense: las decisiones centrales se tomaban desde el gobierno nacional y, por sobre todas las cosas, la producción de petróleo fue el criterio dominante a

⁶ Cabe aclarar que esta cifra no contempla los asentamientos que, si bien recientemente consiguieron un reconocimiento estatal y fueron legalizados, continúan padeciendo todo tipo de carencias a nivel de infraestructura, servicios urbanos y/o conectividad con el resto de la ciudad.

partir del cual se articularon las políticas de turno. Es decir, la planificación que dicha Gobernación Militar impuso nunca giró en torno a una preocupación urbana, sino que respondió a motivos de geopolítica nacional. Finalmente, y aunque escasos, existen algunos antecedentes más recientes de intentos de ordenamiento territorial; un ejemplo al respecto es el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental de 1999. No obstante, dichas experiencias siempre terminaron en letra muerta o resultaron obsoletas ante una realidad urbana muy dinámica, marcada por intensos crecimientos en breves lapsos de tiempo. Tal es así que, hasta la fecha, y pese a numerosos debates en el Consejo Deliberante, Comodoro continúa sin tener un Código de Planeamiento Urbano⁷.

Las dificultades por lograr cierta planificación urbana no se deben pura y exclusivamente a la falta de voluntad e incapacidad política para implementar dichos planes y/o programas, sino también a otros factores entre los cuales se destaca el siguiente: los tiempos del petróleo exceden la temporalidad local e incluso, en ocasiones, la temporalidad nacional. Las oscilaciones de los precios internacionales del barril de petróleo tienen un impacto directo en la ciudad, determinando un péndulo entre etapas de estancamiento y/o crisis, con otras rachas de *boom* petrolero marcadas por un crecimiento vertiginoso y acelerado que supera la capacidad de reacción estatal. En definitiva, en algunos contextos el nexo entre petróleo y planificación pudo haber apuntado a garantizar la rentabilidad empresarial, en otros tal vez a preservar las fuentes de empleo; en todo caso, el denominador común de esta historia ha sido priorizar la extracción y circulación de hidrocarburos a costa de un crecimiento urbano sustentable.

Ningún comodorense olvidará las lluvias torrenciales que comenzaron el miércoles 29 de marzo del 2017. Las inundaciones arrojaron una cifra de 92.000 damnificados (ADN Sur, 7 de abril de 2017); si nos guiamos por los datos poblacionales del 2010, dicha cifra supondría que el 51,9% de los residentes se vio directamente afectado por las tormentas. Por otra parte, el gobernador de la provincia de Chubut declaró que más de 2.000 viviendas quedaron destruidas lo cual, siempre tomando como válidas las estadísticas del último censo nacional, equivaldría al 4% de las edificaciones existentes (El Patagónico, 4 de abril de 2017). De igual modo, la infraestructura urbana quedó devastada ante el avance irrefrenable del lodo y la conformación de decenas de zanjas de varios metros de profundidad en pleno ejido urbano.

Durante meses la cotidianidad de la ciudad estuvo marcada por las conversaciones sobre “el desastre climático y la tragedia natural”. No obstante, por lo general, no hay tragedias ambientales que no sean socialmente producidas. Las tragedias podrían dividirse entre las previsibles y las imprevisibles; la que padeció Comodoro se inscribe dentro de la primera categoría. Es un dato “objetivo” que en sólo dos días llovió el equivalente al promedio de precipitaciones que la ciudad recibe en cuatro años. Así, es preciso reconocer que, en caso de haber tenido una

⁷ Liderados por los colegios de arquitectos e ingenieros, y luego de las inundaciones de principios del 2017, distintas organizaciones comenzaron a trabajar conjuntamente en pos de la creación de un Código de Planeamiento Urbano.

infraestructura urbana adecuada, la ciudad igualmente se hubiese inundado; sin embargo, el problema inherente a este tipo de argumentos es que ponen el acento en el clima, quitando responsabilidades ante lo sucedido a los gobiernos en particular, y a las intervenciones humanas en general. El diluvio no fue un castigo divino, sino una combinación explosiva entre inclemencias climáticas y negligencia, desidia e impericia humana, en donde el modelo de acumulación monoprodutivo basado en el petróleo ocupó un lugar destacado.

La experiencia traumática no fue el simple producto de unas lluvias intensas, sino de cómo las mismas impactaron en una ciudad que creció a un ritmo vertiginoso y sin planificación urbana. Como resultado de una ciudad que se expandió en buena medida a partir de campamentos petroleros que con el paso del tiempo devinieron en barrios, siguiendo una lógica de manchas urbanas desconectadas entre sí, hoy en día en vez de un modelo compacto de crecimiento urbano nos encontramos con un patrón de crecimiento fragmentado, disperso e insustentable. La tragedia que vivió la ciudad, con barrios aislados del sistema urbano, como se verificó durante las inundaciones en sitios como Laprida, Los Bretes o Caleta Córdova, tiene sus orígenes en dicho modelo de crecimiento, donde unas pocas rutas operan como los únicos vasos comunicante entre tales barrios y el resto de la ciudad.

Asimismo, buena parte de las nuevas urbanizaciones se localizan a muchos kilómetros de distancia del centro de la ciudad, y ello responde a diversos motivos. Por un lado, muchas de tales nuevas urbanizaciones son asentamientos informales que surgieron mediante tomas masivas de tierras. La municipalidad nunca reconoció la emergencia habitacional; más aún: en vez de anticiparse al problema, en las contadas ocasiones en que inició un proceso de reconocimiento y urbanización de dichos barrios, lo hizo de manera tardía, cuando el problema ya estaba instaurado. Por otra parte, los escasos planes de viviendas oficiales suelen localizarse en zonas periféricas. Ello es así debido a que la municipalidad no cuenta con la capacidad financiera para comprar tierra a los antiguos campos que quedaron dentro del ejido municipal; tampoco se observa una voluntad política de expropiar dichas tierras por motivos de emergencia socioresidencial al valor que realmente valen, es decir, a precio rural. En uno y otro caso, las consecuencias son las mismas: llevar servicios a sitios como Fracción 14 o al kilómetro 17 es un gasto excesivo para una municipalidad que, de esta manera, se priva de destinar recursos a infraestructura urbana y a problemas habitacionales. Las lluvias generaron zanjas que parecen trincheras de la Primera Guerra Mundial, destrozando un tejido de cañerías subterráneas que irracionalmente debe atravesar kilómetros de extensiones vacías hasta zonas alejadas y periféricas. El costo económico de reconstruir este tipo de infraestructura es sideral.

Ante la incapacidad estatal de brindar respuestas y la expulsión de un mercado inmobiliario que fija precios prohibitivos al suelo, muchos de quienes se ven impedidos de acceder a una vivienda digna se instalaron en las áreas abandonadas que poseen un menor valor económico; en una ciudad como Comodoro, dichas zonas suelen coincidir con las laderas de los cerros. El costo social y económico asociado con la desidia estatal respecto de estas áreas es enorme. El Estado no intervino controlando dichas autoconstrucciones; así, no menos de 16

viviendas fueron arrasadas por el lodo en el asentamiento localizado en el barrio Don Bosco (El Patagónico, 5 de abril de 2017). Es un milagro que con las copiosas lluvias no haya habido más casos de desprendimientos de cerros y viviendas.

Un grupo de geógrafos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, coordinados por el Dr. José Paredes, explicó la magnitud del impacto de las últimas inundaciones apelando a factores como la arena volada ante un fuerte proceso de desertificación, la producción de sedimento por la construcción de la ciudad, y la cantidad de caminos que la actividad petrolera realizó en los cerros aledaños a la ciudad (El Patagónico, 21 de abril de 2017); en todos los casos, la industria petrolera y la urbanización desenfrenada son los grandes responsables de la tragedia. La ausencia de planificación estatal guarda relación con un Estado que se limita a promover al mercado: la extracción de hidrocarburos a cualquier costo (garantizando agua para la explotación, no así para el consumo local), o la expansión del mercado inmobiliario prácticamente sin regulaciones, son claros ejemplos al respecto. En tal sentido, el mercado constructor e inmobiliario tradicionalmente operó sin grandes controles estatales, lo cual derivó en la edificación en zonas de desplazamiento o acumulación de sedimentos, en áreas bajas e inundables; el barrio Laprida es un claro exponente de lo planteado (Romeo, 2017). De hecho, se calcula que unos 3.100 comodorenses residen dentro de tierras que poseen tales características (Diario Jornada, 7 de diciembre de 2017). Más aún: según el Dr. Paredes (en El Patagónico, 21 de abril de 2017), hasta hace unas décadas en los alrededores de la ciudad existían lagunas y unos 25 arroyos, de los cuales hoy en día sólo quedan 6; en su opinión, la principal causa del desastre “natural” se debió a los arroyos tapados producto de la modificación del terreno original por la acción humana, ya sea con relación a la industria petrolera o debido a la construcción no controlada de viviendas.

En definitiva, el crecimiento urbano desmedido experimentado tras el último *boom* petrolero, con un Estado cuyas regulaciones siempre beneficiaron la libre acción del mercado inmobiliario y que mostró incapaz de generar infraestructura y servicios urbanos para las nuevas dimensiones que adquirió la ciudad, son factores ineludibles a la hora de comprender los efectos devastadores de las precipitaciones recientes. Nuevamente, no se puede justificar lo sucedido alegando sorpresa ante la virulencia de la tormenta, pues hace mucho tiempo que distintos actores vienen denunciando el colapso de los servicios básicos frente a la expansión urbana descontrolada. El temporal puso en evidencia una acumulación histórica de impericias que se expresó en conectores cloacales que se mezclan con pluviales y se desbordan (inundando no sólo de lodo, sino también de excrementos arterias fundamentales como la avenida Chile), basurales clandestinos y residuos dispersos por toda la geografía local que terminaron taponando pluviales y forzando al agua a buscar otros cursos, etc.

En el nexo entre un modelo de acumulación monopolizado por la extracción de petróleo y un estilo específico de expansión urbana, no podemos dejar de lado la cuestión ambiental. Un aspecto especialmente problemático ligado a la producción de petróleo es la contaminación, hasta tal punto que Comodoro ha sido calificada como una de las ciudades con mayor pasivo ambiental del país (Svampa, 2014). Desde 1907, año en que se inició la producción de petróleo, se han realizado unas

39.000 perforaciones en la zona. En el presente, se calcula que unas 780.000 hectáreas de la Cuenca del Golfo San Jorge se encuentran directamente afectadas por la actividad petrolera. A su vez, dentro del ejido municipal de Comodoro, habría entre 2500 y 2800 pozos de petróleo abandonados (datos disponibles en Bachiller, Baeza, et al, 2015).

Las consecuencias para la salud ligadas con la presencia masiva y subterránea de pozos y ductos petroleros dentro del ejido urbano nunca fueron investigadas; se trata de una laguna fundamental que el ámbito académico local debería subsanar en el futuro próximo. No obstante, el ítem que aquí interesa profundizar es el vínculo entre contaminación y los modos diferenciales de acceso al espacio urbano para los sectores populares.

En primer lugar, tal conjunto de pozos de petróleo en uso o abandonados dentro del ejido urbano, más los oleoductos y gasoductos con sus respectivos perímetros de seguridad, restringen las áreas utilizables. Recordemos que las normativas municipales establecen que, en función de un criterio de seguridad, está prohibido edificar en un perímetro de 100 metros a la redonda de cada pozo de petróleo, lo cual limita mucho las posibilidades de encontrar tierra urbanizable. En tal sentido, la presidenta de la Cámara inmobiliaria señalaba que “la particularidad de la ciudad es que siempre faltó terreno, si bien es extenso, hay muchas zonas que no están en condiciones de ser loteadas por la explotación petrolera. Entonces hay barrios completos que no se pueden lotear, porque son pozos abandonados que no están remediados” (Entrevista a FJ, 6 de noviembre de 2016). De hecho, en las entrevistas a empresarios del mercado inmobiliario, hubo un consenso generalizado en cuanto a la falta de tierras disponibles para lotear; entonces, se señala a la topografía y a la presencia de pozos y ductos como un problema de difícil solución. De tal manera, el petróleo eleva los precios del suelo por varios motivos: a) porque compite exitosamente en el proceso de apropiación del suelo respecto del mercado inmobiliario; b) porque supone que un importante sector de la sociedad dispone de un salario muy superior al resto del conjunto poblacional; c) porque inhabilita tierras. Vale la pena añadir que la mayoría de los antiguos pozos petroleros se construyeron sobre las escasas planicies de la zona, donde era más sencilla su instalación, determinando que muchas de las áreas actualmente disponibles para ser urbanizadas sean laderas o quebradas, factor que dificulta la construcción y eleva sensiblemente los costos. Por consiguiente, nos encontramos frente a la siguiente aparente paradoja: la carencia de tierras urbanizables de propiedad fiscal en una provincia que posee una densidad poblacional bajísima (de 1,8 habitantes por kilómetro cuadrado). Vemos tierra disponible por todos lados, pero la misma no es urbanizable ya sea por razones topográficas, debido al pasivo ambiental, o por tratarse de áreas de titularidad privada.

Una característica de la mayoría de los asentamientos de Latinoamérica es que suelen crecer sobre las escasas tierras disponibles, sobre antiguos basurales, en zonas anegables, etc. Consecuentemente, la desigualdad también se materializa en la calidad del aire que respiran, el agua que beben y el suelo sobre el cual transcurren las vidas de los sectores populares. Sin embargo, esta máxima en Comodoro debe ser relativizada: como vimos anteriormente, la ciudad en su conjunto se expande sobre

unos 2800 antiguos pozos de petróleo. Por consiguiente, instituciones y numerosas residencias de barrios “históricos” de la ciudad han sido construidas sobre antiguos pozos. En tal sentido, nos vemos tentados de plantear que, si hay algo democrático e igualitario en esta ciudad, es la contaminación. Sin embargo, y pese a lo dicho, también en Comodoro la contaminación asume un aspecto diferencial clasista. Salvo contadas excepciones, en la localidad patagónica la contaminación que produce la actividad extractiva no es motivo de debate (al respecto, consultar en Baeza y Chanampa, 2016). Los comodorenses se oponen a la construcción de una central nuclear en la provincia por motivos ambientales, pero el petróleo se encuentra tan naturalizado en la historia urbana local que no suele ser pensado en términos de contaminación. Salvo contadas excepciones⁸, los escasos discursos que a lo largo del trabajo de campo mencionaron a la industria extractiva como un problema urbano, giraron en torno a un argumento expulsivo de los asentamientos. A modo de ejemplo, es posible citar las conversaciones con dirigentes de la Unión Vecinal del barrio Standar Norte quienes, alegando principios ambientales, remarcaron la peligrosidad inherente a residir sobre ductos y/o dentro del radio de seguridad de un pozo de petróleo. En sus relatos en pos de la erradicación del asentamiento localizado dentro de su jurisdicción, dichos dirigentes omiten que la escuela y el hospital de la zona también se ubican bajo el área de influencia de distintos pozos y ductos; de modo similar, silencian los planes de YPF encaminados a la recuperación y la perforación de nuevos pozos en barrios como Bella Vista o Restinga Alí (Observatorio Petrolero Sur, 11 de agosto de 2015). Tal como sostiene Carman (2011), en estas ocasiones lo ambiental es una estrategia discursiva esbozada por quienes se piensan a sí mismos como los “verdaderos vecinos” (quienes tienen una mayor antigüedad residiendo en el barrio y/o quienes acceden al suelo urbano mediante las formas oficialmente reconocidas como válidas, es decir, como propietarios o inquilinos), en pos de la expulsión de quienes son considerados como “intrusos”. En definitiva, en las pocas ocasiones en que la extracción de petróleo fue mínimamente problematizada a lo largo del trabajo de campo, el conflicto no fue asumido como un problema general de la ciudad, sino como una particularidad de las tomas de tierras que ameritaba la erradicación del asentamiento.

Evitando repetir el error de interpretar la presencia de petróleo en términos dualísticos, como una bendición o como una maldición, en este artículo se reconocieron aspectos positivos propios de dicha actividad productiva (la generación de empleo y riquezas, las regalías fiscales, etc.), así como negativos. No obstante, a diferencia de otras localidades petroleras, el nacimiento de Comodoro se encuentra indefectiblemente ligado con la extracción de hidrocarburos; su historia corre en paralelo al petróleo. Para el sentido común local, el petróleo es una “bendición” (Baeza y Chanampa, 2016). Por consiguiente, la naturalización de su presencia en un imaginario que lo exalta como fuente de riquezas, conlleva una enorme dificultad

⁸ Las excepciones a las que se hace referencia fueron protagonizadas por algunos líderes del asentamiento localizado en el barrio Standar Norte. Siendo residentes de un asentamiento que la municipalidad se niega a regularizar debido a la presencia de ductos y pozos de petróleo, dichos líderes representan casos aislados en donde fue posible vincular críticamente a la producción de hidrocarburos con el desarrollo urbano.

para reconocer aspectos negativos de la sociedad que no podrán ser modificados sin cuestionar previamente el modelo de acumulación de capital específico de la región. El desarrollo urbano es quizá el mejor ejemplo de los efectos colaterales no deseados de dicho modelo de acumulación de capital monolítico, basado pura y exclusivamente en la producción de petróleo.

A modo de conclusión

Tomando al espacio urbano como variable clave de análisis, el objetivo del presente trabajo consistió en analizar el vínculo entre desigualdad y petróleo. Entendiendo a Comodoro como un simple nodo de una red mundial de producción de hidrocarburos, el texto giró en torno a dimensiones como el déficit habitacional, los modos desiguales de acceso al suelo y el modelo urbano propio de una ciudad organizada en torno a la extracción de petróleo.

En el texto se argumenta que la espacialidad urbana local históricamente se vio fuertemente afectada por los vaivenes de la producción petrolera, factor que generó grandes desigualdades y contrastes territoriales. A modo de ejemplo, podemos recordar nuevamente las brechas a nivel de servicios e infraestructura urbana que distanciaron a los barrios de la zona norte (que surgieron como campamentos petroleros) respecto de otras unidades territoriales; se consideró cómo las jerarquías laborales se replicaron al interior de dichos campamentos devenidos en barrios; así como se analizó la emergencia de nuevas desigualdades “dinámicas” al interior de los asentamientos, las cuales son resultado del acceso diferencial al mundo del petróleo. Asimismo, tras examinar los períodos de mayor expansión territorial, queda en claro que la espacialidad urbana tradicionalmente respondió a las fluctuaciones del mercado de los hidrocarburos: no casualmente, dichas etapas de fuerte crecimiento coincidieron con los *booms* petroleros. De hecho, el último *boom* petrolero de mediados de la década del 2000 implicó un fuerte desarrollo urbano basado en tres ejes: la intensa expansión de Rada Tilly y del centro de Comodoro gracias al incremento y a la apropiación por parte de ciertos grupos locales del excedente de la renta petrolera, así como la impactante proliferación de asentamientos informales que alojaron a una masa poblacional expulsada del mercado formal inmobiliario y que fue desatendida por parte del Estado.

Los funcionarios municipales, empresarios de la construcción o del mercado inmobiliario, así como los residentes de asentamientos que fueron entrevistados, coinciden en que un denominador común en la historia comodorense es la falta de planificación urbana. Para ser más precisos, habría que aclarar nuevamente que Comodoro tuvo cierta planificación, pero que la misma fue eminentemente empresarial (cuestión especialmente evidente en el norte de la ciudad, donde proliferaron las empresas/campamentos luego devenidos en barrios), no así urbana. Por un lado, el petróleo genera un crecimiento intermitente donde, en muy poco tiempo y a un ritmo vertiginoso, a la ciudad llega un enorme contingente poblacional que precisa de viviendas. En dichos períodos de *boom* petrolero, ante el “llamado del petróleo”, la “cuestión demográfica” desborda la capacidad de respuesta estatal. Por otro lado, en esta ciudad patagónica lo urbano nunca fue prioridad; por el contrario,

los criterios de planificación predominantes siempre se limitaron a la extracción y circulación de petróleo, así como al negocio del sector privado en la construcción de nuevos barrios para las élites locales.

En el texto se sostuvo que la tragedia que vivió la ciudad con las inundaciones del 2017 es fruto de un modelo de desarrollo monolítico, determinado por la industria petrolera, desligado de cualquier forma de planificación urbana. Antiguos campamentos petroleros, devenidos hoy en día en barrios, quedaron desconectados del conjunto urbano; algo similar ocurrió con las nuevas urbanizaciones localizadas en áreas periféricas que nacieron mediante tomas de tierras, o incluso debido a planes oficiales de viviendas. Los efectos devastadores del temporal sólo pueden explicarse en función de una combinación explosiva entre la actividad petrolera y la urbanización desenfrenada; en ambos casos, el elemento a resaltar es la falta de regulación y planificación estatal en materia urbanística.

Intentando no reincidir en los diagnósticos que interpretaron a la renta petrolera en términos dualísticos, como una bendición o como una maldición, en el presente texto se plantearon aspectos positivos (como la generación de regalías fiscales o las tasas de empleo y pobreza) así como otros negativos (la exclusión residencial fue la dimensión privilegiada a lo largo del trabajo). Pero lo cierto es que Comodoro posee una particularidad que la distingue de otras ciudades petroleras: desde sus orígenes, y a lo largo de toda su historia, se identificó con la extracción de hidrocarburos. El proceso de conformación de la identidad local guardó una vinculación estrecha con dicha industria. Por consiguiente, para el sentido común local el petróleo es una “bendición” (Baeza y Chanampa, 2016); y una bendición es, por definición, un tabú incuestionable. En definitiva, en el imaginario local, la naturalización del petróleo como fuente de bienestar y abundancia representa un obstáculo que impide establecer conexiones como las planteadas en este artículo, en función de las cuales una tragedia aparentemente natural se relaciona con el modo en que históricamente operó la industria de los hidrocarburos en la zona.

En una región que produce riquezas extraordinarias, la inexistencia de infraestructura urbana para soportar las inclemencias climáticas, por más feroz que las tormentas hayan sido, resulta injustificable. La morfología y funcionalidad de la ciudad no pueden continuar siendo predeterminadas por una imposición acrítica que define a Comodoro como una simple localización productora de petróleo. Por el contrario, se torna preciso regular y controlar con mayor fuerza a las empresas que se benefician de la extracción de hidrocarburos para que asuman sus responsabilidades en cuestiones vinculadas con cuestiones como lo ambiental. Por otra parte, se trata también de discutir qué se va a hacer, cómo se va a utilizar la renta que produce el petróleo (Peters, 2016), de manera que las riquezas generadas se vuelquen a un desarrollo urbano sustentable así como a mitigar las desigualdades que dicha actividad productiva genera.

La nacionalización de YPF podría haber sido un punto de inflexión a favor de un nuevo criterio de planificación estatal que no se limite a lograr una mayor productividad, sino que también se preocupe por saldar deudas históricas en materia de pasivo ambiental, fragmentación urbana y cohesión social. Lamentablemente, la historia reciente y el presente de YPF parecen marchar en sentido contrario. En buena

medida depende de la sociedad comodorense que estas tendencias históricas se reviertan, se consoliden, o incluso se fortalezcan.

Bibliografía

- ADN Sur (2017), "Estiman que hay 92 mil damnificados", [En línea]. <http://www.adnsur.com.ar/2017/04/estiman-92-mil-damnificados/> Consulta: 7 de abril de 2017.
- Bachiller, S.; Baeza, B. et al. (2015), "Hay una ciudad informal... o la atendés o no la atendés. Revisando el papel que tuvieron las ocupaciones de tierras en la conformación del entramado urbano comodorense", en: Bachiller, S. (Ed.), *Toma de tierras y dificultades de acceso al suelo urbano en la Patagonia central*, Buenos Aires, Miño y Dávila y UNPAEDITA, 69-124.
- Baeza, B. y Chanampa, M. (2016), "La naturalización de las problemáticas medioambientales en torno a la explotación petrolera en Comodoro Rivadavia", *Identidades*, Dossier 3, 6 (Septiembre), 7-31.
- Barrionuevo, N. y Peters, S. (2016), "Petróleo, trabajo y sociedad en la Patagonia Argentina", *Identidades*, Dossier 3, 6 (Septiembre), 1-7.
- Reyna, S. P. y Behrends, A. (2011), "The crazy curse and crude domination. Towards an Anthropology of Oil", en: Behrends, A.; Reyna, S. et al. (Ed.), *Crude domination: An anthropology of Oil*, New York, Berghahn, 3-29.
- Carrizo, G. (2010), *Sindicatos libres, Judas del proletariado argentino. Populismo y sindicalismo en Comodoro Rivadavia durante el primer peronismo*. Tesis doctoral en Estudios Sociales de América Latina, Centro de Estudios Avanzados, Universidad Nacional de Córdoba.
- Carman, M. (2011), *Las trampas de la naturaleza. Medio ambiente y segregación en Buenos Aires*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
- Castells, M. (2001), "El espacio de los flujos", en: Susser, I. (Ed.), *La sociología urbana de Manuel Castells*, Madrid, Alianza, 399-459.
- Dupuy, L. (2017), "El IPV expropiará tierras en Comodoro Rivadavia", *Cholila Online*, [En línea]. <http://www.cholilaonline.com/2017/02/el-ipv-expropiara-tierras-en-cro.html> Consulta: 15 de febrero de 2017.
- Diario Jornada (2017), "Este año se entregaron 423 casas con el IPV y Trelew fue la más beneficiada", [En línea]. <http://argentinamunicipal.com.ar/argentina/?p=57957> Consulta: 15 de octubre de 2017.
- Diario Jornada (2017), "La superficie de Comodoro creció entre 2001 y 2017 un 62,5% y la población un 51,5%", [En línea]. <http://www.diariojornada.com.ar/197780/provincia/la-superficie-de-comodoro-rivadavia-crecio-entre-el-2001-y-el-2017-un-6250-y-la-poblacion-en-un-515/> Consulta: 7 de diciembre de 2017.
- El Patagónico (2017), "El respeto de los arroyos y cauces son fundamentales para la reconstrucción", [En línea]. <https://www.elpatagonico.com/el-respeto-los-arroyos-y-cauces-son-fundamentales-la-reconstruccion-n1547526> Consulta: 21 de abril de 2017.

- El Patagónico (2017), "En el barrio Don Bosco desaparecieron 16 casas", [En línea]. <https://www.elpatagonico.com/en-el-barrio-don-bosco-desaparecieron-16-casas-n1544909> Consulta: 5 de abril de 2017.
- El Patagónico (2017), "Das Neves: nunca vi algo así, un destrozó terrible", [En línea]. <https://www.elpatagonico.com/das-neves-nunca-vi-algo-asi-un-destrozó-terrible-n1544721> Consulta: 4 de abril de 2017.
- El Patagónico (2015), "El porcentaje de reparto bajó para la mayoría de los municipios pero reciben más dinero", [En línea]. <http://www.elpatagonico.net/nota/275321/> Consulta: 29 de marzo de 2015.
- El Patagónico (2014), "En nueve años sólo hallan siete reservorios petroleros", [En línea]. <http://www.elpatagonico.net/nota/259592-en-nueve-anos-solo-hallan-siete-reservorios-petroleros/> Consulta: 27 de octubre de 2014.
- Fitoussi, J. P. y Rosanvallon, P. (1997), *La nueva era de las desigualdades*, Buenos Aires, Manantial.
- Gledhill, J. (2008), "The people's oil: Nationalism, Globalization, and the possibility of another country in Brazil, Mexico, and Venezuela", *Focaal, European Journal of Anthropology*, 52, 57-74.
- Grimson, A. y Baeza, B. (2011). "Desajustes entre nivel de renda e hierarquias simbólicas em Comodoro Rivadavia: sobre as legitimidades da desigualdade social", *Revista Maná: Estudos de Antropología Social*, 17 (2), 336-363.
- Gudynas, E. y Acosta, A. (2017) "El buen vivir más allá del desarrollo", [En línea]. http://www.dhl.hegoa.ehu.es/ficheros/0000/0709/4.El_buen_vivir_mas_allá_del_desarrollo.pdf Consulta: 1 de junio de 2018.
- INDEC (2017) "Encuesta permanente de hogares". [En línea]. <https://www.indec.gob.ar/bases-de-datos.asp> Consulta: 1 de junio de 2018.
- Observatorio Petrolero Sur (2015), "Vecinos de Comodoro presentan amparo judicial contra YPF", [En línea]. <http://www.opsur.org.ar/blog/2015/08/11/vecinos-de-comodoro-presentan-amparo-judicial-contra-ypf/> Consulta: 11 de agosto de 2015.
- Peters, S. (2016), "Petróleo, política y sociedad en Chubut: reflexiones teórico-conceptuales en torno al rentismo", *Identidades*, Dossier 3, 6 (Septiembre), 144-164.
- Romeo, G. D. (2017), "La configuración espacial de la urbanización como componente de construcción de un escenario de riesgo en barrio Laprida. Comodoro Rivadavia (Chubut)", en: Sagua, M.; Calderón, G. et al. (Comp.), *Primeras Jornadas de Hábitat y Ambiente: sustentabilidad territorial y urbana: indicadores de gestión ambiental*, Mar del Plata, Universidad Nacional de Mar del Plata, 39-45.
- Svampa, M. (2014), "Comodoro Rivadavia, un modelo de maldesarrollo", [En línea]. <http://www.inventario22.com.ar/textocomp.asp?id=68454#textocompleto> Consulta: 11 de febrero de 2014.
- Techo (2017), "Relevamiento de asentamientos informales Techo 2016", [En línea]. <http://relevamiento.techo.org.ar/index.html?latlng=-45.835736457576026,-67.46910095214845&z=11&l=mapa&f=2&y=r2016&chart=0&table=1&details=0>

[&detailsTab=0&nid=&type=bG9jYWxpZGFk&lc=Q29tb2Rvcn8gUml2YWRh
dmlh&dp=RXNjYWxhbnRl&pr=Q2h1YnV0](#) Consulta: 10 de febrero de 2018.

Usach, N. y Freddo, B. (2014), "Crecimiento de una ciudad dispersa: análisis y reflexiones del caso de la ciudad de Comodoro Rivadavia", en: IX Jornadas Patagónicas de Geografía, Universidad Nacional Patagonia Austral, Santa Cruz, Argentina, 12 al 15 de marzo.



Hidrocarburos y ambiente en la Argentina: Misceláneas de una relación problemática, de los pingüinos empetrolados al fracking

Hernán Scandizzo¹

Resumen

Nos proponemos un acercamiento a la *problemática relación* producción de hidrocarburos / ambiente, partiendo de la necesidad de elaboraciones colectivas para intervenir en las definiciones de la política energética. Decimos que es una relación *problemática* por los impactos socio-ambientales resultantes de la actividad -degradación y contaminación del suelo, agua y aire y sus derivaciones en la salud de humanos y no humanos, etc.-, pero también por los abordajes que se hacen de esta relación desde diferentes instancias gubernamentales y de la sociedad civil. A partir del racconto de momentos de las últimas tres décadas en que se puso en tensión la problemática relación hidrocarburos-ambiente nos detenemos en las *sensibilidades colectivas* que se manifiestan en torno a los impactos de esta actividad; las demandas de organizaciones políticas, indígenas y sindicales, y también en los usos de *lo ambiental* en la relación estados-empresas.

Palabras clave

hidrocarburos - impacto ambiental - perspectiva socio-ambiental - debate energético - saqueo

Hydrocarbons and environment in Argentina: Miscellanies of a problematic relationship, from penguins oiled to fracking

Abstract

We propose an approach to the *problematic relation* between hydrocarbon production / environment, based on the need for collective elaborations to intervene within the definitions of energy policy. We maintain that it is a *problematic* relation due to the socio-environmental impacts resulting from the activity -degradation and soil, water and air contamination, and its derivations into human and non-human health, etc.-, but also by the approaches that are made of this relationship from different levels of government and civil society. Based on the review of moments of the last three decades in which the problematic hydrocarbons-environment relation was in tension, we focus on the *collective sensibilities* that are manifested around the impacts of this activity; the political, indigenous and union organizations demands, and also on the uses of *the environmental* in the states-companies relation.

Keywords

hydrocarbon - environmental impact - socio-environmental perspective - energy debate - plunder

¹ Periodista, investigador y co-fundador del Observatorio Petrolero Sur. Correo electrónico: hernan.gsp.74@gmail.com

Desde la década de 1980, en diferentes puntos del país, grupos ecologistas impulsaron campañas contra la construcción de represas, emprendimientos forestales y piscícolas; también contra el agro-negocio, la instalación de centrales y repositorios nucleares y de industrias petroquímicas, entre otros.² Sin embargo, fue en los primeros años de la década del 2000 en que, a fuerza de multitudinarias movilizaciones, las luchas socioambientales irrumpieron para quedarse en la agenda política. Dos hitos de aquel momento fueron el No a la Mina en Esquel, Chubut;³ y la oposición a la instalación de dos plantas de producción de pasta de celulosa en Fray Bentos (Uruguay), frente a la ciudad entrerriana de Gualaguaychú.⁴

En ese auge de las luchas socio-ambientales proliferaron espacios de participación/militancia como asambleas, foros y multisectoriales, desde los que se problematizó el modelo productivo y se impulsaron campañas. Por entonces, la crítica a los impactos de la explotación de hidrocarburos tenía un lugar marginal en esa agenda; más que el cuestionamiento a la dependencia de una matriz energética preponderantemente fósil (gas, petróleo y carbón), se repudiaba al *saqueo* de éstos, perpetrado por empresas transnacionales como Repsol YPF. Una consecuencia de la privatización de la petrolera nacional, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), y la liberalización del sector.

En las décadas de 1990 y de 2000 la producción de hidrocarburos fue puesta en tensión en diversos momentos por conflictos territoriales y denuncias de contaminación que afectaban la calidad de vida de poblaciones humanas y no humanas. Sin embargo, recién 2012, con la irrupción de la técnica de fracturación hidráulica o fracking⁵, aplicada en yacimientos no convencionales, la crítica a esta actividad logró insertarse plenamente en la agenda socio-ambiental. Las fuertes campañas de rechazo al fracking, principalmente en Europa y Estados Unidos -por los riesgos e impactos ambientales asociados a su aplicación- contribuyeron a poner

² Un hito a destacar de la historia de la militancia ecologista en el país es que en 1984 se formó la Red Nacional de Acción Ecologista de Argentina (Renace). Una memoria de luchas ecologistas que tuvieron lugar en Patagonia entre 1981 y 2003 se encuentra en Lucas Chiappe (2004).

³ La movilización de la población de Esquel, Trevelin y de las localidades de la Comarca Andina del Paralelo 42, generó las condiciones para que el proyecto de explotación de oro y plata a cargo de la empresa canadiense Meridian Gold fuera sometido a una consulta popular. El 23 de marzo de 2003 el 81% de quienes votaron en Esquel lo hicieron por el No. Ver Svampa, M. y Antonelli, M.A. (2009).

⁴ En 2003 el gobierno uruguayo autorizó la construcción de dos plantas de producción de pasta de celulosa cerca de las poblaciones de Fray Bentos (Uruguay) y Gualaguaychú (Argentina), con un potencial impacto sobre las aguas binacionales del río Uruguay. Estalló un conflicto que alcanzó su momento de mayor intensidad en mayo de 2005, cuando alrededor de 40 mil personas ocuparon el puente internacional Libertador Gral. San Martín. En el curso de la disputa la empresa española ENCE decidió retirarse de Uruguay y vender sus activos forestales a la compañía chilena Arauco y a la sueco-finlandesa Stora Enso. En tanto la planta proyectada por la firma finlandesa Metsa-Botnia (luego transferida a UPM-Kymmene, también finlandesa) fue puesta en marcha en noviembre de 2007. Ver Cortassa, C.G.; Wursten, A.G.; et al (2013).

⁵ La fracturación hidráulica o fracking es la técnica utilizada para la extracción de hidrocarburos alojados en formaciones de arenas compactas y de lutitas. Apartir de la inyección en la roca de agua, químicos y elementos de soporte a alta presión se genera permeabilidad en sustratos compactos, lo que permite que fluya hacia el pozo el gas y el petróleo allí contenido. Para profundizar en el tema Bertinat, P.; D'Elía, E. et al (2014).

el tema en ese lugar, y se generaron fuertes movimientos de oposición en regiones sin antecedentes de extracción de gas y petróleo, como es el caso de las provincias de Entre Ríos y Buenos Aires.⁶

La conquista del nuevo desierto

En los primeros años de la década de 1990 se inició un proceso simultáneo de privatización, desregulación, federalización y transnacionalización del sector. La empresa estatal YPF fue convertida en una sociedad anónima y sus acciones -en principio en poder de la Nación y las provincias productoras- fueron vendidas hasta que, en 1999, fue controlada casi en su totalidad por la compañía española Repsol -el Estado mantuvo el derecho a participar de las decisiones del consejo directivo y el poder de veto. En tanto el dominio del gas y el petróleo pasó de la Nación a las provincias -en un proceso que comenzó con la sanción de la Ley 24.145 en 1992, conocida como *Ley de Federalización de Hidrocarburos y Privatización de YPF*, continuó con la reforma de la Constitución Nacional en 1994 y culminó en 2006 con la sanción de la ley 26.197, conocida como Ley Corta. En ese marco de transformaciones, el gas y el petróleo perdieron su carácter de *recurso estratégico* -uno de los puntales de la épica nacional desarrollista argentina- para convertirse en un *commodity*;⁷ y se incrementaron los niveles de extracción a partir de la puesta en producción de áreas que habían sido exploradas por la empresa estatal y permanecían en reserva. Este proceso de ampliación de la frontera extractiva, fue acompañado por una serie de obras de infraestructura para el transporte y exportación.⁸

Una consecuencia de estas transformaciones fue el avance de la actividad hidrocarburífera sobre territorios de comunidades indígenas, lo que desencadenó una serie de conflictos.⁹ Conflictos que expresaban, además, la emergencia política de

⁶ Las cuencas hidrocarburíferas productivas en Argentina son cinco: Austral-Magallanes, Golfo San Jorge, Neuquina, Cuyana y Noroeste. La firma de convenios entre YPF y los gobiernos de Entre Ríos y Buenos Aires para la realización de trabajos de prospección y exploración dieron lugar a campañas contra el fracking en ambas provincias. Producto de estas movilizaciones, en 2016 Entre Ríos prohibió la aplicación de la técnica de fracturación hidráulica. Ver Pérez Roig, D. (2011) y Laferriere, L. (2016).

⁷ Pérez Roig (2016: 11-16) considera que durante el neoliberalismo los hidrocarburos no perdieron su rol como recurso estratégico. Más bien, el sector traccionó el desarrollo del modelo en su conjunto a través de un doble proceso. Por una parte la privatización de YPF le permitió al Estado Nacional la capacidad fiscal de llevar adelante el plan de convertibilidad, además de favorecer el ingreso de divisas; mientras que la desregulación del mercado vehiculizó la apertura de la economía nacional en sectores claves como la (reorientada) industria, el agro y el sector de servicios, todos los cuales tuvieron un importante crecimiento del consumo energético.

⁸ Pérez Roig (2012:30) señala que “de una exportación del 2,5% del petróleo extraído, en 1989, se llegó al 25% para 2004, con un pico máximo del 41% en 1996”.

⁹ La intensificación de la actividad y la ampliación de su frontera extractiva, avalada por una política estatal de dejar hacer, se montó sobre la base del desconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos originarios y el discrecional cumplimiento de normas ambientales. El territorio se transformó entonces en un *desierto* libre de obstáculos para el desembarco y desarrollo de los proyectos corporativos (Scandizzo, H., 2014 y di Risio, D.; Gavalda, M. et al., 2012).

estos pueblos.¹⁰ Uno de los casos hito fue la lucha de la comunidad kolla Tinkunaku, en Orán, contra el tendido del gasoducto NorAndino, que atraviesa las provincias de Salta y Jujuy, y tenía como objetivo exportar gas a Chile. Los comuneros reclamaron el respeto a sus derechos territoriales y la protección de la selva de yungas. La demanda tuvo gran repercusión mediática, pero por la intervención de la organización ecologista Greenpeace, quizá se la recuerde más como una de las primeras cruzadas para evitar la extinción del yaguararé, cuyo hábitat era afectado por el proyecto (di Risio y Scandizzo, H., 2012: 125-127).

Otro caso emblemático es el de las comunidades mapuche Kaxipayin y Paynemil, en la provincia de Neuquén, detonado por el Proyecto Mega: la construcción de una planta separadora de gas y tendido de un gasoducto de 600 km hasta el polo petroquímico de Bahía Blanca (Gavalda, M., 2003: 32-42; Red DESC, s/d). La obra implicó una mayor ocupación del territorio ambas comunidades, cercanas a la localidad de Añelo, que estaban afectadas por la explotación del mayor yacimiento de gas del país: Loma La Lata. En el marco de ese conflicto las familias mapuche denunciaron la contaminación a la que estaban expuestas de manera crónica. Eran tales las concentraciones de condensados de gasolina en las napas freáticas, de las que se abastecían los comuneros, que el líquido que extraían ardía al acercarle fuego.

La ampliación de la frontera extractiva hacia áreas secundarias, que en algunos casos permanecían como reservas, también generó un desplazamiento de los conflictos territoriales. De Loma La Lata, el foco de tensión se extendió a la zona centro de la provincia de Neuquén, a yacimientos cercanos a las ciudades de Cutral Co y Zapala, donde las comunidades Logko Puran y Gelay Ko protagonizaron cortes de ruta, bloqueos de locaciones y tomas de instalaciones petroleras para detener la perforación de pozos y demandar la implementación de los mecanismos de consulta y participación contemplados en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT. La respuesta estatal fue la represión, judicialización y la estigmatización (Salgado, J.M.; Gomiz; M.M. *et al.*, 2010).

Control del recurso y apropiación social de la renta

Los impactos socioeconómicos de la privatización de YPF -desempleo por reducción de personal y depresión de las economías regionales- se sintieron en las comarcas petroleras de todo el país y dieron lugar a puebladas en Cutral Co y Plaza Huincul, en la provincia de Neuquén, en junio de 1996 y abril de 1997; y en las localidades salteñas de Tartagal y Gral. Mosconi, en mayo y noviembre de 2000 y junio de 2001. En ese contexto cobraron fuerza las movilizaciones de sindicatos y organizaciones políticas y populares que reclamaban la re-estatización de YPF y denunciaban el saqueo de los hidrocarburos; se focalizaban en el control del *recurso* y

¹⁰ Por esos años datan los primeros reconocimientos de derechos colectivos indígenas, en la Constitución Nacional reformada en 1994 se incorporó la preexistencia étnica y cultural de estos pueblos, el derecho al territorio y a la administración de sus recursos; mientras que dos años antes el Estado argentino había aprobado el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado en el año 2000.

la apropiación social de la renta. La prórroga de la concesión del yacimiento Loma La Lata-Sierra Barrosa a Repsol YPF, firmada en 2000 por el entonces presidente de la Nación Fernando De la Rúa, diecisiete años antes de que venciera el contrato, funcionó como uno de los catalizadores de esa lucha (Dellatorre, 2000). De igual modo funcionaron la sanción de la llamada *Ley Corta*;¹¹ la renovación anticipada de la concesión del yacimiento Cerro Dragón a Pan American Energy, en 2007;¹² y la prórroga anticipada de contratos petroleros implementada por el gobierno de Neuquén, en 2008.¹³

En el marco de esos procesos de movilización se conformaron organizaciones como el Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (Moreno), en 2001, constituido por un grupo de “militantes de distintas extracciones políticas, sociales y gremiales”, que “brega por el derecho del pueblo a la energía y la recuperación de todos nuestros recursos naturales” (Moreno, 2009); y el Nuevo Pensamiento Energético Latinoamericano (NPEL), en 2005, para “la generación de análisis y políticas que tengan como epicentro la integración de los trabajadores y que de su elaboración se desprenda la búsqueda de la puesta de los recursos naturales al servicio de la clase obrera y los pueblos” (NPEL, 2007: 13). La Confederación Mapuche del Neuquén -que nuclea a las comunidades de esa provincia-, también intervino en esas coyunturas, en sus planteos enfatizaba en la violación de derechos territoriales y en los impactos sanitarios, ambientales y culturales derivados de la extracción de hidrocarburos. Impactos que, a pesar de su magnitud, aparecían como un aspecto periférico en las críticas a las políticas hidrocarburíferas sostenidas por las organizaciones no indígenas.¹⁴

En 2008, con la creación del Observatorio Petrolero Sur (OPSur), se constituyó un colectivo que propone incorporar la perspectiva socio-ambiental a la lucha por el control público de los hidrocarburos y la apropiación social de la renta. En sus postulados, plantea además, la necesidad de democratizar la gestión de la energía y diversificar y desfosilizar la matriz (OPSur s/d).

Pingüinos y liberalización del sector

¹¹ Para un análisis crítico de la norma, Moreno (2006) “La provincialización de los hidrocarburos: entrega, despojo y sumisión. Ley Corta o Ley de Emiratos”.

¹² Hasta 2047 Pan American Energy (PAE) controlará el yacimiento de crudo más importante de argentina, Cerro Dragón, compartido por las provincias de Chubut y Santa Cruz. La renovación de su concesión, en 2007, fue muy cuestionada porque se realizó diez años antes de que venciera el contrato y abundaron sospechas de pago de sobornos al gobierno de la provincia de Chubut. Sospechas que en 2014 cobraron otra entidad cuando BP, una de las empresas propietarias de PAE, se autodenunció en la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos. Tanto en ese país como en Argentina hay investigaciones judiciales en curso. Para profundizar en el caso se puede consultar NPEL (2007).

¹³ Para un análisis crítico de la prórroga de concesiones en la provincia consultar CTA Neuquén (2008).

¹⁴ En noviembre de 2009 tomó estado público un informe de la Subsecretaría de Medio Ambiente de Neuquén del que surgía que las empresas petroleras a las que le habían prorrogado los contratos tendrían que remediar más de quinientos incidentes ambientales, de los cuales YPF acumulaba doscientos uno. El entonces titular de la dependencia estatal aseguró: “El impacto de la actividad en la provincia es significativo. Las malas prácticas utilizadas acumularon un número importante de sitios por remediar, siendo el objetivo de este Gobierno enfrentar la problemática y llegar a resolver los eventos en la medida que vayan ocurriendo” (La Mañana Neuquén, 2009).

Más arriba se hacía referencia a que mientras la comunidad Tinkunaku del Pueblo Kolla planteaba la defensa de su territorio y la protección de la selva de yungas como eje de la oposición al trazado del gasoducto NorAndino, la organización ecologista Greenpeace ponía el acento en que se afectaba el hábitat del yaguararé, una especie amenazada (Greenpeace Argentina, 2002; Clarín, 1998; La Nación 1998a y 1998b). La atención puesta en el impacto de la actividad hidrocarburífera sobre la vida silvestre no se dio sólo en ese caso, sino que fue el enfoque preponderante en las coberturas periodísticas de comienzos de la década de 1990, al menos de la prensa de Buenos Aires. La aparición masiva de pingüinos empetrolados en las costas del Atlántico Sur, en 1991, tuvo un abordaje similar. Incluso se pusieron en cuestión prácticas extendidas hasta ese momento en la producción de hidrocarburos como el uso de piletas de purga¹⁵, porque se transformaban en trampas mortales para las aves, que las confundían con espejos de agua en sus rutas migratorias. Estas referencias no son en función de caricaturizar ni de desestimar la defensa de vidas no humanas, sino marcar la ausencia de un abordaje integral de la problemática, que por una estrategia comunicacional o por convicción, ponía el acento en los impactos sobre la vida silvestre y no sobre el conjunto.¹⁶

¿Qué expresaba la aparición masiva de pingüinos en esas condiciones? Según investigaciones posteriores, eran un emergente del proceso de privatizaciones y liberalización del mercado hidrocarburífero. El biólogo Pablo García Borboroglu, del Centro Nacional Patagónico —dependiente del Conicet— y su colega Dee Boersma, de la Universidad de Washington, analizaron los relevamientos de 26 instituciones que registran y/o rehabilitan aves marinas empetroladas, desde Fortaleza (Brasil) hasta San Antonio Oeste (Argentina). A la luz de los datos de explotación y comercio de crudo, observaron "un dramático incremento [de pingüinos empetrolados] a mediados de los 90, coincidente con el crecimiento exponencial de exportaciones de petróleo en Argentina" (Borboroglu, P., Boersma, P. Reyes, L. et al., 2008).¹⁷

El foco sólo en los pingüinos -y otras especies no humanas empetroladas o en riesgo- funcionó para plantear un tema *novedoso* para quienes vivían alejados de los yacimientos: *la producción de petróleo afecta a la Naturaleza. Naturaleza* de la que no eran parte los seres humanos.

Pueblos empetrolados

¹⁵ Cavidades naturales o artificiales contiguas a pozos petroleros utilizadas para almacenar los desechos líquidos generados durante las etapas de perforación y producción.

¹⁶ José Seoane sostiene que "el proceso de dualización sociedad-naturaleza se vincula con las relaciones de explotación y dominación de clases, de razas y de género. Es decir, refiere a una diversidad de escisiones ontológicas y epistemológicas que caracterizan la modernidad capitalista anudadas en la imbricación de múltiples dominaciones. En este sentido, el proceso de escisión-relación-dominación de la sociedad sobre la naturaleza es tanto una particularidad propia del capitalismo colonial patriarcal como de la constitución de las diferentes relaciones de explotación y opresión que lo caracterizan" (2017: 28).

¹⁷ Respecto al incremento de las exportaciones durante ese período puede consultarse Observatorio de Economía de los Recursos Naturales de la Patagonia Sur (2017).

En la segunda mitad de la década de 1990 tomaron estado público dos casos de poblaciones empetroladas: las comunidades mapuche Kaxipayiñ y Paynemil, en Neuquén, y Koluel Kaike, en Santa Cruz. En ambos se denunció la contaminación con hidrocarburos de las aguas subterráneas utilizadas para consumo. Quizá que los casos de las poblaciones empetroladas no sean tan recordados, como el de los pingüinos u otras especies -a pesar de que también tuvieron cobertura mediática-, de alguna manera habilita a que se repitan situaciones similares, como las denunciadas por vecinos de Caleta Córdova tras el derrame de crudo de diciembre de 2007, e incluso también se cuestione la legitimidad de las *personas empetroladas*, cuando demandan que se garanticen sus derechos.

Loma La Lata y los olvidos selectivos

En Loma La Lata, cien kilómetros al norte de Neuquén capital, se explota el yacimiento gasífero más importante del país. Su descubrimiento y puesta en producción, a cargo de YPF estatal en 1978, fue un punto de inflexión para la economía neuquina y marcó la preeminencia de la provincia en el sector. Este yacimiento abarca ocho mil hectáreas del territorio de las comunidades mapuche Paynemil y Kaxipayiñ. En 1995 los Paynemil constataron que el agua de las napas que extraían para consumo tenía una particularidad: era inflamable -luego se confirmó la presencia de hidrocarburos.¹⁸ Al año siguiente el Estado provincial, a través de estudios realizados por la Subsecretaría Provincial de Salud, certificó que los comuneros tenían elevados niveles de metales pesados en sus cuerpos (La Nación, 2002).

En 1997 la entonces Defensora de la Niñez y la Adolescencia de Neuquén, Nara Osés, denunció al Estado provincial por no garantizar un medioambiente sano y la salud de la población. Obtuvo un fallo favorable del Tribunal Superior de Justicia neuquino, pero la inacción del Ejecutivo local hizo que el caso llegara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -instancia que aceptó la denuncia (caso 12.010) e intimó a la provincia y a Repsol-YPF a garantizar la provisión de agua segura (OPSur, 2010 y 2011). Las demandas contra la provincia y la operadora del yacimiento no impidieron que en 2000 se prorrogara por diez años la concesión de Loma La Lata-Sierra Barrosa a Repsol-YPF. Dos años más tarde en la comunidad Kaxipayiñ se registró un caso de anencefalia (La Nación, 2002). La exposición crónica a un ambiente tóxico se había manifestado, también, a través de diferentes tipos de cáncer, pérdida de embarazos, afecciones en la piel, vista, aparato digestivo y sistema nervioso, que fueron constatados en estudios realizados en 2001, uno coordinado por el abogado Carlos Falaschi, con participación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Neuquén y la Universidad Nacional del Comahue, y otro por

¹⁸ En 2001 el abogado Carlos Falaschi y la entonces Defensora de la Niñez y la Adolescencia de Neuquén, Nara Osés, denunciaron que la presencia de los hidrocarburos y metales pesados “se originó por la contaminación de los suelos por derrames y de las napas freáticas por drenaje a partir de los suelos y de las piletas de aguas de purga y explotación, debido a la negligente operatoria o *modus operandi* en el yacimiento, que explota, desde mediados de los años '70” (2001: 21).

los laboratorios privados Umweltschutz Argentina, Umweltschutz Nord GmbH y Caro Biotechnik GmbH.

A pesar de las consecuencias sanitarias de vivir en un yacimiento en explotación, la comunidad Kaxipayiñ y, particularmente, su werken (vocero), Gabriel Cherqui, han sido instalados en el imaginario neuquino como el paradigma del mapuche que realiza denuncias ambientales y demandas territoriales para obtener réditos económicos (La Nación, 2000). Un estigma abonado desde hace casi dos décadas y reafirmado periódicamente tanto por medios de prensa (Clarín, 2017), como por funcionarios nacionales (Parlamentario.com, 2014). Sobre el deterioro de la salud de los comuneros y la degradación de su territorio campea el olvido.

Koluel Kaike, un recuerdo difuso

En 1999, a partir de una causa judicial iniciada en el juzgado federal de Comodoro Rivadavia, tomó estado público la situación ambiental de la localidad de Koluel Kaike, derivada de la explotación del área Piedra Clavada, a cargo de la empresa Pan American Energy (La Nación, 1999). A partir de una serie de pericias ordenadas por la Justicia se determinó que la población de la localidad del norte de Santa Cruz estaba expuesta a compuestos tóxicos acumulados en el suelo y aguas subterráneas. El caso se instaló en la agenda pública y desde el Senado de la Nación, en dos oportunidades, se presentaron pedidos de informes al Poder Ejecutivo Nacional. La causa judicial no prosperó, no por falta de elementos sino porque quedó paralizada por cuestiones burocráticas en 2006. La empresa aseguró que la denuncia de contaminación era parte de un intento de extorsión, sin embargo, instaló una planta de ósmosis inversa para tratar el agua con que se abastece a la localidad (OPI Santa Cruz, 2008).

Luego de esa primera denuncia se sucedieron otras más, la última en 2013, en todas se destaca la lentitud de la operadora para remediar daños y adoptar normas de protección del ambiente (La Opinión Austral, 2013; Tiempo Sur, 2009). La contaminación en Piedra Clavada fue tomada en 2007 como elemento para cuestionar la prórroga anticipada del contrato de concesión a PAE. Casi dos décadas más tarde el recuerdo de la contaminación en Koluel Kaike se vuelve difuso.

Caleta Córdova, queremos ser pingüinos

El 26 de diciembre de 2007 se produjo un derrame de hidrocarburos en Caleta Córdova, veinte kilómetros al norte del centro de Comodoro Rivadavia, durante la maniobra de carga de un buque de la empresa Antares Naviera en la monoboya de Termap S.A. Trescientos metros cúbicos de petróleo tiñeron de negro siete kilómetros de playas, acantilados, pesquerías; flora, fauna y gente. El hecho impactó en la memoria de los pobladores de la caleta de pescadores. En una entrevista realizada en 2011, Rosa Montecino, aseguró que a partir de ese episodio en el vecindario empezaron a contar los derrames. “A partir de ahí empezamos a tener una mirada un poco más profunda. Entonces empezamos a hilar más gente un poco más chico. Ahí fue donde impactó en la memoria, esa gran ola que llegó hasta la costa, pero siempre

hubo derrames.” La llegada del petróleo a la costa, según Montecino, posibilitó que los vecinos y vecinas desnaturalizaran los derrames y que además percibieran otros impactos más allá de la marea negra. “No hay una mirada desde el Estado sobre cómo impacta el petróleo en la salud de la población que está en contacto directo. Sí hubo una mirada hacia los pingüinos, porque no solamente hay una contaminación de la vida de ese animal sino que hay una contaminación visual. Pero en mí o en mis hijos, el petróleo no va a dejar una contaminación visual, seguramente va a dejar una contaminación residual, que puede llegar a provocar un cáncer”.¹⁹

Vecinos de Caleta Córdova denunciaron que tras el derrame comenzaron a registrarse enfermedades crónicas entre los pobladores y las adjudicaban a los diluyentes utilizados en la limpieza del crudo. A mediados de 2011 fue entregada a la Oficina de Protección de Derechos y Garantías de la Niñez, la Adultez y la Familia de Comodoro Rivadavia una lista de niños que sufrían afecciones en la piel y las vías respiratorias. El organismo convocó a autoridades del sistema de salud municipal y provincial, y al Foro Ambiental y Social de la Patagonia a integrar una mesa de trabajo.

“Eran 18 niñitos con cuestiones respiratorias, alergias y cuadros dermatológicos varios”, recordó Liliana Murgas, que entonces trabajaba en la Oficina de Protección de Derechos y Garantías.²⁰ “Cuando vinieron los vecinos empezamos a reunirnos con distintos profesionales para que nos dijeran qué pasaba. Lo que queríamos era que se hiciera un diagnóstico de esos chicos, pero no por el Centro de Salud del barrio, dependiente de la Municipalidad, sino por un dermatólogo infantil. Logramos que se acordara el traslado de esos chicos al Hospital Regional, que fueran vistos por un dermatólogo y un perito de parte. Todo con la firma de la directora del Hospital. ¿Y qué pasó? Nos enteramos que hicieron ese traslado, revisaron a los chicos y no convocaron a la Oficina de Derechos y Garantías ni al perito de parte, y luego dijeron que no había ningún tipo de problema. Lamentablemente no pudimos avanzar de ahí.”

Territorios de incertidumbre

Estos son algunos ejemplos de daños ambientales que tenían o podían tener impacto directo en la salud de la población, donde no eran pingüinos sino *personas empetroladas*. A dos décadas de las primeras denuncias, la invisibilización de estas problemáticas alimenta, en la población de *ciudades y localidades yacimientos*, la convicción de una mayor prevalencia de ciertas patologías respecto de otras regiones del país.

“Lamentablemente hay poco trabajo [epidemiológico en Argentina] en relación a los problemas ambientales y a relacionar el ambiente con enfermedades no transmisibles, como el cáncer u otro tipo de enfermedades hemato-oncológicas, anemias importantes, perniciosas. Hay mucha información sobre los daños sobre la salud provocados por determinados contaminantes ambientales derivados del

¹⁹ Rosa Montecino, Caleta Córdova, 18 de setiembre de 2011. Entrevista del autor.

²⁰ Liliana Murgas, Comodoro Rivadavia, 21 de julio de 2016. Entrevista del autor.

petróleo. Está bastante estudiado a nivel internacional, pero hay un gran déficit de estudios epidemiológicos locales, que uno pueda demostrar daños sobre la salud que provocaron determinadas situaciones ambientales”, se explayó la médica generalista Susana Muñoz, docente y coordinadora de la Tecnicatura Superior en Salud Comunitaria, en una entrevista realizada en 2016.²¹ “Comodoro [Rivadavia] estaría en una situación casi ideal para hacer eso, hay importantes sectores de la población que se podrían estudiar, que han estado en contacto, que siguen estando, porque viven en zonas donde había pozos petroleros o por contactos laborales. Hay muchas condiciones, pero no ha habido desarrollo”, se lamentó.

Emergencia y muerte de la cuestión ambiental en Neuquén

Por lo general los daños y pasivos ambientales de la actividad petrolera han sido invisibilizados por las diferentes instancias gubernamentales (municipal, provincial y nacional), aunque en contextos particulares asumen la existencia de tales impactos. Contextos particulares que tienen en común la fugacidad y que *lo ambiental* es instrumentado como variable de presión en negociaciones con empresas. En algunos casos eso explicitado en medios de prensa, como en mayo de 2006, cuando el Gobierno del Neuquén le quitó a la compañía Pioneer Natural Resources la licencia ambiental sobre tres áreas. En esa oportunidad el diario Río Negro destacó: “La sanción fue resuelta en el contexto de la ofensiva lanzada desde mediados del año pasado por [el gobernador Jorge] Sobisch contra las petroleras, cuando las intimó a liquidar las regalías sin deducir las retenciones a las exportaciones” (Río Negro, 2006). También se dio el caso de autoridades que lo expresaron en declaraciones a la prensa. En octubre de 2012 el entonces intendente de Comodoro Rivadavia, Néstor Di Pierro, se refirió a la creación de un fondo solidario a través del cual las empresas petroleras canalizarían aportes voluntarios al municipio. Consultado si creía que las operadoras acompañarían la iniciativa, el mandatario afirmó: “Tienen un problema: o se comprometen o nosotros las vamos a denunciar en todos los lugares donde podamos denunciarlas. Y vamos a avanzar muy fuertemente en el control del daño ambiental... El Estado tiene herramientas” (MU, 2012:4). Y en el plano nacional esa situación se manifestó en 2012 y 2013, durante el proceso de expropiación del 51% de las acciones de Repsol YPF; los pasivos ambientales funcionaron como variable para negociar el monto de la compensación que se pagaría a la petrolera española (OPSur, 2013).

Neuquén, planes de diversificación productiva

En 1997 Felipe Sapag, en su quinto y último mandato como gobernador, lanzó el Plan Neuquén 2020. La provincia atravesaba un escenario contradictorio, por un lado los hidrocarburos se habían consolidado como el sector dominante del Producto Geográfico Bruto; por el otro, se registraba una baja del precio de barril de crudo, las reservas estaban en caída y se presagiaba *un cercano fin del petróleo*. Como telón de

²¹ Susana Muñoz, Comodoro Rivadavia, 25 de julio de 2016. Entrevista del autor.

fondo, se robustecía una alta conflictividad social producto de la implementación de políticas de ajuste fiscal, tanto a nivel nacional como subnacional. La alternativa que proponía el Plan era diversificar la matriz productiva, apostando al desarrollo agroindustrial. En ese marco el Gobierno neuquino también advirtió, por primera vez, que la degradación del territorio por la explotación de hidrocarburos podía convertirse en un condicionante del desarrollo productivo. La afirmación del mandatario surgía de la conclusión de un informe elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizado por pedido de la provincia. El organismo había convocado para evaluar los daños ambientales en la localidad de Rincón de los Sauces luego de una serie de derrames que habían afectado la cuenca del río Colorado. Los pasivos ambientales y económicos de tres áreas petroleras fueron valuados en 949 millones pesos/dólares, que la Provincia reclamó sin suerte a las petroleras YPF, Pérez Companc y San Jorge (PNUD, 1998: 54).

Una década más tarde, el primer avance del informe *El riesgo de desastres en la planificación del territorio*, también elaborado por el PNUD, advertía: “Los procesos de degradación que afectan la base productiva (sobre todo el recurso suelo) son de importancia central, si se tiene en cuenta que el modelo deseado territorial planteado por Neuquén propone un cambio en la matriz productiva, pasando de una economía basada en la actividad hidrocarburífera a otra más diversificada e integrada verticalmente, con predominio de la actividad agroindustrial. Este cambio también supone, hacia el futuro, una acción sobre los problemas de contaminación ligados a la explotación de hidrocarburos” (PNUD, 2010: 313). Diagnósticos similares fueron realizados en 2006 por el Concejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (Copade) de la provincia, en el marco del *Plan Estratégico Territorial, Argentina 2016*.

Sin embargo, los planes de diversificación productiva y la preocupación por los procesos de degradación de los suelos perdieron lugar en las prioridades de la agenda gubernamental a medida que el potencial de yacimientos no convencionales de gas y petróleo adjudicado a Neuquén auspiciaba años de bonanza. “Ese parece ser el destino de Neuquén [proveer de energía al país], marcado por una historia petrolera de un siglo y por oportunidades de sus cuantiosos recursos hidrocarburíferos, hidráulicos, eólicos, solares y de biomasa. Pueden plantearse otros derroteros, pero no han aparecido propuestas viables y sustentables, capaces de dar trabajo a quienes habitan y habitarán la provincia a la par de suministrar al país la energía que necesita para su desarrollo”, escribió el ingeniero y diputado provincial Luis Sapag, en pleno auge de la explotación de yacimientos no convencionales en la cuenca Neuquina (2013: 137-138). Quizá esa afirmación sea la mejor síntesis del espíritu de euforia que embargaba (y embriagaba) a la clase dirigente local en la primera mitad de esta década.

Vaca Muerta

Al ponerse en marcha el proceso de puesta en valor de Vaca Muerta se desestimaron las advertencias realizadas por el PNUD en 1996 y 2010 en torno a los procesos de degradación de suelos y de agua. En el Plan de Desarrollo Estratégico de la Región Vaca Muerta, elaborado por el Ministerio de Planificación Federal y los

gobiernos de Neuquén, Río Negro, Mendoza y La Pampa, no hay referencia al impacto ambiental de la actividad hidrocarburífera. Tampoco se plantea como problemática la ampliación de la frontera petrolera sobre tierras dedicadas a la producción frutícola -como ocurre en el Alto Valle del río Negro-; sólo se advierte la aceleración de los procesos de urbanización de esas tierras como resultante de la explosión demográfica dinamizada por la explotación de yacimientos no convencionales.

En tiempos de Vaca Muerta, plantear en Neuquén objeciones a la ampliación de la frontera petrolera, en sintonía con las advertencias hechas por el PNUD o el mismo COPADE, era adjudicado por el gobernador Jorge Sapag y la vicegobernadora Ana Pechén a campañas de terrorismo ambiental (Multisectorial contra la Hidrofractura de Neuquén, 2013). No había lugar a criticar al fracking.

A modo de cierre

Han pasado casi dos décadas desde la aparición masiva de los *pingüinos empetrolados* y de las primeras denuncias de *personas empetroladas*, y sin embargo siguen sin ser asumidos cabalmente los riesgos sanitarios a los que están expuestos tanto las poblaciones urbanas, campesinas e indígenas que conviven directamente con la actividad, como también los trabajadores y trabajadoras del petróleo (quizá el sector más invisibilizado) y la Naturaleza no humana. En los diferentes momentos en que desde estamentos públicos se habilitó la discusión, el interés de fondo no siempre fue abordar la problemática. También es cierto que recién en los últimos años comenzó a adquirir cierta centralidad la problematización de la producción de hidrocarburos desde una perspectiva socio-ambiental y, para buena parte de las organizaciones sociales, políticas y sindicales la disputa central es por el control del *recurso* y la apropiación social de la renta, en un sector que permanece fuertemente trasnacionalizado a pesar de la estatización parcial de YPF.

Como advertimos, a través de estas misceláneas buscamos problematizar la relación producción de hidrocarburos / ambiente, de ninguna manera agotamos las aristas posibles, y sabemos que cada una de ellas merece un desarrollo más profundo. Pero más allá de los límites de esta selección, intentamos presentar un panorama con elementos que no siempre aparecen relacionados, que *no se los pone en diálogo*, por ejemplo, el *empetrolamiento* de aves y pueblos como secuelas, también, del proceso de privatización y trasnacionalización del sector hidrocarburífero en la década de 1990. Una lectura confluyente que no resuelve la *problemática relación* pero permite, al menos, acercar posiciones entre quienes piensan la producción de los hidrocarburos más allá del mercado.

Bibliografía

- Bertinat, P.; D'Elía, E.; et al. (2014), *20 Mitos y Realidades del fracking*, Buenos Aires, Editorial El Colectivo.
- Chiappe, L. (Coord.), (2004), *La Patagonia de Pie. Ecología ver sus Negociados*, Bariloche, Ediciones de Imaginaria.

- Clarín (1998) Sigue la polémica por la construcción del gasoducto, en *Clarín*, 13-08. [En línea] https://www.clarin.com/sociedad/sigue-polemica-construccion-gasoducto_0_SJRn5eyIhe.html. Consulta: 19 de junio de 2018.
- Clarín (2017) "PPT 2017: todo lo que pasó anoche en el programa de Jorge Lanata", en *Clarín*, 28-08. [En línea] https://www.clarin.com/politica/ppt-2017-paso-anoche-programa-jorge-lanata_0_rkfa5aWKW.html. Consulta: 2 de marzo de 2018.
- COPADE (2006) *Plan Estratégico Territorial, Argentina 2016*, Neuquén, Dirección General de Programas y Proyectos. Secretaría de Estado General de la Gobernación del Neuquén.
- CTA Neuquén (2008). "Propuesta sobre hidrocarburos Provincia Neuquén", en *CTA Neuquén*, 13-06 [En línea] <http://www.ctaneuquen.org.ar/spip.php?article53>. Consulta: 2 de marzo de 2018.
- Cortassa, C.G.; Wursten, A.G.; et al. (2013). "El conflicto argentino-uruguayo por las Papeleras: diez años de una controversia socio-tecno-ambiental Latinoamericana", *Caderno eletrônico de Ciências Sociais*, Vitória, n. 1, p. 85-105. [En línea] http://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/10866/CONICET_Digital_Nro.14344.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Consulta: 5 de marzo de 2018.
- di Risio, D. y Scandizzo, H. (2012) "Norte salteño: La tierra de los invisibles", en: di Risio, D.; Gavalda, M. et al. (2012), *Zonas de Sacrificio. Impactos de la industria hidrocarburífera en Salta y Norpatagonia*, Buenos Aires. América Libre/Observatorio Petrolero Sur, pp 35-151.
- Raúl Dellatorre (2000). Negocio por 300 millones de dólares, en *Página/12*, 27-10. [En línea] <https://www.pagina12.com.ar/2000/00-10/00-10-27/pag11.htm>. Consulta: 2 de marzo de 2018.
- Falaschi, C. -Coord. Gral.- (2001) "Evaluación del Impacto Socio-Ambiental de la actividad Hidrocarburífera en las Comunidades Mapuches y sus Territorios. Loma de La Lata, Neuquén", Inédito, Argentina
- Falaschi, C. y Oses, N. (2001) "C.I.D.H.: La causa N° 12.010 Comunidades Mapuche Paynemil y Kaxipayiñ - Neuquén, Argentina", citado en: Burucua, A. y Rodríguez López, D. (2015), *Pasivos ambientales e hidrocarburos en Argentina: análisis de casos y marcos jurídicos para un debate urgente*. 1a ed., Buenos Aires, Ediciones del Jinete Insomne/Ecosur/Observatorio Petrolero Sur.
- Gavalda, M. (2003), *La recolonización. Repsol en América Latina: invasión y resistencias*, Barcelona, Icaria editorial, colección Antrazyt 191.
- Greenpeace Argentina (2002) "Explosión del gasoducto provoca un incendio en la selva del yaguareté", en *Greenpeace Argentina*, 28-01. [En línea] <http://www.greenpeace.org/argentina/es/noticias/explosi-n-del-gasoducto-provoc/>. Consulta: 19 de junio de 2018.
- Laferriere, L. (2017). "Entre Ríos libre de fracking: ganamos una batalla", en *Observatorio Petrolero Sur*, 26-04. [En línea] <http://www.opsur.org.ar/blog/2017/04/26/entre-rios-libre-de-fracking-ganamos-una-batalla-2/>. Consulta: 2 de marzo de 2018.

- La Mañana Neuquén (2009) "Las petroleras declararon más de 500 incidentes ambientales a remediar", en *La Mañana Neuquén*, 23-11. [En línea] <https://www.lmneuquen.com/las-petroleras-declararon-mas-500-incidentes-ambientales-remediar-n47308>. Consulta: 18 de junio de 2018.
- La Nación (1998a) "Controversia en Jujuy por el gasoducto NorAndino", 22-06. [En línea] <https://www.lanacion.com.ar/100820-controversia-en-jujuy-por-el-gasoducto-norandino>. Consulta: 19 de junio de 2018.
- La Nación (1998b) "Otro capítulo para NorAndino", en *La Nación*, 29-07. [En línea] <https://www.lanacion.com.ar/105014-otro-capitulo-para-norandino>. Consulta: 19 de junio de 2018.
- La Nación (1999) "Cuestionan a firmas petroleras por contaminar aguas en el Sur", en *La Nación*, 07-07. [En línea] <http://www.lanacion.com.ar/144885-cuestionan-a-firmas-petroleras-por-contaminar-aguas-en-el-sur>. Consulta: 2 de marzo de 2018.
- La Nación (2000) "Mapuches que usan celular y 4x4 en Loma de la Lata", en *La Nación*, 13-11. [En línea] <http://www.lanacion.com.ar/40779-mapuches-que-usan-celular-y-4x4-en-loma-de-la-lata>. Consulta: 2 de marzo de 2018.
- La Nación (2002) "Autorizan a interrumpir un embarazo en Neuquén", en *La Nación*, 20-06. [En línea] <http://www.lanacion.com.ar/406743-autorizan-a-interrumpir-un-embarazo-en-neuquen>. Consulta: 2 de marzo de 2018.
- La Opinión Austral (2013) "Clausuraron repositorio en yacimiento Piedra Clavada", en *La Opinión Austral*, 02-11. [En línea] <http://laopinionaustral.com.ar/diario.asp?Modo=Noticia&NI=26222&texto=&A=2013&M=11&D=2>. Consulta: 2 de marzo de 2018.
- Moreno (2006). "La provincialización de los hidrocarburos: entrega, despojo y sumisión. Ley Corta o Ley de Emiratos", en *Central de Trabajadores de la Argentina*, 30-11. [En línea] <http://archivo.cta.org.ar/LA-PROVINCIALIZACION-DE-LOS.html>. Consulta: 2 de marzo de 2018.
- Moreno (2009) "MORENO: Movimiento por la recuperación de la Energía Nacional Orientadora", en *InfoMORENO*, abril. [En línea] <https://www.blogger.com/profile/15780379796573683862>. Consulta: 2 de marzo de 2018.
- MU (2012) "La mala vida. Comodoro Rivadavia: Petróleo & Prostitución", en *MU*, octubre, Buenos Aires, pp 2-6.
- Multisectorial contra la Hidrofractura de Neuquén (2013) "El extractivismo pide represión", *Observatorio Petrolero Sur*, 19-12. [En línea] <http://www.opsur.org.ar/blog/2013/12/19/el-extractivismo-pide-represion/>. Consulta: 2 de marzo 2018.
- Nuevo Proyecto Energético Latinoamericano -NPEL- (2007) *Saqueo Petrolero*. Buenos Aires, NPEL-Ediciones del IPS.
- Observatorio de Economía de los Recursos Naturales de la Patagonia Sur (2017) "Hidrocarburos en Argentina", 30-03. [En línea] <https://screencast-o-matic.com/watch/cbevol6sDy>. Consulta 10/10/2017.
- OPI Santa Cruz (2008) "Pan American Energy habló sobre el acuerdo petrolero", en *OPI Santa Cruz*, 17-03. [En línea]

- <http://opisantacruz.com.ar/home/2008/03/17/pan-american-energy-hablo-sobre-el-acuerdo-petrolero/556>. Consulta: 2 de marzo de 2018.
- Observatorio Petrolero Sur -OPSur- (s/d) "Quiénes somos", en *Observatorio Petrolero Sur*. [En línea] <http://www.opsur.org.ar/blog/quienes-somos/>. Consultado: 19 de junio de 2018.
- Observatorio Petrolero Sur -OPSur- (2010) "Era un apriete permanente, llevar adelante ese juicio contra Repsol nos costó mucho", en *Observatorio Petrolero Sur*, 27-01. [En línea] <http://www.opsur.org.ar/blog/2010/01/27/era-un-apriete-permanente-llevar-adelante-ese-juicio-contra-repsol-nos-costo-mucho/>. Consulta: 2 de marzo de 2018.
- Observatorio Petrolero Sur -OPSur- (2011) "Gabriel Cherqui: 'Estamos cansados de ver cómo vienen matando nuestro Wallmapu'", en *Observatorio Petrolero Sur*, 02-11. [En línea] <http://www.opsur.org.ar/blog/2011/11/02/estamos-cansados-de-ver-como-vienen-matando-nuestro-wallmapu/>. Consulta: 2 de marzo de 2018.
- Observatorio Petrolero Sur -OPSur- (2013) "El acuerdo con Repsol y la impunidad ambiental", *Observatorio Petrolero Sur*, 04-12. [En línea]. <http://www.opsur.org.ar/blog/2013/12/04/el-acuerdo-con-repsol-y-la-impunidad-ambiental/>. Consulta: 2 de marzo de 2018.
- Parlamentario.com (2014) "Pichetto descalificó a la comunidad mapuche, que impugnó el acuerdo con Repsol", en *Parlamentario.com*, 18-03. [En línea] <http://www.parlamentario.com/noticia-70345.html>. Consulta: 2 de marzo de 2018.
- Pérez Roig, D. (2011) "Argentina no convencional. Apuntes para un análisis crítico", en *Observatorio Petrolero Sur*, 17-11. [En línea] <http://www.opsur.org.ar/blog/2011/11/17/hidrocarburos-no-convencionales-en-argentina/>. Consulta: 2 de marzo de 2018.
- Pérez Roig, D. (2012) "La expansión de la frontera hidrocarburífera en Argentina", en: di Risio, D.; Gavalda, M. et al (2012), *Zonas de Sacrificio. Impactos de la industria hidrocarburífera en Salta y Norpatagonia*, Buenos Aires. América Libre / Observatorio Petrolero Sur, pp 17 - 33.
- Pérez Roig, D. (2016) "Los dilemas de la política hidrocarburífera en la Argentina posconvertibilidad", en: Pérez Roig, D.; Scandizzo, H.; et al (2016) *Vaca Muerta. Construcción de una estrategia*, Buenos Aires, Ediciones del Jinete Insomne / Observatorio Petrolero Sur.
- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- (1998) *Emergencia Ambiental, Hidrocarburos -Compensación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Neuquén*. Proyecto ARG/97/024, Resumen Ejecutivo, Buenos Aires.
- Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- (2010) *El riesgo de desastres en la planificación del territorio: primer avance. Programa Nacional de prevención y reducción del riesgo de desastres y desarrollo territorial*. 1ra Edición. Buenos Aires, PNUD / Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública -Minplan.

- Red DESC (s/d) *Comunidades Mapuche Paynemil y Kaxipayiñ, Caso N° 12.010*, en *Red DESC*. [En línea] <https://www.escri-net.org/es/caselaw/2006/comunidades-mapuche-paynemil-y-kaxipayin-caso-no-12010>. Consulta: 19 de junio de 2018.
- Río Negro (2006) “Le quitaron la licencia ambiental a otra petrolera”, en *Río Negro*, 4-5. [En línea] <http://www1.rionegro.com.ar/arch200605/04/e04f01.php>. Consulta: 18 de junio de 2018.
- Salgado, J.M.; Gomiz, M.M. et al. (2010), *Informe de situación de los Derechos Humanos del Pueblo Mapuche en la Provincia del Neuquén 2009-2010*. Neuquén, Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas.
- Sapag, L.F. (2013), *Volver al Neuquén que viene*. Neuquén, Educo – Editorial de la Universidad Nacional del Comahue.
- Scandizzo, H. (2014) YPF, nuevos desiertos y resistencias, en: Gandarillas González, M (Edit. Gral.), (2014) *Extractivismo: Nuevos Contextos de Dominación y Resistencias*. Cochabamba, Centro de Documentación e Información Bolivia - CEDIB.
- Seoane, J. (2017) *Las (re)configuraciones neoliberales de la cuestión ambiental: una arqueología de los documentos de Naciones Unidas sobre el ambiente 1972-2012*. 1a ed. Buenos Aires. Luxemburg; Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe; y Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe. [En línea] http://www.opsur.org.ar/blog/wp-content/uploads/2017/09/Las_reconfiguraciones_neoliberales_Jose_Seoane-libro-final.pdf. Consulta: 2 de marzo de 2018.
- Svampa, M. y Antonelli, M.A. (Edits.), (2009). *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*, Buenos Aires, Editorial Biblos.
- Tiempo Sur (2009) “Detectaron contaminación en más de 150 acuíferos”, *Tiempo Sur*, 03-09. [En línea] <http://www.tiemposur.com.ar/nota/5989-detectaron-contaminaci%C3%B3n-en-m%C3%A1s-de-150-acu%C3%ADferos-.html>. Consulta: 2 de marzo de 2018.
- Umweltschutz Argentina, Umweltschutz Nord GmbH, et al. (2001) *Evaluación del daño Cultural/Ambiental por la Actividad Petrolera en la Región Loma de la Lata/Neuquén. Territorio Paynemil y Kaxipayiñ*. Neuquén.



La minería a gran escala en la Patagonia Sur: El caso de Cerro Vanguardia y la localidad de Puerto San Julián, Santa Cruz

Alexandra Bechtum¹

Resumen

Argentina ha experimentado un auge de las actividades mineras, sobre todo de la megaminería metalífera, en el escenario de una acelerada expansión de actividades extractivas en América Latina. La instalación de emprendimientos mineros a gran escala y a cielo abierto desencadena profundas reconfiguraciones de los espacios de extracción. El presente artículo toma como ejemplo la expansión minera en la provincia argentina de Santa Cruz que ha llegado a ocupar un lugar central en la cartografía minera argentina en los últimos veinte años. A partir del caso del mega-emprendimiento a cielo abierto Cerro Vanguardia y la localidad más cercana, Puerto San Julián, discutimos cómo la expansión mega-minera cambia de manera fundamental la relación entre actores privados y públicos, cómo contribuye a legitimar las actividades mineras de la operadora minera transnacional y minimizar las consecuencias socio-ambientales. Primero se indaga en las particularidades de la expansión de la minería santacruceña, y segundo, se analiza el rol de la Agencia de Desarrollo de Puerto San Julián como institución creada por la operadora transnacional que materializa la relación entre los actores políticos, privados y sociales de la localidad.

Palabras claves

megaminería - Santa Cruz - Responsabilidad Social Empresaria - conflictos socio-ambientales - extractivismo

Large-scale mining in Southern Patagonia: The case of Cerro Vanguardia and Puerto San Julián, Santa Cruz

Abstract

In the context of the expansion and intensification of extractivist activities all across Latin America, Argentina has experienced a major boom in metal mining activities. The installation of large-scale and open-pit mining projects, also referred to as *megaminería*, has led to social and political transformation processes in mining regions. This paper focuses on the mining expansion in Santa Cruz (Argentina) as the province has turned into a major destination for foreign investment in metal mining. Taking the case of the large-scale open-pit project Cerro Vanguardia and the small town of Puerto San Julián, we will discuss how the expansion of large-scale mining has fundamentally altered the relations between private and public actors. We will analyse how corporate strategies deployed by a transnational mining company have contributed to legitimising mining activities and at the same time to

¹ Investigadora en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Kassel (Alemania), abechtum@uni-kassel.de. El presente artículo consiste en la elaboración de una ponencia que formó parte del Taller Internacional "Recursos naturales y desarrollo local: sostenibilidad, cohesión social y resiliencia" que tuvo lugar entre el 3 y el 5 de octubre de 2017 en Comodoro Rivadavia.

minimizing its socio-environmental consequences. First, we will analyze the particularities of the mining expansion in Santa Cruz, taking into account the institutional arrangements that were put into place to promote mining activities. Second, we will discuss the role of the Development Agency of Puerto San Julián, founded by the transnational mining corporation, as it has become a central figure in understanding the changing relations between political and private actors as well as representatives from different social organizations.

Keywords

large-scale mining - Santa Cruz - Corporate Social Responsibility - socio-environmental conflicts - extractivism

Introducción

La Patagonia evoca imágenes romantizadas de una región para descubrir con su vasta estepa, su belleza paisajística, y su flora y fauna salvaje que invita a aventureros y amantes de lugares naturales. Esta imagen romantizada del paisaje patagónico, su historia y su mística deja de lado la historia socio-económica de la región austral del subcontinente que también representa una historia de extracción de recursos naturales. La producción, extracción y exportación de *commodities* a gran escala llevada a cabo por capitales extranjeros atraviesa la larga historia de la región ligada sobre todo a la ganadería, hidrocarburos, y últimamente se agrega la minería metalífera.

En las últimas décadas en la Patagonia Sur² se profundizó el modelo extractivo y con ello se alteró el rol de la provincia transformándose en proveedora de materias primas con la expansión de la minería metalífera. En esta dinámica que se observa en muchos países del sur global, la minería a cielo abierto destaca por ser una “figura extrema” (Svampa y Viale, 2014: 176) de la expansión extractiva. La provincia de Santa Cruz, en la Patagonia Sur argentina, se convirtió en una provincia paradigmática dentro del debate sobre la expansión minera en Argentina y las consecuencias que traen estos procesos para los territorios donde estas actividades se llevan a cabo.

La expansión de la minería metalífera a gran escala representa el avance del capital transnacional en zonas que antes se declaraban como poco rentables. En los espacios locales se desencadenan profundos impactos territoriales, sociales, económicos y culturales (Ulloa 2014). Incluso después de la caída de los precios de los *commodities* el modelo minero como tal sigue en expansión (Burchardt et al., 2016) y está acompañado por un entramado de actores políticos de diversas escalas. Asimismo, se genera otro tipo de relaciones entre los espacios locales, provinciales, nacionales e internacionales (Bebbington et al., 2008). Las reconfiguraciones territoriales no sólo modifican el espacio local y los actores que lo construyen, sino también producen un despliegue institucional que muchas veces conduce a la reformulación de políticas mineras. En muchos lugares estas dinámicas impulsan conflictos sociales y resistencia en torno a proyectos mineros. Sobre estos conflictos socio-ambientales se han generado muchos estudios empíricos que analizan las

² La región geográfica de la Patagonia Sur es una región binacional compartida entre Chile y Argentina. En Argentina incluye las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego así como la Antártida e Islas del Atlántico sur (Schweitzer 2016).

dinámicas de las resistencias en contra de la minería con diferentes enfoques teóricos y metodológicos (Bebbington y Bury, 2013; Dietz y Engels, 2017; Haslam y Ary Tanimoune, 2016; Svampa y Antonelli, 2009).

La provincia de Santa Cruz llegó a ocupar un lugar central en la cartografía minera argentina, sin embargo no fue considerada como un caso emblemático de conflictos en torno a proyectos mineros. Además, la expansión minera santacruceña ha recibido poca atención académica, comparándola con las dinámicas mineras en las provincias de San Juan y Catamarca en el Noroeste argentino. Por último, parece más bien que la gran mayoría de la población se acostumbra a la presencia de la minería (Torunczyk 2016).

El presente artículo indaga en las particularidades de la expansión de la minería metalífera en Santa Cruz. A partir del caso del primer mega-emprendimiento a cielo abierto de la provincia, la mina de oro y plata “Cerro Vanguardia”, se cuestiona cómo la inserción de la megaminería reconfigura los espacios locales. Este artículo se enfoca en la localidad más cercana a Cerro Vanguardia, la pequeña ciudad Puerto San Julián de aproximadamente 16.000 habitantes en el centro-este de la provincia; una localidad que es considerada como área de influencia por la operadora transnacional del yacimiento Cerro Vanguardia AngloGold Ashanti. Se postula que la expansión mega-minera cambia de manera fundamental la relación entre actores privados y públicos en los espacios locales a través de la creación de una fundación Agencia de Desarrollo. En este panorama, se plantea que la inserción del capital privado desempeña un papel clave, lo que contribuye a legitimar las actividades mineras de la operadora minera transnacional y al mismo tiempo permite suavizar las críticas sociales y ambientales que produce la misma actividad.

Bajo este objetivo, se enfoca primero en el nivel provincial para analizar de qué manera el Estado provincial como dueño de los recursos naturales, promueve la expansión minera. Esto luego permite entender cuáles son las prácticas que la empresa transnacional lleva a cabo en Puerto San Julián bajo las políticas de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y cómo se manifiesta la interconexión entre actores públicos y privados. Como caso particular se discute la Agencia de Desarrollo de Puerto San Julián, una fundación que materializa la relación entre diferentes actores políticos, privados y sociales para entender qué papel desempeña el capital privado en espacios locales.

La expansión minera en Argentina

Tal como otros países latinoamericanos, Argentina ha experimentado un *boom* de actividades extractivas desde la década de los '90 en adelante, entre los cuales destaca la expansión de la minería metalífera a gran escala y a cielo abierto, también llamado *megaminería*. Dicho método consiste en la voladura de montañas enteras para luego separar los metales de la roca con el uso de químicos, grandes cantidades de agua y energía. Son casi exclusivamente empresas transnacionales que consiguen las concesiones mineras para la explotación de los megaproyectos. Una serie de elementos explica la nueva oleada minera, tales como, los altos precios de metales y la gran demanda de minerales metalíferos a nivel mundial; nuevas tecnologías

mineras para la extracción de los minerales que se encuentran dispersos en la roca; y la promulgación de una serie de leyes nacionales que transforman los marcos regulatorios del sector minero (Giarracca y Teubal, 2013; Svampa y Viale, 2014: 171-183). En Argentina tal transformación del marco regulatorio fue impulsada por los gobernadores de las provincias – sobre todo de San Juan, La Rioja y Santa Cruz – con el fin de privilegiar el rol del sector privado transnacional a través del otorgamiento de beneficios y exenciones (p. ej. la estabilidad fiscal, la exención de retenciones por exportación etc.) para la atracción de inversiones extranjeras directas y una dinamización de la economía. Con la reforma de la Constitución Nacional de 1994 se realizó una provincialización de los recursos naturales. Las provincias argentinas pasaron a ser las dueñas de los recursos naturales y el subsuelo, mientras que el Estado nacional permanece como recaudador fiscal (Álvarez Huwiler et al., 2015).³

De la actividad hidrocarburífera a la minería metalífera: Santa Cruz en la cartografía minera argentina

La historia socio-económica de la Patagonia Sur está marcada por la producción, extracción y exportación de gran cantidades de *commodities*.⁴ Al final del siglo XIX destaca la producción extensiva de ovino, y con el descubrimiento del petróleo en 1907 en la provincia de Chubut, la extracción de hidrocarburos se convirtió en la mayor actividad económica junto con el carbón a partir de mediados del siglo XX. La orientación histórica exportadora en forma de economías de enclaves siguió profundizándose en las últimas décadas con las actividades turísticas, pesqueras, y sobre todo mineras (Galafassi y Composto, 2013; Schweitzer, 2016). Sucesivas corrientes migratorias que poblaban y ocupaban la Patagonia Sur siempre han acompañado la expansión de actividades económicas orientadas a la exportación. Desde la llegada de los primeros colonos hasta la migración reciente, y relacionada con la expansión minera así como la implantación de hidrocarburos no convencionales, se justifica la expansión extractiva en la Patagonia Sur con la baja densidad de población. En ese sentido, se evoca “la vieja idea del desierto a poblar y [...] el discurso del desarrollo como un camino lineal” (Schweitzer, 2013: 52; Potthast y Carreras, 2010: 95-102).

Antes de los años '90 la provincia de Santa Cruz no contaba con minería metalífera.⁵ Desde entonces, la minería metalífera santacruceña, enlazada con la explotación de oro y plata, se ha convertido en el sector que más se expande, cuando a la vez la industria del petróleo, gas y carbón se encuentran en declive (Schweitzer, 2013; Galafassi, 2008). En ese panorama, Santa Cruz se encuentra dentro de las provincias donde más empresas mineras han decidido invertir. Estas grandes

³ La cartografía argentina no sólo tiene provincias que alientan abiertamente a la minería de gran escala, sino también existen otras regiones que, durante los años 2000, prohibieron o resintrngieron la actividad (Svampa 2014: 181-182).

⁴ El concepto de *commodities* se refiere a “productos indiferenciados cuyos precios se fijan internacionalmente” (Wainer 2011) y se concentra en productos agropecuarios (p. ej. la soja), hidrocarburos y minerales mineras.

⁵ La minería santacruceña se caracterizaba por la extracción de carbón en el sudoeste, arcillas y caolines para el mercado doméstico (Galafassi/Composto 2013).

empresas transnacionales que operan los yacimientos metalíferos dominan así sectores claves de la economía nacional y provincial. Santa Cruz se ha convertido en una de las principales productoras de oro del país junto con las provincias de San Juan y Catamarca en el Noreste argentino (Secretaría de Minería, 2017). Sin embargo, el así llamado *boom* minero no hubiera sido posible en su alcance sin la promoción por parte del Estado nacional y luego, el Estado provincial de Santa Cruz.

En Argentina, los yacimientos de minerales metalíferos más grandes, sobre todo de oro y plata, se sitúan en la cordillera de los Andes y en la meseta patagónica. En la zona centro-norte de la provincia de Santa Cruz se ubica la meseta central santacruceña, un área ecológica que incluye zonas de planicies, serranías y de mesetas elevadas (Andrade y Herrera, 2015) y que abarca las regiones más áridas de la provincia. En esta zona se instaló Cerro Vanguardia en el año 1998. Constituyó la puesta en marcha no sólo del primer emprendimiento metalífero de Santa Cruz, sino que era uno de los primeros proyectos mineros a gran escala de toda la Argentina, junto con Bajo la Alumbra en Catamarca.⁶ En comparación con los grandes emprendimientos metalíferos en el Noroeste argentino, Cerro Vanguardia consiste en varios pozos de explotación y combina métodos subterráneos y la minería a cielo abierto. Hoy por hoy, Cerro Vanguardia se ha convertido en el tercer emprendimiento a cielo abierto más grande de toda Argentina y contribuye de manera clave a las rentas mineras de la provincia y a su perfil como provincia minera (Secretaría de Minería, 2017). En la meseta central santacruceña también se ubican los cinco mega-emprendimientos de Santa Cruz que se encuentran en la etapa de explotación, operadas por varias empresas mineras transnacionales en diferentes alianzas con el Estado provincial. Muchos más proyectos están en la (última) fase de exploración y empezarán a explotarse en los próximos años (Ministerio de la Producción, 2016).⁷ El auge minero en Santa Cruz se refleja en un cambio significativo de la estructura de exportación de la provincia. Tras un incremento continuo desde el comienzo del siglo veinte, en el año 2014 la actividad minera representa casi un 54% de las exportaciones santacruceñas. En este escenario, destaca el oro que representa un 34% de la exportación total provincial. A nivel nacional Santa Cruz participa con un 27,3% en la producción total nacional del oro en el año 2014 (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 2015). Dicho de otro modo, Santa

⁶ En los años '70 la Secretaría de Minería de la Nación lanzó un programa para impulsar trabajos de prospección en la Patagonia, denominado "Plan Patagonia Comahue" (Ley N° 20.379). A raíz de ello, se descubrió un yacimiento de oro y plata a 110 km de la localidad de Puerto San Julián en el lugar donde hoy se encuentra el emprendimiento minero Cerro Vanguardia (entrevista II).

⁷ Entre los proyectos en fase de explotación a cargo de diferentes empresas (trans-)nacionales se encuentran: La Paloma – Lomada de Leiva (oro y plata; Patagonia Gold S.A.), Cerro Negro (plata y oro, Oroplata S.A. (Goldcorp.inc)), San José (plata y oro; Minera Santa Cruz S.A. (Hochschild Mining)), Manantiel Espejo (plata y oro; Minera Triton Argentina S.A. (Pan American Silver)), Cerro Vanguardia (oro y plata; Cerro Vanguardia S.A. (Anglo Gold Ashanti – Formicruz), Don Nicolás (oro y plata; Minera Don Nicolás S.A. (Hunt Mining)). Muchos proyectos más se encuentran en la fase de exploración avanzada y empezarán a producir en los próximos años, tal como el proyecto Cerro Moro (oro y plata; Estelar Resources Ltda. (Yamana Gold)) que tiene previsto la marcha en explotación a partir de 2018 (Ministerio de Producción 2016).

Cruz se ha convertido en una provincia que depende económicamente de la actividad minera.

Las particularidades de la expansión minera en Santa Cruz

La expansión minera no sólo generó un profundo impacto en los ingresos de la provincia, sino que produjo un despliegue institucional a nivel provincial que complementa la legislación nacional. Las alteraciones institucionales se manifiestan de diferentes maneras en las provincias, y permiten entender y caracterizar las particularidades de la última ola minera santacruceña en comparación con las otras provincias mineras en Argentina. En el Noroeste del país, sobre todo en San Juan, se trata a la minería como Política de Estado y se puso énfasis en el desarrollo de políticas públicas (Ministerio de Minería, San Juan 2015). En Santa Cruz aún no tiene la relevancia como Política de Estado, pero de todas maneras, se observa una presencia provincial creciente tanto en la sanción de mecanismos para mayor participación en las rentas mineras, así como en el ordenamiento territorial para impulsar la atracción de inversiones al sector minero santacruceño. Ubicamos dos hitos centrales que visibilizan cómo la expansión minera está acompañada y fomentada por alteraciones institucionales y que le permiten al Estado provincial ejercer un rol más activo en el sector.

En primer lugar, el Código de Minería Nacional le impide al Estado poseer o participar directamente en la explotación de minas. No obstante, en el año 1988, bajo el gobernador de entonces, Néstor Kirchner, se creó una empresa provincial, Fomicruz S.E., que es propiedad de la provincia y desde entonces gestiona diferentes proyectos mineros y petroleros.⁸ En el sector minero opera en sociedad con empresas mineras transnacionales, tal como en el caso del yacimiento Cerro Vanguardia junto con AngloGold Ashanti. A través de Fomicruz S.E., la provincia de Santa Cruz participa indirectamente en la explotación de sus recursos mineros metalíferos, pero se ocupa exclusivamente de la parte técnica en la fase de exploración. Sin embargo, en la siguiente fase de la explotación minera, sigue obteniendo su participación accionaria. De ese modo, la creación de Fomicruz S.E. le permite a la provincia maximizar la captación de rentas mineras que así exceden el 3% que prevé el marco legal del Código de Minería Nacional. Tiempo antes de que se planteara la cuestión del *boom* minero, la creación de Fomicruz S.E. materializa la voluntad política de transformar Santa Cruz en una provincia minera;⁹ o en términos más generales de asegurar la participación estatal en un modelo de desarrollo provincial que está basado en la explotación de recursos hidrocarburos, y luego metalíferos.

El segundo hito que hace falta mencionar es la sanción de la ley de “Área de Interés Especial Minero” (Ley N°3105) en el año 2009 que reconfigura el territorio de la provincia bajo la lógica minera. La zonificación delimita la provincia en dos partes: Dentro de la zona, considerada como un área de mayor mineralización, que comprende aproximadamente un 70% del territorio provincial, se podrá autorizar

⁸ <http://www.fomicruz.com.ar/>, consultado el 30 de enero, 2018.

⁹ Sobre la hegemonía política del Partido Justicialista en Santa Cruz en este contexto, véase Torunczyk (2015).

nuevas solicitudes de derechos mineros de minerales. El territorio del interés especial minero se extiende por su mayor parte por la meseta central santacruceña; y es un polígono cuyo límite oeste es la Ruta Nacional N°40, el límite sur corre por el Río Santa Cruz, continúa hacia la costa del Atlántico en el este; y recorre el límite entre la provincia de Santa Cruz y Chubut. Dentro de dicha área quedan excluidos lugares que se encuentran “a menos de diez kilómetros de los límites de los ejidos urbanos”, que se encuentran “a menos de cuatro mil metros de la línea de costa de lagos”, “en sitios declarados patrimonio cultural” o “superficies que se hallan bajo la línea del nivel del mar” (Ley N°3105). Cuando funcionarios de la provincia aprecian la ley como “un mecanismo más eficiente que el que existía hasta ahora, ampliando los límites de la explotación, sin dar un paso atrás en materia ambiental” (cit. en Tiempo Sur 2009), críticos dicen que se reconoce más bien la contaminación que trae la minería. Denuncian que la delimitación territorial asegura el acceso a recursos hídricos que se encuentran en la alta cordillera de los Andes, dado que la explotación de metales a cielo abierto consume grandes cantidades de agua y energía (Patagonia ambiental, s/f; Schweitzer et al., 2011: 200). En fin, el reciente ordenamiento territorial se orienta a la valorización de recursos naturales. Al mismo tiempo continúa y profundiza la voluntad política en la provincia de atraer más inversiones mineras. Esto se justifica con el escaso peso demográfico y el clima austero que impide desarrollar alternativas productivas en el territorio de Santa Cruz. El argumento es simple: No hay alternativa a la minería.

La expansión minera en Puerto San Julián: De pueblo ganadero a un pueblo minero

La concesión del emprendimiento a gran escala Cerro Vanguardia alcanza los 524 km² y se ubica a aproximadamente 150 kilómetros de la localidad más cercana, Puerto San Julián, donde se radica la operadora minera del yacimiento *Cerro Vanguardia S.A.* (CVSA). CVSA es propiedad de la transnacional *AngloGold Ashanti* (un consorcio británico-sudafricano) que posee el 92,5% de las acciones, con participación minoritaria del Estado provincial de Santa Cruz a través de la empresa provincial *Formicruz S.E.* (Formicruz S.E. posee el restante 7,5%).¹⁰ La localidad de Puerto San Julián, el único centro urbano en el departamento de Magallanes, fue elegido como lugar de instalación de la sede de la empresa minera. Asimismo, se convirtió en área de influencia de la empresa, entendido como aquel territorio donde potencialmente se manifiestan impactos socio-ambientales (Torunczyk, 2016: 1070; entrevista II). Hoy se refiere a Puerto San Julián como la capital minera de la provincia y a una localidad que se transformó de un pueblo ganadero a un pueblo minero.

¹⁰ AngloGold Ashanti con sede en Johannesburgo, Sudáfrica es el tercer productor de oro del mundo con operaciones en diez países en América Latina, África, los EE.UU y Australia. Muchos proyectos más se encuentran en la fase de exploración. Más información sobre la historia de CVSA bajo <http://www.cerrovanguardia.com.ar/institucional/historia-de-la-empresa/>, consultado el 30 de enero, 2018.

Puerto San Julián fue fundado en 1901 por corrientes migratorias que vinieron a Santa Cruz por la cría expansiva de ovinos.¹¹ En el lapso de 20 años desde la inserción de la minería transnacional en la zona, su población pasó de 4.000 habitantes (1991) a 9.202 habitantes (2010). Se estima que hoy viven entre 13.000 y 17.000 de habitantes en Puerto San Julián (entrevista III, IV, V), dado que durante la expansión minera en los últimos años, Puerto San Julián recibió corrientes migratorias de diferentes partes del país, sobre todo de las provincias del norte y también de Bolivia.¹²

Tradicionalmente la cría de ganado ovino constituía la actividad económica principal en el departamento de Magallanes y la exportación de lana generaba los ingresos del sector hasta que el modelo ganadero entró en crisis en los años '80, debido, sobre todo, a la sobreutilización de la tierra y la caída del precio de la lana. En 1991 se sumó la erupción del volcán Hudson que provocó la muerte de una gran cantidad de ganado en el departamento de Magallanes, como resultado buena parte de las estancias dedicadas a la ganadería ovina abandonaron la actividad (Andrade, 2011: 83-84; Álvarez, 2009). En este escenario de crisis del modelo ganadero se suma la llegada de la minería metalífera a gran escala a partir de mediados de los años '90. La crisis del modelo ganadero exportador y el comienzo de la explotación minera son dos procesos intrínsecamente ligados. El Estado nacional y el provincial han promovido abiertamente la minería a gran escala, por el contrario han desfinanciado las actividades agropecuarias. En este contexto, la minería transnacional surgió como el nuevo motor de desarrollo económico y como respuesta a la crisis del modelo ganadero (Andrade, 2016: 94-95; entrevista V). La expansión de la minería a gran escala relega al sector ganadero a una situación de marginalidad y se convirtió en la mayor actividad económica en la localidad:

San Julián vive directamente de la minería. Directamente para aquellos que trabajan como empleados directos, pero indirectamente porque todas esas personas o empresas que trabajan ahí, tienen un flujo de dinero que gastan en otras cosas. Que invierten, ya sea en construcciones o demás o gastan en la farmacia, en el supermercado (...), en cine, en viajes, o lo que fuera. (...) También hay muchísimo trabajo estatal (entrevista V).

Las transformaciones sociales y productivas que se han manifestado en Puerto San Julián son paradigmáticas para localidades que se encuentran en la cercanía de emprendimientos mineros. Esto incluye una expansión poblacional y un crecimiento económico, manifestándose, por ejemplo, en una mayor disponibilidad de bienes de consumo, en un aumento de precios, en la construcción de viviendas y de

¹¹ La expansión del modelo ganadero atrajo corrientes migratorias y condujo a la creación de centros urbanos, aunque alejados entre sí (Andrade 2016).

¹² Debido a la crisis del modelo ganadero el centro-este de Santa Cruz fue fuertemente afectado por el masivo despoblamiento. Una tendencia que la minería a gran escala se ha volteado.

infraestructura (Sariego, 1988). Además de las transformaciones socio-económicas, en muchas localidades la llegada de la actividad minera produce una fuerte fragmentación social y política entre los que están a favor y los que están en contra de la megaminería y sus métodos de explotación. Sin embargo, a diferencia de otras provincias argentinas, Santa Cruz registra pocas movilizaciones en contra de la minería metalífera. Específicamente, en Puerto San Julián destaca una ausencia de controversias sobre la mega-minería en el debate público. Aunque también políticos locales y representantes de diferentes instituciones sociales reconocen que la explotación a cielo abierto en Cerro Vanguardia produce impactos ambientales, tanto para la calidad y la disponibilidad de agua, como impactos en el suelo, aire, flora y fauna (Torunczyk, 2016: 1071), se argumenta, primero, que posibles impactos ambientales se manifiesten en el área de explotación que queda lejos de Puerto San Julián. Segundo, se justifica la continuación de la explotación minera con su importancia socio-económica: la industria minera se ha vuelto en la actividad económica dominante en Puerto San Julián. Ante la falta de alternativas económicas más allá de los contratos en el sector público – que en buena medida también dependen de los ingresos municipales generados a través de la explotación minera –, la explotación de la naturaleza se convierte en la única salida productiva.

Frente a esa situación, sin embargo existen debates sobre la calidad y la disponibilidad de agua así como sobre el uso de cianuro, en Puerto San Julián estos no conducen a una movilización política, tal como se observa en otras localidades mineras (Li, 2015; Martín y Wagner, 2013). Las voces que articulan críticas o preocupaciones en Puerto San Julián no ponen en duda la actividad mega-minera en sí misma, sino que al mismo tiempo subrayan los beneficios socio-económicos de la actividad. En las entrevistas realizadas las críticas reclaman más bien un mayor monitoreo de parte del Estado – “[el Estado] fue el que nunca controló” (entrevista VIII) – o critican la falta de un plan de desarrollo urbano con el cual se hubiera podido manejar el crecimiento poblacional que produjo la minería: “El gobierno no estaba preparado para un proyecto así. (...) Tenés que acomodar la electricidad, el agua, las cloacas, la basura, todo. Todo, todo. Tenés que preparar una ciudad para que en 10 años crezca 3 veces. Y eso no pasó” (entrevista V). Además predomina una fuerte incertidumbre sobre lo que pasará con Puerto San Julián cuando Cerro Vanguardia llegue al fin de su vida útil. Y relacionado con ello, los pobladores locales se preguntan qué medidas tomó el Estado provincial y municipal en los años de bonanza y por qué no se impulsaron alternativas productivas para Puerto San Julián que hubieran podido suavizar las consecuencias tras el cierre de mina. El hecho de que hasta el momento no se haya realizado ningún estudio independiente sobre las consecuencias socio-ambientales de la explotación minera se utiliza además como argumento de que si bien podría haber impactos ambientales, se carece de pruebas científicas al respecto. En este escenario, se denuncian las voces críticas como “aquellos que no pudieron sacarle un fruto [de la minería]” (entrevista V).

¿“Desarrollo sustentable” para Puerto San Julián?

A partir de los primeros días de la instalación de Cerro Vanguardia, la operadora del yacimiento, CVSA-AngloGold Ashanti, ha desempeñado un papel clave en la localidad de Puerto San Julián. Desde su sede en la avenida principal de Puerto San Julián, el área de las relaciones comunitarias construyó redes con actores y organizaciones de la localidad que condujeron, en muchos casos, a la firma de convenios y actas. Al mismo tiempo, Santa Cruz y en especial la zona de Puerto San Julián se caracterizan por la débil resistencia social en torno de proyectos de minería a gran escala y a cielo abierto en comparación con otras localidades del país (Torunczyk, 2016; Svampa/Antonelli, 2009).

Las actividades de la empresa se concentran en dos momentos que muestran que rol juegan las actividades de CVSA en la localidad de Puerto San Julián desde el inicio de la explotación. Primero, Cerro Vanguardia participa activamente en la vida diaria de la localidad a través de un conjunto de estrategias y prácticas concretas en diferentes ámbitos sociales. De esta manera la minería está muy presente en casi todas las esferas de la cotidianidad local, lo que contribuye a la sensación de que “la minería está en todos lados” (entrevista VII). Segundo, en el año 2004 se creó una Agencia de Desarrollo de Puerto San Julián que desde aquel momento se instaló como una nueva institución con representantes de todos sectores sociales y funciona como distribuidora de fondos provenientes de la operadora transnacional. Las reconfiguraciones que se desencadenan en Puerto San Julián son un ejemplo paradigmático. Nos permite observar cómo una “narrativa desarrollista” (Svampa/Antonelli, 2009: 17) se manifiesta a nivel local en la manera de cómo la empresa transnacional busca una legitimación social o licencia social. Bajo el nombre de la *Responsabilidad Social Empresarial* (RSE)¹³ por parte de CVSA-AngloGold Ashanti veremos como una narrativa del “desarrollo sustentable” vuelve en un discurso unificador en la localidad que al final hace difumar cuáles son las responsabilidades de los actores privados y públicos (para un análisis crítico del nexo entre desarrollo sustentable y RSE véase Banerjee, 2008).

“La minería está en todos lados”

La primera intervención en la localidad de Puerto San Julián por parte de CVSA fue la construcción de barrios mineros para el personal gerencial de la empresa. Las casas se encuentran en las mejores zonas de Puerto San Julián y destacan con su fachada y tamaño de las otras casas (Torunczyk, 2016; entrevista VII,

¹³ La responsabilidad social empresarial refiere a un conjunto de prácticas, estrategias y líneas directrices que se orientan al mejoramiento de la imagen corporativa. Este paradigma se universalizó a partir de los años 2000, promovido por organizaciones internacionales, como la ONU y el Banco Mundial, y, en el sector minero, el International Council on Mining & Metals (ICMM) que fue creado en el marco de la Cumbre de la Tierra de Johannesburgo en el 2001. Las políticas de RSE tienen un carácter voluntario y les permiten a las empresas mineras posicionarse como promotores del “desarrollo sustentable” y de los intereses públicos. Por lo tanto, les permite reducir los impactos ambientales y sociales que genera la misma actividad corporativa a problemas que requieren una solución técnica (para trabajos críticos véase Rajak 2011; Backhouse 2015).

VIII).¹⁴ Aunque en el debate público en Puerto San Julián no se hace mención a una fragmentación social entre los que apoyan la minería a cielo abierto y los que la rechazan como en otras localidades que han sido afectadas por emprendimientos mineros a gran escala. Sin embargo, una fragmentación en términos socio-económicas se manifiesta, por ejemplo, en la segregación socio-espacial que produjo la política de vivienda de parte de CVSA-AngloGold Ashanti. Además, se relata en las entrevistas realizadas que el empleo en la minería está visto como “un nivel social alto” (entrevista VIII) que les permite a los empleados de CVSA acceder a diferentes bienes de consumo o a descuentos especiales en los negocios. También desde el comienzo de la explotación, la operadora transnacional interviene en diferentes ámbitos sociales y espacios públicos de la localidad, tales como el sector educativo y de la salud que tradicionalmente son de dominio estatal en Argentina. Tal como constata Rajak (2011) en un análisis de las políticas de RSE de la corporación Anglo American (empresa madre de AngloGold Ashanti), el área de educación, de la salud así como la promoción de alternativas económicas son los sectores claves para actividades corporativas a nivel local.

Para tomar el ejemplo del sector educativo en Puerto San Julián, CVSA opera tanto a nivel institucional como a nivel personal. Las actividades corporativas se concentran en ampliar su relación con las instituciones educativas a través de convenios para identificar nuevos grupos destinatarios para la capacitación minera, en la renovación de los edificios educativos y en patrocinar eventos culturales. A lo largo de la explotación minera se abrieron nuevas posibilidades educativas en Puerto San Julián para la especialización en profesiones relacionadas con la minería. La Unidad Académica de Puerto San Julián de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), como contraparte de CVSA oficial, se ha especializado en minería con dos tecnicaturas mineras; y se inauguró la primera secundaria industrial en el año 2010 que estableció un convenio con CVSA por el cual los alumnos realizan sus prácticas obligatorias en un área de trabajo de CVSA. Además, CVSA-AngloGold Ashanti interviene financiando fiestas escolares y vehículos para el traslado de alumnos, da becas para el transporte o reemplaza equipos cuando se rompan en los edificios educativos (entrevistas III, VI, VII). Como consecuencia, las actividades educativas producen procesos de identificación con el sector minero por un lado, ya que abren nuevas posibilidades socio-económicas para una parte de los estudiantes. Por otro lado, surge una competencia entre CVSA, los proveedores mineros y la UNPA por los jóvenes a capacitar, dado que muchos estudiantes podían entrar a la actividad minera sin tener un mayor grado de profesionalización (entrevista III).

Las distintas estrategias de intervención de la empresa en la localidad están orientadas fundamentalmente a instalar en el sentido común de la gente que la minería es una necesidad imperante para el desarrollo de la localidad y que “está presente en todos lados”. La delicada situación socio-económica en Puerto San Julián

¹⁴ Aquella política empresarial fue acompañada por una política provincial que prevé la contratación de mano de obra local con un mínimo del 70% (Ley N°3141; entrevista II). Dado la escasez de personal especializado en minería en Santa Cruz la construcción de barrios mineros fue una forma de atraer trabajadores de otras provincias.

en la década de los '90 y la falta de alternativas productivas en la zona aportan a la imagen de la megaminería como *el* motor de desarrollo económico.

El efecto “Esquel” como punto de inflexión para la imagen de la megaminería

En los años 2000 se formaron varios movimientos en contra de la minería metalífera a gran escala que ejercieron una gran influencia sobre la imagen de la minería en Santa Cruz, poniendo en riesgo e indagando fuertemente el crecimiento económico sostenido por la industria minera. En el 2003 los habitantes de la localidad de Esquel (Chubut) convocaron un referéndum sobre la construcción de un emprendimiento minero a gran escala y con sus votos expresan su “No a la mina”; una frase que volvió en un emblema para la resistencia en contra la megaminería en todo el continente. El rechazo de la megaminería en Esquel llegó a ser una referencia ejemplar para la lucha por parte de grupos de activistas en toda la Argentina (Renauld, 2016). Asimismo, las operadoras mineras temieron un “efecto Esquel”, es decir, una multiplicación de conflictos socio-ambientales en otros lugares que podrían poner en peligro no sólo la construcción o la puesta en marcha de los proyectos mineros, sino también el modelo de desarrollo basado en la explotación como tal, dado que pueda constituir un riesgo para más inversiones extranjeras (Álvarez Huwiler y Composto, 2013; véase también Rajak, 2011: 8). Por lo tanto, el “efecto Esquel” marcó un momento clave para la industria minera y llevó a la identificación de razones por las que surgió el cuestionamiento social. Muchas empresas extractivas reorientan sus estrategias corporativas hacia la comunidad y prometen mayor compromiso para el “desarrollo sustentable” y local. En muchos casos desarrollan estrategias e instrumentos que transforman el complejo conjunto de consecuencias sociales y ambientales en un problema no político. La repercusión de Esquel también se encuentra en la reformulación de las estrategias corporativas de legitimación de CVSA-AngloGold Ashanti en Puerto San Julián para evitar una posible emergencia de conflictos en el futuro en torno a la explotación a cielo abierto en Cerro Vanguardia.

La Agencia de Desarrollo de Puerto San Julián

El cambio en la estrategia corporativa de CVSA-AngloGold Ashanti se manifiesta en la creación de la fundación Agencia de Desarrollo de Puerto San Julián en el año 2004 por la empresa minera misma, el Estado provincial de Santa Cruz y los principales actores institucionales de Puerto San Julián. Durante los siguientes años la Agencia de Desarrollo se instala en Puerto San Julián como una nueva institución que cambia de manera profunda la relación entre Estado, empresa minera, y la comunidad sanjulianense. Su objetivo general es promover un espacio institucional y abierto para la participación ciudadana que impulse el crecimiento económico y genere actividades productivas:

Establecer un espacio institucional de concertación pública y privada que impulse el crecimiento de la región a partir de fortalecer la productividad y competitividad de las empresas existentes, a crearse y/o radicarse, mediante la prestación de

servicios y la gestión de políticas de desarrollo endógeno con equidad social y sustentabilidad ambiental (Cerro Vanguardia 2018).¹⁵

Desde la narrativa corporativa del “desarrollo sustentable”, CVSA le pasó a la Agencia de Desarrollo, en primer lugar, la tarea de evitar que Puerto San Julián termine convirtiéndose en un pueblo fantasma cuando el emprendimiento de oro y plata, Cerro Vanguardia, llegue al fin de su vida útil. En otras palabras, mientras que la transnacional señala sus preocupaciones por un tiempo post-minería, asegura la continuación de la actividad extractiva. Segundo, se argumentó que la creación de la Agencia de Desarrollo fortalecería “las capacidades endógenas del territorio” (Mansilla, 2014: 128), y así se aprendería de la experiencia histórica en la Patagonia en vez de dar paso a otra etapa de saqueo por capitales transnacionales.

Una de las primeras actividades que se organizó a partir de la Agencia de Desarrollo fue poner en marcha el “Plan Participativo de Desarrollo Sustentable de Puerto San Julián y su área de influencia ‘San Julián piensa San Julián 2020’” en el año 2006, y la firma del Primer Acuerdo de Responsabilidad Social Empresaria en el año 2010. El objetivo del plan participativo, que se encuentra a responsabilidad operativa de la Agencia de Desarrollo y está llevado a cabo por técnicos de la UNPA, consistió en investigar cuáles eran las necesidades de la localidad de Puerto San Julián en dieciséis áreas estratégicas, incluyendo aspectos económicos, culturales, sociales e institucionales (para más información sobre el Plan Participativo véase Mansilla, 2009, 2014). Durante dos años se organizaron talleres sectoriales, foros y mesas redondas para fomentar el debate entre la comunidad y técnicos-expertos acerca de las necesidades en cada área estratégica. Cuando se entregaron los resultados en forma de informes en el 2008, se cerró el capítulo de la participación ciudadana en Puerto San Julián, aunque los actores institucionales involucrados en el proceso siguen alabando el plan participativo como un éxito. Mansilla (2014: 143) plantea que “constituye un instrumento de gobierno y una guía de inversiones para el sector privado”.

En otras palabras, tras la fase inicial, la Agencia terminó diluyéndose en una estructura institucional en la cual los distintos actores de la localidad están representados de forma corporativa. En 2009 la Agencia de Desarrollo, la Municipalidad y la empresa CVSA firmaron un nuevo convenio que se formalizó con el Acuerdo de Responsabilidad Social Empresaria al año siguiente. Desde entonces, la Agencia de Desarrollo se transformó en la institución que gestiona los fondos de CVSA, destinados a promover proyectos productivos y de servicios en la sociedad sanjulianense. Antes, esta responsabilidad respondía exclusivamente a la empresa minera (Mansilla, 2014: 143). Sobre todo desde que se formalizó el primer acuerdo de RSE, las relaciones entre la empresa y la comunidad estaban marcadas por una lógica corporativa de poco diálogo con la población de Puerto San Julián. El Directorio de la Agencia de Desarrollo toma las decisiones y está compuesto por representantes de

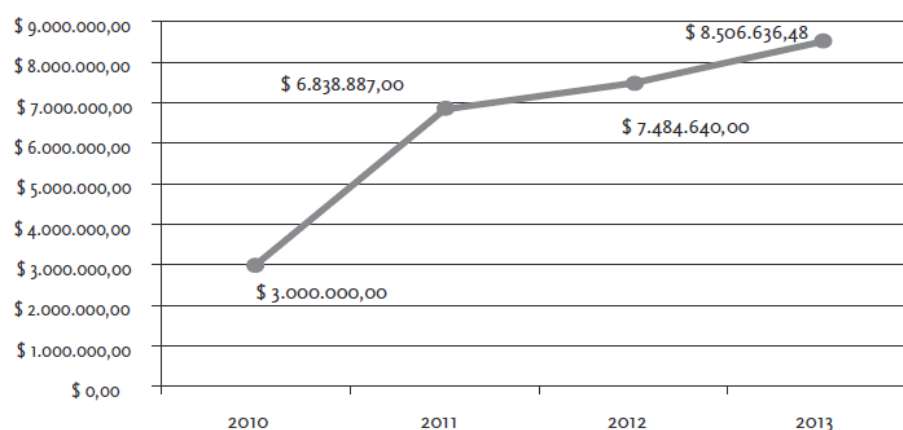
¹⁵ <http://www.cerrovanguardia.com.ar/responsabilidad-social/relato-historico-sobre-la-agencia/>, consultado el 30 de enero, 2018.

las organizaciones centrales de la localidad. Entre ellos se encuentran las autoridades locales y provinciales (la Intendencia de Puerto San Julián, el Honorable Concejo Deliberante de Puerto San Julián con representación de la mayoría y minoría y el Gobierno de la provincia de Santa Cruz), representantes de la UNPA, de la Asociación Rural de Puerto San Julián, de la Cámara de Comercios e Industria de Puerto San Julián y de AngloGold Ashanti.

El monto de los aportes financieros depende de la utilidad anual de CVSA y ha experimentado un incremento cuantitativo desde el año 2010 (véase gráfico 1). La mayoría de los fondos están orientados a promover proyectos productivos, y el superávit se reparte entre las instituciones dedicadas a la salud, educación, cultura o deporte (Mansilla, 2014: 145).

Gráfico 1

Montos correspondientes a los aportes anuales que se formalizan en los Acuerdos de Responsabilidad Social Empresaria entre el Municipio, la Empresa Cerro Vanguardia y la Agencia del Desarrollo (2010-2013; montos expresados en pesos).



Fuente: Mansilla 2014: 145, con base en Gerencia Agencia de Desarrollo PSJ, 2013.

A pesar de los aportes, existen fuertes críticas de diferentes sectores sociales hacia las actividades de la Agencia. Hasta el momento, no se ha diseñado ninguna visión de cómo desarrollar alternativas productivas. La Agencia de Desarrollo más bien responde a necesidades puntuales y articula sus preocupaciones por el futuro de la comunidad, pero no ha contribuido a desarrollar otros proyectos (Andrade, 2011: 99-100). Entre los proyectos que se financiaron hasta el momento se encuentran una planta procesadora de pescado y una planta de agua mineral natural, así como varias obras de infraestructura social y cultural como un cine teatro, la restauración de la residencia universitaria o un gimnasio cubierto.¹⁶

¹⁶ Para un listado de proyectos véase <http://www.cerrovanguardia.com.ar/responsabilidad-social/relato-historico-sobre-la-agencia/>, consultado el 30 de enero, 2018.

Una estrategia de Responsabilidad Social Empresaria o ¿"Espejitos de colores" para Puerto San Julián?

La Agencia de Desarrollo de Puerto San Julián es única en su tipo en América Latina, integrada por instituciones estatales y privadas, y financiada integralmente por fondos provenientes de Cerro Vanguardia. En el momento de su creación CVSA dijo que "se desconocía cómo y de qué forma debería trabajar una Agencia de Desarrollo",¹⁷ pero según integrantes de la Agencia de Desarrollo hoy se discute sobre ella en foros empresariales y políticos como un ejemplo exitoso del "desarrollo sustentable" en localidades mineras. En la localidad de Puerto San Julián la Agencia se instaló como un actor clave con peso político y social, y representa una plataforma institucionalizada desde la cual CVSA-AngloGold Ashanti ejerce su Responsabilidad Social Empresaria. Sin embargo, existen varias críticas acerca de la Agencia que resumimos en tres puntos centrales.

Primero: Aunque hay varias voces entre empresarios y políticos que alaban la Agencia de Desarrollo como un caso exitoso de cómo se legitima la actividad minera a través de promover un "desarrollo sustentable", el concepto del "desarrollo sustentable" funciona como un significante vacío (Laclau 2007) que carece de una definición más concreta. Hasta el momento tampoco se ha formulado ninguna respuesta a la pregunta de qué pasará con Puerto San Julián cuando termine la vida útil de la mina en un futuro no tan lejano.¹⁸ A través de un nuevo acuerdo de Responsabilidad Social Empresaria recién firmado en 2017 con la Municipalidad, AngloGold Ashanti aseguró más fondos para construir un nuevo aeropuerto en los alrededores de Puerto San Julián (entrevista IV). Seguramente haya argumentos serios que subrayan la necesidad de un nuevo aeropuerto que conecte mejor a Puerto San Julián con el resto del país. Al mismo tiempo, existe la pregunta entre los habitantes de Puerto San Julián cuándo mejorarán la infraestructura básica de la localidad. La llegada de Cerro Vanguardia no fue acompañada por un plan urbano que tuviera en cuenta el crecimiento poblacional y las necesidades en cuanto a una infraestructura apta. Por ello, Puerto San Julián tiene serios problemas de la disponibilidad de agua, gas y electricidad. Si bien la población demandó una mayor inversión en obras de infraestructura básica, las obras financiadas desde la Agencia de Desarrollo no consideraron tales peticiones y por el contrario se concentraron en proyectos más prestigiosos como la construcción de la costanera o la restauración del barco de Magallanes como sitio turístico:

Durante todos los primeros años (...) esta minera como cualquier otra hace aportes a la comunidad. (...) Cosas puntuales que no hacen al desarrollo del lugar. (...) Pero bueno, la verdad es que todas esas cosas que se han hecho, la gran mayoría, por no decir el 100%, tal vez sea el 100%, no son cosas que vayan a servir para el día de mañana (entrevista V).

¹⁷ <http://www.cerrovanguardia.com.ar/responsabilidad-social/relato-historico-sobre-la-agencia/>, consultado el 30 de enero, 2018.

¹⁸ Se estima que el emprendimiento Cerro Vanguardia llegará a su vida útil en el año 2020.

Por último, se encuentra una diferencia marcada entre las expectativas de la población sobre cómo se debería haber manifestado el “desarrollo sustentable” impulsado por la mega-minería y las obras que CVSA efectivamente realizó. Por un lado a mucha gente esto trae molestias acerca de la manera de cómo se implantó la actividad minera en la localidad de Puerto San Julián. Por otro lado muestra que una noción del “desarrollo” económico que se vincula discursivamente con la actividad minera desde el Estado y la operadora minera, permea la sociedad sanjulianense y moldea expectativas.

Segundo, la Agencia de Desarrollo formaliza la relación entre la empresa minera, el Estado y la sociedad. La agencia funciona como una suerte de cooptación económica de los principales actores sociales de la comunidad por la empresa, y a la vez ejerce su influencia corporativa sobre casi cada ámbito social y productivo del lugar. La manera de involucrar todas las instituciones sociales y representantes de diferentes opiniones políticas no sólo permite dominar las discusiones sobre el futuro cercano de la localidad con una lógica corporativa. Sino también permite marginalizar voces críticas que problematizan las consecuencias ambientales y sociales, ya que la mayoría de las instituciones y los actores involucrados se benefician en términos materiales de los fondos provenientes de CVSA-AngloGold Ashanti. Aunque se creó la Agencia de Desarrollo como espacio participativo para distribuir la asistencia corporativa, no obstante, CVSA-AngloGold Ashanti reafirma las autoridades tradicionales y las relaciones de poder en la localidad por operar a través de ellos mismos.

En relación con esa crítica y como *tercer punto*, la Agencia de Desarrollo representa más bien un proyecto ambicioso que trae grandes responsabilidades. La mayor crítica dentro de Puerto San Julián reclama que a la vez está poco pensado y equipado para cumplir su objetivo corporativo que era preparar Puerto San Julián para un tiempo post-minero. Ahora bien pero ¿por qué necesitaría pensar CVSA-AngloGold Ashanti en el tiempo después del cierre del yacimiento mediante la Agencia de Desarrollo? Cuando muchas operadoras mineras en Argentina tienen múltiples conflictos socio-ambientales en contra de la minería, CVSA-AngloGold Ashanti ha pasado más bien desapercibida en la historia de los conflictos sociales en el país hasta el momento. A continuación, las obras realizadas de la Agencia de Desarrollo que discutimos arriba nos hacen preguntar ¿quién debería ser responsable para el “desarrollo sustentable” que prometía CVSA-AngloGold Ashanti? Programas que puedan recuperar la antaño actividad económica ganadera no se han formulado desde el Estado y apenas existen iniciativas estatales que promuevan una diversificación económica. Entonces, ¿quién depende de quién?: ¿La comunidad sanjulianense de la empresa en términos socio-económicos, o el Estado santacruceño de la empresa para que ella continúe prometiendo un “desarrollo sustentable”? Intrínsecamente ligada a ello, nos preguntamos ¿qué es lo que legitima a la transnacional con su política de Responsabilidad Social Empresarial? Mutti et. al. (2012: 218 f.) constatan que en los casos en los que empresas domésticas se encuentran en un consorcio con una corporación transnacional, la política empresarial se dirige no sólo a resguardar la fase de explotación sino a desarrollar el

sector minero en la zona para mantener la actividad minera incluso tras el cierre de un emprendimiento. En este escenario, las políticas de RSE de CVSA-AngloGold Ashanti parecen estar dirigidas no sólo a asegurar la fase de explotación del yacimiento Cerro Vanguardia, sino más bien resguardar la continuación del modelo minero en la Provincia de Santa Cruz. Desde la Agencia de Desarrollo y la Intendencia de la localidad defienden las políticas mineras actuales bajo esta perspectiva. Es muy probable que sólo una pequeña parte de la comunidad se vaya a beneficiar del sector minero tras el cierre del yacimiento Cerro Vanguardia. Los representantes de diferentes sectores sociales, como el área educativa y de la salud, resumen el compromiso de la Agencia de Desarrollo con Puerto San Julián y la presencia de AngloGold Ashanti como un cambio de “espejitos de colores” a un “desarrollo sustentable” (entrevista VII).¹⁹

Palabras de cierre

Santa Cruz desempeña un rol central en la rápida expansión de la minería metalífera a gran escala en las últimas décadas, y continúa la larga historia socio-económica de la Patagonia Sur marcada por la extracción y exportación de productos primarios en forma de economías de enclaves, ligadas a la ganadería y al petróleo. Asimismo, se traslada la visión utilitarista de los bienes primarios a la actividad minera. La inserción de Santa Cruz al mapa mundial de inversiones mineras está asociada con reconfiguraciones sociales y políticas tanto a nivel provincial como en las localidades más cercanas a los yacimientos.

En Santa Cruz, a nivel provincial el auge minero produjo un despliegue institucional que se manifiesta en la creación de la empresa extractiva Formicruz S.E. que le permite al Estado provincial obtener mayor parte de la renta. La delimitación del territorio santacruceño en una parte apta para la explotación minera, expresa la voluntad política del Gobierno provincial de seguir promoviendo la industria minera y atrayendo más inversiones. Bajo estas dinámicas mostramos a partir del caso de Cerro Vanguardia y la localidad Puerto San Julián cómo la implantación del emprendimiento minero ha creado una alta dependencia socio-económica de la actividad minera, y cómo las relaciones entre la operadora transnacional CVSA-AngloGold Ashanti, los actores políticos y las organizaciones sociales se han alterado en este contexto.

El caso bajo estudio refleja cómo la narrativa del “desarrollo sustentable” funciona como una suerte de legitimación para la empresa y la Intendencia/ el Estado provincial. La Agencia de Desarrollo se vuelve en una institución central en la localidad a través de la cual actúan los actores privados y públicos, y distribuyen los fondos de asistencia corporativa a la comunidad. En nombre de la Responsabilidad Social Empresaria se evidencia como las estrategias corporativas invitan a la comunidad sanjuliense a promover un “desarrollo sustentable” para preparar a la localidad para un tiempo después del cierre de mina. De esa manera se logra ocultar

¹⁹ El dicho “cambiar espejitos de colores” alude a la condición de colonización cuando los indígenas eran engañados por los colonizadores españoles al cambiar espejitos de colores a cambiar oro.

los impactos sociales y ambientales negativos que trae la inserción de ese tipo de actividad minera y desarticular cualquier tipo de crítica hacia el rol de la empresa transnacional y la minería a cielo abierto. Por lo contrario, no sólo logran construir legitimidad en torno a la minería, sino también institucionalizarla en forma de la Agencia de Desarrollo.

Bibliografía

- Álvarez, L; Composto, C. (2013), "Estado, empresas transnacionales y resistencias sociales en la gran minería", en: Grigera, J. (Comp.), *Argentina después de la convertibilidad (2002-2011)*, Buenos Aires, Imago Mundi, 223-265.
- Álvarez, L. y Godfrid, J. et al. (2015), "Expansión minera y protesta social en Argentina y Perú", *Investigaciones sociales*, 19 (53), 169-186.
- Álvarez, R. (2009), *Situación actual y aportes al desarrollo del sector ganadero ovino-extensivo del Departamento Magallanes-Provincia de Santa Cruz*, Trabajo Final Integrador. Especialización en Desarrollo Rural- Facultad de Agronomía, UBA.
- Andrade, L. y Álvarez, R. et al. (2011), "Aporía del desarrollo. ¿Qué desarrollo después de la minería en la zona centro de Santa Cruz?", *Párrafos Geográficos*, 10 (2), 82-109.
- Andrade, L. y Herrera, S. (2016), "Entre volcanes: transformaciones en el ámbito rural patagónico. Los casos de la Meseta Central (Santa Cruz) y la Línea Sur (Río Negro), 1991-2011", *Pampa*, 14 (2do semestre), 29-58.
- Backhouse, M. (2015), *Grüne Landnahme: Palmölexpansion und Landkonflikte in Amazonien*, Münster, Westfälisches Dampfboot.
- Banerjee, S. B. (2008), "Corporate Social Responsibility: The Good, the Bad and the Ugly", *Critical Sociology*, 34 (1), 51-79.
- Bebbington, A. y Hinojosa, L. et al. (2008), "Contention and Ambiguity: Mining and the Possibilities of Development", *Development and Change*, 39 (6), 887-914.
- Bebbington, A. y Bury, J. (Comps.) (2013) *Subterranean Struggles: New Dynamics of Mining, Oil, and Gas in Latin America*, Austin, University of Texas Press.
- Burchardt, H.J.; Domínguez Martín, R. et al. (2016) *Nada dura para siempre neo-extractivismo tras el boom de las materias primas*, Ecuador, Universidad Andina Simón Bolívar.
- Carreras, S; Potthast, B. (2010), *Eine kleine Geschichte Argentinien*, Frankfurt am Main, Suhrkamp.
- Dietz, K. y Engels, B. (Comps.), (2017) *Contested Extractivism, Society and the State Struggles over Mining and Land*, Palgrave Macmillan.
- Galafassi, G. (2008), *Minería de oro y plata y conflictos sociales. Un proceso de historia reciente en Patagonia*, XXI Jornadas de Historia Económica, 2008, Buenos Aires, Universidad Nacional de Tres de Febrero.
- Galafassi, G. y Composto, C. (2013), "Acumulación por despojo y nuevos cercamientos: El caso de la minería a gran escala en la Patagonia argentina", *Cuadernos del Cendes*, 30 (83), 75-103.

- Giarracca, N. y Teubal, M. (2010), "Disputas por los territorios y recursos naturales: el modelo extractivo", *ALASRU, Revista de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural*.
- Haslam, P.A. y Ary Tanimoune, N. (2016), "The Determinants of Social Conflict in the Latin American Mining Sector: New Evidence with Quantitative Data", *World Development*, 78, 401-419.
- Laclau, E. (2007), "Why Do Empty Signifiers Matter to Politics?", en: Laclau, E. (Comp.), *Emancipation(S)*, London, Verso, 36-46.
- Li, F. (2015), *Unearthing Conflict: Corporate Mining, Activism, and Expertise in Peru*, Durham, NC: Duke University Press.
- Mansilla, C. (2009), "El planeamiento como aporte al gobierno local. La experiencia de Puerto San Julián". En: Gastón Díaz, B. y Calviño, P. (Comps.), *Jornadas Regionales de Información Geográfica y Ordenamiento Territorial: Actas de las I y II Jornadas (2007-2008)*, Rio Gallegos, SIT Santa Cruz, 109-124.
- Mansilla, C. (2014), "Planificación, participación y sustentabilidad del desarrollo en Puerto San Julián. Desafíos de la política social", *Revista de estudios regionales y mercado de trabajo*, 10, 125-153.
- Martín, F. y Wagner, L. (2013), "Agua o minería. Determinaciones y movilizaciones en la construcción pública del conflicto ambiental en Mendoza", en: Merlinsky, G. (comp.), *Cartografías del conflicto ambiental en Argentina*, 1. ed, Buenos Aires: Ed. Ciccus, 287-320.
- Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (2015), *Ficha Provincial*, Santa Cruz, Octubre 2015.
- Ministerio de la Producción (2016), *Plano: proyectos mineros*, Secretaría de Estado de Minería. Dirección general de catastro minero y dirección topografía y agrimensura, Santa Cruz.
- Ministerio de Minería, San Juan (2015), *New Mining. Provincial State Policy: Strategic Development of the mining sector. Government management term. Years 2003-2014*.
- Mutti, D. y Yakovleva, N. et. al. (2012), "Corporate Social Responsibility in the Mining Industry: Perspectives from Stakeholder Groups in Argentina", *Resources Policy*, 37 (2), 212-222.
- Patagonia Ambiental (s.a.), "Zonificación minera en Santa Cruz" [en línea], http://www.patagoniamambiental.com/Zonificaci%C3%B3n_Minera_Santa_Cruz/tabid/306/language/es-CO/Default.aspx. Consulta: 30 de enero de 2018.
- Rajak, D. (2011), *In Good Company: An Anatomy of Corporate Social Responsibility*, Stanford, Stanford University Press.
- Renauld, M. (2016), "The Esquel Effect: Political Opportunity Structure and Adaptation Mechanisms in Anti-Mining Mobilisation in Argentine Patagonia", *Canadian Journal of Development Studies / Revue canadienne d'études du développement*, 37 (4), 524-540.
- Sariego, J. L. (1988): *Enclaves y minerales en el norte de México: historia social de los mineros de Cananea y Nueva Rosita 1900 - 1970*. Tlalpan México: Ed. de La Casa Chata.

- Schweitzer, A. y Godoy, P. et al. (2011), "Recursos naturales y modelos de desarrollo en conflicto en el espacio andino santacruceño", *Párrafos Geográficos*, 10 (2), 191-214.
- Schweitzer, A. (2013), "Desarrollando el desierto. Procesos de frontera en la provincia de Santa Cruz", *Revista de Ciencias Sociales*, 5 (24), 51-69.
- Schweitzer, A. (2016), La Patagonia sur como espacio global para la expansión del capital transnacional, *Theomai*, 34, 139-151.
- Secretaría de Minería (2017), *Mercado de Oro, Serie de Informes de coyuntura minera*, Mayo 2017, año 2, vol. 3.
- Svampa, M; Antonelli, M. (2009), "Hacia una discusión sobre la megaminería a cielo abierto", en: Svampa, M. y Antonelli, M. (Comps.): *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*, Buenos Aires, Editorial Biblos. 15-27.
- Svampa, M. Y Antonelli, M. (Comps.), (2009) *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*, Buenos Aires, Editorial Biblos.
- Svampa, M.; /Viale, E. (2014), *Maldesarrollo: la Argentina del extractivismo y el despojo*, Buenos Aires, Katz Editores.
- Tiempo Sur (2009), "Ahora se sabe hasta dónde se puede explotarse la minería", *Tiempo Sur*, 28 de noviembre de 2009 [en línea], <https://www.tiemposur.com.ar/nota/8392-ahora-se-sabe-hasta-d%C3%B3nde-se-puede-explotarse-la-miner%C3%ADa>. Consulta: 30 de enero de 2018.
- Torunczyk Schein, D. R. (2015), *Soberanías en conflicto: Minería transnacional, política subnacional y movimientos socioambientales en Argentina. Un análisis comparado de las provincias de Chubut y Santa Cruz*, Tesis de doctorado no publicada, Universidad de Québec en Montreal.
- Torunczyk Schein, D. R. (2016), "The Socio-Political Dynamics of Transnational Mining in Argentina: The Cases of Puerto San Julián and Esquel in Patagonia", *The Extractive Industries and Society*, 3 (4), 1067-1074.
- Ulloa, A. (2014), "Geopolíticas del desarrollo y la confrontación extractivista minera: elementos para el análisis en territorios indígenas en América Latina". En: Göbel, B. et al. (Comps.), *Desigualdades socioambientales en América Latina*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 425-458.
- Wainer, A. (2011), Inserción argentina en el comercio mundial: de la restricción externa al desarrollo económico. *Realidad Económica* 264 [en línea], www.iade.org.ar/uploads/c87bbfe5-d90c-6211.pdf. Consulta: 6 de marzo de 2018.

Entrevistas citadas

- Entrevista I, empleado/geólogo, Formicruz S.E., el 18 de septiembre de 2017, Río Gallegos
- Entrevista II, funcionario de la Secretaría de Minería (Santa Cruz), el 19 de septiembre de 2017, Río Gallegos

Entrevista III, representantes de la UNPA, el 20 de septiembre de 2017, Puerto San Julián

Entrevista IV, intendente de Puerto San Julián, 21 de septiembre del 2017, Puerto San Julián

Entrevista V, jefe de un emprendimiento cultural, 21 de septiembre del 2017, Puerto San Julián

Entrevista VI, rector de la escuela industrial, 26 septiembre del 2017, Puerto San Julián

Entrevista VII, rector de una escuela secundaria, 27 de septiembre del 2017, Puerto San Julián

Entrevista VIII, abogado, 22 de septiembre del 2017, Puerto San Julián



Política y usos de la memoria en los Andes durante los años del boom minero (1998-2012). Los casos de Abra Pampa (Argentina) y Espinar (Perú)¹

Jorge Luis Duárez Mendoza²

Resumen

El presente artículo propone un estudio de las respuestas ensayadas por agentes locales (comunidades campesinas, comunidades originarias, organizaciones sociales y autoridades) de dos localidades andinas ante la expansión de la minería a gran escala: Abra Pampa (Argentina) y Espinar (Perú), durante el denominado “boom minero” (1998-2012). Sostenemos que las respuestas de los agentes locales implicaron procesos de identificación política, en los cuales las memorias colectivas cumplieron una función relevante.

Palabras claves

minería - región andina - identificaciones políticas - memorias colectivas

Politics and the uses of memory in the Andes during the mining boom (1998-2012). The cases of Abra Pampa (Argentina) and Espinar (Peru)

Abstract

This paper propose an analysis about the political responses produced by local agents (peasant communities, ethnics communities, social organizations and authorities) from two Andean localities facing the expansion to open-pit mining: Abra Pampa (Argentina) and Espinar (Peru), during the last “mining boom” (1998-2012). We hold that the responses of the local agents involved political identification process, in which the collective memories fulfilled a relevant function.

Key words

mining - Andean region - political identifications - collective memories

¹ El presente artículo presenta algunos hallazgos de mi Tesis doctoral en Sociología (IDAES-UNSAM), titulada “Boom minero, conflictos socioambientales e identificaciones políticas en los Andes. Los casos de Abra Pampa (Argentina) y Espinar (Perú)”, la cual será próximamente defendida. La investigación fue llevada a cabo con financiamiento del CONICET y fue dirigida por el Dr. Gerardo Aboy Carlés.

² IDAES-UNSAM/CONICET, jorgeluisduarez@gmail.com

Introducción

Iniciado hacia finales de los años noventa y prolongándose hasta inicios de la presente década, el denominado “boom minero” (1998-2012) implicó un crecimiento exponencial de la participación de América Latina y el Caribe en la producción mundial de minerales. Entre los años 1990 y 2012 la participación de la región en la producción de oro, plata y cobre pasó del 10,3% al 21,4%, del 34% al 49% y del 24,9% al 45,4% respectivamente (Grupo Propuesta Ciudadana, 2014). Esta expansión de la minería a gran escala generó una serie de impactos socioeconómicos, políticos y ambientales. Marcos regulatorios que alentaron la inversión, tecnologías que posibilitaron la extracción de minerales en grandes extensiones de tierra, aumento del precio de los minerales en el mercado global, así como la alta demanda de países emergentes, posibilitaron esta expansión, de la cual el territorio andino no estuvo excluido. Marcados por la explotación intensiva de minerales desde la colonia, los Andes fueron también escenario de nuevos proyectos mineros a gran escala. Poblaciones andinas experimentaron –nuevamente- importantes cambios en sus formas de vincularse con la naturaleza, así como en sus relaciones económicas y políticas. Diferentes estudios dan cuenta de vecinos, organizaciones sociales y/o comunidades que se vieron enfrentados por estar a favor o en contra de la minería, llegando en algunos casos a la disolución de comunidades campesinas enteras (Salas, 2008; Yeckting y Ramírez, 2012). Formas productivas tradicionales se vieron alteradas ya sea por la apropiación de importantes extensiones de tierras por parte de las empresas mineras o por la contaminación de ríos y afluentes. Las relaciones de poder local se vieron modificadas, no solo por el ingreso en el territorio de un nuevo “vecino” que contaba con cuantiosos recursos económicos e importantes influencias políticas, sino también porque agentes locales, es decir, colectivos que aglutinaban a pobladores de los territorios afectados por la actividad extractiva, adquirieron un nuevo protagonismo al ensayar diferentes respuestas a los impactos (o posibles impactos) negativos de la minería a gran escala en sus territorios. En países como Argentina y Perú no fueron pocas las oportunidades en que las respuestas ensayadas por los agentes locales –no solo de la región andina cabe precisar- generaron la paralización de proyectos mineros o el inicio de complejos procesos de diálogo y negociación.

Tomando en cuenta estos antecedentes, este artículo analiza y compara las respuestas políticas en las localidades andinas de Abra Pampa y Espinar a partir del desarrollo de los proyectos mineros “Pirquitas” y “Tintaya” respectivamente. Nos interesa explicar y comprender las identificaciones políticas implicadas en dichas respuestas, prestando atención a las memorias colectivas. Abra Pampa se ubica en la región Puna de la provincia de Jujuy, al norte de la República Argentina, la cual cuenta con una población de 42.541 habitantes (Censo 2010). Región fronteriza, la Puna es también una especie de frontera socio-cultural de aquella Argentina imaginada como “blanca y europea” (Karasik, 2006). En Abra Pampa existen comunidades originarias que en su gran mayoría son Kollas, dedicadas principalmente a la actividad ganadera. Durante los años del boom se instaló en la localidad la consigna del “No a la megaminería”. Espinar por su parte, es una

localidad altoandina ubicada en el departamento del Cusco, en el sur del Perú, con una población de 62.698 habitantes (Censo 2007). Según datos oficiales, en el año 2006 existían un total 67 comunidades campesinas en Espinar, las cuales reunían a un total de 12.399 familias que se dedicaban a actividades agropecuarias. A diferencia de lo ocurrido en Abra Pampa, en Espinar diferentes agentes locales apostaron por lograr una convivencia con la actividad minera en los mejores términos posibles.

Minería a gran escala y respuestas políticas

El posicionamiento del “No a la minería” en Abra Pampa y de la apuesta por la convivencia en Espinar, logran ser mejor comprendidos si los relacionamos con determinados procesos socioeconómicos y políticos locales. A través de este ejercicio encontraremos que dichas respuestas manifiestan demandas de larga data y que a éstas se articularon otras relativamente más recientes como el problema de la contaminación.

Actividad minera, disputas por la tierra y contaminación en Abra Pampa

La Puna –en la cual se ubica Abra Pampa– es la región minera por antonomasia de Jujuy, territorio de grandes reservas de litio y yacimientos de oro, plata y estaño. La minería de tipo metalífera es la más importante en la provincia, siendo la principal productora de zinc, cadmio, plomo y plata de la Argentina. Esta actividad adquirió escala industrial a partir de la década del 30 del siglo XX, cuando en 1933 se fundó “Pirquitas, Picchetti y Cía.”, empresa que se dedicó a explorar yacimientos de estaño y plata en la Puna. Tres años después, en 1936, se constituyó “Mina El Aguilar”, empresa ubicada en el departamento de Humahuaca que inició la explotación de plomo, zinc y plata. Ambos emprendimientos mineros aportaron al crecimiento demográfico más importante de la Puna en el siglo XX –registrado entre los años de 1914 y 1947–, a partir de la generación de oportunidades laborales en condiciones precarias.³ El desarrollo de la actividad extractiva implicó nuevas formas de control del territorio, las cuales trastocaron drásticamente las estrategias de subsistencia de los pobladores puneños, vinculadas al uso de tierras.

Con la década del 40 llegó la irrupción del peronismo en la escena política nacional y provincial, llevando a cabo una serie de reformas sociales que mejoraron las condiciones laborales de los trabajadores, incluidos los mineros. Estas mejoras motivaron un proceso de proletarización de una parte importante de la población puneña.⁴ Sin embargo, este proceso no mermó una demanda histórica de la

³ En gran medida las empresas mineras reprodujeron los mecanismos de explotación de los ingenios azucareros de la época. Por ejemplo, a los trabajadores mineros no se les permitía comprar alimentos e insumos fuera de las proveedurías de la mina, recibían un jornal de acuerdo a las fluctuaciones del mercado y se les descontaba la provisión del material necesario para la explotación (Paz, 2014). Un dato a tener en consideración es que Alberto Picchetti (uno de los descubridores de Mina Pirquitas) tenía como socios a Walter y Stephen Leach, dueños del ingenio azucarero “La Esperanza” (González, 2013).

⁴ En este proceso de proletarización, el sindicato cumplió un rol fundamental en la cohesión social y política de los mineros. Para una aproximación a la experiencia de los sindicatos mineros en Jujuy

población local: la propiedad comunitaria de las tierras. Así lo atestigua el denominado “Malón de la Paz” llevado a cabo en 1946 por salteños y jujeños provenientes de distintas localidades de la Puna. Ciento setenta y cuatro “maloneros”, con sus caballos y mulas, recorrieron alrededor de dos mil kilómetros, desde Abra Pampa hasta la Plaza de Mayo en Buenos Aires, demandando al General Perón el reconocimiento de la propiedad comunitaria de sus tierras. A pesar del buen recibimiento, esta demanda no fue atendida y posteriormente los maloneros sufrieron la represión estatal.⁵ La actividad minera por su parte, continuó con un sostenido crecimiento, el cual se extendió durante las siguientes décadas.

Para los años 70 la minería en Jujuy había alcanzado un importante dinamismo económico. La explotación de minas y canteras en la provincia llegó a representar el 4.8% de la producción nacional. En este contexto de dinamismo y crecimiento, en 1974 el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación declararon, a través de la Ley N° 20.930, a la provincia de Jujuy “capital nacional de la minería”. Se sedimentaba así entre las élites políticas una concepción de la Puna como gran reserva de minerales. Sin embargo, en la década del 80 Jujuy no escapó de la grave crisis que sufrió la minería a escala mundial. Afectada por el colapso del precio del estaño, Pirquitas se encontraba en estado de virtual desaparición en el año 1985. Mina El Aguilar, también con problemas, sufrió una masiva reducción de personal. El costo social y económico de esta crisis fue enorme para la población de la Puna (Lagos y Gutiérrez, 2006).

En el marco de las reformas neoliberales de los noventa, las autoridades nacionales intentaron reactivar la minería metalífera a través de una reforma radical del marco regulatorio del sector, la cual fue suscrita por el gobierno jujeño (Alvarez, Godfrid y Duárez, 2015).⁶ Además, en 1994 se llevó a cabo una importante reforma constitucional, la cual incluyó el reconocimiento de la pre-existencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Esta reforma dio inicio en Jujuy a un proceso de entrega de tierras, el cual continúa y no ha estado exento de cuestionamientos. El reconocimiento del derecho de los pueblos originarios a la propiedad comunitaria de las tierras entró en colisión con la renovada promoción de la minería metalífera a gran escala. Esto generó que en el 2006 se lleve a cabo el “Segundo Malón de la Paz”, en el cual comunidades originarias de Abra Pampa y de diferentes localidades de la Puna se movilizaron hacia la ciudad de Purmamarca, demandando al gobierno provincial la entrega de tierras y participación en la toma de decisiones que puedan afectar sus tierras.

revisar el texto “El por qué de mi lucha”, testimonio del dirigente sindical Avelino Bazán, desaparecido durante la última dictadura cívico-militar. El texto fue publicado en el 2011 por la Presidencia de la Nación Argentina.

⁵ Tres años después del Malón de la Paz, en 1949, el Gobierno de Perón a través del decreto 18341 expropió cincuenta y ocho haciendas de la Quebrada y la Puna, quedando bajo el poder del Banco de la Nación, en nombre del Ministerio de Hacienda. Las tierras fueron transferidas en 1959 a la provincia de Jujuy, pero no se produjo el traspaso a las comunidades originarias (Belli y Slavutsky, 2000:206). Sobre el Malón de la Paz ver los trabajos de Belli, Slavutsky y Rueda (2007) y Valko (2012).

⁶ Sobre la reforma del marco regulatorio de la actividad minera además del citado trabajo de Alvarez, Godfrid y Duárez (2015), revisar los estudios de Lavandaio (2008) y Svampa, Bottaro y Sola Álvarez (2010).

La reactivación y expansión de Mina Pirquitas -adquirida en el 2004 por la canadiense “Silver Standard Resources Inc.”- expresó el nuevo momento que la actividad extractiva atravesaba en la Puna jujeña, poniendo en marcha un programa de explotación de plata, plomo y zinc a cielo abierto.⁷ Sin embargo, este renovado impulso de la minería a gran escala se “estrelló” frente a otro obstáculo: la contaminación generada por los antiguos proyectos mineros, la cual había afectado el medio ambiente y la salud de los pobladores locales durante décadas. Al respecto, Abra Pampa con la ex fundidora “Metal Huasi” se convirtió en un caso emblemático. Estudios realizados en el 2006 demostraron que debido a la escoria dejada a la intemperie por la ex fundidora, el 81% de la población infantil de Abra Pampa registraba valores de plomo en la sangre capaces de generar daños en su salud. Si durante años la presencia de la escoria había sido “naturalizada” por la población local, esta concepción varió una vez que dicha presencia se convirtió en un problema público, como consecuencia de -entre otras razones- las acciones realizadas por la “Multisectorial de Abra Pampa”.⁸ Es en el devenir de estos sucesos que se genera en Abra Pampa las resistencias sociales ante la expansión de la minería metalífera a gran escala.⁹ El “Consejo Departamental de Comunidades de Cochinoca”, elaboró un proyecto de Ordenanza que prohíbe la minería a cielo abierto en Abra Pampa.¹⁰ El proyecto incluyó en sus argumentos la necesidad de defender las tierras comunales y proteger el medio ambiente de la contaminación generada por la actividad minera. El proyecto fue aprobado por el Concejo Deliberante y entró en vigencia por presión colectiva, ante el intento del intendente por vetarlo a finales del 2010.

Actividad minera, confrontación y negociación en Espinar

En Espinar la minería metalífera a gran escala se inició en los años 80 del siglo XX, a partir del proyecto cuprífero Tintaya. Antes de este suceso, la economía local era dinamizada por un consolidado mercado de lanas, el cual animó la presencia de hacendados, generándose una serie de conflictos con familias indígenas propietarias

⁷ Otros proyectos promocionados durante aquellos años en Jujuy fueron la extracción de litio de los salares ubicados en el departamento de Susques, el proyecto “Chinchillas” en Rinconada para la extracción de plata, plomo y zinc y el proyecto “Huacalera” en Tilcara, el cual consistía en la extracción de uranio y torio.

⁸ “Multisectorial” es la denominación que agentes de diferentes localidades de Argentina dieron a organizaciones que reunían principalmente a sectores sociales afectados por la desestructuración económica experimentada en el país a partir de los noventa (Pereyra, 2014). En Abra Pampa, la Multisectorial estuvo conformada por representantes del Consejo de Participación Indígena, agentes pastorales de la Iglesia Católica, representantes de los pueblos originarios, entre otros.

⁹ Otras resistencias se generaron en Yavi, donde la comunidad de Cangrejillos demandó al gobierno de la provincia el cese de las actividades exploratorias en su territorio, debido a que éstas se habían realizado sin su previo consentimiento; en Susques, donde treinta y tres comunidades exigieron al gobierno de la provincia se respete su derecho a la consulta previa frente a las intenciones de explotar litio en sus territorios; y en Tilcara, donde una Asamblea Ciudadana demandó el cese de la exploración minera en la Quebrada de Humahuaca.

¹⁰ Constituido en el año 2010, el Consejo Departamental de Comunidades de Cochinoca aglutina a diecinueve comunidades originarias de las jurisdicciones de Abra Pampa y Puesto del Marqués. Entre sus principales objetivos se encuentra la reafirmación y defensa de los derechos a la identidad, al territorio, a la tierra y al desarrollo integral de las Comunidades Indígenas.

de tierras. Estas familias buscaron una mayor autonomía política, administrativa y comercial frente al dominio ejercido por los hacendados. Uno de los conflictos más recordados en la localidad es la denominada “masacre de Tocroyoc” de 1921, en donde fue asesinado Domingo Huarca, miembro de una de las familias indígenas propietarias, a quien hasta el día de hoy se le recuerda como un importante líder campesino.¹¹ En estos conflictos podemos encontrar la génesis de los procesos de identificación campesina que han marcaron la historia social y política de Espinar desde el siglo XX (Cáceres, 2013).

El Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, que tomó el poder en octubre de 1968, llevó a cabo una profunda reforma agraria que acabó con el dominio de los hacendados. En Espinar, aproximadamente 30 mil hectáreas pasaron a ser propiedad de comunidades campesinas. La reforma animó la constitución de organizaciones campesinas en la localidad, tales como la Liga Agraria y la Federación Campesina, las cuales años después constituirían la Federación Unificada de Campesinos de Espinar-FUCAE (Cáceres, 2013).¹² Adicionalmente, el gobierno militar impulsó la participación del Estado en el sector minero. En ese marco, se entregó en 1971 los derechos de explotación de la mina Tintaya a la empresa estatal “Minero Perú”. Sin embargo, durante los años 70 Tintaya no entró en etapa de explotación.

Mina Tintaya entró en etapa de explotación en abril de 1985. El desarrollo del proyecto implicó la expropiación de 2.368 hectáreas de tierras a Tintaya-Marquiri, anexo de la comunidad campesina “Antaycama”. Esta expropiación generó el reclamo de los campesinos, quienes expresaron su disconformidad con el justiprecio pagado por sus tierras y el no haberse considerado otros daños y perjuicios (de Echave, Keenan, Romero y Tapia, 2005). El malestar campesino progresivamente se extendió a otros grupos sociales de la sociedad espinarenses, debido a la manera en que la empresa minera entabló su relación con la población local. Es así que el 21 de mayo de 1990 miles de espinarenses se movilizaron y tomaron las instalaciones de la empresa minera, a partir de un pliego de demandas planteado por la Municipalidad Provincial de Espinar y las principales organizaciones sociales. Se exigió a la empresa dotar a la localidad de electrificación, realizar obras de infraestructura, dar empleo y apoyar a las comunidades campesinas (Borda, 2013). Tras días de negociación las organizaciones lograron un acuerdo con la empresa. Desde aquella fecha hasta el día de hoy, todos los 21 de mayo se conmemora en la localidad el “Día de la Dignidad Espinarenses” (de Echave, 2009).

¹¹ Desde inicios del siglo XX se consolidó progresivamente en las provincias altoandinas del Cusco la organización de la fuerza de trabajo a través de las haciendas. El régimen de producción de las haciendas -basado en la sobreexplotación de los pastores de la Puna (Cáceres, 2013)- era legitimado por una élite criolla que no reconocía un conjunto de derechos a las poblaciones indígenas, los cuales sí eran ejercidos por otros connacionales. Esta élite produjo lo que Piel (1983) denominó el “espejismo de la inmovilidad telúrica”, el cual consistía en adscribir a la humanidad indígena un carácter pasivo, demandante de orientación y proclive a la manipulación.

¹² Fundada en 1987, la FUCAE agrupa a la mayoría de las comunidades campesinas de Espinar, lo que la convierte en una de las más importantes organizaciones campesinas de la localidad.

En el contexto de crisis de la minería metalífera a nivel mundial, el gobierno de Alberto Fujimori inició en 1991 una reforma del sector minero, similar a la que dos años después se realizó en Argentina. Con la reforma en marcha y la apuesta neoliberal del gobierno de Alberto Fujimori, Mina Tintaya fue privatizada en 1994. Los distintos titulares privados que desde entonces ha tenido Mina Tintaya, no solo adquirieron los activos de la empresa, sino también sus pasivos sociales. Además, estos titulares privados iniciaron nuevos procesos de adquisición de tierras que tampoco estuvieron exentos de tensiones. Por si fuera poco, las preocupaciones por el impacto ambiental de la actividad extractiva empezaron a ser expresadas por la población, específicamente la contaminación de fuentes de agua y áreas de pastoreo (de Echave, Keenan, Romero y Tapia, 2005).

La llegada al gobierno local de un movimiento político crítico a la actividad minera en 1999, posibilitó un nuevo proceso de articulación entre la Municipalidad Provincial de Espinar y las organizaciones sociales.¹³ Esta articulación se basó en un conjunto de demandas dirigidas a la empresa minera, las cuales dieron forma a lo que se denominó el “Convenio Marco”, el cual proponía regular las relaciones entre la empresa minera y la población local. Este convenio planteó: aporte a obras públicas, cuidado ambiental, solución a los pasivos mineros y desarrollo sostenible para las comunidades campesinas. Tras el anuncio de un paro provincial para el 21 de mayo del 2001, la empresa accedió a negociar el Convenio Marco. Tras marchas y contramarchas el convenio fue firmado en el mes de septiembre del 2003 por la empresa minera y el municipio. En paralelo a estas negociaciones, un conjunto de comunidades campesinas propusieron a la empresa minera instalar una mesa de diálogo. Este proceso tuvo como objetivo dar respuesta a una serie de demandas específicas de las comunidades. Se instaló así una Mesa de Diálogo en febrero del 2002, la cual trabajó temas relacionados a tierras comunales, problemática ambiental, derechos humanos y desarrollo sostenible. Los acuerdos logrados con la empresa se firmaron hacia finales del 2004 (de Echave, 2009).¹⁴

Poco tiempo después de la firma del Convenio Marco y de la instalación de la Mesa de Diálogo, se evidenciaron una serie de dificultades para el cumplimiento de los acuerdos asumidos por las partes. Nuevas acciones de protesta en Espinar no tardaron en volver a producirse. Así, en mayo del 2005 un conjunto de organizaciones sociales tomó nuevamente las instalaciones mineras, planteando a la empresa la reformulación del Convenio Marco. Ante este suceso la empresa decidió paralizar sus operaciones. Luego de un intenso proceso de negociación las operaciones de la empresa minera se reiniciaron (de Echave, 2009). La existencia de mecanismos de negociación y diálogo no clausuraron las disputas entre los agentes locales y la empresa minera.

Con el anuncio de un nuevo proyecto minero en la localidad, las organizaciones volvieron a demandar la reformulación del Convenio Marco.

¹³ Este movimiento político llevó como candidato a la alcaldía de Espinar a Oscar Mollohuanca, quien había participado en las acciones de protesta de mayo de 1990.

¹⁴ Para la instalación de esta Mesa fue relevante la mediación de la Oficina del Ombusman de la Minería de OXFAM Community Aid Abroad de Australia.

Apoyadas nuevamente por la Municipalidad Provincial, las organizaciones elaboraron en el 2011 una propuesta de reformulación y solicitaron a la empresa iniciar un proceso de negociación, solicitud que fue denegada. En este contexto, se hizo de conocimiento público los resultados de dos estudios que demostraban la existencia de daños en la salud de la población y del medio ambiente en la zona de influencia minera. Toda esta situación desencadenó un nuevo paro indefinido el 21 de mayo del 2012, el cual generó una violenta represión de las fuerzas del orden, dejando como saldo dos muertos, decenas de heridos y el alcalde de Espinar detenido. Esta escalada del conflicto se resolvió a través de la instalación de una nueva Mesa de Diálogo.

Identificaciones políticas y memorias colectivas

Para comprender las respuestas de los agentes locales descritas en el apartado anterior, consideramos oportuno apelar a la sociología de las identidades. Distanciándonos de cualquier concepción “esencialista”, sostenemos que es en la interacción social y en los sentidos de pertenencia donde se constituyen las identidades políticas (Aboy Carlés, 2001). En sentido más estricto, hablaremos de identificaciones políticas y no de identidades políticas, pues analizamos procesos de significación que posibilitaron la desestabilización de identidades políticas pretéritas. Parafraseando a Alimonda (2012), nos interesa dar cuenta de la recreación de significados en torno a lo político por parte de los pueblos andinos. Sostenemos que los actos de identificación pueden materializar la aparición de nuevas nominaciones que permitan la articulación de discursos antes dispersos y, en consecuencia, generar desplazamientos en la significación que articula a un conjunto de agentes (Laclau y Zac, 1994).¹⁵

Sostenemos que en los procesos de identificación política, los usos de la memoria colectiva –entre otros elementos- cumplen una función relevante. Las memorias colectivas remiten a determinados acontecimientos históricos, personajes o lugares que representan ciertas prácticas de solidaridad (Pollak, 1992). Malones de la paz, luchas campesinas, resistencias étnicas, descritas brevemente en el apartado anterior, fueron resignificadas en las respuestas políticas de Abra Pampa y Espinar durante los años del boom minero.¹⁶

Debemos tener presente que las identificaciones políticas que nos ocupan estuvieron relacionadas a situaciones de incertidumbre social, debido a la expansión

¹⁵ Nuestra concepción de las identificaciones políticas es semejante a la definición que Barros realiza de las identificaciones populares (2013:41-64).

¹⁶ Aboy Carlés (2001) propone analizar las identidades políticas tomando en cuenta la perspectiva de la tradición. Nosotros decidimos hablar de “memorias” ya que buscamos llamar la atención sobre un fenómeno diferente. Mientras las tradiciones políticas remiten a determinadas gramáticas que incluyen disquisiciones conceptuales (tales como el concepto de libertad en el liberalismo o el de lo público en el republicanismo), las memorias colectivas suponen procesos de recuperación de recuerdos compartidos. Las tradiciones políticas pueden incluir memorias, mientras que las memorias colectivas para constituirse como tales no necesitan de tradiciones políticas a las cuales explícitamente apelar.

de la minería a gran escala. Para responder a los desafíos que estas situaciones plantearon, los agentes locales de Abra Pampa y Espinar hicieron uso de un pasado común, habilitando así sentidos de pertenencia que posibilitaron cierta seguridad identitaria (Marcel y Mucchielli, 2011). Dichos agentes intervinieron en el sentido de sus pasados compartidos, interpretándolos y actualizándolos para dar respuesta a los desafíos del presente. De esta manera, las memorias colectivas adquirieron relevancia en la construcción de solidaridades sociales (Jelin, 2002).

Vale la pena traer brevemente a colación la distinción propuesta por Ricoeur (2000: 46) entre “evocación” y “búsqueda”, para entender esta recomposición de acontecimientos de un pasado común. La evocación implica básicamente el advenimiento actual de un recuerdo, es una afección generada cuasi espontáneamente a raíz de que “nos acordamos, de esto o de aquello, en tal o en cual ocasión”. La búsqueda por su parte, implica un proceso más complejo de rememoración voluntaria, de recuperación de lo que antes se vio, sintió y aprendió. Ricoeur sostiene que la búsqueda está motivada por la decisión de superar el olvido. Si asumimos la distinción analítica propuesta por Ricoeur, podemos afirmar que la memoria colectiva supone un “recuerdo secundario”, ya que ésta no se basa en la retención de “recuerdos inmediatos”, sino en la reproducción de un conjunto de recuerdos modificados según las experiencias presentes de los agentes involucrados. En tal sentido, el recuerdo primario retorna al presente re-presentado a través de los imaginarios sociales compartidos por los agentes.

Hemos dicho que las memorias colectivas están constituidas por acontecimientos, personajes y lugares. El primero de estos elementos refiere a determinadas experiencias que involucran a las colectividades con las cuales los agentes han entablado sentidos de pertenencia. Estos acontecimientos tienen relevancia en el imaginario del grupo de referencia, posibilitando la identificación de sus miembros con un determinado pasado. La memoria colectiva une un conjunto de acontecimientos que no se limitan al espacio-tiempo del grupo que la enuncia, es decir, los grupos sociales pueden heredar ciertas memorias colectivas.¹⁷ Los personajes por su parte, sintetizan un conjunto de características que son valorados positivamente por el grupo. Al igual que los acontecimientos, estos personajes no se limitan al espacio-tiempo del grupo que los rememora.¹⁸ Por último, la referencia a lugares sirve de apoyo para la memoria colectiva, permite la conmemoración de acontecimientos y sacrificios de personajes valorados como ejemplos a imitar (Pollak, 1992).¹⁹

¹⁷ Por ejemplo, no es necesario que un joven miembro de la comunidad campesina “Huisa Huisa” en Espinar haya participado en las luchas por la reforma agraria de los años setenta para reconocer a aquéllas como parte de la historia de su comunidad y tal vez de su familia.

¹⁸ Un ejemplo de personajes son los “maloneros” de Abra Pampa que participaron en el Malón de la Paz de 1946. Las descripciones que encontramos de estos personajes señalan virtudes tales como valentía y entrega total por una causa común.

¹⁹ En la Puna jujeña, por ejemplo, cada 04 de enero los pobladores locales se congregan en Quera, lugar ubicado en el departamento de Cochínoca, escenario de la denominada “batalla de Quera” de 1875, en donde los puneños de aquella época lucharon por la defensa de sus territorios.

Por último, vale la pena señalar que la memoria colectiva es un factor importante en el sentimiento de continuidad y coherencia de un grupo social en la reconstrucción de sí. La memoria colectiva permite estructurar los desplazamientos que experimentan las identidades políticas, sirven como nodos a los discursos que se articulan. Entre la población andina, las acciones políticas de reivindicación resultan ser acontecimientos históricos efectivos para la reconstrucción o actualización de las memorias colectivas (Albó, 2002). Ahora bien, si la memoria colectiva está signada por las mutaciones, ésta supone también ciertas sedimentaciones, elementos relativamente estables que limitan sus variaciones, brindando así cierta coherencia identitaria (Pollak, 1992).²⁰ Dicho todo lo anterior, veamos como operaron las memorias colectivas en nuestros casos de estudio.

El “No a la megaminería” como un nuevo capítulo de la resistencia en Abra Pampa

En Abra Pampa en particular y en la Puna jujeña en general, encontramos distintas memorias colectivas en torno a la presencia de la actividad minera, las cuales podemos a groso modo agrupar entre aquellas que remiten a la vida cotidiana en los antiguos campamentos mineros, aquellas referidas a las luchas obreras y aquellas vinculadas a los años de crisis y desempleo, producto del cierre de un conjunto de empresas mineras en los años ochenta del siglo XX.

Las memorias colectivas en torno a la cotidianidad en los antiguos emplazamientos mineros, conjugan experiencias familiares con el asombro generado por la modernización que trajo consigo la actividad extractiva a escala industrial. La explotación intensiva de minerales significó la llegada a la Puna jujeña de un conjunto de servicios nunca antes vistos por quienes poblaban estos territorios (escuela, centros de salud, cine, etc.). Por otra parte, las memorias colectivas vinculadas a las luchas obreras remiten a acontecimientos tales como la multitudinaria marcha de trabajadores mineros y sus familias de 1964 (demandando mejores condiciones de trabajo), la huelga obrera de 1973 conocida como el “Aguilarazo” (la cual paralizó la Mina El Aguilar también por cuestiones laborales) o a la figura del dirigente sindical Abelino Bazán, todos estos elementos vinculados a la identidad obrera jujeña.²¹ A través de la memoria colectiva sobre las luchas sindicales, emergen recuerdos en torno a la explotación laboral, elemento que apareció entre las razones por las cuales los agentes locales rechazaron la minería a gran escala promovida durante los años del boom minero.²² A las experiencias de

²⁰ Al relacionar las reivindicaciones por la tierra con las denuncias de contaminación en una misma narrativa, los agentes locales de Abra Pampa –por ejemplo– proyectan en estas últimas una continuidad en una lucha más amplia que trasciende la particularidad de dichas denuncias.

²¹ Sobre el Aguilarazo ver Scheij (1999). Para una aproximación a las luchas sindicales en la mina El Aguilar ver Maisel (2013).

²² “También hay un registro en torno a que el trabajo de la mina destruye, mata, porque muchos han sido mineros también, hay ese recuerdo sobre todo en los más viejos, conocen la industria, no tener nada más que trabajar, muchos prefieren tener su siembra, no quieren perder eso, de no perder esa libertad de decir ‘por lo menos tengo para comer’, muchos dicen eso ‘bueno pobres sí pero de comer no nos va a faltar nunca’ [...] lo que me parece a mí que juega mucho ese pasado obrero que han tenido, los tipos saben lo que es la explotación, en la Puna también, saben, conocen lo que es la minería (Lorena Solís, Red Puna y Quebrada).

explotación de los antiguos mineros se suman las experiencias de despidos colectivos y desempleo, como resultado de la crisis de la actividad minera de los años ochenta. Estas experiencias de crisis aparecen como referencias para presentar lo que vendría después de todo ciclo de explotación minera: desempleo y pobreza. La crisis de la actividad extractiva de los ochenta generó que ex trabajadores mineros devenidos en desocupados retornen a sus lugares de origen o migraran con sus familias hacia otras localidades de la Puna, entre ellas Abra Pampa. Estos procesos de migración o retorno guardan relación con la reafirmación del derecho a la propiedad de las tierras por parte de la población local, en tanto las tierras significaban un recurso elemental para al menos asegurar ciertas condiciones de subsistencia.

La contaminación producida por la ex fundidora “Metal Huasi” agregó otro perjuicio en torno a lo que generaría la minería según los agentes locales. Ya no solo era desempleo y pobreza, sino además daños en el medio ambiente y en la salud de las personas. Todo esto como parte de narrativas en donde lo menos importante terminaba siendo el poblador de Abra Pampa. Estos recuerdos responden a una memoria de la historia reciente, la cual resultó muy relevante para las formas en que los agentes locales entendieron la nueva apuesta gubernamental por reactivar la actividad minera durante los años del boom.

Pero en Abra Pampa no solo la memoria en torno a la historia reciente influyó en las respuestas políticas de los agentes locales ante la expansión de la minería a gran escala. También se hizo presente un conjunto de acontecimientos, lugares y personajes de un horizonte histórico más amplio. Veamos por ejemplo la siguiente cita, en donde la narrativa de un dirigente de Abra Pampa plantea una continuidad histórica entre la minería en la época colonial y la minería contemporánea:

la minería es una actividad ancestral, nuestros abuelos, nuestros ancestros han trabajado siempre pero no con este objetivo. El oro era en sí un mineral que era utilizado para adorno, cobre y han logrado fusiones, hay herramientas que han hecho con los minerales. Pero bueno, cuando viene la colonización, la invasión, empiezan a explotar los minerales con otros fines, que son económicos, capitalistas. Ese es el marco en el cual nos encontramos hoy y eso es histórico, desde que se implementó el saqueo del Potosí hasta el día de hoy, que para el occidental [la minería] tiene otro valor (Luis Aguayo, Consejo Departamental de Comunidades de Cochínoca).

Un elemento importante y presente en esta cita es la referencia a la experiencia de la invasión. Los agentes locales plantearon en sus narrativas una suerte de “sociodisea indígena” signada por diferentes luchas contra la invasión de sus territorios. Esta sociodisea implicó el cuestionamiento al discurso civilizatorio dominante, el cual había subordinado las referencias identitarias de las comunidades originarias, así como la “re-historización” de las comunidades, reivindicando una historia de luchas que era negada por el discurso oficial (Yudi, 2015:211). Los invasores podían cambiar de rostro a través de la historia (los colonizadores, el

estado, los mineros), pero la decisión de defender los territorios era invariable. Distintos acontecimientos históricos fueron usualmente referidos por nuestros entrevistados como capítulos de esta sociodisea indígena, entre ellos la “Batalla de Quera” y el “Malón de la paz”.²³

Vale la pena señalar algunas breves referencias sobre la “Batalla de Quera” para orientar al lector. La denominada Batalla de Quera remite a un conjunto de hechos ocurridos entre los años de 1873 y 1875 en la Puna jujeña, relacionados a las disputas entre pobladores originarios y terratenientes por el control de las tierras. Estas disputas incluyeron un enfrentamiento armado en Abra de la Cruz (Cochinoca) en el mes de diciembre de 1874, entre pobladores de la Puna y un escuadrón del ejército de la provincia. Los puneños resultaron victoriosos. Un mes después, en enero de 1875, el ejército de la provincia -esta vez reforzado con milicias de la vecina provincia de Salta- volvió a enfrentarse a los pobladores puneños, siendo estos últimos derrotados.²⁴ A pesar de que el ejército de la provincia terminó imponiéndose en la Batalla de Quera, en las narrativas locales encontramos una rememoración de aquél acontecimiento desde una perspectiva bastante positiva. La siguiente cita en torno a la conmemoración de la batalla de Quera resulta ilustrativa:

[La batalla de Quera] fue una lucha entre el estado argentino y las comunidades indígenas en 1874, que era parte de la resistencia de aquellos años y los abuelos de ese entonces le habían planteado la guerra al estado y se ganó esa guerra. Hoy la Puna es como autónoma de alguna manera, porque nosotros seguimos pensando y creyendo en seguir adelante con esas luchas. (Pedro Vilca, Consejo de Organizaciones Originarias de Rinconada).

En estas narrativas las comunidades indígenas resultan representadas como colectivos caracterizados por la resistencia y la victoria. Pero particularmente se hace referencia a “los abuelos”, personajes que remiten a antepasados de las actuales comunidades indígenas con quienes no necesariamente se comparte lazos familiares. En estas representaciones, los abuelos se caracterizan por su abnegada entrega en la defensa del territorio. Ciertos lugares en donde sucedió la batalla de Quera desde hace unos años se han convertido -por iniciativa de organizaciones locales- en escenarios en donde a través de ceremonias se conmemora dicho acontecimiento.

²³ La siguiente afirmación de Belli, Slavutsky y Rueda (2007:18) va en la línea de lo que venimos planteando: “La memoria actual de los puneños reconoce la existencia de una tradición de resistencia representada por el ideal comunitario y el reconocimiento de la territorialidad y formas de organización social y política propias a lo largo del tiempo”. Cabe una precisión en torno a la noción de sociodisea acuñada por Yudi. No debemos confundirla con el término “sociodicea”, el cual remite a la justificación social del mal y del daño (Giner, 2013), pues a diferencia de esta, aquella se inspira en el relato homérico, convertido en un relato épico colectivo, en una narrativa de cuestionamiento a la dominación por parte de la subalternidad.

²⁴ Sobre la batalla de Quera ver Cardozo (2011).

Otro suceso rememorado por los agentes locales como acontecimiento importante de sus luchas, es el denominado “Malón de la paz” de 1946. Como ya hemos dicho, en aquel año cientos de pobladores de la Puna jujeña y de Salta partieron desde Abra Pampa hasta la ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de que el Gobierno de la Nación les entregue la propiedad de las tierras que habitaban. Al igual que en el caso de la Batalla de Quera, la rememoración del Malón de la paz ha sido promovida por diferentes organizaciones e instituciones locales, así lo señaló uno de nuestros entrevistados, el cual se desempeñaba como docente en Abra Pampa:

metí en la educación el Malón de la Paz, está declarado por ejemplo de interés provincial, lo último que hice fue que se dé asueto departamental y me han dicho ‘¿por qué mierda tenemos asueto el 15 de mayo?’ Porque habían ahí unos abrapampeños, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, fueron casi 100 personas de Abra Pampa, otros 77 de Salta. Luego me decían ‘che, mira mi abuelo también ha luchado’, tenía esa convicción la gente de antes. Yo le decía una vez a mi hija, ‘mira, está buenazo el éxodo jujeño²⁵, pero el abuelo salió desde Miraflores –salieron desde la casa de mi abuelo- hasta Buenos Aires mamita’ le dije. Está bien el éxodo, pero lo de nosotros también fue una hazaña... ¡Qué amor a la tierra! ¡Qué capos esos tipos! Y nosotros nos morimos por algunas mínimas cosas (Fernando Cayo, ex dirigente de la Multisectorial de Abra Pampa).

Esta cita nos muestra como los recuerdos familiares, personales, se entrecruzan como “fuentes” para elaborar una sociodisea, una historia signada por la lucha, por la reivindicación de la población de la Puna de la propiedad de sus tierras. Los “maloneros”, como también se les conoce en la Puna, son nuevamente los abuelos, protagonistas de una historia que, a diferencia del “éxodo jujeño”, no forma parte del canon historiográfico oficial. El Malón de la paz es en tal sentido, una historia de los subalternos.

Como ya hemos dicho en este artículo, el Malón de la paz de 1946 fue rememorado en el año 2006, a partir de la organización de un conjunto de acciones de protesta llevadas a cabo por organizaciones locales y comunidades originarias, demandando al gobierno de la provincia la entrega de la propiedad de las tierras y la participación de las comunidades originarias en la toma de decisiones en torno a los nuevos proyectos mineros que buscaban ejecutarse. La siguiente cita ejemplifica la

²⁵ El éxodo jujeño ocurrió en el mes de agosto de 1812, en el marco de las guerras por la independencia. Ante el inminente avance de las tropas realistas hacia lo que actualmente constituye el norte de la República Argentina, el General Belgrano ordenó a la población jujeña dirigirse hacia Tucumán, llevando consigo todo lo que fuera posible y destruyendo aquello que no podía transportar. Sobre el éxodo jujeño ver Brienza (2012).

forma en que los agentes locales enlazaron los acontecimientos de 1946 con aquéllos del año 2006:

En el año 2006 se realizó el segundo Malón de la paz. El primer Malón de la paz fue en 1946 durante la presidencia de Perón que en mayo está cumpliendo setenta años. Los abuelos de la Puna cansados de la explotación de los terratenientes caminaron desde acá hasta Buenos Aires para que les devuelvan las tierras y en el año 2006 sigue la lucha territorial y se hace un segundo Malón de la paz y consistió que todas las comunidades caminaron desde su territorio hasta Purmamarca, lo cual duró más de tres días. En ese momento, en el año 2006 había el Consejo de Participación Indígena y ellos demandaron al Estado porque no cumplía con la entrega de tierras como estipulaba el artículo 75 [de la Constitución], no se estaba entregando, entonces demandan al Estado, pasan 3 años y la justicia da la razón a las comunidades, sale el fallo a favor de las comunidades, obliga al gobierno a entregar los territorios, el gobierno apeló y ese fue el detonante del segundo Malón de la paz (Sergio Chambi, Consejo Departamental de Comunidades de Cochinoca).

El nodo articulador de sentido de estos dos acontecimientos es la lucha por el territorio. Pero hay una mutación, un cambio entre el malón del 46 y del 2006 que es sencillo de percibir si se revisa el archivo fotográfico de ambos acontecimientos: hay una mutación en los símbolos. En el malón de 1946 jujeños y salteños se trasladaron hasta Buenos Aires enarbolando banderas argentinas, cargando imágenes de la Virgen de Copacabana, de San Jerónimo y mostrando fotografías de Juan Domingo Perón.²⁶ En el registro del segundo malón del 2006 no solo se encontrará banderas argentinas, sino también wipalas. Esta bandera indígena nos revela ciertos procesos de re-etnización que intervienen en los usos de la memoria colectiva.

Como podemos deducir de lo hasta aquí expuesto, la construcción y circulación de la memoria colectiva en torno a las luchas de la población de Abra Pampa, no fue el resultado de una mera espontaneidad. En esta labor cumplió un rol relevante cierta *intelligentsia*, generando articulaciones de sentido que permitieron presentar el “No a la megaminería” como un nuevo capítulo de una sociodisea en donde las comunidades originarias son las protagonistas. Presentación que implicó a su vez la actualización -a través de las acciones colectivas y la politización de la identidad étnica- de dichas memorias colectivas (Belli, Slavutsky y Rueda, 2007).

²⁶ Así lo afirma el siguiente testimonio de Sergio Zerpa de Abra Pampa: [mi padre] decía [a la caravana le] han puesto Malón, pero ellos se consideraban Argentinos, pocas veces te decían nosotros somos bien indios. Lo de Malón es bien sureño. Siempre, dice, que iba adelante la bandera, una bandera Argentina e iban los santos y la cruz, delante de la caravana decían...” (Belli, Slavutsky y Rueda, 2007:107).

La dignidad del pueblo espinareense

La historia social y política contemporánea de Espinar puede ser estudiada a partir de dos acontecimientos: la reforma agraria iniciada en 1969 y el inicio de la explotación minera a mediados de la década de los ochenta. El estudioso podría tomar esta decisión analítica ya sea vía la revisión de la bibliografía especializada sobre Espinar o a través de los diálogos que uno puede entablar con los pobladores en torno a la historia reciente de la localidad. A diferencia de Abra Pampa, las narrativas de los agentes locales de Espinar sobre sus luchas no se articularon en torno a la demanda por la propiedad de las tierras, puesto que esta demanda se resolvió a través de la reforma agraria. Lo que encontramos en Espinar es la construcción de un sujeto colectivo, la evocación de un personaje rebelde que se hace presente en sus memorias colectivas: el “pueblo espinareense”.

Entre los legados de la reforma agraria en Espinar se encuentran la propiedad comunitaria de la tierra y la organización campesina. La reforma definió la agenda pública de Espinar y a las principales organizaciones que surgieron en la provincia durante dicho proceso, las cuales posteriormente constituyeron a la FUCAE. Las luchas por la tierra supusieron también usos de la memoria, tal como lo demuestra la reivindicación por parte de pobladores locales de Domingo Arca Cruz, figura emblemática de las luchas campesinas contra el régimen de haciendas durante las primeras décadas del siglo XX. Evocando este tipo de personajes y luchas a través de representaciones artísticas y cantos, los campesinos espinarenses desafiaron su posición de subordinación (Glave, 1990). Ahora bien, la llegada de la minería replanteó la agenda pública local y motivó ciertas actualizaciones en la memorias colectivas, así como nuevas formas de organización, tales como el Frente Único de Defensa de los Intereses de Espinar-FUDIE.²⁷

La llegada de la minería a la localidad está registrada en la memoria colectiva (y personal) no solo como una experiencia de modernización, sino principalmente como el punto de partida de la desigualdad social en Espinar. La relativa homogeneidad social de la localidad se vio trastocada por las nuevas relaciones sociales y económicas que generó la empresa minera. Una pobladora local recuerda de la siguiente manera estos cambios generados por el inicio de la actividad extractiva:

Con la construcción, la mina hizo una escuela fiscal dentro del campamento para los hijos de los trabajadores, se vinieron con familia y todo. Ahí nacieron niños que no son espinarenses, convocaron a profesores, a profesionales como profesores, policías, médicos, tenían su propia posta médica, todo bien atendido ahí, pero la gente del pueblo no, no teníamos esa posibilidad de que si nos enfermamos que nos operen ahí, teníamos que trasladarnos a Arequipa o a Cusco [...] Ahí

²⁷ Constituido en 1988, el FUDIE congrega a las más importantes organizaciones sociales de Espinar. Tiene como objetivos principales la defensa de los derechos al acceso a la tierra y la denuncia de los abusos de las autoridades gubernamentales (Zeisser, 2015).

empieza un poco la desunión hasta el día de hoy porque son los afectados los que directamente se benefician con la educación de sus hijos, su familia, su empresa, todo eso y a la gente del pueblo le tiene que costar mucho sacrificio (Indira Miranda, micro-empresaria de Espinar. Cursivas nuestras).

La pobladora local plantea dos imágenes de Espinar radicalmente distintas según la presencia o no presencia de la minería: unida y dividida. Según esta narrativa, la minería habría generado desigualdad social e incluso resentimiento de los no beneficiados hacia los beneficiados por la política de responsabilidad social de la minera de turno. Situación de desigualdad social que no solo habría perdurado, sino que se habría acentuado con el paso del tiempo según diferentes miembros de las principales organizaciones sociales y las comunidades campesinas de Espinar.

La minería aparece en las narrativas locales como un “parte aguas”, como un antes y un después de la historia de Espinar, trayendo consigo nuevos dilemas y tensiones. Por un lado, este proceso de cambio aparece trastocando las interacciones entre las comunidades campesinas y de éstas con quienes pueblan el área urbana de la localidad. Por otro lado, generando novedosos vínculos sociales entre la población local en su conjunto y la empresa minera. Dos características aparecen en las descripciones que los agentes locales realizan de estos últimos vínculos, las cuales según ellos se han reproducido a lo largo del tiempo: dañan y generan indignación. El reconocimiento del daño sufrido en la salud y el medio ambiente, opera incluyendo a otro destinatario en la crítica: el Estado nacional. Desde la perspectiva de las organizaciones sociales y las comunidades campesinas, el Estado termina velando por los intereses de la empresa antes que por sus condiciones de vida. La indignación por su parte, implica un fenómeno que a nivel social motiva el cuestionamiento de los vínculos de la empresa minera con la población local, animando así en los agentes locales la decisión de transformar dicha situación. Una ex autoridad municipal describió de la siguiente manera las condiciones en las que la empresa minera se había asentado en Espinar:

[A su llegada la empresa] funcionaba como un enclave minero, tenían grandes ganancias pero había un despilfarro, un manejo burocrático, clientelista y la verdad que era contraproducente. Para conversar con la empresa había que ir hasta Lima, aquí solo había un gerente de operaciones, a veces ni el gerente de operaciones si no un gerente de menor jerarquía, pero para conversar con el presidente del directorio había que ir a Lima. Esa vez también apoyaban con un techito a un centro educativo y era para publicarlo casi en titulares de un medio de prensa, aquí esa vez contribuyeron a colocar una cabina comunitaria, con una parte menor aportaron para hacer una pequeña infraestructura, y eso era titular para decir que Espinar tiene teléfono ¡una cabina comunitaria! Entonces hacían una cosita y realmente... era para indignarse, la población se indignó

tremendamente esa vez (Gabriel Condori, ex autoridad municipal).

Por este motivo, no llama la atención que uno de los actos públicos más emblemáticos en el calendario cívico de la localidad rememore el que tal vez sea el principal acontecimiento de su historia política reciente y que involucra a la actividad minera: el 21 de mayo, día de “la dignidad espinarenses”. Cada 21 de mayo las diferentes organizaciones sociales y la población en general, realizan un conjunto de actividades públicas recordando los sucesos de dicha fecha. Como ya hemos señalado, el 21 de mayo de 1990 ocurrió la primera toma de las instalaciones mineras en Espinar, realizada como medida de protesta por las organizaciones sociales y la población local en general. Además de la toma de las instalaciones, los responsables locales de la empresa fueron tomados como rehenes. Los recuerdos en torno a estos acontecimientos adquieren las características de un relato épico, en el cual –tomando las palabras de una ex autoridad municipal – el pueblo de espinar en defensa de su “dignidad” terminó con los abusos perpetrados por la empresa minera de la época:

Por eso el 21 de mayo se levantó todo el pueblo, Yauri se ha quedado como un cementerio esa vez, todos se volcaron a la mina, autoridades, jueces, fiscales, aparentemente cumpliendo su rol pero apoyando el paro, por eso se conmemora ese día y como acto simbólico la presión social, encabezada por el alcalde esa vez, se logró paralizar toda la maquinaria, porque habían maquinarias que nunca paraban, entonces se logró presionar, entrar hasta el fondo de las operaciones y se logró paralizar. Esos aspectos donde sale la población, bueno ese recuerdo se declaró con justa razón como un día histórico, como el día de *la unidad del pueblo*, día de la dignidad... (Gabriel Condori, ex autoridad municipal. Cursivas nuestras).

Ese día tomaron el campamento minero, hicieron una gran revuelta en la mina y obligaron a que el Estado comparta electricidad en el casco urbano, porque antes la electricidad solo llegaba a la empresa, al municipio y a la plaza creo, no había luz para la población. Lograron además carretera, mejorar la infraestructura de la vía que venía de Sicuani que era un desastre, entonces fue ahí que se dieron cuenta que solo haciendo eso se podía lograr cosas en beneficio de ellos. *Por eso cada 21 de mayo de cada año siempre inician una movilización o hacen una actividad pública conmemorativa.* En el 93 hubo otro reclamo y así, era una constante entre la mina y la población (Joaquín Poma, ex integrante de la Vicaría de la Solidaridad. Cursivas nuestras).

La acción colectiva de la población local es presentada como aquello que posibilita la unidad del pueblo, reverso de lo que generaría la actividad minera. Las líneas finales de nuestra última cita hacen referencia a cómo el 21 de mayo de cada año sirve de referencia a los agentes locales para ensayar nuevas acciones colectivas y plantear nuevas demandas a la empresa minera. Esto se puede efectivamente constatar si revisamos la cronología de al menos los últimos diez años del conflicto minero en Espinar.

El lugar en donde la población local rememora la toma de las instalaciones de la empresa minera cada 21 de mayo y se inviste como “pueblo” es la “Plaza de Armas”, principal plaza pública de Espinar, en donde se encuentra el local municipal y la iglesia matriz. A diferencia de las memorias colectivas que analizamos en Abra Pampa, en Espinar las luchas no son representadas en el marco de una sociodisea, sino que representan las acciones colectivas necesarias para alcanzar ciertos “logros”, condiciones de subsistencia más favorables para la población local.

La amplia circulación en Espinar de esta memoria colectiva basada en los acontecimientos del 21 de mayo de 1990, demandó de la intervención en diferentes ámbitos públicos de dirigentes, autoridades y líderes sociales que han cumplido un rol relevante en la sedimentación de esta memoria. Algunos de los protagonistas del paro indefinido de mayo de 2012, habrían sido quienes se encargaron de mantener en la memoria colectiva local la gesta de mayo de 1990. Un ex funcionario municipal planteó esta vinculación en términos generacionales:

La primera toma de la mina fue el 21 de mayo de 1990, Mollohuanca (Alcalde en el 2012), Huamán (Presidente del FUDIE en el 2012), todos estos dirigentes eran la juventud de ese entonces, de ahí viene la historia, bueno esa es mi explicación personal. Es esta generación la que se encarga de acuñar este 21 de mayo en la historia de Espinar hasta el día de hoy y se elige esa fecha por eso también y se anuncia dos meses antes y se dice a la mina “o cumples, o nos sentamos a dialogar o te tumbo el kiosko”, esa fue la figura (Carlos Huamaní, ex funcionario municipal).

Esta relación entre la memoria en torno al 21 de mayo del 90 y el accionar de dirigentes, autoridades y líderes sociales, ejemplifica muy bien la forma en que la memoria colectiva opera en las identificaciones políticas, en tanto un acontecimiento del pasado sirve para cohesionar a las organizaciones sociales y las comunidades campesinas críticas a la expansión de la minería a gran escala. Este acontecimiento rememorado se inscribió en una superficie identitaria específica: la identidad campesina, sedimentada en torno a la experiencia de la reforma agraria. Pero a su vez, actualizó a ésta al implicar nuevas demandas, articulaciones y repertorios de acción colectiva. La “unidad del pueblo espinareño” en el contexto de desigualdad

social y división generada por la actividad minera, demandó la superación de la frontera identitaria campesina, incluyendo a otros agentes locales y no locales.²⁸

Conclusiones

Frente a la expansión de la minería a gran escala, diferentes agentes de las localidades andinas de Abra Pampa y Espinar ensayaron una serie de respuestas políticas. Estas respuestas tuvieron que hacer frente a una heterogeneidad de opiniones y posiciones frente a la expansión minera, puesto que en ninguno de los casos existía algo así como un consenso a priori sobre las ventajas o desventajas de la actividad extractiva. Respuestas que, como hemos mostrado, fueron disímiles, en tanto en Abra Pampa se planteó la consigna del “No a la mega-minería”, mientras que en Espinar se buscó mejores condiciones de convivencia con la actividad minera.

Las respuestas que los agentes locales de Abra pampa (organizaciones sociales y comunidades originarias) y Espinar (autoridades locales, comunidades campesinas y organizaciones sociales) ensayaron frente a la expansión de la minería a gran escala, implicaron procesos de identificación política, en los cuales los usos de memorias colectivas cumplieron una función relevante.

Los agentes locales buscaron dar respuestas a los desafíos que planteó la expansión de la minería a gran escala brindando ciertos sentidos al pasado compartido. En Abra Pampa encontramos la rememoración de una “sociodisea indígena”, constituida por diferentes acontecimientos, figuras y lugares que dieron cuenta de las luchas de los pueblos originarios contra aquellos que amenazaron sus territorios. A esta narrativa los agentes locales articularon sus resistencias a la expansión de la minería a gran escala, denunciando secuelas de desocupación, pobreza y contaminación. En Espinar los usos de la memoria se caracterizaron por la apelación a la imagen de un “Pueblo rebelde” presente desde las luchas por la reforma agraria. “Pueblo” que frente a la expansión de la minería a gran escala fue figurado por los agentes locales defendiendo su dignidad ante las desigualdades sociales y los daños ambientales generados por la actividad extractiva. Estas memorias colectivas posibilitaron la apelación a ciertas prescripciones en la constitución de las respuestas de los agentes locales a la expansión de la minería a gran escala.

Bibliografía

- Aboy Carlés, G. (2001), *Las dos fronteras de la democracia argentina: la reformulación de las identidades políticas de Alfonsín a Menem*. Rosario, Homo Sapiens.
- Albó, X. (2002), *El equilibrio de las cosas inestables: Pueblos indios en la política*, La Paz, Plural Editores.

²⁸ Para esta superación de la frontera identitaria campesina, los agentes locales también apelaron a la identidad étnica de la zona, la identidad K’ana.

- Alimonda, H. (2012), "Desarrollo, posdesarrollo y "buen vivir": reflexiones a partir de la experiencia ecuatoriana", *Revista Crítica y Emancipación*, CLACSO, año IV, N° 7, 27-58.
- Alvarez Huwiler, L.; Godfrid, J. y Duárez, J. (2015), "Expansión minera y protesta social en Argentina y Perú", *Revista Investigaciones Sociales*, Instituto de Investigación Histórico Sociales de la UNMSM, Vol. 19, N° 35, 169-186.
- Belli, E.; Slavutsky, R. et al. (2007), *Malón de la Paz, una historia, un camino*, Buenos Aires, Instituto Interdisciplinario de Tilcara.
- Cáceres, E. (2013), "De corredor minero a proyecto regional: Espinar y las provincias altas del Cusco", en: Cáceres, E. y Rojas, J. *Minería, desarrollo y gestión municipal en Espinar*. Lima, OXFAM y SER, 15-93.
- De Echave, J. (2009) "El caso Tintaya: entre el diálogo y la protesta", en: De Echave, J.; Diez, A. et al. *Minería y conflicto social*. Lima, IEP, CIPCA, CBC y CIES, 125-147.
- De Echave, J.; Keenan, K. et al. (2005), *Los procesos de diálogo y la administración de conflictos en territorios de comunidades: el caso de la mina Tintaya en el Perú*. Lima, CooperAcción.
- Glave, M. (1990). "Los campesinos leen su historia: un caso de identidad recreada y creación colectiva de imágenes (Los comuneros canas 1920-1930)", *Revista de Indias*, Madrid, Vol. 50 No 90., 809-852.
- Grupo Propuesta Ciudadana (2014). *Concesiones mineras en el Perú. Análisis y propuestas de política*. Lima: Grupo Propuesta Ciudadana.
- Jelin, E. (2002), *Los trabajos de la memoria*, Madrid, Siglo XXI.
- Karasik, G. (2006), "Cultura popular e identidad", en: Teruel, A. y Lagos, M. (dir.) *Jujuy en la historia. De la colonia al siglo XX*. Jujuy, EDIUNJu, 467-489.
- Laclau, E. y Zac, L. (1994), "Minding the gap: the subject of politics", en: Laclau, E. (Ed.) *The making of political Identities*. Gran Bretaña, Editorial Verso, 11-39.
- Lagos, M. y Gutiérrez, M. (2006), "Dictadura, democracia y políticas neoliberales. 1976-1999", en: Teruel, A. y Lagos, M. (dir.) *Jujuy en la historia. De la colonia al siglo XX*. Jujuy, EDIUNJu, 241-293.
- Marcel, J. y Mucchielli, L. (2011), "En el fundamento del lazo social: la memoria colectiva según Maurice Halbwachs", en: Halbwachs, M. *La memoria colectiva*. Buenos Aires: Miño y Dávila Editores, 25-63.
- Pollak, M. (1992), "Memória e identidade social", *Revista Estudos Históricos*, Fundação Getúlio Vargas, Vol. 5, N° 10, 200-212.
- Ricoeur, P. (2000), *La memoria, la historia, el olvido*, Argentina, Fondo de Cultura Económica.
- Salas, G. (2008). *Dinámica social y minería. Familias pastoras de puna y la presencia del proyecto Antamina (1997-2202)*. Lima: IEP.
- Yeckting, F. y Ramírez, I. (2012), "Antropología ecología y minería en las comunidades del área andina", *Revista Española de Antropología Americana*, Universidad Complutense de Madrid, vol. 42, núm. 1, 187-204.
- Yudi, R. (2015), *Kollas de nuevo. Etnicidades, trabajo y clasificaciones sociales en los Andes de la Argentina*, Argentina, Purmamarka Ediciones.
- Zeisser, M. (2015), *La experiencia de la mesa de diálogo en Espinar 2012-2013*. Lima: Ford foundation, OXFAM y CooperAcción.



La representación social de los residuos sólidos domiciliarios en Comodoro Rivadavia¹

Natalia Valeria Narvaez²

Resumen

La ciudad de Comodoro Rivadavia posee una tasa de producción de residuos sólidos urbanos mayor a la media nacional, y sus habitantes carecen de una cultura de valorización de los mismos. Esta investigación se realiza desde la Teoría de las Representaciones Sociales con el objetivo de indagar cómo esta población construye socialmente la representación que tiene de los residuos sólidos domiciliarios y apunta a enriquecer las políticas de educación y comunicación ambiental de planes de GIRSU local. Se exploró la Representación Social de los residuos sólidos domiciliarios a través del método técnico- experimental del enfoque estructural. La recolección de datos se realizó a través de técnicas como: asociación de palabras, encuestas y análisis de la prensa escrita. Los resultados muestran que los sujetos tienen un sentido utilitarista en su relación con los residuos y los discursos puestos en circulación poco invitan al ciudadano a participar o sumarse a prácticas sostenibles. Se estaría en presencia de periodismo de escasa calidad que abusa en el uso de fuentes oficiales de información, transmitiendo creencias sociales uniformes y coercitivas.

Palabras claves

representación social - comunicación - asociación de palabras - RSU - GIRSU

Social representation of solid household waste in Comodoro Rivadavia

Abstract

The city of Comodoro Rivadavia possesses a larger urban solid waste generation rate than the national average, and its citizens lack a habit of valorization of such waste. This research was based on the Social Representations Theory in order to enquire how this population socially constructs its representation of household solid waste and enrich the educational and environmental communication policies of local IUSWM. The SR of household solid waste was scanned by means of the technical and experimental method of the structural approach. The collection of data was carried out through different techniques such as: word association, surveys and analyses of print media. The results reveal that the sample subjects portray a utilitarian approach in the way they relate to waste and the statements brought into circulation fail to invite the citizens to get involved and take part in sustainable practices. Apparently, we are dealing with low quality journalism that abuses the use of official sources of information, conveying standard and coercive social beliefs.

Keywords

social representation - communication - word association - USW - IUSWM

¹ Reseña de la tesis de grado de Licenciatura en Gestión Ambiental "Representación social de los residuos sólidos domiciliarios en Comodoro Rivadavia. Aportes a la comunicación ambiental de la GIRSU local" Año 2015. Presentado en las "I Jornadas Patagónicas de Gestión Ambiental" en Noviembre/2015 y luego en el "Taller Internacional Recursos Naturales y desarrollo local: sostenibilidad, cohesión social y resiliencia" en Noviembre/2017

² Licenciada en Gestión Ambiental por la Facultad de Humanidades y Ciencias. Sociales- Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Email: natalia-narvaez@hotmail.com

La gestión de residuos en Comodoro Rivadavia

El éxito de toda acción educativa encarada con una comunidad determinada dependerá de la capacidad que los educadores ambientales tengamos de escuchar (Goldstein y Castañera, 1999: 39)

Entre los desafíos más importantes que se plantean las grandes poblaciones metropolitanas, se encuentra la problemática del manejo de los residuos. Y la ciudad de Comodoro Rivadavia cuenta con 177.038 habitantes (INDEC, 2010) y una tasa de generación de residuos sensiblemente mayor que la media nacional³. Estos volúmenes diarios se disponían (sin tratamiento alguno) en el basural a cielo abierto de la ciudad⁴. En un sitio que debido a la expansión urbana experimentada en las últimas décadas ha quedado entre la zona de expansión industrial y la de uso residencial. Considerando además que una fracción importante de estos residuos sólidos domiciliarios no llegaba a ese destino, contribuyendo a la generación y proliferación de microbasurales.

En 2015 desde el municipio local se elaboró un programa tendiente a resolver la problemática, la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos de Comodoro Rivadavia. Para la implementación exitosa del programa, junto al uso de las infraestructuras asociadas, es necesario contar con el compromiso y el conocimiento de la sociedad local. Esto se lograría a través del diseño e implementación de planes de educación y comunicación ambiental, construidos con el objeto de promover cambios de actitud y de comportamiento con respecto al ambiente.

El fundamento metodológico para los procesos educativos debe ser facilitar el aprendizaje a partir del sujeto que aprende, es decir “partir del otro”. Desde sus intereses, representaciones, interrogantes e ideas previas se deberían seleccionar los contenidos de la educación ambiental (Goldstein, Castañera, 1999).

Es por ello que ante la falta de esta información se plantea efectuar este estudio desde la Teoría de las Representaciones Sociales.

Emprender estudios acerca de la representación de un objeto social –los residuos o la basura en este caso– permite reconocer los modos y procesos de constitución del pensamiento social, por medio del cual las personas construyen y son construidas por la realidad social. Además nos aproxima a la “visión de mundo” que las personas o grupos tienen, pues el conocimiento del sentido común es el que la gente utiliza para actuar o tomar posición ante los distintos objetos sociales (Araya Umaña, 2002).

Este tipo de estudios puede constituir una línea para la planeación y la práctica de la educación ambiental, ya que a diferencia de otras formas de

³ Según estudios realizados en 2011 por la consultora IATASA (2011) la ciudad de Comodoro Rivadavia genera residuos a razón de 1,099kg/hab/día, mientras que a nivel nacional Mazzeo (2012) estima una media de 0,9 kg/hab/día.

⁴ Como se referencio anteriormente la investigación se desarrolló en el año 2015, y la gestión de residuos municipal sufrió modificaciones posteriores con la puesta en marcha de la planta de tratamiento de residuos y el vertedero controlado anexo para disposición del rechazo. Sin embargo en materia de sensibilización aún los ciudadanos tienen muchas oportunidades de mejorar su contribución.

conocimiento de sentido común, es lo que permite a las personas conducirse ante los distintos estímulos del medio ambiente y -a su vez- a actuar sobre éste (Flores, 2013).

Teoría de las representaciones sociales

Los individuos y los grupos, (...) producen e incesantemente comunican sus representaciones y soluciones específicas a las preguntas que se plantean a sí mismos. En las calles, cafés, (...) las personas analizan, comentan, elaboran “filosofías” espontáneas y no oficiales que tienen un impacto decisivo en sus relaciones sociales, sus elecciones (...). Los eventos, la ciencia y la ideología simplemente les proveen “alimento para el pensamiento (Moscovici, 2001: 30).

El término representación ocupa un lugar importante en psicología y en ciencias humanas. Sobre todo aparece ligada al concepto de percepción (Navarro Carrascal, 2008). En 1961 Moscovici propone la teoría de las Representaciones Sociales, constituyendo una manera particular de enfocar la construcción social de la realidad. Parte del supuesto de que cada grupo humano, en una época determinada, codifica y decodifica su experiencia del mundo de manera específica, llevando la marca de las relaciones sociales. En ese sentido toda sociedad construye, de forma particular, la realidad que experimenta, en aras de apropiársela para afrontarla, dominarla o acomodarse a ella (Navarro Carrascal, 2008).

Acercándose a brindar una definición, Abric (2001 p.12) sostiene que “una representación siempre es la representación de algo para alguien”. Y continúa: no existe a priori una realidad objetiva, sino que toda realidad es representada, apropiada por el grupo o individuo y reconstruida en su sistema cognitivo, integrada en su sistema de valores que depende de su historia y del contexto social e ideológico que le circunda. Esa realidad apropiada y reestructurada por el individuo constituye la realidad misma (Abric, 2001).

Lo social de una representación proviene de su contribución al proceso de formación de las conductas y de orientación de las comunicaciones sociales. Estas últimas serían difícilmente posibles si no se desarrollaran en el contexto de una serie, suficientemente amplia de representaciones compartidas (Araya Umaña, 2002). El calificativo de social entonces proviene de acentuar la función que cumple esa representación, más que en el agente que la produce (Moscovici, 1979).

Enfoques para el abordaje de las Representaciones Sociales.

En este trabajo se han abordado dos de las corrientes de investigación dentro de las que se han perfilado en el estudio de representaciones sociales: el modelo etnográfico y estructural.

- Modelo etnográfico, (o procesual)

Desarrollada por Jodelet se centra en el aspecto constituyente del pensamiento, que son los procesos. Para acceder al contenido de una representación,

el procedimiento que propone este enfoque es la recopilación de material discursivo producido en forma espontánea (conversaciones), o bien inducido por medio de entrevistas o cuestionarios. Material que es sometido a tratamiento con las técnicas clásicas de análisis de contenido, que proporciona una serie de indicadores para reconstruir el contenido de la representación social (Araya Umaña, 2002).

- Enfoque estructural de las representaciones sociales

Formulada por Abric privilegia el funcionamiento cognitivo y del aparato psíquico, postula que el aspecto constitutivo del pensamiento son los productos o contenidos.

Esta propuesta postula que la estructura interna de la representación se constituye por:

- a) un núcleo central donde se ubican los significados que organizan la representación, se encuentran los elementos más consensuados y estables (Navarro Carrascal, 2008) como valores y normas. Que son la base común propiamente social y colectiva que define la homogeneidad de un grupo.
- b) Y un conjunto de elementos periféricos que se organizan en torno al núcleo central, y resultan del anclaje de la representación a una realidad específica. Constituyen una interface entre los elementos del núcleo y el contexto específico en que la representación se construye. Su determinación es más individualizada y contextualizada, más asociado a las características individuales y al contexto inmediato y contingente en que están inmersos los sujetos (Abric, 2001). Funciona como un sistema de defensa del núcleo central frente a los cambios del contexto social (Navarro Carrascal, 2008).

Operacionalización de esta teoría

De manera operacional Moscovici define una representación social por sus tres dimensiones: informaciones y actitudes (su contenido) y el campo de la representación (su organización o estructura interna). Estas dimensiones son las variables que se estudiaron en el presente trabajo, de manera que se definen a continuación junto a los métodos de recolección de datos asociados:

Figura 1
Dimensiones de las representaciones sociales.

Componentes de la RS	Dimensiones de las RS	Implica determinar:	Métodos de recolección
Contenido	<u>Actitud</u> : orientación en la conducta de las personas. Se sitúa hacia el polo de las respuestas, ya sea positiva o negativa, favorable o desfavorable. Se identifica en el discurso, a través del valor de las categorías lingüísticas. Expresa el aspecto más afectivo de la representación, por ser la reacción emocional acerca del objeto o del hecho.	¿Qué se hace? ¿Cómo se actúa?	Interrogativos: entrevista, cuestionario, tablas inductoras, dibujos y soportes gráficos, aproximación monográfica.
	<u>Información</u> : conocimientos que tienen las personas o grupos sobre un objeto o situación social determinada. La cantidad y calidad de la información es mediatizada por las pertenencias grupales y las ubicaciones sociales. Sus propiedades serán diferentes en tanto si surge del contacto directo con el objeto o si es recogida por medio de la comunicación social.	¿Qué se sabe?	Asociativos: asociación libre, carta asociativa.
Estructura interna o Campo de la representación	Ordenación y jerarquización de los elementos que contenido de las RS.	¿Qué se cree? ¿Cómo se interpreta?	De identificación de lazos entre elementos: constitución de pares de palabras, comparación pareada, constitución de conjunto de los términos. De jerarquización de los ítems: tris jerarquizados sucesivos, elecciones sucesivas por bloques.

Elaboración propia. (Fuentes: Araya Umaña, 2002 y Abric, 2001)

Las representaciones sociales ambientales

Durante la década de 1970 psicólogos ambientales como Ittelson pusieron en evidencia que la gente “construye” su propia concepción del ambiente (incluyendo elementos cognitivos y afectivos interrelacionados) determinando así su interacción con ese medio donde vive. Una representación ambiental puede ser limitada o distorsionada con respecto a la realidad ambiental, ya que la presencia o ausencia de ciertos caracteres medioambientales pueden ser de gran importancia para ciertas

personas o ciertos grupos sociales, mientras que para otros grupos no tiene ninguna importancia (Goldstein, Castañera, 1999)

Puede resumirse las representaciones ambientales como aquellas construcciones colectivas o significaciones culturales que las poblaciones dan a sus prácticas sobre los recursos naturales y a las relaciones con su medio (Martínez, 1997 en Goldstein, Castañera, 1999).

La cuestión de los residuos que introducimos al medio

Cabe primero hacer una diferenciación conceptual entre los residuos y la basura. Los primeros son materiales que no pueden ser usados para cumplir la función que tenían al ser creados, sin embargo tienen la capacidad de ser reutilizados o convertirse en materia prima para un nuevo producto. En cambio, se considera basura a aquellos desechos que no pueden reusarse de ninguna forma luego de que cumplieron con su función y deben ser destinados a disposición final

Ya a comienzos de los años '70, aparece la llamada gestión integrada (GIRSU o IUSWM), que se destacó por la propuesta de sostenibilidad de los recursos naturales, mediante la disminución de la generación de residuos y de su máximo aprovechamiento. El nuevo criterio fue direccionado hacia el estudio y análisis de los materiales existentes en los residuos sólidos urbanos, susceptibles de ser valorizados, a través del reciclado y reutilización.

En esta investigación se trabajó exclusivamente con la fracción de residuos sólidos domiciliarios, es decir aquellos que se generan típicamente en los hogares.

Objetivos y método

En virtud de la necesidad de elaborar planes de educación y comunicación ambiental eficaces para la implementación de una GIRSU, que estén fundamentados en un aprendizaje a partir del sujeto que aprende -a "partir del otro"- se propuso: indagar cuáles son las representaciones que los ciudadanos comodorenses construyen socialmente sobre la gestión de los residuos sólidos domiciliarios.

Se comenzó por explorar los conocimientos que estos sujetos poseen sobre la gestión de los residuos sólidos domiciliarios, caracterizar sus actitudes en el proceso de generación y disposición de sus residuos, además de brindar una aproximación de los medios a través de los cuales esta población se informa sobre esta problemática.

Como alienta Moscovici (1979) a emplear un politeísmo metodológico, se utilizaron diferentes metodologías de abordaje, ya que eso permitiría evaluar distintos aspectos de las representaciones sociales.

El método que se utilizó para explorar las RS de los residuos sólidos domiciliarios es el Técnico- experimental del enfoque estructural (Abric, 2001), que implica identificar el contenido y la estructura de la RS, complementado por técnicas cualitativas del modelo procesual (Jodelet, 1984).

Incluyendo además la revisión de antecedentes en investigaciones previas y sobre la gestión municipal de los residuos.

Población de estudio

La Coordinación General para la GIRSU⁵ propone una división del público para desarrollar una estrategia coherente de comunicación. Para este trabajo se abordó el público denominado Grupos familiares. Definido como familias tipo de todos los niveles socioeconómicos, integradas por sujetos socioconcientes).

Se consideró *Unidad de análisis* ideal a sujetos de entre 21 y 50 años de edad que forman grupos convivientes. Por ser quienes generalmente manipulan los residuos sólidos domiciliarios generados en los hogares. Se tomó una *muestra no probabilística* (Sampieri Hernandez, 2003) de dicha población, de acuerdo a los siguientes *parámetros muestrales*: el sujeto de estudio a considerar será un integrante adulto de cada grupo conviviente con niños que cursan el primer ciclo de la escuela primaria (pública y privada) de la ciudad.

Estructura interna y campo de la representación

Para abordar esta dimensión de la representación social se aplicó la técnica de asociación de palabras. Donde se empleó "basura" como término inductor, ya que responde a una palabra del uso habitual de los comodorenses (en los diálogos cotidianos es común escuchar "sacar la basura", "el camión de la basura", "¿pasó el basurero?")⁶.

La aplicación de esta técnica permite poner de manifiesto el campo semántico propio de una representación y su estructura jerárquica.

Los datos fueron procesados con el software francés Evocation 2005. A través del cual se busca descubrir la organización del contenido de la representación social, cruzando dos indicadores: la frecuencia de aparición de estos ítems (definido como el rango promedio calculado sobre el conjunto de la población). Este análisis genera un cuadro de dos entradas como el de la figura 2.

Figura 2
Jerarquía estructural: análisis prototípico de la representación social

		Rango promedio	
		Débil	Fuerte
Frecuencia	Fuerte	Núcleo central	Periférico 1
	Débil	Periférico 2	Periférico 3

Fuente: elaboración propia

Luego del análisis lexicográfico, se realizó un análisis categorial que permitió reagrupar los términos en nociones próximas semánticamente. Las categorías

⁵ Área dependiente de la -entonces- Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación

⁶ Esto en consideración a lo instruido por la Dra. Barreiro Alicia (Universidad de Buenos Aires) en la evaluación del Trabajo final del seminario de posgrado La Investigación de las Representaciones Sociales (Narvaez, 2013), donde sugiere utilizar el término "basura" para considerar un término de la vida cotidiana en la población de estudio.

construidas fueron: afectaciones a la salud, emociones, fracciones de los residuos, sinónimos de basura, conciencia ambiental, acciones positivas, impactos negativos asociados y vectores relacionados.

Contenido de la RS

Siguiendo la propuesta del modelo estructural (Abric, 2001), se aplicó el uso de cuestionarios semiabiertos a fin de reconstruir el contenido de las RS. También se realizó un análisis de la prensa escrita a fin de verificar qué tratamiento y presencia tiene el manejo de los residuos en la prensa local y complementar con la recepción en los comodorenses del tema de estudio según los medios de comunicación que consumen.

Se presentan así las dimensiones de las representaciones sociales y las variables para el estudio:

- a) Actitud: sensibilidad y grado de conciencia con el tema, predisposición a actuar a favor o en contra (predisposición al cambio y grado de contribución a la gestión de residuos).
- b) Información: conocimiento del servicio de higiene urbana actual, análisis de la problemática de los residuos sólidos domiciliarios a través de los medios de comunicación.

Los resultados fueron procesados con el paquete estadístico del software SPSS, incorporando variables sociodemográficas como género, rango etario y barrio de residencia.

En el caso de las respuestas abiertas, se efectuó un análisis de contenido de las mismas (Sampieri Hernandez et al, 2003) en concordancia con la propuesta de análisis cualitativo propio del modelo procesual.

Resultados

Entre los antecedentes hallados se conoció la composición de los residuos sólidos urbanos a nivel ciudad y país, siendo los desechos alimenticios la fracción más significativa en el área de estudio.

Análisis lexicográfico

El relevamiento totalizó 6910 muestras⁷. Los sujetos estudiados evocaron 12221 palabras para hacer referencia a la palabra inductora “basura”, es decir un promedio de 4,6 palabras por persona, de las cuales 664 eran palabras diferentes. Con este corpus se realizó el análisis lexicográfico del prototipo de RS de la *basura*; donde se obtiene que las palabras más importantes –según los criterios definidos por el análisis: frecuencia y rango- son las palabras “suciedad” y “contaminación”.

⁷ El muestreo se ejecutó a través de la Subsecretaría de Ambiente, con autorización de la Supervisión de Escuelas Primarias.

Figura 3
Análisis lexicográfico: prototipo de la representación social de la basura

	Rango promedio			
	< 2,9		≥ 2,9	
Fr ≥ 51	SUCIEDAD	1051	2,177	RATA 190 3,295
	CONTAMINACION	981	2,469	BASURAL 136 3,118
	OLOR	945	2,653	AMBIENTE 124 3,137
	ENFERMEDAD	770	2,877	PERRO 121 3,083
	MUGRE	459	2,233	RESPONSABILIDAD 121 3,264
	RECICLAR	434	2,811	MOSCA 115 2,965
	DESORDEN	309	2,851	
	BOLSA	301	2,787	
	DESECHO	236	2,165	
	INFECCION	222	2,892	
11 ≤ Fr < 50	ORDEN	45	2,756	CALLE 49 2,939
	DESCARTABLE	36	2,639	CLEAR 49 3,184
	SOBRA	32	2,844	RECOLECCION 49 3,163
	INSERVIBLE	30	2,6	GERMEN 48 3,083
	CONTAGIO	24	2,75	TIRAR 48 2,917
				EDUCACION 45 3,644

Fuente: Tabla "Rang x Fréquence". Evoc 2005

Análisis categorial

Se agruparon los términos alrededor de nociones próximas semánticamente. Y se analizaron las categorías para determinar el peso de cada una. Pudiéndose leer que son las distintas "Fracciones de residuos" las más ampliamente mencionadas, en tanto los "Impactos negativos" son los más evocados.

Dimensiones de la RS

En cuanto a la variable actitud, se observó que:

- Sensibilidad y grado de conciencia con el tema: las fracciones de residuos segregadas en los domicilios son predominantemente tapitas y pilas, si bien la mayoría de sujetos reconoce que no separa sus residuos.
- Predisposición a actuar a favor o en contra: como ya se mencionó, este indicador se desglosó en dos subindicadores: predisposición al cambio y grado de contribución a la gestión de residuos. En el primer caso se observa que los sujetos asumen que la responsabilidad es de todos a la hora de ocuparse de la problemática de los residuos. Para el segundo subindicador una quinta parte de los sujetos manifestó haber dejado residuos en lugares no habilitados.

En cuanto a la Información se evidenció que los sujetos usan la TV, diarios y radios (en ese orden) como medios para enterarse que pasa con la basura. Si bien manifestaron que es a través de la experiencia propia, a través de los sentidos que se enteraban de lo que pasaba respecto a la basura en la ciudad.

Se analizó el contenido de los artículos periodísticos (septiembre/2013 a noviembre/2014) y se extractaron sus resúmenes de manera cronológica. Las fuentes

de noticias son predominantemente oficiales (MCR y Concejo Deliberante) y en todo caso la empresa Urbana, concesionaria del servicio de higiene urbana

Conclusiones

Es una fortaleza para la implementación de una GIRSU contar con la Ordenanza municipal que prohíbe la entrega de bolsas no biodegradables en comercios. Sin embargo una debilidad es la falta de ampliación del área de cobertura del servicio de recolección domiciliaria hacia los barrios más nuevos de la ciudad.

En el manejo de sus residuos los comodorenses evidencian una actitud desfavorable. A partir de las categorías lingüísticas utilizadas se evidencia una reacción emocional negativa hacia la “basura”; y si bien la sensibilidad se muestra fundamentalmente cuando se impulsa la clasificación de residuos con fines solidarios, quedaría demostrado que el grado de conciencia es escaso. Pues si bien los sujetos mostrarían una buena predisposición al cambio, el grado de contribución sería bajo.

Si bien la mayoría recoge información sobre la gestión de residuos sólidos domiciliarios a través de los medios de comunicación –y conocen en parte el servicio– son aquellos sujetos que manifiestan relacionarse directa o sensorialmente con los residuos, quienes están más al tanto del servicio de recolección de residuos (domiciliarios y voluminosos).

Sobre esta situación se permitiría mencionar que la información puesta a circular en los medios escritos locales, exhibiría un periodismo de escasa calidad que abusa en el uso de fuentes oficiales de información. Es innegable la presencia de la temática en los medios, aunque el tratamiento que se le ha dado difiere mucho de lo que podría considerarse óptimo. Es decir que no se estaría informando para fomentar el diálogo y la discusión entre los lectores, sino que se trataría de una transmisión explícita de creencias sociales –ideológicas– que serían relativamente uniformes y coercitivas.

Retomando la hipótesis de trabajo, por un lado se argumentaba que los comodorenses se relacionan con los residuos que producen considerándolos como basura, actitud que trasladan a su experiencia cotidiana. Situación que se da por confirmada en virtud de las elucidaciones realizadas sobre la representación social, ya que la mayoría de los comodorenses –precisamente los que no se relacionan de manera sensorial con el objeto– demuestran escaso grado de conciencia sobre la problemática y contribuirían en bajo grado a la gestión residuos.

La segunda cuestión hipotética era que esta situación se da en una cosmovisión antropocentrista, donde la gestión inadecuada de residuos sólidos urbanos es inculcada institucionalmente a través de los discursos puestos en circulación y de las acciones (o inacciones) políticas del gobierno.

En cuanto al primer aspecto debe tenerse en cuenta que los sujetos muestran un sentido utilitarista en su relación con los residuos. En cuanto a la segunda afirmación contenida, se visualiza en los discursos puestos en funcionamiento a través de los medios escritos el tratamiento principal de los avances en materia de infraestructura y legislación, poco se invita al ciudadano a participar sumarse a

prácticas sostenibles, ni tampoco se propone la discusión a partir de difundir información sobre la gestión de residuos per se. No obstante podría considerarse para confirmar o refutar esta hipótesis, realizar un análisis poniendo el foco desde una teoría política.

Recomendaciones

El éxito de la GIRSU dependerá de que se garantice el funcionamiento de la infraestructura que sustenta estas propuestas. Permitiendo que la población cuente con la información adecuada para evitar que los cambios necesarios en el ámbito de desenvolvimiento doméstico, o en el emplazamiento de las obras en el entorno visual se constituyan en motivo de rechazo.

Como se ha tratado de mostrar a lo largo de este trabajo, la comunicación y educación son los principales medios para el cambio de la representación social – sobre todo en las funciones de orientación de las mismas. Ya que es en los procesos de comunicación e interacción donde se origina principalmente la construcción de la representación social.

El abordaje de las Representaciones Sociales posibilitará entender la dinámica de las interacciones sociales y aclarar los determinantes de las prácticas sociales, pues la representación, el discurso y la práctica se generan mutuamente (Castorina, Barreiro et al, 2007).

Bibliografía

- Abrić J. (dir.) (2001) *“Prácticas sociales y representaciones sociales”*. Ediciones Coyoacán, México
- Araya Umaña, S. (2002) *“Las representaciones sociales: ejes teóricos para su Discusión”* Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Sede Académica, Costa Rica Cuaderno de Ciencias Sociales 127, <http://www.flacso.or.cr> Consulta: 15/11/2013
- Goldstein, B., Castañera, G. (1999) *“Educación y comunicación ambiental, estrategias para un futuro posible”*. Buenos Aires. Ediciones novedades educativas
- IATASA (2011) *“Plan de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos para el Municipio de Comodoro Rivadavia”*, Comodoro Rivadavia
- Jodelet, D. (1984) *“La representación social: fenómenos, conceptos y teoría”*. En Moscovici, S. Psicología social II. Pensamiento y vida social. Psicología social y problemas sociales. Barcelona-Buenos Aires-México: Paidós.
- Mazzeo, N. (2012) *“Manual para la sensibilización comunitaria y educación Ambiental”*. Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, Inst. Nacional de Tecnología Industrial, E-Book. ISBN 978-950-532-187-2
- Moscovici, S. (1979) *“El psicoanálisis su imagen y su público”*. Buenos Aires París: Huemul.
- Moscovici, S. (2001) *“Explorations in social psychology”*. New York University Press: Washington Square.

- Narváez, N. (2013) Trabajo final Seminario de posgrado: *“La investigación de las representaciones sociales: problemas teóricos y metodológicos”*. Comodoro Rivadavia: UNPSJB. Dir: Barreiro A.
- Narváez, N. (2015) *“Representación social de los residuos sólidos domiciliarios en Comodoro Rivadavia. Aportes a la comunicación ambiental de la GIRSU local”* Comodoro Rivadavia: UNPSJB. Dir: Perea Murtagh F., http://drive.google.com/file/d/0B_FQa0fu_mR8R0lwZTQtYzVVcHc/view?usp=sharing Consulta: 25/01/2018
- Navarro Carrascal, O. (2008) *“Representación social de la evaluación en estudiantes universitarios”*, Revista Educación y Pedagogía Universidad de Antioquía, vol. xx N° 50, Medellín- Colombia
- Sampieri Hernández, R. et al (2003) *“Metodología de la investigación”* México D. F. Mc Graw-Hill Interamericana
- Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación- Coordinación General para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos *“Manual de implementación: campaña de comunicación. Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos”*. Sitio web de la Secretaría. Consulta: 18/09/2014



Estudio del paisaje visual que perciben los espectadores locales. Un aporte para incorporar el paisaje cultural a la gestión ambiental de la industria hidrocarburífera

Ileana Grimbeek¹

Resumen

En esta investigación se abordó el estudio del paisaje en las afueras de Comodoro Rivadavia y su vinculación con la industria petrolera, principal actividad que lo modifica. Mediante un enfoque de paisaje perceptual, con énfasis en lo visual y centrado en las personas, se abordó el estudio del paisaje para conocer cuáles son aquellos aspectos que importan al espectador, teniendo en cuenta que es una construcción cargada de significados y que presenta estrecha vinculación con la cultura de una comunidad. Se trabajó en la identificación de *variables del paisaje* que sensibilizan al espectador local, a través de entrevistas en profundidad que incluían la técnica de foto elucidación, y que pudieran ser consideradas en la evaluación ambiental de intervenciones por parte de la industria.

Palabras clave

paisaje - industria petrolera - visual - variables del paisaje

A study of the visual landscape perceived by local spectators

Abstract

This research studies the landscape of Comodoro Rivadavia and its link with the oil industry, its primary activity. By focusing on the perceptual landscape with emphasis on the visual aspect and the people, the research highlights the aspects that matter to the spectator, keeping in mind the meaning and historicity of the community which is represented. Thus, it investigates the identification of landscape variables sensible to the local population, through interviews and photo elucidation of the environmental evaluation of the industry.

Palabras clave

landscape - oil industry - visual - landscape variation

¹ Este trabajo sintetiza la Tesis de Licenciatura en Gestión Ambiental "Estudio del Paisaje Visual que perciben los espectadores locales. Un aporte para incorporar el paisaje cultural a la gestión ambiental de la industria hidrocarburífera, (2013), 285 p., Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, UNPSJB. Autor: Ileana Grimbeek, Directora: Arq. Lía Navarro. E-mail: ileanagrimbeek@gmail.com

Introducción

La investigación se desarrolló como instancia de evaluación final² de la carrera Lic. en Gestión Ambiental dictada en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Interesa el estudio del paisaje de la estepa patagónica por ser considerado un recurso altamente intervenido, degradado y escasamente valorado. Se debe reconocer que, si bien los paisajes en su esencia evolucionan, el paisaje local ha combinado la actividad ganadera con la petrolera durante décadas, siendo hoy la petrolera predominante en la zona de estudio.

El deterioro de la calidad visual del paisaje debido a la industria se vincula con las tareas de exploración, explotación y transporte de hidrocarburos mediante la apertura de caminos, picadas, construcción de locaciones de pozos, grandes cortes de terrenos en laderas de cañadones, afectación de mallines, apertura de canteras, pasivos ambientales, tendidos de ductos, interferencias visuales tales como numerosas líneas eléctricas, montajes de distintas instalaciones en superficie y cartelería, aceleración de los procesos de erosión, acumulación de material eólico, entre otros.

Si bien en los últimos años se han modificado las normativas que regulan las actividades extractivas en la provincia del Chubut y la protección del medio ambiente, creándose legislaciones específicas para algunos de los recursos naturales y ajustando algunas otras normativas, en cuanto al paisaje aún no se cuenta con una legislación específica sino que se encuadra en otras normas generales que regulan la actividad hidrocarburífera y la protección del medio ambiente, como ser resoluciones de la Secretaría de Energía de Nación (Nº 105/92; 25/04) y en el Código Ambiental de la Provincia Ley Nº 35. Éste último, en su decreto reglamentario y modificatorias, establece (en las distintas categorías de estudios y evaluaciones ambientales), que el paisaje debe ser analizado y para ello se debe evaluar las modificaciones y posibles impactos que conlleven distintos proyectos, así como también tener en cuenta las intervenciones en paisajes singulares, es decir, aquellos que tengan un valor patrimonial natural y cultural.

Asimismo, dicha regulación ha implicado que, durante la realización de estudios ambientales se adapten metodologías preexistentes que no siempre permiten realizar un análisis profundo del paisaje visual local, y así, el “paisaje de la estepa”, aquel que a simple vista pareciera no demandar ninguna atención, suele quedar relegado en detrimento de otros factores ambientales. Además, las intervenciones en el ambiente por parte de la industria petrolera suelen estar regladas por distintos instrumentos de gestión, en los cuales la participación del estado adquiere relevancia. Es precisamente en esos instrumentos de gestión ambiental en los cuales se debe incorporar aspectos del paisaje claves para este

² Dada la naturaleza de esta publicación, las normas editoriales y la extensión de la Tesis de Licenciatura en cuestión, aquí sólo se expone un resumen de la misma. Se agradece la dirección de la arq. Lía Navarro, así como la evaluación de los jurados Dra. Alicia Boraso, Mg. Miryam González y Mg. Daniel Marques en la defensa realizada en noviembre de 2013.

ámbito geográfico, la población y cultura local, a fin de que el mismo sea gestionado no como un mero recurso, sino también como un constructo social. En ese sentido, la investigación de carácter exploratoria tuvo como propósito adquirir antecedentes para un aporte metodológico.

Como *objetivo general* se trabajó en la identificación de variables del paisaje visual de Pampa del Castillo en inmediaciones de un tramo de las Rutas Provinciales N° 39 y N° 26, y los Cañadones Brooks y Casa de Piedra que sensibilizan al espectador local y que podrían ser incluidos en los instrumentos de gestión ambiental aplicables a la industria petrolera.

También se trabajó con cinco objetivos específicos, para ello resultó necesario identificar cuál es el significado que adquiere el paisaje para el Estado y para la industria petrolera, ya que son los actores directamente involucrados en la intervención del paisaje a través de instrumentos de gestión ambiental administrativos y de planificación, como también en el diseño y aplicación de normativas. También se identificaron las variables del paisaje visual dominante en Pampa del Castillo, en inmediaciones de un tramo de RP N° 39 y 26 y Cañadones Brooks y Casa de Piedra. Y entre estas variables, se identificaron y describieron aquellas que denotan intervenciones del paisaje. Luego se indagó cuál es la percepción que poseen los espectadores locales sobre el paisaje visual en Pampa del Castillo y los cañadones considerados. Y por último, se determinó si existen incongruencias entre las visiones del paisaje por parte de los tres actores considerados.

Caso de Estudio

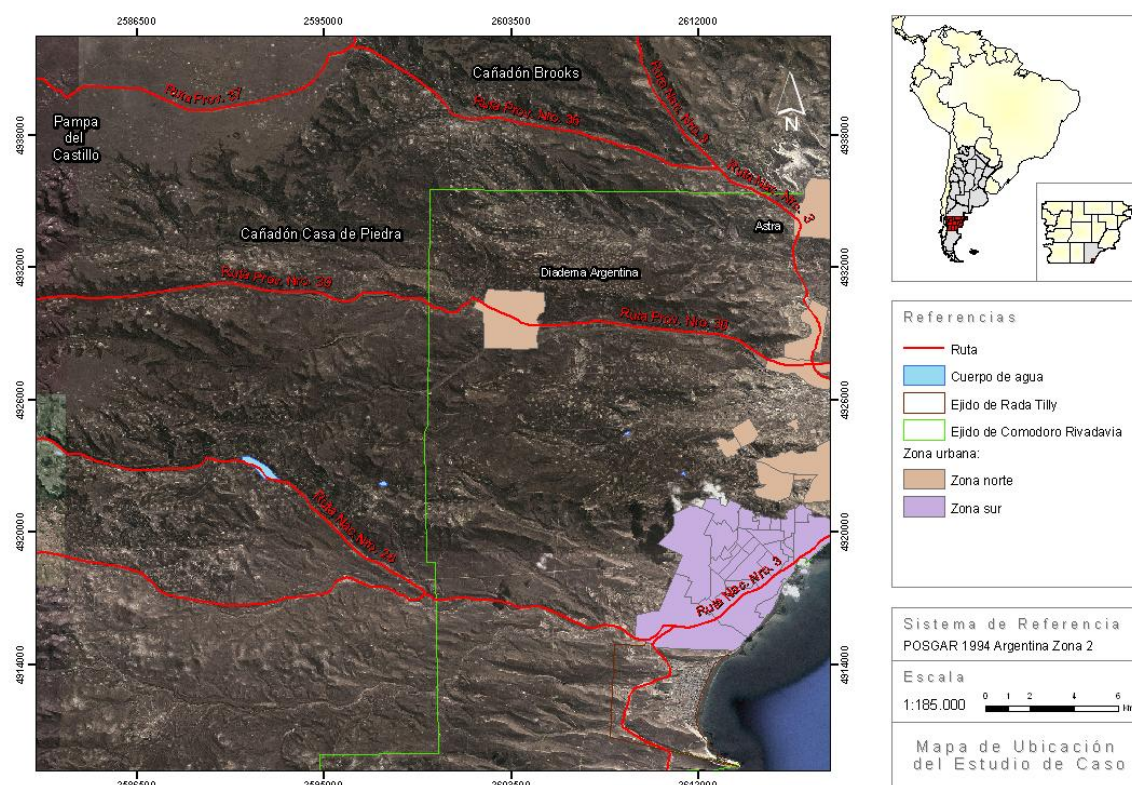
Se caracterizó el área de estudio mediante relevamientos de campo en sus componentes naturales, así como también se profundizó en su desarrollo histórico a partir de la bibliografía. Se destaca que la zona y sus alrededores poseen un alto valor afectivo en términos personales, lo cual me ha permitido conocer su evolución “de primera mano”, lo que motivó la elección del caso de estudio.

Se consideró como caso de estudio a los Cañadones Brooks, Casa de Piedra y un sector de Pampa del Castillo en inmediaciones de las Rutas Provinciales N° 26, 39 y 36 (Ver Mapa e Imagen de Referencia en páginas 4 y 5). Dichos sitios fueron seleccionados en función de la factibilidad del estudio y por corresponderse con áreas que poseen una historia particular, ya que en ellos se desarrollaron dos campamentos originarios de explotación petrolera, en antiguos yacimientos de explotación hidrocarburífera. El paisaje se encuentra altamente modificado y, además reúne diversos atributos físicos y estéticos del paisaje visual. Estos escenarios suelen ser conocidos y recorridos por espectadores locales. Por otro lado, se seleccionó un sector de Pampa del Castillo, aledaño a las Rutas Provinciales N° 26 y N° 39 por considerarse que, si bien comparte algunos atributos, es un paisaje que escénicamente contrasta con los cañadones. Estas áreas se encuentran próximas a la localidad de Comodoro Rivadavia, ubicadas principalmente al W y NW, y en el caso del Cañadón Casa de Piedra, se corresponde jurisdiccionalmente con parte del ejido urbano de la ciudad. Los distintos sectores se asocian también a distintas vías de

comunicación de libre acceso, a partir de los cuales se puede apreciar los yacimientos.

Cabe mencionar que el paisaje es contemplado en distintos instrumentos de gestión como ser los de comando y control, y de educación ambiental, y en gran parte en los instrumentos administrativos tales como las Evaluaciones de Impacto Ambiental que se encuentran reguladas por un marco legal. Puntualmente, a nivel local, el paisaje se encuentra contemplado dentro de los Instrumentos Administrativos, mediante el Código Ambiental de la Provincia del Chubut (Ley XI N° 35), el cual establece que los Informes de Impacto Ambiental en sus distintas categorías, debe analizar el paisaje dentro de los elementos del soporte físico natural. Más recientemente, y en la jurisdicción de Comodoro Rivadavia entró en vigencia la Resolución N° 3330/12, que regula los instrumentos para la gestión de permisos por parte de las operadoras de exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos en los yacimientos que se superponen con el ejido urbano de la ciudad. La misma establece los contenidos mínimos para los instrumentos de gestión administrativos, como son los Estudios Técnicos de Impacto Ambiental, y entre ellos considera el análisis del paisaje.

Mapa e imagen de referencia del área de estudio



Mapa de referencia general del área de estudio. Fuente Tesis de Licenciatura

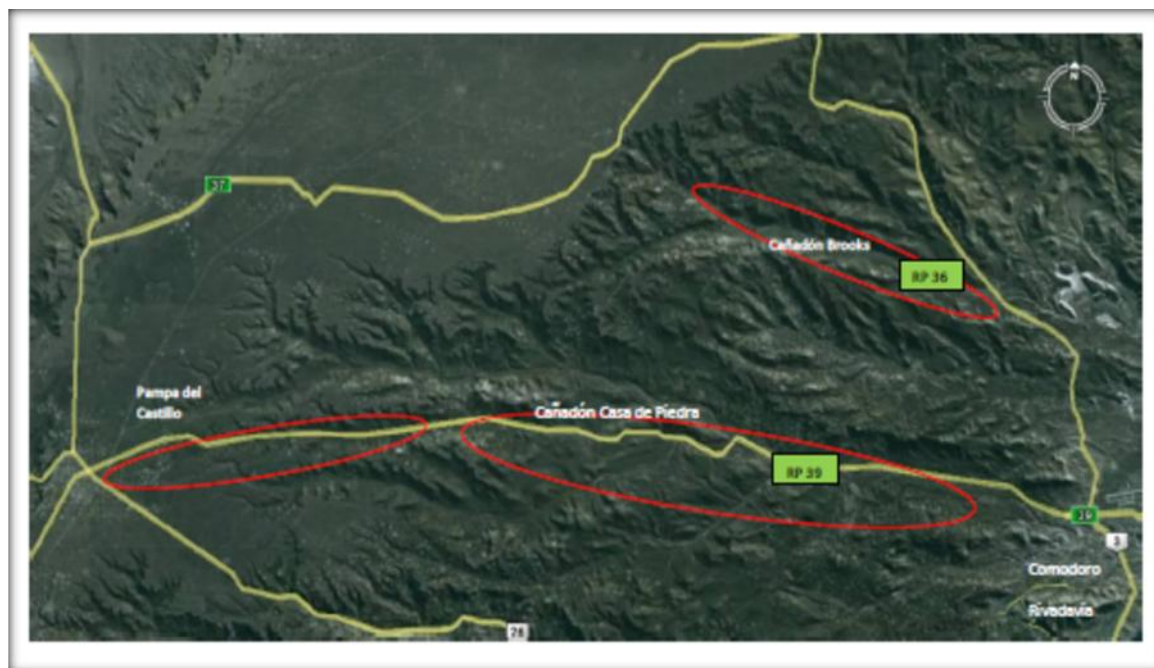


Imagen del área de estudio. Fuente Tesis de Licenciatura

Enfoques y perspectivas consideradas

Existen distintos antecedentes en los estudios de Paisajes. Así, se identifican la historia del paisaje, como su abordaje desde el Arte y la Geografía, desde distintas perspectivas en cada uno. También la Ecología estudió el paisaje; otro enfoque cultural como patrimonio y objeto de identidad. La Etnografía abordó el tema, como paisajes culturales, y su institucionalización según la UNESCO, donde se reconoce al paisaje industrial como una nueva categoría del paisaje cultural. Otro enfoque es el del Paisaje Percibido, que hace énfasis en la cuenca visual³.

En términos operativos, existen tratamientos del Paisaje en distintos instrumentos de gestión desarrollados en el ámbito internacional para operativizar el análisis del paisaje, junto a métodos propuestos por autores para su estudio. Por ejemplo métodos que utilizan Modelos Digitales del Terreno para calcular las cuencas visuales (Tévar Sanz, 1996); otros en los estudios desde la ecología del paisaje bajo un enfoque sistémico, se valen de la fotointerpretación, el uso de imágenes satelitales y fotos aéreas para la definición de cartografías y a partir de ellas se delimitan unidades de paisaje. También se reconocen métodos que emplean análisis estadístico, entre otros de valoración directa.

Desde el enfoque visual y los estudios de naturaleza perceptual, existen estudios que consideraron la calidad estética de los paisajes, la identificación de las personas con determinados paisajes, las preferencias paisajísticas, la visibilidad, la fragilidad y los elementos visuales de éstos (Ormaetxea Arenaza, 1997; Cancr, 1999; De la Fuente et al 2004; Montoya Ayala et al 2003; Morláns, 2005; Nizzero, 2006).

³ Por cuenca visual se entiende la escena de un paisaje que se presenta ante un observador desde un punto de vista; el conjunto de superficies o áreas vistas desde un lugar de observación. (Tévar Sanz, 1996, Montoya Ayala, Ramírez y Camargo, 2003; Nizzero, 2006).

Para el presente análisis, cobra especial importancia la “mirada paisajística”, las formas de “percibir el espacio” y la construcción social del mismo a partir de los lineamientos propuestos por Cosgrove (2002), Berque (2009), Silvestri y Aliata (2001) y Durán en Nogué (2007). Se trabajó mediante una combinación de perspectivas con supuestos teóricos principales y complementarios, sin contradicciones o solapamientos entre sí. Se estudió el paisaje centrado en el hombre como protagonista que percibe su contenido visual, el aspecto externo de una estructura territorial mediante un punto de vista. Dicho de otro modo, el paisaje visual como el entorno percibido desde un punto de observación considerado.

En consecuencia

para que exista un paisaje no basta con que exista naturaleza, es necesario un punto de vista y un espectador; es necesario también un relato que dé sentido a lo que se mira y experimenta; es cosustancial al paisaje...es una ambigua forma de relación en donde lo que se mira se reconstruye a partir de recuerdos, pérdidas, nostalgias propias y ajenas que remiten a veces a larguísimos períodos de la sensibilidad humana” (Silvestri y Aliata, 2001: 10)

Se analizó el paisaje, principalmente la variable percepción del paisaje; en tanto que se profundiza en la apreciación paisajística, preferencias visuales, patrones culturales, históricos, sentimientos, recuerdos e identidad, considerando los aportes de Aponte García (2003), Nogué (2007), Cosgrove (2002) y Berque (2009). Así, el paisaje entendido desde el enfoque visual como una manera de ver e interpretar, asume que dichas miradas están determinadas por los modos de apropiación de un espacio y el sentido de identidad hacia el mismo. Se destaca que “el ser humano es, en general, un desprevenido perceptor del paisaje. Es decir, un involuntario receptor de los múltiples y variados estímulos provenientes del lugar que habita. No obstante, es precisamente aquello que penetra al espíritu sin pasar por la razón, tocando las fibras más sensibles de los sentidos, lo que puede lograr ese nexo aparentemente inexplicable entre el individuo y su espacio vital; aquel que llamamos identidad” (Aponte García 2003, 154). Desde el mismo punto, Nogué (2007), plantea que con frecuencia sólo se ven aquellos paisajes que las personas desean ver, aquellos que no cuestionan la idea de paisaje aprendida y construida socialmente. Se suele buscar en el paisaje los modelos estéticos acordes a la idea de paisaje que cada uno posee. Para este autor el paisaje es una construcción social, condicionada por la dimensión cultural de una sociedad.

En cuanto a la percepción, la misma es entendida como una pauta de análisis espacial que permite dilucidar la actitud que la interacción con el espacio produce sobre el individuo. Según Zamorano en Caneto (2000, 19) “... el hombre percibe la realidad de un modo subjetivo. Sus sistemas perceptivos (visual, auditivo o sonoro, táctil, olfativo) le permiten recibir la información que el medio le transmite permanentemente, la cual se traduce en una imagen que lleva el sello de los factores culturales y psicológicos de cada receptor”.

El sistema perceptivo de cada una de las personas traduce la información que recoge del medio y las transforma en sensaciones mediante distintos elementos de filtrado, entre ellos la capacidad sensorial, el nivel de complejidad mental asociado a los aspectos etarios, psicológicos, sociales, culturales y afectivos, así como también las experiencias vivenciales (Caneto, 2000).

Cuadro 1
Resumen de supuestos teóricos principales y complementarios

Supuestos Teóricos Principales	<p>“para que exista un paisaje no basta con que exista naturaleza, es necesario un punto de vista y un espectador; es necesario también un relato que de sentido a lo que se mira y experimenta; es cosustancial al paisaje.....es una ambigua forma de relación en donde lo que se mira se reconstruye a partir de recuerdos, pérdidas, nostalgias propias y ajenas que remiten a veces a larguísimos períodos de la sensibilidad humana” (Silvestri y Aliata, 2001, 10) (conceptualización de paisaje), Nogué (2007) el paisaje como una construcción social.</p> <p>Aponte García (2003) sentido de identidad hacia el mismo.</p> <p>A partir del supuesto teórico de Silvestri y Aliata (2001) donde se adopta una postura que encuadra en el análisis de paisaje visual, se considera que Nogué (2007) y Aponte García (2003) complementan dicho postulado, destacando la idea de paisaje como un constructo social, donde los sentimientos, la cultura y la identidad se conjugan para abordar el estudio del paisaje visual centrado en las personas.</p>
Supuestos teóricos, complementarios	<p>Cosgrove (2002) y Caneto (2000), el primero de ellos enfatiza en el análisis visual del paisaje, la percepción y la estética del paisaje, lo cual posibilita tratar junto a Caneto la variable percepción. Cabe mencionar que Nogué también hace hincapié en la percepción del paisaje visual, al igual que Berque (2009). Estos autores exponen conceptos que permiten trabajar sobre los atributos estéticos del paisaje.</p> <p>De Rodríguez Becerra y Espinoza (2002), se recupera la conceptualización y categorías de instrumentos de gestión, la cual junto a las Normativas legales posibilitan el tratamiento de la variable Visión del paisaje por distintos actores.</p> <p>Montoya Ayala, et al, 2003; Morláns; y Nizzero, 2006, permiten conceptualizar los valores mediante los cuales se analizan las variables atributos físicos y estéticos del paisaje.</p>

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 2
Estructura de variables utilizadas como guía durante
el desarrollo de la investigación

<i>Unidad de Análisis</i>	<i>Variables</i>	<i>Valores</i>	<i>Indicadores</i>
Paisaje Visual de los cañadones Brooks, Casa de Piedra y sector de Pampa del Castillo	Atributos físicos del paisaje	Presencia de cuerpos de agua permanentes y temporarios	Tipo (arroyo, río, mar; afloramientos freáticos, drenaje superficial, cárcavas)
		Presencia de vegetación	Fisionomía dominante
		Forma del terreno	Montañoso
			Mesetiforme – llano (niveles de pedimentos)
			Fondos de Valles – cañadones
		Usos del suelo	Urbano
			Rural
			Industrial
			Mixtos
		Presencia de recursos culturales	Tipo
			Visibilidad
	Atributos estéticos del paisaje visual	Color	Contraste
		Textura (1)	Gruesa, media y fina
		Calidad (7)	Dominancia
		Cuencas visuales	Forma (5) Visibilidad (6)
	Atributos que implícitamente manifiestan intervención del paisaje	Revegetación de picadas (2)	Parcial
			Total
		Estabilización y revegetación de taludes	Locaciones que poseen taludes estabilizados (4) y revegetados en la cuenca visual considerada
		Gestión de residuos	Presencia de residuos dispersos
			Presencia de sitios para disposición transitoria
		Señalización	Carteles que se mimetizan con el paisaje
			Carteles que provocan fuerte contraste visual
		Correcto abandono de canteras y préstamos	Sí/No
		Terrenos escarificados (3)	Nº de sitios
	Visión del paisaje por distintos actores (industria petrolera y el Estado)		Legislación
			Instrumentos de gestión administrativos y de planificación (procedimientos, EIAs)
	Percepción del paisaje (por espectadores locales)		Apreciación paisajística / Preferencias visuales
			Rasgos culturales – Sucesos históricos
			Sentimientos – Recuerdos (evocación)
			Identidad (sentido de apropiación del territorio)

Fuente, elaboración propia. Notas⁴ referidas a variables e indicadores guía

⁴ (1) Se entiende por textura a la disposición, ordenamiento, forma y tamaño de las partes en un todo. En este caso se adopta la textura a partir del follaje de la vegetación, por la disposición, forma y tamaño de las hojas de los individuos que conforman un agrupamiento. Se conocen tres grados de texturas, gruesa, media y fina; la gruesa está representada por las diferentes especies vegetales que posean hojas de más de 15 cm de ancho. La textura media se corresponde con un follaje de hojas o

Metodología

La investigación tuvo un alcance exploratorio y de carácter cualitativo, con lo cual no se optó por la formulación de hipótesis, sino que se trabajó mediante varias preguntas orientadoras que guiaron el proceso y se estudiaron de manera conjunta con la estructura tentativa de variables y conceptos expuestos en el marco teórico. A fin de obtener evidencia empírica en relación a los objetivos planteados, se realizó un análisis de las metodologías existentes para el estudio del paisaje. También, se analizaron instrumentos de gestión ambiental, principalmente administrativos y de planificación, así como normativas aplicables a la industria petrolera y al estudio del paisaje con el propósito de analizar la visión de dos actores claves como son el Estado y las Empresas.

Se trabajó con relevamientos en campo, se realizaron entrevistas cuyo número estuvo en relación con el muestreo teórico (Taylor y Bogdan, 1996) y se complementaron con la técnica de foto elucidación (Dabenigno, 2010). Así, el número de entrevistas realizadas fue acorde a la aplicación del muestreo teórico, ya que mediante su utilización el número de casos entrevistados no tiene mayor importancia (Taylor y Bogdan, 1996). Cobra relevancia, el potencial y la calidad de cada una de las entrevistas, que permiten profundizar en el tema. Es por ello que se realizaron entrevistas mixtas, se trabajó con personas de distintas edades, con distintas ocupaciones y profesiones, así como también personas que recorren a diario y otras esporádicamente los paisajes considerados. Se tuvo en cuenta el muestreo teórico de modo que se realizaran entrevistas al punto en que no surgieran nuevos aportes.

folíolos de entre 10 y 5 cm de diámetro, mientras que la textura fina se conforma con el follaje de hojas pequeñas menores de 5 cm de diámetro que conforman una trama laxa (Nizzero, 2006).

(2) Conforme a la Resolución de Secretaría de Energía (N°105) se entiende por picadas aquellas antiguas sendas que han quedado por antiguas prospecciones sísmicas, y aquellas sendas por donde se emplazan tendidos de acueductos, oleoductos o gasoductos en su mayoría.

(3) Escarificado: tarea que se realiza una vez finalizada una obra, o bien sobre aquellos suelos que se encuentren compactados. Consiste en arar, una superficie de suelo intervenida, en sentido perpendicular a la dirección de los vientos predominantes a fin de favorecer los procesos de revegetación natural.

(4) Talud estabilizado: acumulación de material y fragmentos de roca, que se mantienen en equilibrio, donde el ángulo de reposo determina el talud en el terreno. En la zona se observan en laderas de cañadones, a partir de la construcción de locaciones para las cuales fue necesario realizar corte en el terreno.

(5) La forma de la cuenca visual puede ser alargada, unidireccional o bien cuencas amplias regulares, extensas de amplio tamaño. (Morláns, 2005)

(6) La visibilidad, entendida como el espacio entre el paisaje y el observador, se encuentra condicionado con la estación del año, la hora del día, la posición del observador, la posición respecto al sol y las condiciones climáticas, ya que resulta afectada por factores ambientales tales como niebla, lluvia, granizo, tormentas de arena, polvo en suspensión, etc. (Morláns, 2005).

(7) Cabe aclarar que la calidad de un paisaje se relaciona con la mayor o menor presencia de valores estéticos y que si bien es totalmente subjetivo suele definirse a partir de la vegetación, la singularidad de la geología, la presencia de cuerpos de agua. Asimismo, puede verse disminuida por improntas que indican degradación del paisaje, como ser áreas quemadas, zonas erosionadas, cuerpos de agua sucios o elementos que interfieran negativamente, tales como infraestructuras que contrastan provocando un impacto visual negativo. (Morláns, 2005).

Durante el desarrollo de las mismas, a partir de la sexta y séptima entrevista pudo notarse que no surgían nuevos aportes, variables o aspectos relevantes; asimismo se consideró extender el desarrollo de éstas hasta un número de diez.

En definitiva, la investigación cualitativa no generaliza, sino que profundiza,

permite abordar ámbitos acotados, en donde se privilegia más la validez o credibilidad del conocimiento obtenido, que la posibilidad de generalizar características medibles de una muestra probabilística...” (Vasilachis, 2012:87). En este contexto entonces, es que el muestreo teórico permite... “seleccionar eventos o incidentes relevantes que sean indicativos de las categorías conceptuales,...si bien no se puede establecer por anticipado su número definitivo, se puede lograr la comprensión de una categoría conceptual, con sus propiedades y dimensiones, y retirarse del campo, momento denominado saturación teórica (Vasilachis, 2012: 88).

En relación a la técnica de foto elucidación, Dabenigno y Meo (2010) mencionan que la misma no ha sido muy desarrollada en el contexto iberoamericano, pero que en otros países como por ejemplo Estados Unidos y los países de la Comunidad Europea, se ha estado desarrollando el uso de las imágenes estáticas y en movimiento para estudiar e indagar cuestiones sociales. Dicha técnica ha sido aplicada en Argentina principalmente en el ámbito educativo y en trabajos de investigación con jóvenes adolescentes. Dado que la técnica consiste en la introducción de fotografías durante el transcurso de una entrevista a fin de favorecer el diálogo, se considera pasible de ser utilizada en los estudios de paisaje con el propósito de facilitar recuerdos, evocar sentimientos y memorias de los entrevistados. De este modo, se procuró profundizar en las percepciones, ideas e interpretaciones de los espectadores en sus relatos mediante entrevistas.

Algunas imágenes de la zona de estudio que se aplicaron posteriormente en la técnica de foto elucidación



Foto N° 1: Vista del Cañadón Brooks



Foto N° 2: Vista Norte de Pampa del Castillo



Foto N°3: Vista de ladera Norte de un sector del Cañadón Casa de Piedra

Resultados

En lo concerniente al cumplimiento de objetivos, se logró cumplir el objetivo general, ya que se lograron identificar cuáles son las variables del paisaje visual en el caso de estudio analizado que sensibilizan al espectador local. Resultaron más relevantes aquellas escenas en las que se aprecia el paisaje en su estado natural, prístino, sin intervención por parte de la industria, las geoformas, la vegetación, los colores, la amplitud de las cuencas visuales, la presencia de cuerpos de agua y los mallines entre otras. Además, se identificaron cuáles son los aspectos que disgustan al espectador en relación a la explotación petrolera, asociados al paisaje.

También se trabajó en el alcance de los objetivos específicos identificando a partir de los relevamientos y las entrevistas las variables del paisaje dominantes. De igual modo se logró analizar la percepción que poseen los espectadores locales sobre el paisaje visual en las áreas alcanzadas por el caso de estudio.

En menor medida se logró alcanzar uno de los objetivos específicos, ya que no se logró identificar el significado que adquiere el paisaje para el estado y la industria petrolera de manera directa, sino que pudo dilucidarse el grado de importancia o participación que adquiere la categoría paisaje, en forma escasa o casi nula, a partir de los instrumentos de gestión y normativas analizadas. Recientemente, a partir de la creación de los instrumentos de gestión voluntarios es que algunas empresas han optado por incorporar acciones tendientes a la intervención del paisaje, como ser los planes de revegetación y restauración de algunos sectores. Vinculado a este objetivo también se asocia el último objetivo específico, a partir del cual se pudo determinar que existen incongruencias entre las visiones del paisaje que poseen los espectadores locales y lo que se manifiesta en la realidad, como “tratamiento” que se le da al paisaje por parte de los actores el Estado y las Empresas.

La investigación de carácter exploratorio no verificó hipótesis, sino que se trabajó los objetivos a partir de preguntas orientadoras incorporadas en el diseño de la investigación. También, durante los relevamientos y entrevistas se tuvo en cuenta

las variables orientativas de la matriz de anclaje, las cuales se identificaron mediante los valores e indicadores propuestos y posibilitaron la caracterización del sitio, así como también la identificación de variables que visualmente en campo denotan la intervención del paisaje.

Al mismo tiempo, se tomaron imágenes en las cuales se tuvo en cuenta las variables y distintos puntos de vista, los cuales fueron georreferenciados. Éstas, si bien complementan la caracterización del sitio, se utilizaron como insumo durante la realización de las entrevistas, mediante la aplicación de la técnica de foto elucidación.

A modo de cierre de esta sección de resultados, se expone una tabla resumen de aspectos que se manifestaron de forma repetitiva en las entrevistas. Sin embargo, es oportuno mencionar que *el documento original de la Tesis contiene varias páginas con tablas resumen que recuperan expresiones de los entrevistados vinculadas a la percepción que poseen del paisaje local.*

Resumen de aspectos que se manifestaron de forma repetitiva en las entrevistas

Tabla 1

Resumen de aspectos que se manifestaron de forma repetitiva en las entrevistas

Aprecio por el paisaje prístino de la Patagonia sin intervención por parte de la industria.
La industria petrolera como generadora de intervenciones en el paisaje local.
Variables que interrumpen el paisaje como ser los tendidos eléctricos, las locaciones, las picadas, aún las revegetadas, los ductos principalmente, los grandes taludes de locaciones en cortes de laderas.
Importante necesidad de la presencia del color “verde” y colores cálidos como ser el amarillo de las grindelias y coirones.
Incomodidad ante los colores grises y oscuros del árido en algunos casos y en otros, aprecio por estos colores.
Aprecio por la vegetación de la estepa.
Sensaciones y sentimientos que evoca el paisaje: soledad, quietud, tranquilidad, aburrimiento, libertad, tristeza, paz, hostilidad, aspereza, dureza y vastedad.
Rasgos que se identifican como propios del paisaje local: los coirones, el color amarillo, las mesetas, los cañadones, la geomorfología en general y el cielo diáfano.
Aprecio por la amplia cuenca visual de la Pampa del Castillo / Aprecio por la amplitud del horizonte.
Variables (elementos) del paisaje a resguardar o trabajar: la geomorfología, minimizar los cortes de las locaciones, priorizar una menor apertura de caminos, promover mayores medidas de revegetación dado que para los entrevistados las que se realizan actualmente no alcanzan. Preservar el agua, la flora, el suelo, prevenir la erosión y resguardar la fauna.
Naturalización de los paisajes en los que las personas habitan. Sentido de pertenencia y asociación con el aprecio por el paisaje local. Necesidad de conocimiento y entendimiento del paisaje.
Elementos de la industria petrolera en el paisaje como un indicador del uso del suelo y el desarrollo productivo de la región.

Por último, de los once (11) instrumentos administrativos analizados a fin de determinar la participación que adquiere el paisaje en los mismos como producto y reflejo de dos actores que intervienen, las empresas y el Estado, se resumen que:

Tabla 2
Resumen de Análisis Indirecto

No se expone una metodología para el análisis del paisaje.
Se remiten a una mención geomorfológica y de vegetación.
Nueve (9) de ellos refieren a proyectos vinculados a la industria petrolera.
En gran parte de los informes la ponderación matricial sobre el paisaje no resulta de importancia.
Sólo un (1) informe refiere a la visibilidad del paisaje, cuencas visuales y variables del paisaje visual. No está asociado al petróleo y no es de esta zona.

Conclusiones

Se considera que la investigación resultó conveniente en tanto se pudo determinar que existe sensibilidad hacia el paisaje por parte de los espectadores locales. Al mismo tiempo, se pudo alcanzar los objetivos dilucidando cuáles son las variables del paisaje que sensibilizan e interesan a los espectadores. Aquí, cabe mencionar que, si bien no surgieron variables “desconocidas”, a partir de las entrevistas, se pusieron de manifiesto elementos que pudieran ser tenidos en cuenta durante la intervención de la industria.

También es propicio mencionar que la investigación vinculó temas que han sido poco desarrollados localmente, como ser el estudio del paisaje en relación al desarrollo de la industria petrolera mediante entrevistas y aplicando la técnica de foto elucidación, partiendo desde una visión centrada en el espectador, dado que se entiende que no existe un paisaje en tanto no haya un usuario que lo interprete y le dé sentido. Conjuntamente, se tuvo en cuenta el análisis de las visiones de dos actores también claves en la gestión, como ser los actores el Estado y las Empresas, mediante la interpretación de instrumentos de gestión y normativas.

Asimismo, a partir de las entrevistas realizadas y en cumplimiento con el objetivo general planteado, las variables más significativas para los espectadores locales podrían ser incluidas o reforzadas en los instrumentos de gestión ambiental aplicables a la industria petrolera.

Por último, de las distintas recomendaciones planteadas en la investigación, se destaca que, en la actualidad, en el marco de otro nivel de formación, se continúa esta línea de trabajo con el propósito de obtener una metodología de análisis aplicable al paisaje local, replicable en el ámbito público como privado.

Bibliografía

- Aponte García, G. (2003), “Paisaje e identidad cultural”, *Tabula Rasa*, Bogotá, N° 001, 153-164.
- Berque, A. (2009): *El pensamiento paisajero, Paisaje y Teoría*, Madrid, España, Biblioteca Nueva.
- Cancer, L. (1999): *La degradación y la protección del paisaje*, Madrid, España. Ediciones Cátedra S.A.

- Caneto, C. (2000): *Geografía de la percepción urbana*, Buenos Aires, Argentina, Lugar Editorial S.A.
- Cosgrove, D. (2002): "Observando la naturaleza: el paisaje y el sentido europeo de la vista", *Boletín de la A.G.E.* N° 34, págs.63-89.
- De la Fuente, G.; Mezquida, J.A. et al. (2004)," El aprecio por el paisaje y su utilidad en la conservación de los paisajes de Chile Central", *Ecosistemas Revista Científica y Técnica de Ecología y Medio Ambiente*, [en línea] N° 13 (2): 82-89. <http://revistaecosistemas.net/articulo.asp?ID=148> (consultada el 18/05/2010)
- Dabenigno, V. y Meo, A. (2010): "Imágenes que revelan sentidos: ventajas y desventajas de la entrevista de foto – elucidación en un estudio sobre jóvenes y escuela media en la ciudad de Buenos Aires", *EMPIRIA, Revista de Metodología de Ciencias Sociales*, N° 22, págs. 13-42.
- Montoya Ayala, R.; Gutiérrez Puebla, J. et al. (2003), "Ordenación de los recursos naturales del valle de Zapotitlán de Las Salinas: Valoración de la calidad y fragilidad visual del paisaje", *Boletín de la A.G.E.* N.º 35, págs. 123-136.
- Morlans, M. (2005): "El paisaje percibido o paisaje visual II", *Universidad Nacional de Catamarca*, (consultado el 26/05/2009)
- Nizzero, G. (2006): *El paisaje ilustrado. Glosario Técnico*, Argentina, Editorial Facultad de Agronomía Universidad de Buenos Aires.
- Nogué, J. (ed.), (2007): *La Construcción Social del Paisaje, Paisaje y teoría*, Madrid, Biblioteca Nueva, 343
- Ormaetxea Arenaza, O. (1997): "Concepto y método en paisaje. Una propuesta docente", *Lurralde* [en línea], N° 20, págs. 333-344. (Consultada en www.ingebea.euskalnet.net el 12/01/2008)
- Rodríguez Becerra, M. y Espinoza, G. (2002): *Gestión Ambiental en América Latina y El Caribe. Evolución, tendencias y principales prácticas*, David Wilk, Editor, BID.
- Silvestri, G. y Aliata, F. (2001): *El paisaje como cifra de armonía*, Buenos Aires, Argentina, Ediciones Nueva Visión.
- Tévar Sanz, Gonzalo (1996): "La Cuenca Visual en el análisis del paisaje", *Serie Geográfica*,[en línea] Vol.6, pp.99-113. <http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/10017/1052/1/La+Cuenca+Visual+en+el+An%C3%A1lisis+del+Paisaje.pdf> (consultada el 12/01/2008)
- Vasilachis de Gialdino, I., (coord.), (2012): *Estrategias de Investigación Cualitativa*, Buenos Aires, Argentina, Gedisa,



Energía eólica en Comodoro Rivadavia. Determinantes políticos e institucionales para su desarrollo (2003-2014)¹

Emiliano Ballestra²

Resumen

El desarrollo de proyectos eólicos en la ciudad de Comodoro Rivadavia enfrenta diversos obstáculos, como político/institucional, regulatoria, económicos, técnico y social, y así como también lo relativo a su historia de arraigo a la actividad petrolera. Este trabajo explora el estado de la cuestión relativa al desarrollo de la energía eólica entre los años 2003 y 2014, reconociendo los actores clave y su interacción en las jurisdicciones estatales. Por ello, como objetivo general se propone conocer, desde la perspectiva de la Ecología Política, las limitaciones (estructurales y/o coyunturales) que dificultan el desarrollo de la energía eólica en Comodoro Rivadavia, teniendo en cuenta la situación de crisis energética actual en nuestro país; situación que colocaría a las energías renovables como una clara opción para diversificar la matriz energética.

Palabras clave

energía eólica - limitaciones - ecología política

Wind energy in Comodoro Rivadavia. Political and institutional constraints for its development (2003-2014)

Abstract

The development of wind projects in the city of Comodoro Rivadavia faces several obstacles, such as political/institutional, regulatory, economic, technical and social, as well as related to its history of being rooted in oil activity. This paper explores the state of the question related to the development of wind energy between 2003 and 2014, recognizing the key actors and their interaction in state jurisdictions. Therefore, as a general objective, it is proposed to know, from Political Ecology perspective, the limitations (structural and / or short-term) that hinder the development of wind energy in Comodoro Rivadavia, considering the current energy crisis in our country; situation that would place renewable energy as a clear option to diversify the energy matrix.

Keywords

wind energy - limitations - political ecology

¹ El presente artículo es una síntesis de la Tesis de grado titulada "El desarrollo de la Energía Eólica en Comodoro Rivadavia. Una década tímidamente modesta. 2003-2014".

² Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. E-mail: ballestra.emilianov@gmail.com

Limitaciones y potencialidades

Haciendo uso de técnicas cualitativas y cuantitativas, disponiendo de fuentes primarias y secundarias, de documentos oficiales, de entrevistas a informantes clave, y encuestas, se realizó un análisis de todo lo producido sobre energía eólica, en nuestra ciudad durante la década 2003-2014.

Los resultados de la descripción y el análisis del derrotero del desarrollo eólico permiten concluir que las principales limitantes son de carácter político/institucional.

El viento que todo empuja

Refiriéndonos al ámbito nacional, desde hace al menos una década se ha estado debatiendo acerca de lo que se conoce como “crisis energética”. Esta situación coloca a las energías renovables como una clara opción para diversificar la matriz energética³ nacional (Dominella, 2008), y respetando el medio ambiente (Academia Nacional de Ingeniería, 2011).

En este contexto, una de estas energías que aparece como la alternativa a la oferta energética primaria es la eólica, cuyo mayor potencial se encuentra principalmente en la región patagónica.

En el extremo sur del paralelo 42, particularmente la provincia de Chubut⁴, existen proyectos de parques eólicos con diverso grado de avance (Cameron, 2010), como el parque eólico de Rawson (III), el Parque Eólico Puerto Madryn, con 77,4Mw y 220Mw respectivamente⁵, como así también el Parque Eólico Antonio Moran (SCPLCR, 2005), y más recientemente los proyectos energéticos “Chubut Norte”, de la firma Genneia, con 28Mw potencia instalada, el denominado “Garayalde”, a través de una alianza entre Pan American Energy y 3-Gal, de 24Mw y el proyecto “Kosten”, del consorcio Enat-SEG- Otamendi-Nuevo Cerro Dragón, en la zona de Pampa del Castillo, con 24MW⁶, el Parque Eólico Manantiales Behr de YPF y Parque Eólico de Hychico SA (CAPSA), desarrollo que demuestra que nuestra región puede ser un enorme potencial generador de energía eléctrica a partir de la energía eólica, ya que brinda excelentes condiciones climáticas como dirección, constancia y velocidad del

³En una matriz energética se establecen las diferentes fuentes energéticas de las que dispone un país, indicando la importancia de cada una de estas y el modo en que estas se usan (Straschnoy, Lamas, & Klas, 2010).

⁴La provincia cuenta con un Centro Regional de Energía Eólica (CREE), el cual fue creado en el año 1985 mediante un convenio entre la Provincia de Chubut, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y la Secretaría de Energía de la Nación (Fundacion Bariloche, 2009). A su vez, Chubut cuenta con una Ley XVII N° 95 (que derogó la Ley 4389) que establece un nuevo “Régimen de Promoción de Fuentes de Energías Renovables” en todo el ámbito de la Provincia del Chubut.

⁵(INTI, 2012). Energía Eólica: Programa GENREN. Características principales. <http://www.inti.gob.ar/erenova/erEO/er20b.php>. Consultada el 27 de Julio de 2013.

⁶<http://supercampo.perfil.com/2016/10/chubut-sus-tres-parques-de-energia-eolica-estaran-listos-en-2018/>

viento⁷, tres variables que se producen en forma casi simultánea, para el desarrollo de este tipo de energía, como así también ofrecer ventajas como no ser contaminante, ser un combustible gratuito, puede aprovecharse en la medida de las necesidades del momento, etc., (Strachnoy, Lamas y Klas, 2010).

En este sentido, Comodoro Rivadavia⁸ resulta un caso de particular interés para su estudio en tanto es una ciudad cuyo perfil productivo está directamente vinculado por la cuestión energética, ya que se trata de una ciudad cuya historia y desarrollo ha sido marcado fuertemente por la producción de petróleo y que también, ofrece condiciones climáticas y vientos adecuados para el desarrollo de energía eólica⁹ (MCR, 2002). Sumado a esto, nuestra ciudad fue pionera a nivel nacional en el desarrollo eólico a través de la Sociedad Cooperativa Popular de Comodoro Rivadavia (SCPL), que instaló entre el año 1994 y amplió en 2000, un proyecto de aprovechamiento eólico¹⁰ convirtiéndose, de esta manera, en el mayor generador eólico del país (Oliva, 2008). Desde hace unos años diversos actores políticos tanto municipales como provinciales han destacado la necesidad de diversificar la estructura productiva de la ciudad, con un fuerte predominio del petróleo, sobre todo aprovechando el desarrollo de energía eólica, ya que esto dinamizaría diversos sectores productivos como la metalmecánica. Sin embargo, todos estos avances en materia de generación de energía eólica parecen haberse detenido.

Se pudo observar que, entre los años 2003 al 2014, la mayoría de los aerogeneradores se observaban dañados y sin funcionar¹¹. Diversas circunstancias tales como las dificultades de financiamiento, falta de acuerdos o falta de apoyo a los emprendimientos eólicos¹² parecían estar frenando los potenciales avances en este sentido¹³. Situación que comienza a modificarse a partir del año 2014 ya que el sector

⁷ Se trata de vientos constantes todo el año con velocidades promedio entre 6m/s y 12m/s. (Soares, Kind, & Fernández, 2009).

⁸ Desde el estado municipal se formula un documento "Plan de Desarrollo Estratégico", en el que se propone colocar a la ciudad como líder de la Patagonia Central, socialmente solidaria, económicamente competitiva, territorialmente planificada y ambientalmente sustentable, donde una de sus metas es potenciar a Comodoro Rivadavia como productora de energías renovables (MCR, 2002).

⁹ Mapa de Recurso Eólico de Argentina. Centro Regional de Energía Eólica (C.R.E.E, s/f)

¹⁰ Los primeros proyectos eólicos se desarrollaron en los 1994, 1997 y 2000 con la instalación de 2 máquinas de 250KW, ocho máquinas de 750KW y 16 unidades generadoras de 660KW de potencia, respectivamente.

¹¹ Diario Crónica, 2013. Comodoro había sido pionera en materia de energía eólica. <http://www.diariocronica.com.ar/index.php?r=noticias/verNoticia&q=93391> . Interés General. Energía Eólica. Consultada el 25 de Setiembre de 2013

¹² (Diario El Patagónico, 2012). (Diario El Patagónico, Chubut avanza en políticas de inversión en energía eólica, 2013) <http://www.elpatagonico.net/nota/176594/>. Consultada el 25 de Setiembre de 2013.

¹³ (Diario El Patagónico, 2013). Chubut avanza en políticas de inversión en energía eólica <http://www.elpatagonico.net/nota/191221-chubut-avanza-en-politicas-de-inversion-en-energia-eolica/>. Consultada el 25 de Setiembre de 2013.

privado ha fortalecido su posición a través del programa RENOVAR del Ministerio de Energía y Minería de Nación¹⁴.

En relación con esto, el estado del desarrollo de la energía eólica impulsada por iniciativas locales parece muy modesto en relación con todo su potencial aporte, tanto en la producción de energía alternativa (que aporte al sistema nacional) como a la diversificación de la estructura productiva local y regional. Esta situación genera 3 interrogantes que son de suma importancia para el análisis de este trabajo, i) ¿Por qué si Comodoro Rivadavia, que ha sido escenario de los primeros desarrollos en energía eólica, no se observan avances significativos en la materia?, ii) ¿Cuáles son los actores claves involucrados en las distintas jurisdicciones estatales y cómo se vinculan?, ¿Qué posicionamientos se pueden reconocer entre los actores públicos, privados y del tercer sector?, iii) ¿Cuáles son las limitaciones y cómo están operando?

El sentido de la energía

El presente artículo tiene como finalidad reconocer, desde la perspectiva de la Ecología Política (Palacio, 2006; Merletti, 2013),¹⁵ aquellos obstáculos que impiden el desarrollo del proyecto eólico para el caso de Comodoro Rivadavia, para luego entender la situación eólica actual en nuestra ciudad, a partir de la interacción, en el orden provincial y nacional, de los actores involucrados y sus acciones relevantes implementadas.

Este trabajo es de carácter exploratorio, ya que esta clase de estudios se confeccionan cuando el objetivo es examinar un problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2003)¹⁶.

La recopilación de la información consistió en la confección de una matriz donde se describen las variables, indicadores y sus respectivos criterios de análisis, teniendo en cuenta que el eje principal de la investigación es la energía eólica en comodoro Rivadavia.

Las variables analizadas fueron, el estado actual de Estado actual del desarrollo eólico para Comodoro Rivadavia, a partir de la cual se identificó el problema planteado, realizando un relevamiento de contenido de documentos, textos, etc., para luego desplegar las directrices para su comprensión mediante la recolección de información a través de un análisis de tipo cualitativa y cuantitativa. En cuanto a lo cualitativo se realizaron entrevistas, y en lo concerniente a lo cuantitativo mediante encuestas y análisis de datos secundarios (estadísticos).

¹⁴ En el año 2015 la ley 26190/06 es modificada por la Ley 27191/15 "Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica" http://www.diariojornada.com.ar/160093/economia/En_que_consiste_el_plan_de_energias_RenoVa

¹⁵ Tiene sus orígenes en los 1970s en ciencias como la Ecología y Economía política. Es un campo interdisciplinario donde se analizan las relaciones de poder alrededor de la naturaleza, en términos de sus formas de control (apropiación) por distintos actores sociopolíticos.

¹⁶ En su obra, Hernández, et al. (2003), citan a Danhke (1976), quien divide a la investigación en: exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa.

Luego se estableció una tipificación de actores sociales por caracterización de actores, tomando como punto de partida una definición de “caracterización de actores”, entendida como lo que caracteriza o identifica a un actor social es su posición particular en ese escenario, su papel o rol -lo que hace o podría hacer en él- y sus propósitos o intereses respecto de ese escenario o lo que se procesa en él (Robirosa, s/f).

Desde esta perspectiva y, con la información relevada de documentos y fuentes secundarias, se estableció un listado de actores sociales e informantes clave, para luego caracterizarlos en “estructurales y funcionales” con la finalidad de responder a la pregunta ¿Cuáles son los actores claves involucrados en las distintas jurisdicciones estatales y cómo se vinculan?

Caracterización que nos permite identificar diferentes tipos de actores: los institucionales o representantes del Estado en sus niveles nacional, provincial y municipal, los del sector privado y los que podríamos definir como del “tercer sector”, es decir, organizaciones o instituciones académicas, la sociedad en general que tienen cierta formalización en su constitución y accionar y, por último, los espacios o medios de comunicación; lo que nos permitirá entender el interrogante ¿Qué posicionamientos se pueden reconocer entre los actores públicos, privados y del tercer sector?.

Por consiguiente, para la recolección de datos, se realizaron entrevistas a los Informantes Clave, mediante un cuestionario guía (semi-estructurado), formulado con preguntas abiertas que brinden información relevante, y algunas preguntas de tipo cerrada para obtener opiniones sobre temas puntuales. Las entrevistas se realizaron de manera personal, previa reunión pactada con aquellos.

Se relevaron las opiniones del Estado Nacional, Provincial, Local, Empresas Privadas y Organizaciones Académicas procurando que la cantidad de los actores sea lo mayor representativa posible. Se desgravaron las entrevistas.

Por último, se analizan las diferentes opiniones que la sociedad civil tiene respecto al estado del desarrollo eólico en nuestra ciudad.

En este plano, cada actor responde según el compromiso que adquiere con respecto al problema, lo que proviene a su vez de la forma como lo percibe, del interés que le despierta su tratamiento, o de su capacidad de gestión con relación a su contribución y nivel de responsabilidad ante el problema (Simeoni, 2003).

En ese sentido, se tomaron 66 encuestas a la sociedad local de un total de 150, que brindó información relevante para las conclusiones del este trabajo. El número de encuestas obedece a una saturación teórica, dado que las respuestas aportadas no arrojaban diferencias.

Se utilizó un formato prediseñado, de preguntas abiertas y cerradas con opciones de respuesta según una lista y a completar, con una pregunta de cierre, de tipo abierta a efectos de sumar la mayor cantidad de sugerencias de mejora posible. Este formato sirvió para facilitar la comprensión de los encuestados y enfocar mejor el conocimiento que tiene la sociedad en general sobre el estado de la energía eólica en nuestra ciudad enmarcado en una coyuntura nacional, para poder evaluar si las representaciones de la sociedad Comodorenses operan como un obstáculo para el desarrollo de esta.

La encuesta se realiza a través de distintos medios electrónicos y redes sociales. Se acudieron a estas herramientas debido a que la misma es entendida como un medio masivo de comunicación¹⁷, y, además, en este caso de información; entre personas, grupos e instituciones (Villalobos Corrales, 2008). A su vez, la selección de personas fue de manera aleatoria.

Comodoro Rivadavia: de ciudad petrolera a ¿ciudad energética?

Tomando como referencia las cuestiones centrales de este estudio se plantea porqué Comodoro Rivadavia, qué fue escenario de los primeros desarrollos eólicos en nuestro país, no presenta avances en ese sentido.

Para ello se realizó una caracterización del “Área de Estudio” de la ciudad de Comodoro Rivadavia, incluyendo algunos aspectos de su desarrollo histórico, demográficos, socioeconómicos y políticos; además de las características geomorfológicas y climatológicas generales. Y por último, los aspectos generales y técnicos de la energía eólica como así también las condiciones necesarias para su explotación.

La ciudad de Comodoro Rivadavia pertenece al Departamento de Escalante, ubicado en el Golfo San Jorge.

En lo que respecta al desarrollo histórico, socioeconómico y su evolución del desarrollo local, la ciudad objetivo está marcado fuertemente por un Perfil Multicultural, caracterizado por la afluencia de inmigrantes a principios del siglo XX, debido a la creación de la empresa YPF en 1922, lo cual generó un crecimiento económico sostenido, siendo la principal actividad económica (en volumen de ingresos), la petrolera, el espacio geográfico de la ciudad permite una variada posibilidad para el desarrollo productivo¹⁸.

Pero sobre todo se destaca la producción energética. La región presenta importantes yacimientos hidrocarbúricos, y más recientemente el estudio y aprovechamiento del enorme potencial eólico con que cuenta el “Área de Estudio” (CREE, s/f).

Siguiendo con la vida política de la ciudad, Comodoro Rivadavia es una localidad gobernada casi ininterrumpidamente desde 1983 por intendentes peronistas²⁵. Los análisis históricos sobre el peronismo en la ciudad demuestran su consolidación durante el período de la gobernación militar en Comodoro Rivadavia (1944-1955).

En relación con esto, y acercándonos más a la actualidad, entre los años 2003 y 2014, diferentes actores políticos promovieron distintas actividades con relación a la promoción y fomento de energías renovables, como la creación del Centro de las

¹⁷ (Merletti E., 2013). Los medios de comunicación. <http://es.slideshare.net/teachermum/los-medios-de-comunicacin-18811742>. Consultada el 22 de octubre de 2014. (Dirección de Estadística y Censos, s.f.)

¹⁸ (Dirección de Estadística y Censos, 2006). Energía Eléctrica Cantidad de Usuarios Grandes Localidades según Categoría - 2002-2013.

Energías¹⁹ y su posterior ampliación²⁰, como así también los intentos por reactivar el Parque Eólico Antonio Morán²¹ para potenciar y poner en valor el desarrollo eólico en la ciudad y la región.

En relación con las condiciones de desarrollo eólico, cabe resaltar que la ciudad de Comodoro Rivadavia como en Chubut existe un potencial inmenso y óptimas condiciones de elevada intensidad y dirección constante del viento (Ver figura 3).

Así mismo, se incorporan aspectos legales que son necesarios para entender el estudio de caso. El marco legal reúne la normativa existente referida a la responsabilidad de los distintos actores, públicos y privados, para promover el desarrollo de las Energías Renovables en el país, y particularmente la Energía Eólica en la provincia de Chubut y Comodoro Rivadavia.

Se toma como referencia la normativa a nivel nacional como la Ley Nacional N° 26192 (modificada por la Ley N° 27.191) - Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica. En su artículo 1° declara de interés nacional la generación de energía eléctrica con destino a la prestación de servicio público, a partir del uso de fuentes de Energías Renovables, estableciendo como objetivo alcanzar una contribución del 8% del consumo de la energía eléctrica nacional en el plazo de diez años a partir de la puesta en vigencia de la Ley.

Se ha observado que una herramienta central para el análisis del desarrollo eólico en nuestra ciudad es la identificación de los actores claves que, siendo parte de la actividad, influyen en el desarrollo de la energía eólica en Comodoro Rivadavia.

Para ello se analizaron los motivos del estado actual de la energía eólica en la ciudad de Comodoro Rivadavia, el marco legal deseable, el abandono del Parque Eólico Antonio Morán, el desarrollo eólico en otras localidades de la Provincia, las condiciones del Sistema Argentino de Interconectado (SAI), los sistemas de financiamiento y acceso a créditos, se analizó a la actividad petrolera y si la misma se presenta como un obstáculo, y por último se la evaluó la falta de Información sobre la Energía eólica.

Así mismo, se detallaron los actores claves involucrados en las distintas jurisdicciones estatales, la manera en que se vinculan y los posicionamientos que se pueden reconocer entre los actores públicos, privados y del tercer sector.

Para el análisis de los resultados dentro de la variable analizada “Energía Eólica: Las Policy Network al sur del Paralelo 42” se definieron tres categorías para la interacción entre los actores sociopolíticos.

A) Reconocimiento de actores

¹⁹ (BWN Patagonia, 2006). Inauguran el Centro de las Energías en Comodoro Rivadavia. http://bolsonweb.com.ar/diariobolson/detalle.php?id_noticia=925. Consultada el 26 de abril de 2014

²⁰ (Diario Crónica, 2010). Se adjudicó la segunda etapa para la construcción del Centro de Energías. <http://diariocronica.com.ar/index.php?r=noticias/verNoticia&q=30232>. Consultada el 02 de mayo de 2014.

²¹ (Diario El Patagónico, 2012). Con \$30 millones se reactiva el Parque Antonio Morán. <http://www.elpatagonico.net/nota/176592-con-30-millones-se-reactiva-el-parque-antonio-moran/>. Consultada el 07 de mayo de 2014.

- B) Tipificación de los actores clave
- C) Vinculaciones entre actores claves

Los actores ¿Cuáles y quiénes son?

El reconocimiento de los actores claves involucrados en las jurisdicciones estatales y la manera en que estos se vinculan, fue crucial para entender su posición frente al desarrollo de la energía eólica en Comodoro Rivadavia.

Luego, se estableció un conjunto de vinculaciones, que en este caso se consideran claves para entender los diversos tipos y formas de interacciones que se pueden conformar entre actores públicos, privados y del tercer sector.

A partir de estas formas de vinculación, se elaboró un cuadro, que contiene una tipificación de los actores en Estructurales y Funcionales²², lo cual nos permite reconocer qué posicionamientos se manifiestan entre los actores públicos, privados y del tercer sector, y así reconocer como interactúan en el orden provincial y nacional.

Seguidamente se detallaron las acciones que realizan cada actor clave, lo que nos permite analizar qué posicionamientos se manifiestan entre los actores públicos, privados y del tercer sector, y así reconocer como interactúan en el orden provincial y nacional (Simeoni, 2003).

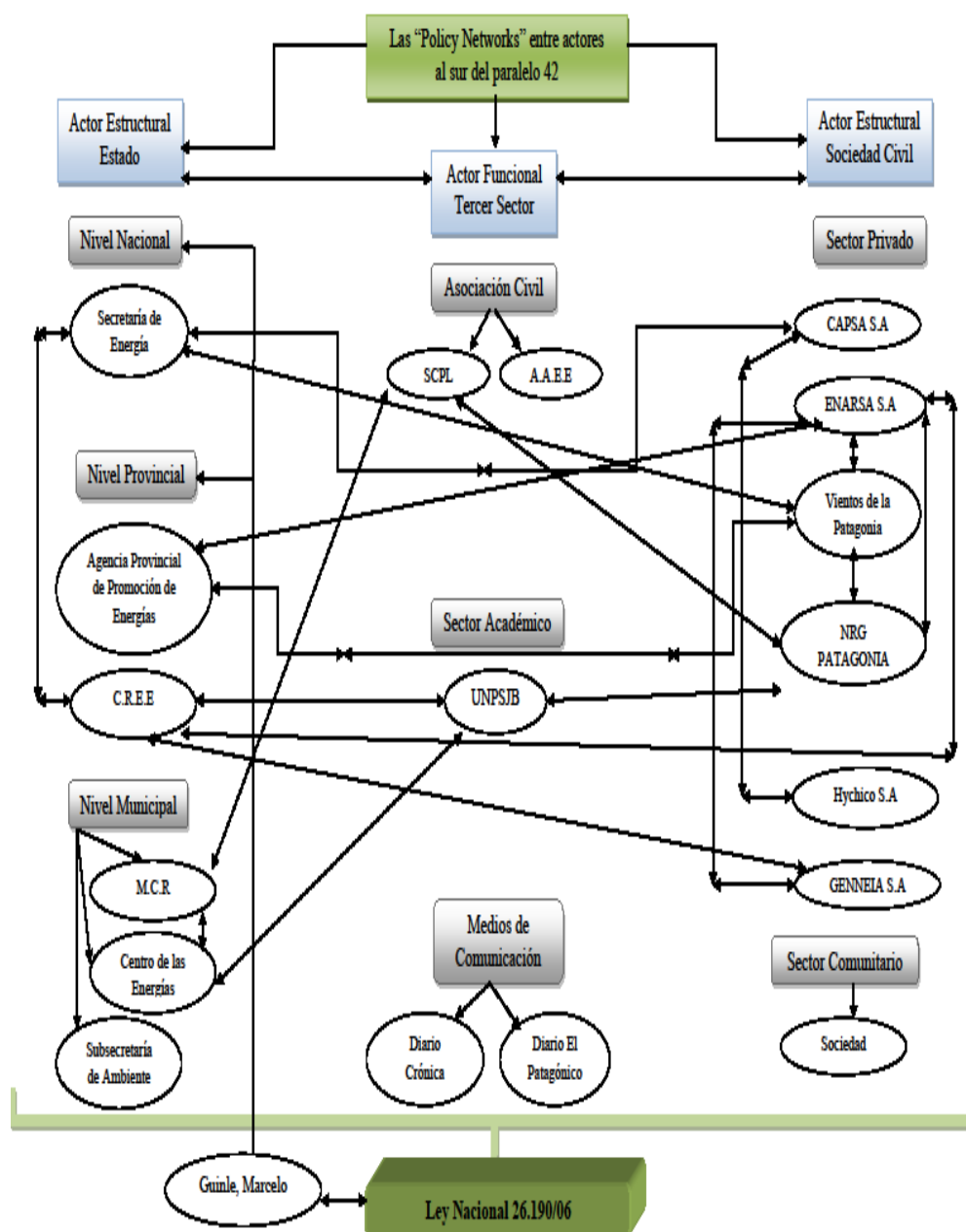
Los principales resultados cuantitativos, representados en gráficos y opiniones, según sexo, edad, acerca de la situación energética actual de Argentina, de la energía eólica en Comodoro Rivadavia. Con respecto al género de los encuestados, según se observa en el 32 corresponden al sexo Femenino y 31 al sexo Masculino, teniendo 4 Sin Respuesta (S/R).

También se puede observar que el rango de edad varía desde los 18 años a mayores de 65, donde 28 personas entre 30-42 fue el rango que más encuestas contestó.

Por último, para sintetizar las múltiples vinculaciones analizadas, en el Cuadro N°1 se pueden observar las principales relaciones entre actores públicos y privados, y del tercer sector.

²² Simeoni (2003) define a los Actores Estructurales como aquellos que se caracterizan por hallarse ligados directamente a la evolución, el desenlace y el compromiso de las acciones en la energía eólica, y sus funciones y comportamiento resultan esenciales para entender los cambios necesarios para su desarrollo. Se dividen en: los actores estatales y los que forman parte de la sociedad civil. Y a los actores funcionales como aquellos cuyo rol fundamental es servir de nexo entre los ámbitos y actores estructurales.

Cuadro 1
Principales redes de actores



A.A.E.E (Asociación Argentina de Energía Eólica), C.R.E.E (Centro Regional de Energía Eólica), MCR (Municipalidad de Comodoro Rivadavia) y la SCPL (Sociedad Cooperativa Popular Limitada).
Fuente: Elaboración propia

Las limitaciones. Comodoro Rivadavia ¿por qué no?

Las energías renovables presentan importantes potencialidades, sin embargo, su desarrollo evidenció también determinadas limitaciones, entre las que se destacan cómo más importantes las de tipo económicas y financieras, político/institucionales, regulatorias, técnicas y sociales (CEPAL, 2004). Se estableció una valoración de las

limitaciones y sus características principales, basadas en datos recogidos de las entrevistas, encuestas realizadas y bibliografía analizada

En la Tabla N° 1, se explican las causas de las limitaciones analizadas con relación al desarrollo de la energía eólica para Comodoro Rivadavia.

Tabla N° 1
Principales limitaciones

Tipos de Limitaciones	Características principales	
Políticas e Institucionales	Ineficiente gestión local y provincial, planteada a escala nacional para el desarrollo de energías renovables particularmente a la energía eólica	-Dos decisiones políticas insuficientes: 1-Licitación del GENREN 2-Sistema Argentino de Interconectado
		-El desarrollo eólico no muestra avances significativos por no existir una política energética Nacional ni Provincial
		-Distanciamiento político entre el gobierno municipal y provincial, y este último con Nación
		-Desarrollo eólico en otras localidades de la Provincia
		-Reducida institucionalidad de la energía eólica
		-Abandono del Parque Eólico Antonio Morán
Económicas y Financieras	Insuficiente sistema de financiamiento al desarrollo eólico y difícil acceso a los créditos en la coyuntura económica nacional	-Sin garantías para líneas de créditos. Tasas elevadas
	Actividad petrolera	-Tarifas bajas para Comodoro Rivadavia - Renta petrolera
Regulatorias	Modificación de algunos aspectos de la ley de energías renovables	-Condiciones de las empresas petroleras.
		-Poner en marcha el 100% de la Ley
		-No promueve transferencias tecnológicas
		-Compromiso Social Empresarial
		-Incluir sistema
Técnicas	Sistema Argentino de Interconectado	-Feed-in-Tarif
	Falta de Información y Difusión para el desarrollo de la energía eólica	-Beneficios
		-La traza no pasa por Comodoro Rivadavia
		-Desconocimiento tecnológico, de mercado, económico.
		-Ausencia de asesores en los actores públicos
Sociales	- Comodoro Rivadavia y su estilo de vida "insular".	-Ausencia de ámbitos de debate y discusión.
		-Ausencia de un clúster eólico provincial.
		-Aspectos históricos
Físicas	Desarrollo eólico en otras localidades de la Provincia	-Arraigo de la ciudad al petróleo
		-Falta de reconocimiento hacia el viento -Condiciones climáticas y geomorfológicas. -Cosecha de energía en zonas donde las condiciones del viento son más propicias.

De esta manera, se verificó que la Política/Institucional, la Económica/Financiera y la Regulatoria, respectivamente, representan las barreras que en mayor proporción impiden el desarrollo local de la energía eólica en Comodoro Rivadavia, votada por los entrevistados.

Paralelo 45, el despertar de un gigante eólico.

El presente estudio se ha estructurado en torno a 3 interrogantes.

¿Por qué si Comodoro Rivadavia, que ha sido escenario de los primeros desarrollos en energía eólica, no se observan avances significativos en la materia entre los años 2003-2014?

¿Cuáles son los actores claves involucrados en las distintas jurisdicciones estatales y cómo se vinculan?, ¿Qué posicionamientos se pueden reconocer entre los actores públicos, privados y del tercer sector? Y ¿Cuáles son las limitaciones y cómo están operando?

Existe un potencial eólico al extremo sur del paralelo 42 que brinda condiciones climáticas y vientos adecuados para el desarrollo de esta fuente energética.

Situaciones de diversa índole como:

- * Moderado conocimiento de los actores del Estado Municipal y Provincial sobre la temática.

- * Escala jurisdiccional y dependiente que existe en los tres niveles del sector público.

Estas situaciones, se manifiestan a través de un conjunto de limitaciones que dan cuenta de que la urbe petrolera, entre los años 2003-2014, no ha logrado – al momento – un desarrollo sostenido en materia de energía eólica en particular.

Cinco limitaciones que contrarrestan el desarrollo de la energía eólica en nuestra ciudad son: Política/Institucional - Económica/financiera - Regulatoria - Técnica y Social.

Se entiende que las limitaciones político-institucionales tiene mayor incidencia, condicionadas por el contexto dado de la economía doméstica y la internacional.

Respecto a la limitación Regulatoria, se entiende que el marco legal existente si bien es adecuado (promoción), opera como tal si no se modifican ciertos aspectos para que sea eficiente en su declaración de interés nacional.

Todas estas limitaciones pueden funcionar en conjunto o en forma individual impidiendo el desarrollo de la energía eólica en Comodoro Rivadavia.

Así mismo, se destaca que:

1. Si bien la limitación Técnica, presenta distintas causas como las Físicas (climatológicas y geomorfológicas), y la traza del SADI que no serían adecuadas para el desarrollo eólico en la ciudad los actores entrevistados no la consideran como tal debido a que Comodoro Rivadavia cuenta con una industria metalmecánica muy desarrollada gracias a la actividad petrolera, lo que resultaría muy beneficioso para el desarrollo de la energía eólica pudiendo constituir un polo industrial en ese sentido.

2. La limitación Social, se presentaría como tal debido a que los orígenes de Comodoro Rivadavia y su enraíz a la actividad petrolera. No obstante, los actores entrevistados la consideraron como el obstáculo de menor importancia; y desde la sociedad se entiende que la misma está interiorizada sobre la problemática.

Para finalizar, y como resultado del análisis durante la década mencionada, se pudo concluir que Comodoro Rivadavia sufre de diversas razones que hacen que el desarrollo eólico, en el mediano plazo; no sería un escenario positivo debido a que existe una cuestión cultural/territorial en torno a la energía eólica.

Tal es así que la ciudad tiene una forma de vivir insular, debido a que su historia política, su desarrollo económico disímil, y su arraigo a la actividad petrolera, la hace diferente a la zona del valle de Chubut: condicionando prontamente la vida política, económica, ambiental y social, cuestión que impacta en las posibilidades de desarrollo local.

Sin embargo, y para no caer en miradas meramente negativas, y si se expandiera el "Área de estudio" observamos que existen zonas de la región que son adecuadas para desarrollar la energía eólica tanto por condiciones geomorfológicas, climáticas (como la existencia de vientos más laminares), o la cercanía al Sistema Argentino de Interconectado, como así también para generar nuevas fuentes de empleo y mayor desarrollo económico.

Por ello es que a partir del año 2015 la situación sobre el desarrollo de las energías renovables en general y particularmente la energía eólica en nuestra región ha tenido un cambio significativo debido a que si bien existen obstáculos actuales a las políticas de desarrollo de energías eólicas en la región y el país, el programa Renovar (ronda 1, 2 y la próxima licitación Nro. 3) ha promovido, gracias a la nueva Ley Nacional 27191 (que modifica la ley 26192) "Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica", la instalación de parques eólicos en la región, como se mencionó en el cuerpo del presente artículo, el Parque Eólico Manantiales Behr perteneciente a la empresa YPF S.A, Parque Eólico de Hychico SA (CAPSA) y Proyecto Parque Eólico "Kosten" en Valle Hermoso de la empresa ENAT S.A, como así también agregando nuevos actores en su mayoría pertenecientes al sector privado, siendo iniciativas que indican que existen avances en la materia.

Bibliografía

- Academia Nacional de Ingenieria, R. (2011). Reflexiones Sobre Una Matriz Energetica Sostenible. Instituto de Energia, Buenos Aires.
- C.R.E.E. (s/f). Evaluacion del Recurso. Informe realizado por el Centro Regional de Energía Eólica para el Proyecto PERMER. Centro Regional de Eneqía Eólica, Rawson - Chubut.
- Cameron, D. O. (2010). Argentina Perspectivas Energéticas y de Desarrollo. "Las Tecnologías Energéticas y el Desarrollo Sustentable". Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública v Servicios, Secretaria de Energia.

- Dominella, L. G. (2008). Las Energías Renovables Patagónicas en la Matriz Energética Argentina: Posibilidades de Mediano Plazo. 3as Jornadas de Historia de la Patagonia., (págs. 1-22). San Carlos de Bariloche.
- Fundacion Bariloche. (2009). "Estudio prospectivo de energías renovables destinado a remover barreras técnicas, económicas, regulatorias y financieras a la generación de electricidad". Secretaría de Energía.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2003). Metodología de la Investigación (Tercera edición ed.). México, D. F, Mexico: McGraw-Hill Interamericana.
- MCR. (2002). Documento sintesis de programas y proyectos estrategicos de desarrollo local en Comodoro Rivadavia. Municipalidad de Comodoro Rivadavia, Comodoro Rivadavia-Chubut.
- Oliva, R. (2008). Energía Eólica para Puerto San Julián.
- Palacio, G. (2006). Breve guía de introducción a la Ecología politica (Ecopetrol): Orígenes, inspiradores, aportes y temas de actualidad. Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal., 9 (3), 143-156.
- Robirosa, M. (s/f). Articulación, negociación, concertacion. Del Módulo de la materia M7 de la Maestría en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano (GADU). Centro de Investigaciones Ambientales (CIAM), Faculta de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNMdP, Mar del Plata.
- SCPLCR. (2005). Proyecto Parque de Energía Eólica Antonio Moran en la Región Patagónica. Argentina. Sociedad Cooperativa Popular Limitada, Comodoro Rivadavia. Chubut. Argentina.
- Simeoni, D. (2003). Contaminación atmosférica y conciencia ciudadana. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En L. Navarro, Actores Sociales: Definición, Identificación Y Tipificación. (2010) (págs. 1-36).
- Strachnoy, Lamas y Klas. (2010). Energía, Estado y Sociedad. Situación Energética Argentina. Revista Cientifica, 76-93.
- Villalobos Corrales, A. (2008). La utilización de Redes Sociales como estrategias de comunicación y mercadeo interactivo en Costa Rica. Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, Facultad de Ciencias Empresariales Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial, San José. Costa Rica.

Fuentes electrónicas consultadas

- BWN Patagonia. (2006). <http://www.bolsonweb.com.ar>. Recuperado el 26 de Abril de 2014, de http://bolsonweb.com.ar/diariobolson/detalle.php?id_noticia=925
- Diario Crónica. (30 de Julio de 2010). Recuperado el 02 de Mayo de 2014, de <http://diariocronica.com.ar/index.php?r=noticias/verNoticia&q=30232>
- Diario Crónica. (25 de Septiembre de 2013). Comodoro había sido pionera en materia de energía eólica. Obtenido de <http://www.diariocronica.com.ar/index.php?r=noticias/verNoticia&q=93391>

- Diario El Patagónico. (26 de Noviembre de 2012). Comodoro había sido pionera en materia de energía eólica. Obtenido de [www.elpatagonico.net: http://www.elpatagonico.net/nota/176594/](http://www.elpatagonico.net/nota/176594/)
- Diario El Patagónico. (26 de Noviembre de 2012). Con \$30 millones se reactiva el Parque Antonio Morán. Recuperado el 07 de Mayo de 2014, de <http://www.elpatagonico.net/nota/176592-con-30-millones-se-reactiva-el-parque-antonio-moran/>
- Diario El Patagónico. (2013). Chubut avanza en políticas de inversión en energía eólica. Obtenido de <http://www.elpatagonico.net/nota/191221-chubut-avanza-en-politicas-de-inversion-en-energia-eolica/>
- Dirección de Estadística y Censos. (2006). <http://www.estadistica.chubut.gov.ar>. (P. Dirección de Estadística y Censos. (G. d. Chubut, Editor) Recuperado el 25 de Abril de 2014, de http://www.estadistica.chubut.gov.ar/home/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=177
- INTI. (2012). Energía Eólica. Programa GENREN: Características principales. Obtenido de <http://www.inti.gob.ar/e-renova/erEO/er20b.php>
- Merletti E. (15 de Abril de 2013). <http://es.slideshare.net>:. Recuperado el 22 de Octubre de 2014, de <http://es.slideshare.net/teachermum/los-medios-de-comunicacin-18811742>

Sitios WEB consultados

<http://www.argentinaeolica.org.ar/portal/index.php>
<http://www.chubut.gov.ar/portal/>
<http://www.comodoro.gov.ar/>
<http://www.conocimiento.gov.ar/>
<http://diariocronica.com.ar/>
<http://www.enarsa.com.ar/index.php/es/>
<http://www.energia.gov.ar/home/>
<http://www.elpatagonico.net/>
<http://www.lanacion.com.ar/>
<http://www.scpl.coop/>



Sobre el Taller internacional “Recursos naturales y desarrollo local: sostenibilidad, cohesión social y resiliencia” y este número de la *Revista Identidades*

Natalia Barrionuevo (IESyPPat-UNPSJB)
Sebastián Barros (CIT Golfo San Jorge/IESyPPat-UNPSJB)
Hans-Jürgen Burchardt (Universidad de Kassel / CALAS)
Renata Hiller (CIT Golfo San Jorge/IESyPPat-UNPSJB)
Stefan Peters (Universidad de Kassel / CALAS)

Durante los primeros días del mes de octubre de 2017 tuvo lugar en nuestra Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en Comodoro Rivadavia (Chubut, Argentina) el Taller internacional “Recursos naturales y desarrollo local: sostenibilidad, cohesión social y resiliencia”. Organizado por el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia (UNPSJB), la Universidad de Kassel y el Center for Advanced Latin American Studies (CALAS), fue resultado de un diálogo iniciado hace ya varios años entre integrantes de estas distintas instituciones. Contó además con la presencia de especialistas de la Universidad Nacional de San Martín, la Universidad Nacional del Comahue, la Universidad Nacional de Río Negro, la Universidad Nacional de General Sarmiento, FLACSO- Ecuador y el Observatorio Petrolero Sur.

Este número 14 de la Revista Identidades intenta condensar y ampliar las discusiones que se dieron a lo largo de aquellas tres intensas jornadas. Para ello, invitamos a las y los expositores a volcar sus presentaciones en artículos breves. Luego, el debate se multiplicó en cada uno de los colegas que participaron como referatos ciegos. Cada artículo fue evaluado de manera anónima por dos especialistas idóneos. Vaya entonces aquí nuestro agradecimiento a las y los colegas de la Universidad de San Martín, de la Universidad Nacional de Rosario, de la Universidad Nacional de San Juan, de la Universidad de Comahue, de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Quilmes y del Centro Cultural de la Cooperación.

El lugar del taller, la ciudad patagónica de Comodoro Rivadavia, invita cotidianamente a reflexionar las interrelaciones entre el extractivismo y el desarrollo local, habida cuenta de la matriz hidrocarburífera que caracteriza la zona. A su vez, el entonces reciente temporal del abril de 2017 había puesto de manifiesto muchas de las tensiones que habitualmente la bibliografía refiere respecto de las problemáticas sociales de las economías rentistas. Por ello, y antes de comenzar las actividades

académicas, se hizo un tour histórico-etnográfico por la ciudad para los participantes externos.

Luego, el taller dio inicio con un coloquio de graduados de la Licenciatura en Gestión Ambiental de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNPSJB, quienes expusieron trabajos de investigación sobre problemas ambientales cruciales en la región: el fracaso del desarrollo de la energía eólica en los últimos años, las representaciones sociales vinculadas a la gestión integral de los residuos sólidos domiciliarios, la contaminación de los espacios costeros, las inundaciones actuales e históricas, y el paisaje cultural en la gestión ambiental de la industria petrolera. Algunos de ellos se presentan aquí en nuestra sección “Inicios de Investigación”.

Más tarde, la discusión se centró en paneles temáticos específicos referidos a los recursos naturales y el desarrollo en América Latina, Argentina y Patagonia; los retos de cohesión social; el petróleo y la protección ambiental; así como la minería y la sustentabilidad. Las jornadas de trabajo se completaron con una mesa redonda de debate público sobre los desafíos del desarrollo sostenible en la Patagonia de la que participaron Ignacio Agulleiro, Ministro de Medioambiente de la provincia del Chubut; Sirley García; concejal municipal de Comodoro Rivadavia y fundadora de la Secretaría de la Mujer en el Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut; Esteban Serrani, especialista en sociología de desarrollo; y Zulma Usqueda, referente del Foro Ambiental y Social de la Patagonia.

Los ejes de debate a lo largo de esos tres días incluyeron una relectura de la relación entre recursos naturales y desarrollo que supera la conocida dicotomía entre la maldición y la bendición de los recursos naturales. En este contexto se argumentó a favor de una revitalización de la teoría rentista que va más allá de temas económicos y/o políticos y hace hincapié en dinámicas sociales y de desigualdades sociales. También se señalaron posibles medidas políticas para reducir los impactos negativos de la explotación de los recursos naturales en los ámbitos de trabajo, la lucha contra la corrupción y la protección del medioambiente.

Además se presentaron investigaciones empíricas sobre la economía política de los recursos naturales en la Argentina que subrayaron la importancia de la extracción de los recursos naturales para el país y especialmente para la Patagonia a través de la política de subsidios, y que a la vez demostraron los fuertes impactos socio-ambientales de dicha actividad. Teniendo en cuenta esta tensión entre diferentes dimensiones del desarrollo sostenible, se reafirmó el papel de la dimensión política, señalando especialmente la importancia de analizar la intervención de diversos actores en relaciones de fuerza en torno a la distribución de la renta.

También se expusieron trabajos que discuten los procesos de construcción identitaria de la desigualdad y la diferencia en sociedades petroleras y mineras. Estas investigaciones demostraron no solamente los procesos de distinción y estigmatización hacia (una parte de) los trabajadores petroleros, sino también hicieron hincapié en las particularidades de las relaciones de género y en el problema central de la cuestión de la propiedad de la tierra en América Latina.

Un tercer eje del taller incluyó reflexiones sobre cuestiones socio-culturales y socio-ambientales en zonas de extracción de recursos naturales. Con estudios de casos de Ecuador y Argentina, las y los diferentes ponentes hicieron énfasis en los

cambios contundentes de las actividades extractivistas que, por un lado, chocan muchas veces con las formas de vida de los pueblos originarios, y por otro, también llevan en varios casos a una naturalización de los impactos medioambientales que puede llegar a dificultar la implementación de políticas de protección medioambiental que permitan un desarrollo sostenible a nivel local.

Mientras que la mayoría de las intervenciones giró en torno a la extracción de hidrocarburos, la última mesa del taller incluyó experiencias de la minería en Argentina y Perú. Si bien señalaron algunas diferencias, estas intervenciones permitieron comparar distintas actividades extractivas y demostraron la existencia de desafíos similares entre diversas formas de extracción para el desarrollo local mientras que al mismo tiempo evidenciaron la importancia de reflexionar sobre el futuro de las zonas de obtención de recursos finitos.

En resumen cabe subrayar que el taller ofreció un panorama que va mucho más allá de las discusiones sobre los impactos económicos de la extracción de recursos naturales. Las diferentes paradojas que encierran los consensos sociales en torno a las culturas extractivas dieron pie a repensar los conceptos de naturaleza, cuerpo y salud. Además, la idea de crisis sobrevoló las diversas intervenciones, a partir de considerar las dimensiones espacio/ tiempo y sus impactos en territorios cruzados por relaciones de poder a nivel global y local. En este sentido el taller mostró que se requiere un entendimiento mucho más amplio de las particularidades económicas, políticas, sociales y socio-ambientales para el diseño de políticas que permitan un desarrollo local sostenible en sociedades extractivas. Esperamos que la lectura de estos artículos sirva como disparador de nuevos conceptos, ideas y discusiones que habiliten debates amplios y democráticos que abonen a dichas políticas.



Reseña de *Los encantos del poder. Desafíos de la antropología política*, de Marc Abélès y Máximo Badaró, Buenos Aires, Siglo XXI editores, 144 págs., 2015. Colección antropología.

Comprender y reflexionar sobre el funcionamiento el poder en las sociedades actuales es una pretensión irrenunciable para las ciencias sociales, a la vez que, resulta unos de sus objetivos más caros e inacabados.

Tomando el guante en este desafío, los autores nos proponen, un convite filosófico -político y antropológico para advertir y actualizar las evidencias del potencial político de algunos de los conceptos centrales implicados en la práctica etnográfica.

Precisamente este entrecruzamiento de disciplinas hace del presente texto, una referencia clave, una guía indispensable para animar una práctica etnográfica innovadora, que habilite preguntas incómodas, y que abra caminos, desafiando los lugares comunes, la temporalidad canónica las ya formas de concebir la alteridad desde la prescripción política y moral.

¿Cómo lo hacen? Mostrando cómo el sentido del poder y de la vida política desborda los formatos institucionalizados y cómo los enfoques antropológicos y las posibilidades políticas de sus hallazgos empíricos, pueden confrontar el etnocentrismo político y el conocimiento político diádico.

Transitando, a la vez, la escena y trastienda del poder; entre personajes, personas y cosas, ahí donde la utilería se dispone para dar lugar a los acontecimientos con diferentes intensidades y visibilidades. Ahí donde el contenido experiencial y sensorial de lo que adviene, representa y significa la vida social. Este tránsito implica habilitar el desplazamiento hacia la inmanencia del presente y sus potencialidades, los estallidos y fugas de lo concreto y su inmediatez; implica reconocer los múltiples pliegues y flujos vitales en los distintos niveles, ámbitos y escenarios de la vida social.

Los encantos del poder se fundan en paradojas, dilemas y tensiones, que operan a través de descentramientos y desplazamientos, se disponen en multiplicidades de flujos vitales, inmanentes a niveles, ambientes y escenarios de la vida social.

Para ello, la antropología tiene que desplegar una sensibilidad que permita una relación política multi-situada, para que acontezca una “postura de implicación”, una “singularidad de intersección”, que pueda cuestionar y desestabilizar el orden y el sistema de lugares establecidos. Con este despliegue, la práctica etnográfica permite sumergirse en la capilaridad de la vida social, y comprender cómo el ejercicio, los formatos, los contenidos y los efectos del poder desbordan

constantemente los dualismos, haciendo lugar a la irrupción de las paradojas, las contradicciones y los deslizamientos.

Para desarrollar esta apuesta epistemológica y teórica- metodológica, este ensayo se organiza en un introducción, cuatro capítulos y un epílogo, siguiendo una secuencia conceptual que comienza identificando pistas teórico -conceptuales claves de la práctica antropológica; revisita sus temas y preocupaciones recurrentes; explora los supuestos teóricos, políticos y morales que surgen de una antropología comprometida y colaborativa; para finalmente, plantear una serie de observaciones sobre la alteridad y la temporalidad del poder, poniendo al futuro en el centro de la reflexión antropológica.

El texto es tan sugestivo como complejo. Si bien se trata de una lectura exigente, con cruces y diálogos entre enfoques y conceptos de la filosofía, la ciencia política y la antropología; para los lectores menos avezados en el tema, las referencias a autores como Félix Guattari, Gilles Deleuze, Michel Foucault, Pierre Clastres, Jacques Rancière, entre otros, resultan claras y a la vez, motivan nuevas aproximaciones a sus obras.

En cada capítulo encontramos a modo ilustrativo, referencias y análisis acerca de investigaciones propias de los autores y colegas; que amenizan la comprensión y animan a avanzar a partir de nuevas preguntas, paradojas y dilemas; y que advierten sobre cómo el poder se cristaliza en la producción del conocimiento.

En el capítulo 1, "Deleuze- Guattari- Clastres. Repensar la antropología política", los autores exploran la imbricación de lo político en la vida social, mostrando los diferentes rostros del poder estatal, su lógica descentrada y su encarnación en la vida social.

En primer término, presenta la naturaleza e inmanencia del poder, y las relaciones dinámicas de fijación y multiplicación, de captura y fuga, codificación y decodificación. El Estado se constituye de forma segmentaria - entre lo molar y lo molecular, en torno a la filiación y la territorialidad, en movimientos de fusión y fisión y a procesos que coexisten en registros, modalidades y temporalidades diversas.

Lo molar remite a líneas duras de conjuntos binarios, que conforman y modelan la vida de las personas y que se encarnan en instituciones y prácticas; mientras que lo molecular remite flujos que se expanden a diferentes velocidades e intensidades entre personas y grupos, configurando procesos de transformación y/o fisuras más o menos explícitas, íntimas o públicas. En este sentido, la lógica molar produce segmentos unívocos y fijos; y, la lógica molecular produce resonancias que amplifican la intensidad de las singularidades. Molar y molecular resultan lógicas interdependientes de producción y circulación del poder

En el segundo paso, explican la operatoria estatal como una caja de resonancia que estando vacía, opera organizando, jerarquizando y resignificando, una multiplicidad de elementos cualitativamente heterogéneos, para capturar fuerzas externas, buscando el constante reconocimiento público y así producir su propio poder.

La resonancia genera un vínculo político que se puede medir a partir de sus intensidades, velocidades, movimientos y posibilidades de amplificación afectiva. De

esta manera, la resonancia permite pensar la práctica política más allá de lo estatal, estudiar el poder sin las categorías de representatividad, soberanía, territorio, etc.

En tercer lugar, presentan el nomadismo como modelo de acción política opuesta a la lógica del aparato estatal, que tiene posibilidades de flexibilidad, libertad y autonomía; y limitaciones de marginación.

Y, por último, reconocen en la antropología “una ciencia de la autodeterminación de los pueblos”, que interpela sobre las posibles formas en que las personas y los grupos podrían modificarse desde su interior. En esta línea destacan el perspectivismo como ontología de la multiplicidad.

En el capítulo 2, “Obsesiones antropológicas. Estado y resistencia”, abordan el estudio del poder estatal, que se expresa y ejerce a partir de diversas formas de resistencia, subordinación, agencia, dominación, dependencia y autonomía, macropolítica y micropolítica, legitimidad y desigualdad, cuyas dinámicas molar y molecular se entrecruzan.

Las relaciones entre Estado y resistencia se expresan de múltiples formas, por lo tanto urge desacoplar las asociaciones automáticas entre formas de poder y acción política y cuestionar perspectivas que se asienten en procesos estratificados y visiones fijas y esencialistas.

El Estado resulta una máquina de captura de las intensidades, flujos y multiplicidades de la vida social, cuyo poder es siempre precario y ambivalente, se despliega con plasticidad mediante prácticas de gubernamentalidad.

Ello exige desafiar visiones maniqueas, románticas, paternalistas y/o moralizantes de la subalternidad, a la vez que advierte sobre la importancia de los factores culturales como las creencias, las tradiciones, valores y sistemas simbólicos, explicativos de la vida política

El capítulo 3, “Regímenes estéticos de la política”, en diálogo con Rancière, pone de relieve la diversidad de modalidades de la experiencia y de la representación.

La vida política, mediante símbolos, imágenes, corporalidades y tecnologías, configura diversos regímenes, es decir, modos en que la experiencia política se inscribe en el campo de lo sensible. La distribución de roles, voces, visibilidades, conocimientos, temporalidades que condensan en procesos y prácticas que escenifican una comunidad del lenguaje que es un acto polémico. La escena política es el lugar de lo común y a la vez el lugar donde se acentúa la distancia entre gobernantes y gobernados.

La moralización de la política a través del axioma de la transparencia y la conexión virtual como acción colectiva, surgen como una forma de representación teatral de la política. Para ello, la estadística, la economía y el derecho produjeron herramientas que permiten medir objetivamente la corrupción. Los puesta en escena de datos numéricos impactan en una estética política que reemplazó la discusión ideológica por el desempeño moral.

La política puede asumir diversas formas y contenidos, puede ser representada en mensajes expansivos, viralizados, con una agencia sin sujeto, origen o destino. Puede ser la multiplicación y reelaboración de la relación entre tiempo,

sujeto, espacio y poder; y conformar una subjetividad basada en la fluidez y la instantaneidad, restando peso a lo histórico y a lo espacial como puntos fijos.

El capítulo 4, “El poder desde cerca. Enfoques, dilemas y desafíos”, analiza los desafíos epistemológicos y metodológicos que implica estudiar etnográficamente a quienes ejercen poder. La antropología tiene que eludir concepciones trascendentales, morales y normativas del poder. Su potencial político se despliega en la medida en que el conocimiento no queda encasillado con facilidad en una finalidad instrumental o en un proyecto político ideológico específico, cuando no responde directamente a expectativas y mandatos morales.

La antropología intenta captar la capilaridad social del poder y ofrece un tipo de conocimiento desestabilizante de visiones maniqueas y cristalizadas de la vida política. La predisposición a la escucha y la posibilidad de plantear preguntas significativas, permitirían lograr una posición de complicidad relativa a la orientación cognitiva e intelectual para conocer y comprender los vínculos entre particularidades internas de la vida de las personas y las diferentes instituciones, procesos y actores externos. De ahí que surge el interrogante acerca de cómo habilitar en el texto etnográfico, un espacio para la irreductibilidad humana de la ideología y la cultura; y la propuesta de una escritura polifónica y la etnografía colaborativa como posibles propuestas para explorar.

Finalmente, “Epílogo. El futuro”, presenta la actual agenda de trabajo que tiene como eje, la reivindicación del “Sur” (Asia, África y América Latina) como escenario para la imaginación histórica y política de escala global, para desde ahí recrear las nociones de contemporaneidad y de futuro.

Habiendo sido un laboratorio de experimental de recetas neoliberales con sus devastadores efectos, inequívocas y anticipatorias señales de la actual crisis de los países centrales; el Sur se presenta como tierra fértil para distintas estrategias creativas de organización política y de supervivencia. Justamente, el futuro adviene en una práctica etnográfica que identifique “las múltiples configuraciones de lo posible”, “los rostros del provenir prefigurados en las múltiples facetas

Se trata de la construcción epistemológica y teórico-metodológica de una antropología que logre interpelar las diferentes facetas de lo potencialmente posible en cualquier lugar, tiempo, espacio, idea o práctica, desde una posición descentrada los encantos del poder, sus paradojas y dilemas.

Susana Vidoz (FHCS-UNPSJB)



Pablo Villagra nació en la Ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, un 18 de Mayo del año 1971. Se formó en los aspectos técnicos de la fotografía y el video en la Dirección de Medios Audiovisuales de la Universidad de la Patagonia, donde actualmente realiza producción audiovisual.

Estudió fotografía artística con Rosa Revsin, Eduardo Ge Taboas y Gabriel Valansi. Realizó talleres y seminarios con Res, Nestor Crovetto, Elda Harrington, José Luis Tuñón, Rodrigo Alonso, Andrés Labake y Marcos López, entre otros. Se capacitó en Dirección de Fotografía con reconocidos directores Nacionales. Participó del Programa Art Boomerang en Chubut, dirigido por el Curador Daniel Fischer y Beca Fondo Nacional de las Artes, curador Rafael Cippolini.

Realizó exposiciones colectivas e individuales en Palais de Glace, Centro Cultural Recoleta, Espacio Imago Fundación Osde, Museo Eduardo Minnichelli Río Gallegos, Museo Municipal Gregorio Álvarez Neuquén, Museo de Arte de Trelew, Centro Cultural de la ciudad de Pto. Madryn, Casa de la Cultura de Buenos Aires, Espacio Cultural de la Universidad de San Luis, Centro Cultural de la ciudad de Rada Tilly, Centro Cultural de la ciudad de Comodoro Rivadavia, entre otros.

Desde 2012 coordina el Festival de la Luz en la Ciudad de Comodoro Rivadavia, bajo la dirección de Elda Harrington.

Contacto: <https://www.facebook.com/pablovillagraartistavisual/>